

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

REVISTA No. 80

Quinta Época

Año VII Agosto 2007

Derechos Reservados ©
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
INSURGENTES SUR 881 TORRE 'O' PISO 12
COL. NÁPOLES. DELEG. BENITO JUÁREZ
C.P. 03810. MÉXICO, D.F.

Certificado No. 04-2001-012517410700-102

FIDEICOMISO PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO

- **2007**
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación, por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información, sin la autorización expresa.

- El contenido de los artículos publicados son de la exclusiva responsabilidad de los autores.

- ISSN 1665-0085 50080

- Página Internet del T.F.J.F.A: www.tfjfa.gob.mx
Correo Electrónico de la Revista: publicaciones@mail.tfjfa.gob.mx

REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
AGOSTO DE 2007. No. 80

CONTENIDO:

- **Primera Parte:**
  Jurisprudencias de Sala Superior 5
- **Segunda Parte:**
  Precedentes de Sala Superior 17
- **Tercera Parte:**
  Criterios Aislados de Sala Superior y Salas Regionales . 167
- **Cuarta Parte:**
  Resoluciones y Votos Particulares de Sala Superior 257
- **Quinta Parte:**
  Acuerdos Generales 299
- **Sexta Parte:**
  Jurisprudencias y Tesis del Poder Judicial Federal 313

• **Séptima Parte:**
Índices Generales 397

PRIMERA PARTE

JURISPRUDENCIAS DE SALA SUPERIOR

JURISPRUDENCIA No. V-J-2aS-26

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RECURSO DE RECLAMACIÓN EXTEMPORÁNEO.- El artículo 62, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el recurso se presentará en el plazo de 5 días siguientes a aquél en el que surta efectos la notificación de la sentencia interlocutoria que conceda o niegue la suspensión definitiva, materia de la impugnación, por lo que, debe desecharse por extemporáneo si se presenta fuera de dicho plazo. (1)
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/5/2007)

PRECEDENTES:

V-P-2aS-534
Recurso de Reclamación No. 291/06-03-01-4/494/06-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de agosto de 2006, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de agosto de 2006)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo III. No. 73. Enero 2007. p. 1232

V-P-2aS-591
Recurso de Reclamación Núm. 9659/05-12-01-9/ac1/723/06-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión de 1° de febrero de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 74. Febrero 2007. p. 508

V-P-2aS-616
Recurso de Reclamación Núm. 1799/06-03-01-9/946/06-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista. (1)
(Tesis aprobada en sesión de 27 de febrero de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 241

V-P-2aS-617
Recurso de Reclamación Núm. 1349/06-08-01-9/66/07-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel Sánchez.
(Tesis aprobada en sesión de 1° de marzo de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 241

V-P-2aS-618
Recurso de Reclamación Núm. 592/06-14-01-5/137/07-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de marzo de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 241

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves veintiuno de junio de dos mil siete.- Firman para constancia, el Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-2aS-27

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, TRATÁNDOSE DE UNA MULTA ADMINISTRATIVA NO FISCAL.- PARA OTORGARSE SE REQUIERE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL.- El artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la posibilidad de que el demandante solicite ante este Tribunal la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, lo cual procederá y surtirá sus efectos, si ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Así una multa impuesta por una autoridad administrativa no fiscal no resulta ser un accesorio de una contribución pero sí constituye un crédito fiscal. En efecto, el artículo 3° del Código Fiscal de la Federación, establece que son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, entre otros, y que también son aprovechamientos los derivados de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias. Por su parte, el artículo 4° del citado Código consigna que son créditos fiscales, los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos. Por lo que, si una multa es impuesta por una autoridad administrativa distinta de la fiscal, constituye un crédito fiscal y la autoridad respectiva puede exigir dicho pago que no hubiese sido cubierto o garantizado dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, con base en lo dispuesto en la parte conducente del artículo 145 del Código invocado. En consecuencia, la suspensión operará en forma simultánea con el otorgamiento de la garantía, tal como se establece en el artículo 28, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (2)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/6/2007)

PRECEDENTES:

V-P-2aS-556
Recurso de Reclamación No. 602/06-14-01-9/587/06-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de octubre de 2006, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de octubre de 2006)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo III. No. 73. Enero 2007. p. 1377

V-P-2aS-592
Recurso de Reclamación Núm. 2674/06-12-01-9/887/06-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 15 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de febrero de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 74. Febrero 2007. p. 509

V-P-2aS-633
Recurso de Reclamación Núm. 4034/06-17-02-9/885/06-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 13 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de marzo de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 378

V-P-2aS-634
Recurso de Reclamación Núm. 852/06-14-01-4/821/06-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa en sesión de 13 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de marzo de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 378

V-P-2aS-661
Recurso de Reclamación Núm. 2109/06-16-01-2/234/07-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de abril de 2007, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 76. Abril 2007. p. 388

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves veintiuno de junio de dos mil siete.- Firman para constancia, el Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-2aS-28

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

CONCEPTOS DE ANULACIÓN.- LA FALTA DE CITA DE LOS PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS, NO ES SUFICIENTE PARA DESESTIMARLOS.- Si en la demanda de nulidad se expresan argumentos lógico jurídicos suficientes que tiendan a evidenciar la ilegalidad de la resolución impugnada, ello es suficiente para que esta Juzgadora proceda a su análisis, puesto que para que se estudie un concepto de anulación, basta que en la demanda se exprese claramente la causa de pedir -causa petendi- ya que en el artículo 208, fracción VI del Código Fiscal de la Federación, no se exige como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de anulación se haga con formalidades rígidas y solemnes. Además, la demanda no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, como así se establece en el artículo 237 del Código en cita. Por tanto, es razonable tener como concepto de anulación, el razonamiento que se haga, aun cuando el mismo no guarde un apego estricto a la forma lógica del silogismo, puesto que es suficiente que en alguna parte del escrito de demanda se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es el agravio que la actora estima le causa la resolución impugnada y los motivos que originaron dicho agravio, para que esta Juzgadora deba estudiarlo conforme al principio de que todo Tribunal examina los hechos y resuelve conforme a derecho, “iura novit curia” recogido por el artículo 237 del citado Código. (3)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/7/2007)

PRECEDENTES:

IV-P-2aS-104

Juicio No. 100(20)65/98/225/98.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 28 de enero de 1999, por

unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de enero de 1999)
R.T.F.F. Cuarta Época. Año II. No. 9. Abril 1999. p. 209

IV-P-2aS-223
Juicio No. 828/96-07-01-2/ac1/99-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 9 de noviembre de 1999, por mayoría de 4 votos a favor y 1 más con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.
(Tesis aprobada en sesión privada de 9 de noviembre de 1999)
R.T.F.F. Cuarta Época. Año II. No. 20. Marzo 2000. p. 181

IV-P-2aS-321
Juicio de Nulidad No. 3180/99-11-03-4/399/00-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 6 de junio del 2000, por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de junio del 2000)
R.T.F.F. Cuarta Época. Año III. No. 29. Diciembre 2000. p. 234

V-P-2aS-306
Juicio No. 2246/02-09-01-9/808/03-S2-09-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de septiembre de 2003, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.-Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de septiembre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 40. Abril 2004. p. 217

V-P-2aS-624
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 34877/04-17-04-6/444/06-S2-06-03 [09].- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia

Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Salvador Jesús Mena Castañeda.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de marzo de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 345

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves veintiuno de junio de dos mil siete.- Firman para constancia, el Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-2aS-29

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SUPLENCIA DE LOS ADMINISTRADORES DE ADUANAS.- BASTA INVOCAR EL FUNDAMENTO LEGAL QUE LA ADMITA, PARA QUE RESULTE PROCEDENTE.- En términos del artículo 10, penúltimo párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado oficialmente el 22 de marzo de 2001, los Administradores de las Aduanas serán suplidos, indistintamente, por los Subadministradores o por los Jefes de Departamento que de ellos dependan, sin que la disposición legal conmine a la autoridad suplente a motivar en el acto respectivo los motivos de su actuación por ausencia del titular, o las causas que la originaron, resultando suficiente para cumplir con el mandamiento del artículo 16 Constitucional, el señalamiento en la resolución o acto emitido por la autoridad suplente, del precepto legal que admite dicha suplencia, y la indicación de que su suscripción la realiza supliendo al Titular de la Aduana. (4)
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/8/2007)

PRECEDENTES:

V-P-2aS-391
Juicio No. 23268/03-17-02-1/311/04-S2-10-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de septiembre de 2004, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de septiembre de 2004)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. Tomo I. No. 49. Enero 2005. p. 357

V-P-2aS-522
Juicio Contencioso Administrativo No. 2669/05-09-01-1/194/06-S2-08-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de agosto de 2006, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.

(Tesis aprobada en sesión de 8 de agosto de 2006)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo II. No. 73. Enero 2007. p. 1068

V-P-2aS-523
Juicio Contencioso Administrativo No. 3404/05-07-03-4/423/06-S2-09-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de octubre de 2006, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de octubre de 2006)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo II. No. 73. Enero 2007. p. 1068

V-P-2aS-606
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 31875/04-17-08-9/274/06-S2-09-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de febrero de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 163

V-P-2aS-607
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 29765/04-17-11-7/27/06-S2-10-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Isabel Margarita Messmacher Linartas.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de febrero de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 163

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves veintiuno de junio de dos mil siete.- Firman para constancia, el Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SEGUNDA PARTE

PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR

PRIMERA SECCIÓN

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

V-P-1aS-413

ACEPTACIÓN TÁCITA DE LA COMPETENCIA. EL CUMPLIMIENTO DE UN REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD SIN CONTROVERTIR SUS ATRIBUCIONES LEGALES, NO INDICA LA CONFORMIDAD DEL ACTOR CON LAS MISMAS.- Partiendo de que la competencia en materia administrativa puede definirse como el conjunto de facultades, obligaciones y poderes atribuidos por el derecho positivo a un determinado órgano administrativo; las normas que la establecen son de orden público, pues éstas se forman atendiendo a ese interés y, no al del órgano del estado, por lo que aquélla es irrenunciable e improrrogable. Luego entonces, el hecho de que el gobernado, con el fin de evitarse conflictos con la administración pública cumpla con un requerimiento de la autoridad, sin controvertir su competencia, de ninguna forma constituye aceptación tácita que legitima su actuación. Del mismo modo hay que tener presente que el fundamento de la competencia de las autoridades es un elemento esencial del acto de autoridad, en cuanto requisito de legalidad del mismo, pues ello permite acreditar que cuenta con atribuciones legales que sustentan su actuación, por lo que la omisión o insuficiencia de esta exigencia, puede impugnarse por los particulares en el momento en que les produzca lesión a su interés jurídico, lo cual se corrobora con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que establece el estudio, aun de oficio, de la competencia del emisor de los actos impugnados en juicio, comprendiendo su debido acreditamiento y fundamentación, trátese de la resolución final o de alguno de los actos que le sirven de antecedente o apoyo. Por lo expuesto, no es válido admitir como viable el argumento de sumisión tácita del particular a la competencia de la autoridad, pues con ello se estarían convalidando actos viciados desde su origen por provenir de autoridades incompetentes, lo cual es legalmente inaceptable. (1)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1036/06-03-01-3/956/06-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. Alejandra Pastrana Flores.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de junio de 2007)

EN EL MISMO SENTIDO:

V-P-1aS-414

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1033/06-03-01-6/903/06-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. Alejandra Pastrana Flores.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de junio de 2007)

V-P-1aS-415

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1056/06-03-01-2/86/07-S1-04-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. José Antonio Rivera Vargas.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de junio de 2007)

V-P-1aS-416

Juicio Contencioso Administrativo Núm.1024/06-03-01-6/901/06-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de junio de 2007)

V-P-1aS-417

Juicio Contencioso Administrativo Núm.1054/06-03-01-5/83/07-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. Esmeralda Reyes Durán.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de junio de 2007)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-1aS-418

ACTA DE MUESTREO DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN; CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA PARA EL GOBERNADO.- Si bien, el acta de muestreo es un acto instrumental, es decir, un acto de trámite, tal circunstancia no libera a las autoridades aduaneras de cumplir con la obligación establecida por el artículo 16 constitucional en relación con el diverso 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, de fundar y motivar sus actos, habida cuenta que si dicha obligación resulta aplicable a todo acto de autoridad, es indudable que también alcanza al levantamiento del acta de muestreo. Lo anterior es así porque el levantamiento de las actas de que se trata, obedece a la toma de muestras de la mercancía presentada por el particular ante la aduana, cuando se considere que la misma es de difícil identificación, situación que evidentemente incide en el interés jurídico del particular, lo que da lugar a que la referida acta se traduzca en un acto de molestia para el gobernado que trasciende al sentido de la resolución final del proce-

dimiento administrativo en materia aduanera, por lo tanto, es necesario que la autoridad en el levantamiento del acta en mención, cumpla con los requisitos de debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, inclusive la fundamentación de la competencia de la autoridad para llevar a cabo dicho acto dentro del procedimiento. (2)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1036/06-03-01-3/956/06-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. Alejandra Pastrana Flores.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de junio de 2007)

EN EL MISMO SENTIDO:

V-P-1aS-419

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1033/06-03-01-6/903/06-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. Alejandra Pastrana Flores.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de junio de 2007)

V-P-1aS-420

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1056/06-03-01-2/86/07-S1-04-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. José Antonio Rivera Vargas.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de junio de 2007)

V-P-1aS-421

Juicio Contencioso Administrativo Núm.1024/06-03-01-6/901/06-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de junio de 2007)

V-P-1aS-422

Juicio Contencioso Administrativo Núm.1054/06-03-01-5/83/07-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. Esmeralda Reyes Durán.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de junio de 2007)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

En ese contexto, es necesario señalar que la autoridad emisora de un acto administrativo que deba ser notificado a los particulares debe cumplir con el requisito de legalidad establecido en el artículo 16 Constitucional y recogido por el artículo 38, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, es decir, debe estar debidamente fundado y motivado, debiendo entender por lo primero, como la cita del o de los preceptos aplicables al caso, esto es, que dentro de sus supuestos se encuentre la actuación de la autoridad, así como la facultad de su actuar, y como motivación,

debemos entender la expresión de las razones, motivos y circunstancias que llevaron a la autoridad a la emisión del acto.

Precisado lo anterior, este Órgano Jurisdiccional adquiere convicción de que tratándose de la fundamentación del acto administrativo, la autoridad debe citar los preceptos legales que contemplen expresamente su competencia, tanto material, como territorial, esto es, el precepto o preceptos que establezcan la facultad para emitir el acto en el sentido en que lo hace, así como aquellos dispositivos que contemplan la circunscripción territorial en que pueden actuar.

En este sentido, de la lectura al acta de muestreo de fecha 24 de febrero de 2005, que obra agregada a fojas 134 y 135 del expediente principal, se advierte que la autoridad para fundar su competencia territorial, citó el artículo tercero del Acuerdo por el que se señala nombre, sede y circunscripción territorial de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria, numeral que fue transcrito con antelación y del que se observa que el mismo se encuentra integrado de la siguiente forma:

- Un primer párrafo que se refiere a la Administración General de Aduanas, la cual tiene su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y ejerce sus facultades en todo el territorio nacional.

- Un segundo párrafo, que se refiere al nombre, sede y circunscripción territorial en donde ejercerán sus facultades las aduanas, secciones aduaneras y aeropuertos internacionales, sin que la autoridad precisara y transcribiera en el acta de muestreo de mercancías de difícil identificación de referencia, el párrafo aplicable en el caso concreto, con lo cual es indudable que no cumple con el requisito de la debida fundamentación y motivación de su competencia territorial.

- Enseguida hay 48 párrafos relativos a la circunscripción territorial de igual número de aduanas en el territorio nacional.

Bajo el anterior orden de ideas, es incontrovertible que la competencia territorial de la autoridad emisora del acta de muestreo, de fecha 24 de febrero de 2005 en mención, deriva de una norma compleja, por lo que era necesario que en el texto de la misma se transcribiera la parte conducente del precepto correspondiente.

Apoya el criterio anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre 2001, página 31, que establece lo siguiente:

> "**COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.-** De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: 'COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.', así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las

disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

"Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

"Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno."

De la jurisprudencia anterior se desprende que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación que establece el artículo 16 constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir un acto de molestia, es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra

o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión, ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

De igual forma es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2005, página 310, que establece:

> "**COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.-** De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: 'COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.', así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la

prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, Reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

"Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos mil cinco."

De la jurisprudencia antes transcrita, se desprende que para considerar satisfecha la garantía de debida fundamentación que establece el artículo 16 de la Constitución Federal, por lo que respecta a la competencia de la autoridad administrativa para emitir un acto de molestia, es necesario que en el documento que se contenga, se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustada a derecho. Ello es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión, ninguna clase de ambigüedad, pues su finalidad consiste esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado, en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

Luego entonces, si el artículo Tercero del Acuerdo por el que se señala nombre, sede y circunscripción territorial de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria, numeral que quedó antes transcrito, es una norma compleja, que consta de diversos párrafos, que se refieren al nombre, sede y circunscripción territorial en donde se ejercerán las facultades de las 48 aduanas en el territorio nacional, tenemos que en términos de la jurisprudencia 2a./J.115/2005, antes señalada, la autoridad se encontraba obligada a precisar y transcribir cuál de estos párrafos era aplicable en su acto de molestia, para considerar que se cumplió cabalmente con la garantía de fundamentación en cuanto a la competencia territorial, cuestión que no ocurrió en la especie y, por ende, en el caso procede, en acatamiento a la jurisprudencia que se concluya que el acta de muestreo de mercancías de difícil identificación arancelaria folio 400/00198/2005/002 de fecha 24 de febrero de 2005, no está debidamente fundada en cuanto a su competencia territorial.

No es óbice para lo anterior, los argumentos formulados por la autoridad demandada tendientes a controvertir los conceptos de impugnación analizados, en atención a las siguientes consideraciones:

En efecto, la autoridad señala concretamente que el levantamiento de un acta de muestreo de mercancía de difícil identificación al no transgredir la esfera jurídica de los particulares, temporal o definitivamente, no es acto de molestia ya que se trata de un acto de carácter instrumental. Que no constituye una resolución fiscal o de inicio de facultades de comprobación fiscal, por lo que no es necesario el requisito de fundamentación y motivación previsto en el artículo 16 Constitucional en relación con el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, además de que invoca criterios de nuestro Máximo Tribunal, por analogía respecto a que en las actas de visita domiciliaria no es exigible generalmente la garantía de fundamentación y motivación, máxime que el acta de muestreo es levantada dentro del despacho aduanero, esto es, dentro de las propias instalaciones de la aduana, y en consecuencia, no representa el inicio de las facultades de comprobación de la autoridad, por lo que según la autoridad existió sumisión tácita de la demandante a la competencia territorial de la Aduana de Tijuana, invocando diverso criterio de este Tribunal al respecto.

En principio, se considera que no le asiste la razón a la demandada al afirmar que existió sumisión tácita de la actora a la competencia de la Aduana emisora de la resolución impugnada, ya que si se parte de que la competencia en materia administrativa puede definirse como el conjunto de facultades, obligaciones y poderes atribuidos por el derecho positivo a un determinado órgano administrativo; así, las normas que establecen la competencia son de orden público, pues éstas se forman atendiendo al interés público, no al del órgano del Estado, por lo que aquélla es irrenunciable e improrrogable, tanto por acuerdo entre las partes, como de ellas con la administración; esto inclusive para la competencia territorial, a diferencia de lo que ocurre en el derecho procesal. Luego entonces, el hecho de que el gobernado con el fin de evitarse conflictos con la administración pública, intente cumplir lo que le es requerido por un ente estatal sin controvertir su competencia, de ninguna manera legitima la actuación de una autoridad incompetente, pues, se reitera, la competencia

en el ámbito administrativo es improrrogable; además de que el fundamento de la competencia de las autoridades constituye un elemento esencial del acto de autoridad, cuyo cumplimiento puede ser impugnado por los particulares en el momento en que les produzca algún agravio jurídico, tan es así, que el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo impone a este Tribunal la obligación de analizar incluso de oficio si, la autoridad administrativa carece o no de competencia legal para emitir el acto impugnado o alguno de los que le sirven de antecedente o apoyo, por lo que suponiendo sin conceder que se aceptara la sumisión tácita del particular a la competencia de la autoridad, se estarían convalidando actos viciados desde su origen por provenir de autoridades incompetentes.

De igual forma, cabe precisar que si bien la autoridad demandada invoca una tesis sustentada por una Sala Regional de este Tribunal, que acepta la sumisión tácita de la competencia de una aduana; también es cierto, que los criterios que al efecto emitan las Salas Regionales de este Tribunal no son obligatorios para esta Sala Superior de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por tanto, procede desestimar la tesis en mención.

Por otra parte, se considera que es infundado el argumento de la autoridad demandada en el sentido de que el levantamiento de un acta de muestreo de mercancía de difícil identificación que no transgrede la esfera jurídica de los particulares, temporal o definitivamente, no es un acto de molestia, pues se trata de un acto de carácter instrumental; que no es una resolución fiscal o de inicio de facultades de comprobación fiscal; por lo que no es necesario que cumpla con el requisito de fundamentación y motivación previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal en relación con el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que, si bien, el acta de muestreo es un acto instrumental, como lo califica la autoridad, esto es, un acto de trámite, tal circunstancia no libera a dichas autoridades de cumplir con la obligación establecida por el artículo 16 Constitucional de fundar y motivar sus actos, habida cuenta que si dicha obligación resulta aplicable a todo acto de autoridad, es indudable que también se aplica en la especie, ya que el levantamiento del acta de referencia obedece a la toma de muestras de la mercancía presentada

por la actora ante la aduana, situación que evidentemente incide en el interés jurídico del particular, lo que da lugar a que la referida acta se traduzca en un acto de molestia para el gobernado que trasciende al sentido de la resolución final del procedimiento, por lo tanto, es necesario que la autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 Constitucional.

(...)

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción II, y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 20, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es de resolverse y se resuelve:

I.- La parte actora acreditó los extremos de su acción; en consecuencia;

II.- Se declara la nulidad tanto de la resolución impugnada en este juicio, como de la resolución en su momento recurrida, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia.

III.- NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los autos a la Sala Regional del Noroeste III de este Tribunal, una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 22 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, María del Consuelo Villalobos Ortíz, Jorge Alberto García Cáceres y Manuel Luciano Hallivis Pelayo.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se formuló el presente engrose el 2 de abril de 2007 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción III y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Firma el Magistrado Manuel L. Hallivis Pelayo, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Lic. Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, que da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-1aS-423

SUPLENCIA POR AUSENCIA Y DELEGACIÓN DE FACULTADES, CONSTITUYEN CONCEPTOS DIFERENTES Y, POR ENDE, NO TIENEN LAS MISMAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.- La suplencia tiene como propósito que las funciones de los órganos gubernamentales no se vean afectadas por la ausencia del funcionario a quien la ley le otorga la facultad; de tal suerte que cuando un funcionario actúa en ausencia de otro, no invade la esfera de atribuciones del titular de la facultad, ya que únicamente lo sustituye en su ausencia, pues actuando a nombre del titular de la facultad no existe transmisión alguna de atribuciones por parte del titular de la misma a favor de un funcionario diverso. En cambio, cuando una autoridad actúa en uso de facultades delegadas, lo hace en nombre propio con la atribución que le fue conferida por el titular en el acuerdo correspondiente, y no en sustitución de la autoridad que realizó la delegación. En tal virtud, debe concluirse que tratándose de la suplencia por ausencia, formalmente el acto se atribuye al titular y no a quien lo suscribe, en razón de que cuando un funcionario actúa sustituyendo al titular de las facultades como consecuencia de su ausencia, se entiende que no actúa en nombre propio sino en el de la autoridad que sustituye. Por ello, es al sustituido a quien jurídicamente se le puede imputar la responsabilidad de los actos que se cuestionan, por ser el autor de la emisión de los actos y no de quien los firmó en suplencia por ausencia. (3)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4930/06-06-02-6/287/07-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 5 de junio de 2007, por unanimidad de 4 votos en el considerando tercero y por mayoría de 3 votos a favor y 1 voto en contra en el considerando cuarto y quinto.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.
(Tesis aprobada en sesión de 5 de junio de 2007)

PRECEDENTES:

V-P-1aS-90
Juicio No.1831/99-05-01-5/553/01-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de octubre de 2001, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Malpica y De Lamadrid.- Secretario: Lic. Antonio Miranda Morales.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de febrero de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año II. No. 20. Agosto 2002. p. 56

V-P-1aS-290
Juicio No. 2215/04-11-01-3/389/05-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de octubre de 2005, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de octubre de 2005)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 62. Febrero 2006. p. 206

V-P-1aS-291
Juicio No. 19337/04-17-10-1/567/05-S1-03-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de noviembre de 2005, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Alma Gianina Isabel Peralta De Gregorio.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de noviembre de 2005)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 62. Febrero 2006. p. 206

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

V-P-1aS-424

RECURSO DE RECLAMACIÓN CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN REMITIR A LA SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR QUE POR TURNO CORRESPONDA, PARA QUE ÉSTA LO RESUELVA.- Del segundo párrafo del artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que una vez interpuesto el recurso de reclamación a que se refiere dicho precepto, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de cinco días, para que exprese lo que a su derecho convenga y, una vez transcurrido dicho plazo, la Sala Regional debe remitir a la Sección de la Sala Superior que por turno corresponda, copias certificadas de: a) Escrito de demanda, b) Sentencia interlocutoria recurrida y su notificación y; c) Del escrito que contenga el recurso de reclamación, con expresión de la fecha y hora de recibido. No obstante lo anterior, tenemos que, para que las Secciones de la Sala Superior tengan elementos de convicción suficientes para formular la resolución correspondiente, también son necesarias las copias certificadas de los siguientes documentos: 1) Acuerdo que tiene por interpuesto el recurso de reclamación y da vista a la contraparte para que manifieste lo que a su derecho convenga, así como sus respectivas constancias de notificación, 2) En su caso, el escrito por medio del cual la contraparte desahoga la citada prevención con el acuerdo que le recaiga a dicho escrito. Por tanto, para tener por debidamente integrada una carpeta de reclamación, es necesario que en ésta se contengan las copias certificadas de todos los documentos antes precisados, mismos que, efectivamente, son necesarios que las Secciones tengan a la vista, al emitir la sentencia interlocutoria correspondiente. (4)

Recurso de Reclamación Núm. 10513/06-11-02-4/452/07-S1-03-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, en sesión de 28 de junio de 2007, por unanimidad de 4 votos.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana. (Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2007)

PRECEDENTE:

V-P-1aS-407
Recurso de Reclamación Núm. 813/06-07-03-7/201/07-S1-03-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de mayo de 2007, por unanimidad de 4 votos.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana. (Tesis aprobada en sesión de 29 de mayo de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 78. Junio 2007. p. 148

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

V-P-1aS-425

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN.- VIGILAR LA SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL CORRESPONDE A LA AUTORIDAD EJECUTORA Y NO A LA SALA REGIONAL DEL CONOCIMIENTO.- La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula, en su artículo 28, las reglas para la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuya fracción VI establece que en el caso de que se impugne el cobro de un crédito fiscal en el juicio contencioso administrativo federal, deberá concederse la suspensión del crédito combatido siempre que se reúnan los requisitos de procedencia señalados por los artículos 24 y 28 de la citada ley, pero condicionada su efectividad a que el solicitante garantice el interés fiscal ante la autoridad ejecutora o en todo caso acredite que ya lo hizo por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; de donde se puede concluir que si el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación establece los conceptos que deben garantizarse para satisfacer el interés fiscal, es claro que corresponde a la autoridad ejecutora la calificación de la garantía otorgada por el deudor, por ende, la autoridad competente para vigilar que sea suficiente dicha garantía, no sólo al momento de su aceptación sino también con posterioridad, es la propia autoridad ejecutora. Por lo tanto, la Sala Regional del conocimiento no tiene atribuciones para analizar si la garantía que en su momento aceptó la autoridad ejecutora es suficiente o no para garantizar el interés fiscal, ya que si el otorgamiento de garantía del interés fiscal no es requisito de procedencia de la suspensión sino de eficacia, no sería legal que se negara la citada medida cautelar bajo el argumento de que el solicitante no otorgó garantía suficiente del interés fiscal, ya que la calificación de la suficiencia corresponde a la autoridad ejecutora. (5)

Recurso de Reclamación Núm. 1251/06-07-03-6/393/07-S1-04-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, en sesión de 2 de agosto de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Virginia Pétriz Herrera.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de agosto de 2007)

PRECEDENTE:

V-P-1aS-403
Recurso de Reclamación Núm. 4670/06-11-03-1/44/07-S1-01-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de mayo de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 78. Junio 2007. p. 112

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

V-P-1aS-426

DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN.- TAL CIRCUNSTANCIA CONDUCE A DECLARAR QUE QUEDA SIN MATERIA EL SEÑALADO MEDIO DE DEFENSA.- Si la parte recurrente se desiste expresamente en su perjuicio del recurso de reclamación interpuesto, desistimiento que además es ratificado ante el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional correspondiente, procede declarar que dicho medio de defensa ha quedado sin materia. (6)

Recurso de Reclamación Núm. 1716/06-14-01-7/175/07-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de agosto de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. P. Alejandra Pastrana Flores.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de agosto de 2007)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

De las transcripciones que anteceden, se advierte que la C. Miriam Sarahy García Martínez, en su carácter de autorizada del C. Silverio Gustavo Ramírez Ramírez, actor en el juicio, personalidad que acreditó debidamente con la exhibición de la copia certificada de la cédula profesional No. 3238758, manifestó expresamente que toda vez que **con fecha 5 de diciembre de 2006, le fue concedida la suspensión definitiva de los actos impugnados, presentaba formal desistimiento del**

recurso de reclamación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 16 de octubre de 2006, manifestación que también fue ratificada en forma personal por dicha autorizada a través de su comparecencia ante el Secretario de Acuerdos Lic. Edgar Eugenio Navarro Ibarra, adscrito a la Primera Ponencia de la Sala Regional del Pacífico de este Tribunal, **al señalar expresamente que comparecía a ratificar su escrito recibido ante la Sala Regional de referencia el 25 de enero de 2007, mediante el cual se desistió del recurso de reclamación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 16 de octubre de 2006, mediante la cual se negó la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado.**

Aunado a lo anterior, y dado que no obra agregada en la carpeta relativa al recurso de reclamación que nos ocupa, la interlocutoria de fecha 5 de diciembre de 2006, a que alude la recurrente y en la que se apoya para solicitar el desistimiento del multicitado recurso de reclamación, para efectos de mayor claridad en el asunto, esta Juzgadora estima conveniente reproducir el contenido del acuerdo de fecha **24 de enero del año en curso**, emitido por los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Pacífico, que en la parte que es de nuestro interés señala lo siguiente:

> "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
> FISCAL Y ADMINISTRATIVA
> "SALA REGIONAL DEL PACÍFICO
> "EXPEDIENTE: 1716/06-14-01-7
> "ACTOR: SILVERIO GUSTAVO RAMÍREZ RAMÍREZ

"Acapulco, Guerrero, a veinticuatro de enero de dos mil siete.- Se da cuenta con el oficio número 325-SAT-12-I-C2-(1), recibido en esta Sala el 22 de enero de 2007, a través del cual la **Administración Local Jurídica de Acapulco, Guerrero,** dependiente del Servicio de Administración Tributaria, en representación de la demandada, desahoga la vista ordenada en auto de 04 de enero de 2007, respecto del recurso de reclamación interpuesto por la parte actora

en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 16 de octubre de 2006, a través del cual se negó la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. Con fundamento en los (sic) artículos (sic) 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, téngase por desahogada en sus términos la vista ordenada en el auto admisorio del recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, en consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se dirija a la Sección de la Sala Superior que por turno corresponda, remítase en copias certificadas el escrito de demanda, la sentencia interlocutoria recurrida y sus respectivas constancias de notificación, así como el escrito del recurso de reclamación recibido en esta Sala el día 13 de octubre de 2006, a las 8:47 horas. **Por otra parte, pero en el mismo sentido, infórmesele a la Sección de la Sala Superior que por turno corresponda el presente asunto, que si bien es cierto que a través de la sentencia interlocutoria de fecha 16 de octubre de 2006, se le negó a la parte actora la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, también resulta concuso (sic) que con fecha 23 de octubre de 2006, la parte actora solicitó nuevamente la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, otorgándosele la suspensión provisional de la ejecución del acto impugnado, mediante acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2006, y por sentencia interlocutoria de fecha 05 de diciembre de 2006, se le concedió la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado**; lo anterior, se le hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. **NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA.** Así lo proveyeron y firman los Magistrados que integran la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados **José Cruz Yánez Cano**, Instructor en el presente juicio y Presidente de esta Sala, **Ramiro Hernández Nieto y José Román Campos Ramos**, Primer Secretario de Acuerdos, actuando en funciones de Magistrado por Ministerio de Ley de conformidad con el Acuerdo G/97/2006 de 13 de octubre de 2006, emitido por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 19 de octubre de 2006, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado **Edgar Eugenio Navarro Ibarra,** quien da fe."
(El resaltado es de esta Juzgadora)

Como se advierte de lo antes transcrito, específicamente en la parte que interesa, con fecha 23 de octubre de 2006, la demandante solicitó nuevamente la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, ante lo cual, con fecha **04 de diciembre de 2006, la Sala Regional del Pacífico le otorgó la suspensión provisional** de dicho acto administrativo, y por **sentencia interlocutoria de 05 de diciembre del año en cita, se le concedió la suspensión definitiva del referido acto controvertido.**

En este orden de ideas, la Primera Sección de la Sala Superior considera que el presente recurso de reclamación ha quedado sin materia en virtud de que en la especie existen constancias fehacientes de que la autorizada del actor se desistió expresamente del recurso de reclamación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de 16 de octubre de 2006, a través de la cual se negó la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, solicitud de desistimiento que además fue ratificada por la misma autorizada del actor a través de su comparecencia ante el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Pacífico el día 24 de abril de 2007.

En tales condiciones, al haberse desistido expresamente el actor por conducto de su autorizada del recurso de reclamación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de 16 de octubre de 2006 y al haber sido ratificado también dicho desistimiento por parte de la misma autorizada en su comparecencia ante el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Pacífico, se demuestra que ya no subsisten las razones que originaron la interposición del mencionado recurso, por lo que se actualizó un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se promovió dicho medio de defensa y, por ende, existe imposibilidad jurídica para resolver el fondo de la reclamación planteada.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su debido enlace con el artículo 20, fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es de resolverse y se resuelve:

I.- Es procedente el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia interlocutoria de 16 de octubre de 2006, en consecuencia,

II.- Se declara sin materia el recurso de reclamación referido en el resolutivo anterior.

III.- Envíese copia del presente fallo a la Sala Regional del Pacífico, para que ésta sea integrada a la carpeta de suspensión correspondiente.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 2 de agosto de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández y Manuel Luciano Hallivis Pelayo. Estuvo ausente la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se formuló el presente engrose el 3 de agosto de 2007 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción III y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Firma el Magistrado Manuel L. Hallivis Pelayo, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Lic. K'antunil Alcyone Arriola Salinas, Secretaria Adjunta de Acuerdos, que da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

V-P-1aS-427

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.- LA SOLICITUD PREVIA A LA AUTORIDAD DEMANDADA NO ES UN REQUISITO PARA SU PROCEDENCIA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- El primer párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala que las medidas cautelares que se dictan en el juicio contencioso administrativo tienen la finalidad de mantener la situación de hecho existente a fin de evitar que con la ejecución del acto controvertido quede sin materia el proceso, motivo por el que se puede concluir que la suspensión de la ejecución del acto impugnado -que regula el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo- tiene la misma finalidad, ya que se trata de una especie de las medidas cautelares que proceden en el juicio contencioso administrativo federal. Por tanto, legalmente no es dable condicionar la procedencia de la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado a la previa presentación de una solicitud de suspensión ante la autoridad demandada, ya que tal exigencia haría nugatoria la medida cautelar en comento. No es óbice para lo anterior que el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al señalar que el demandante podrá solicitar la suspensión en comento cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución del acto impugnado, porque dicho numeral no debe entenderse en el sentido de que la suspensión está condicionada a la presentación previa de una solicitud ante la autoridad administrativa, sino que en realidad el numeral en comento está haciendo referencia a uno de los escenarios posibles que pueden darse, esto es, que el gobernado haya solicitado ante la autoridad administrativa la suspensión del acto administrativo, habiendo otorgado una garantía al respecto; pero si la autoridad responde de manera negativa la solicitud, rechaza la garantía ofrecida o reinicia la ejecución, el particular puede solicitar la suspensión -como medida cautelar- en los términos del artículo 28

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo al acudir ante este Tribunal en contra del acto en cuestión; sin que exista impedimento alguno para que el particular pueda directamente solicitar la invocada medida cautelar en su demanda sin haber pedido antes a la autoridad la suspensión de la ejecución del acto administrativo, ya que la solicitud previa no es requisito de procedibilidad de la suspensión regulada por el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (7)

Recurso de Reclamación Núm. 3518/06-12-03-9/923/06-S1-05-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de agosto de 2007, por unanimidad de 4 votos.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. Guadalupe Camacho Serrano.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de agosto de 2007)

EN EL MISMO SENTIDO:

V-P-1aS-428

Recurso de Reclamación Núm. 9390/06-11-02-1/305/07-S1-01-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de agosto de 2007, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de agosto de 2007)

PRECEDENTES:

V-P-1aS-328
Recurso de Reclamación No. 2349/06-12-03-8/536/06-S1-01-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de septiembre de 2006, por unanimidad de 4 votos.-

Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de octubre de 2006)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo II. No. 73. Enero 2007. p. 835

V-P-1aS-329
Recurso de Reclamación No. 731/06-12-01-7/652/06-S1-05-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de octubre de 2006, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. Teresa Isabel Téllez Martínez.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de octubre de 2006)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo II. No. 73. Enero 2007. p. 835

V-P-1aS-330
Recurso de Reclamación No. 1778/06-12-02-9/739/06-S1-01-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de diciembre de 2006, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de diciembre de 2006)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo II. No. 73. Enero 2007. p. 835

V-P-1aS-378
Recurso de Reclamación Núm. 4670/06-11-03-1/44/07-S1-01-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de marzo de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 76. Abril 2007. p. 143

SEGUNDA SECCIÓN

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-2aS-756

RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.- ALCANCE DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- En términos del citado artículo 132, primer párrafo, la resolución del recurso administrativo debe fundarse en derecho y examinar todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, pero cuando uno de ellos sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará el examen de dicho punto. Ahora bien, no obstante que la autoridad se apoye en el numeral de referencia, y considere fundado uno de los motivos de impugnación, como suficiente para revocar el acto combatido, a fin de que se emita uno nuevo, debidamente fundado y motivado, evidentemente causa perjuicio a los intereses del promovente, en tanto que el recurso administrativo constituye un medio de defensa, a través del cual el particular tiene interés de que quede definida legalmente su situación y no se le deje en estado de indefensión, por el hecho de que se reconozca que en uno de sus agravios le asista la razón, para que se repita el acto corrigiendo sus defectos, toda vez que aun cuando el numeral en comento, contempla la posibilidad de examinar el agravio que sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, se entiende necesariamente que esa validez se esté desvirtuando totalmente y no para que el acto se emita de nueva cuenta, con lo cual se contraría totalmente el texto del precepto, al no quedar dilucidada la cuestión de fondo, por ser ese el sentido de la consideración de agravio suficiente para desvirtuar la validez del acto. (8)

Recurso de Reclamación Núm. 48/06-07-03-4/395/07-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de junio de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.-

Magistrado Ponente: Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. Salvador Jesús Mena Castañeda.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de junio de 2007)

PRECEDENTES:

V-P-2aS-78
Juicio No. 853/97-01-01-3/ac1/144/99-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2001, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Juan Francisco Villarreal Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión privada de 24 de abril de 2001)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 10. Octubre 2001. p. 183

V-P-2aS-562
Juicio Contencioso Administrativo No. 1460/05-03-01-9/92/06-S2-09-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de octubre de 2006, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de octubre de 2006)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo III. No. 73. Enero 2007. p. 1428

COMERCIO EXTERIOR

V-P-2aS-757

DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN DE LOS COMENTARIOS AL MODELO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, CONFORME A LA CONVENCIÓN DE VIENA.- La Convención de Viena establece reglas para la interpretación de los tratados internacionales, la cual al haberse suscrito y ratificado por México, se convierte en derecho interno mexicano y consecuentemente, son obligatorias para el juzgador. Por su parte, el artículo 31 de dicha Convención señala, entre otras reglas, que un tratado debe interpretarse de buena fe, en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin; el contexto comprende, entre otros elementos: a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de su celebración, b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. Así, en atención al citado precepto, se acepta como uno de los fines de los convenios celebrados entre los gobiernos de los distintos países para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y el capital, precisamente el de evitar que simultáneamente, dos o más países impongan ese tipo de gravámenes a una persona por un mismo hecho imponible. En virtud de que dichos convenios se pactaron conforme al modelo elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, los mismos son fuente privilegiada para la interpretación de los tratados referidos y no una norma obligatoria, siempre que los Gobiernos de los residentes en los países, sujetos a controversia, hayan participado en la elaboración de ese instrumento sin formular reserva alguna respecto del comentario de que se trate o del precepto comentado. En consecuencia, si los Estados Unidos de Norte América y México aceptaron el Modelo citado, los comentarios contenidos en él, deben ser atendidos como fuente privilegiada para la interpretación del Tratado celebrado entre ellos para Evitar la Doble Tributación e Impedir la Evasión Fiscal. Lo anterior, es sin perjuicio de que en los casos en que el particular se beneficie de la aplicación de estos comentarios y siempre que se mantengan las

disposiciones generales vigentes relacionadas con dicha obligatoriedad, se consideren obligatorios en los términos del precedente cuya voz dice: DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS COMENTARIOS AL MODELO DE LA OCDE. (9)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27893/04-17-08-1/366/07-S2-07-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de junio de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de junio de 2007)

PRECEDENTE:

IV-P-2aS-183
Juicio No. 12666/98-11-06-3/99-S2-06-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 7 de septiembre de 1999, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Susana Ruiz González.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de septiembre de 1999)
R.T.F.F. Cuarta Época. Año II. No. 17. Diciembre 1999. p. 168

COMERCIO EXTERIOR

V-P-2aS-758

DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS COMENTARIOS AL MODELO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.- El artículo 35 del Código Fiscal de la Federación permite a los funcionarios fiscales facultados, emitir criterios para la aplicación de las disposiciones fiscales; los cuales, si son publicados en el

Diario Oficial de la Federación, derivan derechos para los particulares. Así, tenemos que si se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que los Comentarios al Modelo de la OCDE para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal, son obligatorios para las autoridades fiscales en la interpretación de los tratados celebrados por México, máxime si son congruentes con dichas disposiciones y correspondan a las explicaciones técnicas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, éstos podrán ser invocados por los particulares, para la debida interpretación y aplicación de los tratados para evitar la doble imposición en los que México sea parte. (10)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27893/04-17-08-1/366/07-S2-07-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de junio de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de junio de 2007)

PRECEDENTE:

III-PS-II-251
Juicio de Nulidad No. 100(20)33/97/20328/96.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 13 de enero de 1998, por unanimidad de 4 votos con la ponencia modificada.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Encargado del Engrose: Magistrado Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Susana Ruíz González.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de febrero de 1998)
R.T.F.F. Tercera Época. Año XI. No. 126. Junio 1998. p. 302
Fe de Erratas. R.T.F.F. Cuarta Época. Año I. No. 1. Agosto 1998. p. 125

TRATADOS INTERNACIONALES

V-P-2aS-759

REGALÍAS. SU CONCEPTO A LA LUZ DE LO ESTABLECIDO POR EL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- De conformidad con el artículo 7 del Convenio para Evitar la Doble Tributación e Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta celebrado entre nuestro país y los Estados Unidos de América, el concepto de regalías se define como el pago que se realiza por el uso o concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria artística o científica que derive de una patente, marca de fábrica, de comercio, dibujo o modelo plano, fórmula o procedimiento secreto. Igualmente el artículo 12 del Convenio en cuestión estatuye que por regalía se entenderá también el pago realizado por el uso o la concesión de un equipo industrial o científico. Ahora bien, para la debida interpretación del Convenio es necesario acudir al Modelo y los Comentarios del Convenio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE-, en el cual, si bien, se menciona en su artículo 9 que los cánones o regalías deben incluir los pagos por la sesión de equipos industriales o científicos, y los cataloga como beneficios empresariales, es importante destacar que México, de manera expresa realizó una reserva al artículo 12, en el Apartado 2, punto 41, en el sentido de que nuestro país se reservaba el derecho a seguir incluyendo los rendimientos derivados del arrendamiento de equipos industriales, comerciales o científicos en la definición de cánones o regalías. Por lo tanto, es concluyente que los pagos realizados a empresas residentes en los Estados Unidos de América por la renta de equipos industriales no pueden ser catalogados como regalías para los efectos ya mencionados. (11)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27893/04-17-08-1/366/07-S2-07-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de junio de 2007, por unanimidad de 5 votos

a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de junio de 2007)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEXTO.- (...)

Los Magistrados integrantes de esta Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por cuestión de método y atentos a que la litis en el presente juicio consiste en determinar si los pagos efectuados a residentes en el extranjero por el arrendamiento de aviones y turbinas para uso comercial está sujeta a retención bajo el concepto de regalías en términos del artículo 12, o bien, conforme al principio de "beneficios empresariales" establecido en el artículo 7º, la actora se encuentra liberada de realizar dichas retenciones, ambas disposiciones del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, para esta Juzgadora resulta conveniente proceder a la revisión de dichas disposiciones:

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

"**ARTÍCULO 7**

"**BENEFICIOS EMPRESARIALES**

"1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser que la empresa realice o ha realizado su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean atribuibles a:
"a) este establecimiento permanente;
"b) ventas en este otro Estado de bienes o mercancías de tipo idéntico o similar al de los vendidos a través de este establecimiento permanente.
"Sin embargo, los beneficios derivados de las ventas descritas en el inciso b) no serán sometidos a imposición en el otro Estado si la empresa demuestra que dicha ventas han sido realizadas por razones distintas a las de obtener un beneficio del presente Convenio.
"2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un Estado Contratante realice o ha realizado su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento los beneficios que éste hubiera podido obtener de ser una empresa distinta e independiente que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones.
"3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos en los que se haya incurrido para la realización de los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente como en otra parte. Sin embargo, no serán deducibles los pagos que efectúe, en su caso, el establecimiento permanente (que no sean los hechos por concepto de reembolso de gastos efectivos) a la oficina central de la empresa o a alguna de sus otras sucursales, a título de regalías, honorarios o pagos análogos a cambio del derecho de utilizar patentes u otros derechos, o a título de comisión, por servicios concretos prestados o por gestiones hechas o, salvo en el caso

de una empresa bancaria, a título de intereses sobre dinero prestado al establecimiento permanente.
"4. No se atribuirá ningún beneficio empresarial a un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste compre bienes o mercancías para la empresa.
"5. A efectos del presente Convenio, los beneficios atribuibles al establecimiento permanente incluirán únicamente los beneficios o pérdidas provenientes de los activos o actividades del establecimiento permanente y se calcularán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.
"6. Cuando los beneficios empresariales comprendan rentas reguladas separadamente en otros Artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por las del presente artículo."

"**ARTÍCULO 12**

"**REGALÍAS**

"1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.
"2. Sin embargo, dichas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no excederá del 10 por ciento del importe bruto de las regalías.
"3. El término 'regalías' empleado en el presente Convenio significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o científica, incluidas las películas cinematográficas y otras registradas en películas o cintas magnetoscópicas u otros medios de reproducción para uso en relación con la televisión, de una patente, marca de fábrica o de comercio, dibujo o modelo,

plano, fórmula o procedimiento secreto, u otro derecho o propiedad similar, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, **así como por el uso o la concesión de uso de un equipo industrial, comercial o científico que no constituya propiedad inmueble en los términos del Artículo 6. El término 'regalías' también incluye las ganancias obtenidas de la enajenación de cualquiera de dichos derechos o bienes que estén condicionadas a la productividad, uso o disposición de los mismos.**

"4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, ejerce o ha ejercido en el otro Estado Contratante de donde proceden las regalías una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en este otro Estado, o presta o ha prestado unos servicios personales independientes por medio de una base fija situada en él, y las regalías son atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija. En estos casos se aplican las disposiciones del Artículo 7 (Beneficios Empresariales) o del Artículo 14 (Servicios Personales Independientes), según proceda.

"5. Cuando existan relaciones especiales entre el deudor y el beneficiario efectivo de las regalías o de las que uno y otro mantengan con terceros y el importe de las regalías pagadas, por cualquier motivo, exceda del que hubieran convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplican más que a este último importe. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

"6. Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando quien paga las regalías es el propio Estado, una de sus subdivisiones políticas, una de sus entidades locales o un residente de este Estado. Sin embargo:

"a) cuando la persona que paga las regalías, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con el cual se contrae la obligación de pagar regalías, y dichas regalías son soportadas por el establecimiento permanente o base

fija, dichas regalías se consideran provenientes del Estado Contratante en el que está situado el establecimiento permanente o base fija; o
"b) cuando el inciso a) no permita considerar las regalías como provenientes de alguno de los Estados Contratantes y las regalías se relacionan con el uso, o la concesión de uso de cualquier propiedad o derecho mencionado en el párrafo 3 en uno de los Estados Contratantes, las regalías se consideran provenientes de este Estado.
(Énfasis de esta Juzgadora)

Los Magistrados advierten que la resolución impugnada en el presente juicio se funda y motiva en términos del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia del impuesto sobre la renta, el cual tiene el carácter de un tratado internacional celebrado por el Ejecutivo Federal, habiendo sido suscrito en la ciudad de Washington, D.C., el 18 de septiembre de 1992 y aprobado por el Senado de la República el 12 de julio de 1993.

En esos términos, dicho Convenido debe ser observado por los Estados Contratantes, ya que constituye un tratado internacional regido por las normas del Derecho Internacional que deriva en compromisos de esa naturaleza para las partes, e inclusive por mandato expreso del artículo 133 de la Constitución, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la Nación, por tanto, tal como su observancia y aplicación está por encima de la Ley Federal.

En efecto, los tratados internacionales constituyen una manifestación de voluntad de los Estados que lo suscriben a fin de obligarse a realizar la conducta acordada, su esencia radica en que constituye una fuente específica de una obligación de derecho internacional contraída voluntariamente por un Estado a favor de otro u otros, y por tanto, originan derechos recíprocos entre los contratantes.

Robustece el anterior criterio, la tesis del Poder Judicial Federal cuyo rubro y contenido se reproducen a continuación:

"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXV, Abril de 2007
"Página: 6
"Tesis: P. IX/2007
"Tesis Aislada
"Materia(s): Constitucional

"**TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.-** La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario 'pacta sunt servanda', contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando nor-

mas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

"Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

"El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.

"Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada."

Por otra parte, de conformidad con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los mismos deben interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto y teniendo en cuenta objeto y fin, comprendiendo ese contexto además del texto, incluidos su preámbulo y anexos, todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre las partes con motivo de la celebración de un tratado y todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado, en los términos siguientes:

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

"Artículo 31.- Regla general de interpretación.
"1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin.
"**2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:**
"**a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;**
"**b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.**
"(...)"

(Énfasis de esta Juzgadora)

Asimismo, al tenor de lo establecido por los artículos 31 y 32 de dicha Convención de Viena, para desentrañar el alcance de lo establecido en un instrumento internacional, debe en principio acudirse al sentido literal de las palabras utilizadas por las partes contratantes al redactar dicho instrumento, debiendo en todo caso adoptar la conclusión que sea lógica con el contexto del propio tratado y acorde con el objeto o fin que se tuvo con su celebración, tal como se sostiene en la tesis del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido se reproduce a continuación:

"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XVI, Diciembre de 2002
"Página: 292
"Tesis: 2a. CLXXI/2002
"Tesis Aislada
"Materia(s): Constitucional, Común

"**TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN POR ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 1975).-** Conforme a lo dispuesto en los citados preceptos para desentrañar el alcance de lo establecido en un instrumento internacional debe acudirse a reglas precisas que en tanto no se apartan de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución General de la República vinculan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, al tenor de lo previsto en el artículo 31 de la mencionada Convención, para interpretar los actos jurídicos de la referida naturaleza como regla general debe, en principio, acudirse al sentido literal de las palabras utilizadas por las partes contratantes al redactar el respectivo documento final debiendo, en todo caso, adoptar la conclusión que sea lógica con el contexto propio del tratado y acorde con el objeto o fin que se tuvo con su celebración; es decir, debe acudirse a los métodos de interpretación literal, sistemática y teleológica. A su vez, en cuanto al contexto que debe tomarse en cuenta para realizar la interpretación sistemática, la Convención señala que aquél se integra por: a) el texto del instrumento respectivo, así como su preámbulo y anexos; y, b) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre las partes con motivo de su celebración o todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado; y, como otros elementos hermenéuticos que deben considerarse al aplicar los referidos métodos destaca: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de su interpretación; y, c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes; siendo conveniente precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para realizar la interpretación teleológica y conocer los fines que se tuvieron con la celebra-

ción de un instrumento internacional no debe acudirse, en principio, a los trabajos preparatorios de éste ni a las circunstancias que rodearon su celebración, pues de éstos el intérprete únicamente puede valerse para confirmar el resultado al que se haya arribado con base en los elementos antes narrados o bien cuando la conclusión derivada de la aplicación de éstos sea ambigua, oscura o manifiestamente absurda.

"Amparo en revisión 402/2001. Imcosa, S.A. de C.V. 16 de agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; en su ausencia hizo suyo el asunto Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rafael Coello Cetina."

De las consideraciones antes expuestas, del **artículo 7o, relativo a los "beneficios empresariales"**, se desprenden los siguientes elementos:

a) Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante (Estados Unidos de América) solamente pueden someterse a imposición en este Estado, excepto cuando la empresa realice o haya realizado su actividad en el otro Estado Contratante (México) por medio de un establecimiento permanente situado en él;

b) Si la empresa realiza o ha realizado su actividad a través de un establecimiento permanente (México), los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en este Estado donde se localiza dicho establecimiento permanente, pero sólo en la medida en que sean atribuibles a:

- este establecimiento permanente (México);

- ventas en este otro Estado (México) de bienes o mercancías de tipo idéntico o similar al de los vendidos a través de este establecimiento permanente.

c) Sin embargo, los beneficios derivados de las ventas descritas en el segundo supuesto, no serán sometidos a imposición en el otro Estado (México) si la empresa

demuestra que dichas ventas han sido realizadas por razones distintas a las de obtener un beneficio del presente Convenio.

d) Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un Estado Contratante (Estados Unidos de América) realice o ha realizado su actividad en el otro Estado Contratante (México) por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento los beneficios que éste hubiera podido obtener de ser una empresa distinta e independiente que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones.

Del **artículo 12, relativo a las "regalías"**, se desprenden los siguientes elementos:

a) Las regalías que procedan de un Estado Contratante (México) y pagadas a un residente del otro Estado Contratante (Estados Unidos de América) pueden someterse a imposición de este último Estado; **no obstante, dichas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan (México) y de acuerdo con la legislación de este Estado,** pero si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante (Estados Unidos de América), el impuesto así exigido no excederá del 10 por ciento del importe bruto de las regalías.

b) El término "regalías" significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o científica, incluidas las películas cinematográficas y otras registradas en películas o cintas magnetoscópicas u otros medios de reproducción para uso en relación con la televisión, de una patente, marca de fábrica o de comercio, dibujo o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto, u otro derecho o propiedad similar, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, **así como por el uso o la concesión de uso de un equipo** industrial, **comercial** o científico que **no constituya propiedad inmueble en los términos del artículo 6. El término**

“regalías” también incluye las ganancias obtenidas de la enajenación de cualquiera de dichos derechos o bienes que estén condicionadas a la productividad, uso o disposición de los mismos.

c) Las anteriores disposiciones no se aplican si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante (Estados Unidos de América), ejerce o ha ejercido en el otro Estado Contratante de donde proceden las regalías (México) una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en este otro Estado, o presta o ha prestado unos servicios personales independientes por medio de una base fija situada en él, y las regalías son atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija, en cuyo caso, se aplican las disposiciones del artículo 7 (Beneficios Empresariales) o del artículo 14 (Servicios Personales Independientes), según proceda.

Para esta Segunda Sección son INFUNDADOS los señalamientos de la actora resumidos en los incisos **A), B), C), D), E) y F),** en los cuales señala:

A). *Que al analizar el artículo 12 del Convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia del impuesto sobre la renta celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes incurre en el mismo error de apreciación que la Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, toda vez que del contexto de dicho artículo no queda lugar a dudas de que se refiere a bienes muebles vinculados con la propiedad intelectual e industrial expresamente referidos en el precepto;*

B). *Que mientras la concesión del uso de bienes en general otorgada mediante contratos de arrendamiento se regula y se protege por el Código Civil; la concesión del uso de bienes mediante contratos de licencia o de franquicia se regula y se protege por la Ley de la Propiedad Industrial. Que se denomina regalías a la contraprestación derivada de la concesión del uso o goce de bienes sobre*

los que se tiene un derecho intelectual o el uso de marca, pagándose sobre un porcentaje; en cambio, la renta se paga en cantidad fija o variable en función de la intensidad del uso que se dé a los bienes objeto del arrendamiento;

C). *Que el artículo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2000, excluye a las regalías del régimen de uso o goce temporal de los muebles, las cuales se incluyen en el artículo 156 de la misma ley, por estar relacionados con la franquicias, las patentes, las marcas o los inventos, sin los cuales las franquicias, patentes, marcas o inventos devendrían inútiles, siendo plenamente justificada dicha diferencia, pues quien concede una patente, franquicia o la autorización para explotar un invento, prácticamente se vincula con el éxito del negocio del licenciatario, pues por regla general no cobra como contraprestación una cantidad fija como ocurre con el simple arrendamiento de bienes, sino un porcentaje de los ingresos del negocio de quien explota la patente;*

D). *Que el arrendamiento de motores y turbinas o cualquier otro bien por residentes en el extranjero a residentes en México, se gravan conforme al artículo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se vincula con el artículo 7 del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta; sin embargo, no pueden gravarse conforme a las disposiciones del artículo 156 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta, porque las contraprestaciones obtenidas por la renta de dichos bienes no son regalías protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial, sino rentas reguladas por el Código Civil;*

E). *Que el artículo 7 del Convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia del impuesto sobre la renta celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, regula el gravamen de los beneficios empresariales, por lo que el arrendamiento de aviones en general sólo puede gravarse por el estado de residencia del arrendador;*

F). *Que no debe aplicarse al régimen de arrendamiento de bienes muebles el supuesto del artículo 156 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 12 del Convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia del impuesto sobre la renta celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, muebles cuyo uso o goce concedido al usuario están relacionados con franquicias, las patentes, las marcas o los inventos, sin los cuales tales franquicias, patentes, marcas o inventos devendrían inútiles.*

En efecto, son carentes de sustento las anteriores afirmaciones de la actora, pues del contenido del artículo 12 del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, se desprende que, cualquier cantidad pagada por el uso o la concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria artística o científica que derive de una patente, marca de fábrica, de comercio, dibujo o modelo plano, fórmula o procedimiento secreto.

Adicionalmente, el mismo tercer párrafo del artículo 12, contempla un segundo supuesto relativo a la definición de regalías y se establece que, también **debe entenderse como tal el pago realizado por el uso o la concesión de uso de un equipo industrial comercial o científico.**

Es el caso de la hoy actora, Aero California. S.A. de C.V., es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas, cuyo objeto social es: ***El establecimiento y explotación de servicios públicos de transportación de pasajeros****, correo express y carga dentro del territorio de la República Mexicana e internacional, hacia o desde el extranjero,* ***principalmente en materia de transportación aérea****, marítima o terrestre,* como se desprende de la copia certificada del primer testimonio de la escritura pública catorce mil doscientos setenta y cinco, otorgada el diecisiete de enero de mil novecientos noventa, ante la fe del Licenciado Héctor Castro Castro, Notario Público número siete del Estado y del Patrimonio Inmueble Federal, con ejercicio en los Municipios de la Paz, Los Cabos, Comundú y Mulegé y con residen-

cia en la Capital del Estado (folios 038 a 041 del expediente en que se actúa), así como, de la copia certificada del primer testimonio de la escritura veintinueve mil cuatrocientos setenta y ocho, otorgada el siete de junio de mil novecientos noventa y tres, ante la fe del Licenciado Alfonso Flores García Moreno, Notario Público número cinco del Distrito de Texcoco, con residencia en Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de México. El objeto social antes descrito, se reitera por la actora en los puntos números 1 de los capítulos de hechos, tanto del escrito en el que se contiene el recurso de revocación, antecedente de la resolución impugnada (folio 092 del expediente en que se actúa), así como del escrito inicial de demanda (folio 001 del expediente en que se actúa).

Asimismo, de las constancias de autos se aprecia que la actora en el ejercicio de su objeto social celebró diversos contratos para la renta de aviones, cuya información se resume en el siguiente cuadro:

FECHA DEL CONTRATO	AVIÓN	ARRENDADOR	ARRENDATARIO	ENTREGA DEL AVIÓN	VIGENCIA DEL CONTRATO	FOLIOS
15 de junio de 1998	Avión usado DC-9-32	INTERGLOBAL, INC.	AERO CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	San José Costa Rica 17 de julio 1998	72 meses consecutivos y subsecuentes a partir de la entrega del avión	355 a 397
15 de julio de 1994	Dos aviones usados Douglas DC-9-32	INTERGLOBAL, INC.	AERO CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	Smyrna, Tennessee 29 de julio de 1994	24 meses consecutivos y subsecuentes a partir de la entrega del avión	398 a 487
23 de junio de 1995	Avión usado Macdonnell Douglas DC-9-30	PLM EQUIPMENT GROWTH FUND VII	INTERGLOBAL, INC. AERO CALIFORNIA, S.A. DE C.V. TIENE EL CARÁCTER DE SUBARRENDATARIO, quien arrienda el avión conforme a un contrato de arrendamiento de avión de 20 de junio de 1995	San José Costa Rica 01 de junio de 1995	36 consecutivos y a partir de la entrega del avión	488 a 610
01 de junio de 1995	Avión usado DC-9-14	INTERGLOBAL, INC.	AERO CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	San José Costa Rica 01 de junio de 1995	36 meses consecutivos a partir de la entrega del avión	613 a 699
09 de agosto de 1995	Avión usado DC-9-30	JTFLEET AIRCRAFT II, L.P.	INTERGLOBAL, INC. AERO CALIFORNIA, S.A. DE C.V. TIENE EL CARÁCTER DE SUBARRENDATARIO, quien arrienda el avión conforme a un contrato de arrendamiento de avión de 01 de agosto de 1995	San José Costa Rica agosto 1995	36 meses consecutivos completo a partir de la entrega del avión	765 a 881
25 de julio de 1995	Avión usado DC-9-32	PLM EQUIPMENT GROWTH FUND VII	INTERGLOBAL, INC. AERO CALIFORNIA, S.A. DE C.V. TIENE EL CARÁCTER DE SUBARRENDATARIO, quien arrienda y opera el avión conforme a un contrato de arrendamiento de avión de marzo de 1995	La Paz Baja California Mayo de 1995	36 meses consecutivos y subsecuentes a partir de la entrega del avión	882 A 999

FECHA DEL CONTRATO	AVIÓN	SUBARRENDADOR	SUBARRENDATARIO	ENTREGA DEL AVIÓN	VIGENCIA DEL CONTRATO	FOLIOS
27 de diciembre de 1996	Avión DC-9-32	NTERGLOBAL, INC	AERO CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	Estado de California	91 meses a partir de la entrega del avión	1001 a 1066

Por lo anterior, para los Magistrados integrantes de esta Segunda Sección, considerando que el otorgamiento del uso o goce temporal de los aviones y turbinas se realizó con fines comerciales, atento a que la actora tiene como objeto social el aerotransporte de personas mediante el pago de un precio cierto, indudablemente realiza una actividad comercial, por tanto, los pagos por concepto de contraprestación se rigen por lo dispuesto en el artículo 12 del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.

En este contexto, queda claro lo infundado de los argumentos de la actora, puesto que no se trata solamente de una simple renta, sino del pago por uso de equipo específicamente encaminado a la realización de actividades comerciales.

En este orden de ideas, es de concluir que el uso y aprovechamiento de los bienes ya descritos, sí califican como regalía, al tenor del contenido del artículo 12 del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.

En efecto, es importante señalar que el artículo 12 del Convenio cuando define a las regalías lo hace considerando dos supuestos distintos, a saber:

a) El pago por el uso o la concesión de un derecho de autor o de una patente, marca de fábrica, dibujo o modelo plano o fórmula, o algún procedimiento suscrito, y

b) Cualquier pago que se haga por el uso o la concesión de uso de un equipo industrial comercial o científico.

De esta manera, son infundados los señalamientos de la actora, debido a que los pagos que realizó la actora constituyen regalías, lo cual hace colegir que si la empresa renta aviones, turbinas, su giro principal es el aerotransporte de personas y bienes, indudablemente realiza actividades comerciales.

Aunado a ello, se insiste, el uso o concesión de aviones y turbinas y el pago correspondiente del arrendatario al arrendador de dichos bienes en el extranjero, implica necesariamente el pago para la realización de actos de comercio, porque la arrendataria se dedica precisamente al aerotransporte de personas, y ello sólo lo puede realizar con aviones que a su vez son propulsados por turbinas, por esa razón los pagos relativos desde luego califican como regalías a la luz del artículo 12 del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.

Asimismo, son inoperantes los señalamientos de la actora cuando indica que el artículo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2000 excluye las regalías del régimen de uso o goce temporal de los muebles, las cuales se incluyen en el artículo 156 de la misma ley por estar relacionadas con las franquicias, las patentes, las marcas o los inventos.

En efecto, son inoperantes dichos argumentos en tanto que no se centran en desvirtuar el punto central que sostiene la autoridad demandante en el sentido de que la concesión del uso comercial es una regalía acorde con lo que establece el artículo 12 y del Convenio para evitar la doble tributación con los Estados Unidos, conjuntamente con la reserva expresa que nuestro país realizó al Apartado 2o. del artículo 12 del Modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para seguir considerando como regalías a los pagos por uso de equipo

como el que nos ocupa, por lo que deberá aplicarse la tasa que en su caso establezca el Convenio celebrado entre México y los Estados Unidos de América.

Esto es así, porque como ya se indicó, el Convenio citado, en nuestra legislación, guarda una posición de preeminencia sobre todas las demás disposiciones, exceptuada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la norma fundamental, por lo cual se deberá atender, como ya se dijo, a lo que se establece en el Convenio en comento.

De igual forma, para esta Segunda Sección son INFUNDADOS los señalamientos de la actora resumidos en el incisos **G),** cuando indica que, *conforme a los comentarios al Convenio Modelo de la OCDE formulados por su Comité Fiscal, para conocer las limitaciones a la potestad tributaria del Estado Mexicano impuestas por el tratado con los Estados Unidos de América en cuando al gravamen de los ingresos por renta de aviones vacíos por las líneas aéreas debe acudirse a lo dispuesto en su artículo 7, Beneficios Empresariales.*

Son INFUNDADOS los anteriores señalamientos de la actora, atento a que, para la interpretación del Convenio en comento se debe acudir a los Comentarios del Modelo de Convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que precisamente tienen como fin realizar una interpretación adecuada de las disposiciones existentes en el propio Convenio y su aplicación a los supuestos determinados.

En efecto, el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, tiene como propósito eliminar la doble imposición tributaria y evitar la evasión fiscal entre los Estados Unidos de Norte América y México, en materia del impuesto sobre la renta, el cual se pactó conforme al Modelo elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por lo que al ser un instrumento formulado y aceptado, entre otros, por los países referidos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 31 de la

Convención de Viena, dichos comentarios deben servir para interpretar el Convenio que nos ocupa.

Además de que los países miembros han admitido los Comentarios a las disposiciones del Modelo de la OCDE como una verdadera guía para la aplicación e interpretación de esas disposiciones, los mismos deben ser atendidos como fuente privilegiada para la interpretación de los acuerdos celebrados por México, a través de los Tratados para evitar la Doble Tributación e Impedir la Evasión Fiscal, ya que son documentos que integran la base para la conclusión de los acuerdos bilaterales en materia fiscal internacional, puesto que confirman el sentido corriente y alcance en los términos a utilizar entre las partes, por lo que forman parte del contexto y califican el objeto y el fin del tratado, criterio que se ha recogido en la regla 2.1.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de marzo de 2000, en la que se establece:

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA PARA 2000

"Regla 2.1.13. Para la interpretación de los tratados para evitar la doble tributación celebrados en México, **serán aplicables los comentarios del modelo de convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal, a que hace referencia la recomendación adaptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico**, el 21 de septiembre de 1995, o aquella sustituya, en la medida en que tales comentarios sean congruentes con las disposiciones de los tratados celebrados por México (...)"

(Énfasis de esta Juzgadora)

Robustece el anterior criterio, los precedentes emitidos por esta Segunda Sección, cuyo rubro y contenido se reproducen a continuación:

"Precedente
"Época: Cuarta
"Instancia: Segunda Sección
"Fuente: R.T.F.F. Año II. No. 17. Diciembre 1999.
"Tesis: IV-P-2aS-183
"Página: 168

"**COMERCIO EXTERIOR**

"**DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN DE LOS COMENTARIOS AL MODELO DE LA OCDE, CONFORME A LA CONVENCIÓN DE VIENA.-** La Convención de Viena establece reglas para la interpretación de los tratados internacionales, la cual al haberse suscrito y ratificado por México, se convierte en derecho interno mexicano y consecuentemente, son obligatorias para el juzgador. Por su parte, el artículo 31 de dicha Convención señala, entre otras reglas, que un tratado debe interpretarse de buena fe, en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin; el contexto comprende, entre otros elementos: a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de su celebración, b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. Así, en atención al citado precepto, se acepta como uno de los fines de los convenios celebrados entre los gobiernos de los distintos países para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y el capital, precisamente el de evitar que simultáneamente, dos o más países impongan ese tipo de gravámenes a una persona por un mismo hecho imponible. En virtud de que dichos convenios se pactaron conforme al modelo elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los mismos son fuente privilegiada para la interpretación de los tratados referidos y no una norma obligatoria, siempre que los Gobiernos de los residentes en los países, sujetos a controversia, hayan participado en la elaboración de ese instrumento sin formular reserva alguna respecto del comentario de que se trate o del precepto comentado. En consecuencia, si los Estados Unidos de

Norte América y México aceptaron el Modelo citado, los comentarios contenidos en él, deben ser atendidos como fuente privilegiada para la interpretación del Tratado celebrado entre ellos para Evitar la Doble Tributación e Impedir la Evasión Fiscal. Lo anterior, es sin perjuicio de que en los casos en que el particular se beneficie de la aplicación de estos comentarios y siempre que se mantengan las disposiciones generales vigentes relacionadas con dicha obligatoriedad, se consideren obligatorios en los términos del precedente cuya voz dice: DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS COMENTARIOS AL MODELO DE LA OCDE. (21)

"Juicio No. 12666/98-11-06-3/99-S2-06-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 7 de septiembre de 1999, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Susana Ruiz González.
"(Tesis aprobada en sesión de 7 de septiembre de 1999)"

"Precedente
"Época: Tercera
"Instancia: Segunda Sección
"Fuente: R.T.F.F. Año XI. No. 126. Junio 1998.
"Tesis: III-PS-II-251
"Página: 302

"**DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS COMENTARIOS AL MODELO DE LA OCDE.-** El artículo 35 del Código Fiscal de la Federación permite a los funcionarios fiscales facultados, emitir criterios para la aplicación de las disposiciones fiscales; los cuales, si son publicados en el Diario Oficial de la Federación, derivan derechos para los particulares. Así, tenemos que si se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que los Comentarios al Modelo de la OCDE para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal, son obligatorios para las autoridades fiscales en la interpretación de los tratados celebrados por México, siempre que sean

congruentes con dichas disposiciones y correspondan a las explicaciones técnicas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, éstos podrán ser invocados por los particulares, para la debida interpretación y aplicación de los tratados para evitar la doble imposición en los que México sea parte. (22)

"Juicio de Nulidad No. 100(20)33/97/20328/96.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 13 de enero de 1998, por unanimidad de 4 votos con la ponencia modificada.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Encargado del Engrose: Magistrado Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Susana Ruíz González.
"(Tesis aprobada en sesión de 24 de febrero de 1998)"

Ahora bien, en el referido Modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su artículo 12, que se refiere a los de los cánones (o regalías) establece en el Apartado 2, en el punto 9 lo siguiente:

"9. Mientras la definición del artículo 'cánones' en el Apartado 2° del artículo 12 del proyecto del Convenio 63 y del modelo de Convenio de 1977, comprendió las remuneraciones 'por el uso con la concesión de un equipo industrial, comercial o científico', la imposición de dichas remuneraciones en esta definición ha sido suprimida, habida cuenta de la naturaleza de las rentas procedentes de la sesión de equipos industriales comerciales o científicos, incluyendo las rentas de la sesión de contenedores, el comité de asuntos fiscales ha decidido excluir estas rentas de la definición de cánones y en consecuencia del campo de aplicación del artículo 12, **a fin de asegurar que dichas rentas estén comprendidas dentro de las disposiciones referentes a la imposición de los beneficios a las empresas, comprendidos en los artículos 5 y 7**."

Así pues, es claro que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico **consideró que el pago por el uso de un equipo comercial dejaba de ser considerado como un canon, y en lo sucesivo tendría que ser conceptualizado**

como un beneficio empresarial, acorde con los artículos 5 y 7 de los comentarios del referido modelo de la propia OCDE.

Sin embargo, la existencia de dicho artículo no ocasiona que al particular le asista la razón en sus argumentos, y que deba considerarse como beneficio empresarial el pago que realizó, pues en la celebración de Tratados Internacionales los países que los suscriben pueden realizar reservas, es decir, excepciones de no sujeción a lo que el artículo o parte del artículo del Convenio menciona.

Es el caso que, **para los efectos de los beneficios empresariales antes citados, específica y categóricamente México realizó una reserva (no aplicación de una parte del artículo 12),** en el sentido siguiente:

> "Artículo 12.
> "(...)
> "Reservas del artículo
> "(...)
> "Apartado 2 (...)
> "41. GRECIA, ITALIA y **MÉXICO se reservan el derecho a continuar incluyendo los rendimientos derivados del arrendamiento de equipos industriales, comerciales o científicos, y contenedores, en la definición de (cánones) contenida en el Apartado 2o del artículo 12 del Convenio modelo de 1977.**"

De acuerdo a lo anterior, si bien, en el artículo 12 Apartado 2 del Modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se dejó de considerar como un canon o regalía el pago por el uso de equipos industriales o comerciales, **lo cierto es que esa parte del artículo no es aplicable para la República Mexicana, en virtud de que de manera tajante a través de una reserva nuestro país estableció que continuaría incluyendo a dichos pagos dentro de la definición de canon.**

En este orden de ideas, aun cuando el Modelo del Convenio de la OCDE y sus Comentarios mencione que los pagos por arrendamiento de uso comercial no son regalías, no es factible, dada la reserva que realizó México, que se considere como beneficio empresarial, porque la reserva tiene el efecto jurídico de no darle vigencia en territorio nacional al apartado respecto del cual la misma se realizó.

De igual forma, para esta Segunda Sección son INFUNDADOS los señalamientos de la actora resumidos en los incisos **H), I), J), K) y L),** cuando indica:

H). *Que en la declaración del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la aceptación de sus obligaciones como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio de 1994, no aparece publicada la reserva de que México gravaría los cánones (regalías) en la fuente y que México se reserva el derecho de continuar incluyendo los rendimientos derivados del arrendamiento de equipos industriales, comerciales o científicos y contenedores en la definición de cánones (regalías), por lo cual dicha reserva carece de valor legal alguno y no obligan a la actora a su observancia;*

I). *Mediante las denominadas reservas, un Estado firma, ratifica o se adhiere a un tratado, formula aclaraciones unilaterales con el fin de excluir o de modificar los efectos o consecuencias jurídicas de las disposiciones del tratado; sin embargo, la formulación de reservas no es admisible en la celebración de tratados internacionales de carácter bilateral por implicar una retractación a lo acordado por sus negociadores y aceptado por los órganos que lo suscribieron, la cual se incluye con posterioridad por el órgano facultado para aprobar el tratado;*

J). *Que las reservas expresadas por México en su Declaración de aceptación de sus obligaciones como miembro de la OCDE en cuanto al Modelo de Convenio, son inaplicables al tratado con los Estados Unidos de América, porque México y*

los Estados Unidos de América no las acordaron en el momento de celebrar su tratado para evitar la doble tributación, no habiendo sido conocidas por el Senado al momento de manifestar su aceptación, por tanto, resulta inaceptable jurídicamente asignar validez a las reservas y observaciones desconocidas por el órgano competente para aprobar la norma internacional;

K). *Que en el Modelo de Convenio de la OCDE se adoptó el principio de que sólo estaba facultado para gravar las regalías el Estado de residencia del beneficiario efectivo del ingreso por concepto de regalías; al respecto México se reservó el derecho de gravar las regalías en la fuente de su generación, es decir, no daría atención alguna a lo recomendado en el Modelo de Convención; sin embargo, en el tratado con los Estados Unidos de América no se adoptó el texto propuesto en el Modelo de Convención;*

L). *Que en el Modelo de Convenio OCDE no se incluyó una definición del concepto "fuente de la cual provinieran las mercancías", por ello México formuló una reserva a efecto de complementar lo que consideró una omisión en el modelo, por tanto, en el caso del tratado con los Estados Unidos de América, sería inoperante la reserva porque en el artículo 12, párrafo 6, los dos Estados Contratantes sí definieron el concepto "fuente de procedencia de las regalías".*

En efecto, son carentes de sustento dichos señalamientos, pues como ya se indicó anteriormente, el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta tiene como propósito eliminar la doble imposición tributaria y evitar la evasión fiscal entre los Estados Unidos de Norte América y México, en materia del impuesto sobre la renta.

Dicho Convenio se pactó conforme al Modelo elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En dicha elaboración participaron los Estados Unidos de América, adhiriéndose más tarde México a dicha Organización.

Cabe apuntar que, las reservas realizadas por México a dicho modelo se realizaron en la etapa de negociación del Convenio, de tal forma que el documento presentado al Senado de la República para su aprobación ya contenía las disposiciones en los términos en que México había pactado las diversas reservas, mismo que fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 12 de julio de 1993, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de agosto de 1993, y promulgándose en el Diario Oficial de la Federación el 04 de febrero de 1994, en cuya publicación oficial aparece la reserva al artículo 12, por la cual México decidió **continuar incluyendo los rendimientos derivados del arrendamiento de equipos industriales, comerciales o científicos, y contenedores, en la definición de (cánones) contenida en el Apartado 2° del artículo 12 del Convenio modelo de 1977**, en los términos siguientes:

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

"**ARTÍCULO 12**

"**REGALÍAS**

"1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.

"2. Sin embargo, dichas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no excederá del 10 por ciento del importe bruto de las regalías.

"3. El término 'regalías' empleado en el presente Convenio significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o científica, incluidas las películas cinematográficas y otras registradas en películas o cintas magnetoscópicas u otros medios de reproducción para uso en relación con la televisión, de una patente, marca de fábrica o de comercio, dibujo o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto, u otro derecho o propiedad similar, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, **así como por el uso o la concesión de uso de un equipo industrial, comercial o científico que no constituya propiedad inmueble en los términos del Artículo 6. El término 'regalías' también incluye las ganancias obtenidas de la enajenación de cualquiera de dichos derechos o bienes que estén condicionadas a la productividad, uso o disposición de los mismos.**

"4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, ejerce o ha ejercido en el otro Estado Contratante de donde proceden las regalías una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en este otro Estado, o presta o ha prestado unos servicios personales independientes por medio de una base fija situada en él, y las regalías son atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija. En estos casos se aplican las disposiciones del Artículo 7 (Beneficios Empresariales) o del Artículo 14 (Servicios Personales Independientes), según proceda.

"5. Cuando existan relaciones especiales entre el deudor y el beneficiario efectivo de las regalías o de las que uno y otro mantengan con terceros y el importe de las regalías pagadas, por cualquier motivo, exceda del que hubieran convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplican más que a este último importe. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

"6. Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando quien paga las regalías es el propio Estado, una de sus subdivisiones políticas, una de sus entidades locales o un residente de este Estado. Sin embargo:
"a) cuando la persona que paga las regalías, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con el cual se contrae la obligación de pagar regalías, y dichas regalías son soportadas por el establecimiento permanente o base fija, dichas regalías se consideran provenientes del Estado Contratante en el que está situado el establecimiento permanente o base fija; o
"b) cuando el inciso a) no permita considerar las regalías como provenientes de alguno de los Estados Contratantes y las regalías se relacionan con el uso, o la concesión de uso de cualquier propiedad o derecho mencionado en el párrafo 3 en uno de los Estados Contratantes, las regalías se consideran provenientes de este Estado.

(Énfasis de esta Juzgadora)

En los términos del artículo antes reproducido, define a las regalías considerando dos supuestos distintos, a saber:

a) El pago por el uso o la concesión de un derecho de autor o de una patente, marca de fábrica, dibujo o modelo plano o fórmula, o algún procedimiento suscrito, y

b) Cualquier pago que se haga por el uso o la concesión de uso de un equipo industrial comercial o científico.

En esos términos, es infundado el señalamiento de la actora en el sentido de que la reserva por la cual México decidió **continuar incluyendo los rendimientos derivados del arrendamiento de equipos industriales, comerciales o científicos, y contenedores, en la definición de (cánones),** se incluyó con posterioridad a

la aprobación del Convenio y sin que el Senado de la República hubiera tenido conocimiento de la misma.

Los Magistrados que integran esta Segunda Sección también consideran INFUNDADOS los señalamientos de la actora resumidos en el inciso **M)**, cuando indica que, *en abril de 2000, el Comité Fiscal de la OCDE emitió un reporte intitulado* ***El gravamen de los ingresos derivados del arrendamiento de equipo industrial, comercial o científico, en el cual describe la teleología del artículo 12 del Modelo de Convenio y recomienda que en los tratados bilaterales no debe incluirse en un artículo aplicable a las regalías****; asimismo, la recomendación de no incluir el arrendamiento a ciertos equipos bajo las limitaciones dispuestas para las regalías en los tratados, excepto cuando los equipos se vinculen con la patente; en esos términos, si conforme a lo dispuesto en la regla 2.1.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, la aplicación del comentario es obligatoria para la autoridad fiscal, esto es, que sólo puede considerar como regalías para efectos del tratado con los Estados Unidos de América, la concesión del uso o goce de equipos industriales, comerciales o científicos, cuando estén vinculados con las marcas, las patentes, las licencias o los inventos que conceda a residentes en México;*

Es infundado el señalamiento de la actora, considerando que, si bien, los Comentarios a las disposiciones del Modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico constituyen una guía para la aplicación e interpretación de esas disposiciones, por tanto, los mismos deben ser atendidos como fuente privilegiada para la interpretación de los acuerdos celebrados por México, a través de los Tratados para evitar la Doble Tributación e Impedir la Evasión Fiscal, tal como se ha recogido en la regla 2.1.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, y en los precedentes dictados por esta Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en caso de que el Comité Fiscal de dicha Organización hubiera aprobado el reporte intitulado ***El gravamen de los ingresos derivados del arrendamiento de equipo industrial, comercial o científico, en el cual describe la teleología del artículo 12 del Modelo de Convenio y recomienda***

que en los tratados bilaterales no debe incluirse en un artículo aplicable a las regalías, al no haber formado parte del marco de las negociaciones del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y además no haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, no puede ser considerado para la debida interpretación del Convenio en mención.

De igual forma, para esta Segunda Sección son INFUNDADOS los señalamientos de la actora resumidos en el inciso **N)**, cuando indica que, *no tenía obligación de hacer la retención al residente en los Estados Unidos de América por la renta de las turbinas y aviones, y en ese sentido, los pagos efectuados por la renta de los mismos, son perfectamente deducibles de conformidad con el artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal 2000, ya que son estrictamente indispensables para los fines de su actividad económica.*

Son infundados los señalamientos de la actora, pues es claro que no son deducibles los pagos que realizó la actora, porque al tratarse del pago de regalías que benefician a un residente en el extranjero, en este caso en los Estados Unidos de América, debió realizar las retenciones pertinentes de impuesto sobre la renta, lo que no realizó la actora.

En efecto, aun cuando se trate de un gasto estrictamente indispensable y por ello deducible, no debe perderse de vista que el artículo 24, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta precisa que **cuando haya pagos al extranjero se debe cumplir con las obligaciones en materia de retención.**

El artículo citado establece a la letra lo siguiente:

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

"Artículo 24.- Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:
"(...)
"V. **Que se cumplan las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros** o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, sólo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del artículo 58 de esta Ley.
"(...)"
(Énfasis de esta Juzgadora)

Esto es, aun cuando pudiera llegar a considerarse que los pagos efectuados por la actora por el uso de equipo comercial son necesarios para la realización del giro comercial de la empresa, el simple pago no hace que dicho importe sea deducible, pues como ya se indicó, se está en presencia de una regalía de conformidad con el artículo 12 del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta, y en la medida en que se realiza la retención y entero del impuesto correspondiente al pago del proveedor extranjero, es deducible para el contribuyente que efectúa el pago.

Respecto a que el pago de regalías evidentemente implica un ingreso para los residentes en el extranjero conviene tener presente lo que establecían los artículos 144 y 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en 2000, que constituye el ejercicio liquidado:

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

"Artículo 144.- **Están obligados al pago del impuesto sobre la renta conforme a este Título los residentes en el extranjero que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, aun cuando hayan sido determinados presuntivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los artículos 64, 64-A, 65 y 66, provenientes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente o base fija en el país o cuando teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a éstos. Se considera que forman parte de los ingresos mencionados en este párrafo, los pagos efectuados con motivo de los actos o actividades a que se refiere este Título, que beneficien al residente en el extranjero, inclusive cuando le eviten una erogación.**

"Cuando la persona que haga alguno de los pagos a que se refiere este Título cubra por cuenta del contribuyente el impuesto que a éste corresponda, el importe de dicho impuesto se considerará ingreso de los comprendidos en este Título.

"Para los efectos de este Título, no se considerará ingreso del residente en el extranjero el impuesto al valor agregado que traslade en los términos de Ley.

"Cuando en los términos de este Título esté previsto que el impuesto se pague mediante retención, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido en la fecha de la exigibilidad o al momento en que efectúe el pago, lo que suceda primero. Tratándose de contraprestaciones efectuadas en moneda extranjera, el impuesto se enterará haciendo la conversión a moneda nacional en el momento en que sea exigible la contraprestación o se pague. Para los efectos de este Título, se entiende por pago el acto por virtud del cual el deudor cumple o extingue bajo cualquier título alguna obligación.

"El impuesto que corresponda pagar en los términos de este Título se considerará como definitivo y se enterará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas.

"No se estará obligado a efectuar el pago del impuesto en los términos de este Título cuando se trate de ingresos por concepto de intereses y ganancias de capital, que deriven de las inversiones efectuadas por fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en los términos de la legislación del país de que se trate, siempre que dichos fondos sean los beneficiarios efectivos de tales ingresos y se cumpla con los siguientes requisitos:
"I. Dichos ingresos estén exentos del impuesto sobre la renta en ese país.
"II. Se inscriban para tal efecto en el Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Extranjero. La inscripción en este Registro se renovará de conformidad con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"III. Que en el país de que se trate, exista reciprocidad en materia de exención por los ingresos que perciban los fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en México."

"Artículo 149.- **En los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de muebles, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional, cuando los muebles destinados a actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y de pesca, se utilicen en el país. Se presume salvo prueba en contrario, que los muebles se destinan a estas actividades y se utilizan en el país, cuando el que usa o goza el bien es residente en México o residente en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional. En el caso de que los muebles se destinen a actividades distintas de las anteriores, cuando en el país se haga la entrega material de los muebles.**
"El impuesto será del 21% sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención las personas que hagan los pagos. Tratándose de contenedores, así como de aviones y embarcaciones que tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente, el im-

puesto será del 5% siempre que dichos bienes sean utilizados directamente por el arrendatario en la transportación de pasajeros o bienes.
"Lo dispuesto en este precepto no es aplicable a los bienes muebles a que se refieren los artículos 155 y 156 de esta Ley."

De conformidad con la transcripción anterior, evidentemente el ingreso que percibió una empresa en Estados Unidos que arrendó las turbinas y los aviones, indudablemente le benefició, puesto que recibió la cantidad bruta que se pactó para esos efectos, pero de acuerdo con el artículo 24, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta debió existir una retención por parte de la empresa mexicana del impuesto que generó la ganancia derivada del arrendamiento a la empresa en los Estados Unidos.

Ello porque como se ha venido sosteniendo a lo largo de la presente sentencia, dichos conceptos califican como regalías y no como beneficios empresariales.

Por último, esta Juzgadora advierte que en el capítulo de pruebas de la demanda, la actora ofrece las siguientes documentales 033 a 035 del expediente en que se actúa:

CAPÍTULO DE PRUEBAS

"(...)

"7.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada notarialmente del oficio número 330-SAT-IV-4-B-7250/03, de fecha 28 de mayo de 2003, emitido por la Administración de Recursos y Procedimientos Administrativos, de la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, mediante el cual se resuelve el Recurso de Revocación RL 37/03, señalándose en la hoja 9 y 10 lo siguiente:
"(...)

"8.- Copia certificada notarialmente de la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-R3-L19-01-2232 de fecha 16 de marzo de 2000, en donde la Administración Local Jurídica de Ingresos de Guadalupe, resuelve lo siguiente:
"(...)
"9.- Documentales Privadas.- Consistente en copias certificadas notarialmente del escrito donde se solicita la devolución del pago de lo indebido correspondiente a los ejercicios 1994, 1996 y 1997, recibido con folios que van del 000018 al 000029, así como copia certificada notarialmente del escrito donde se dan los fundamentos por el cual se considera que se hizo un pago de lo indebido.
"10.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada notarialmente del escrito complementario al aviso de devolución (forma 32) recibido el día 01 de marzo de 2000, mediante folio número 051981.
"11.- Documentales Privadas.- Consistente en copias certificadas notarialmente del oficio número 330-SAT-III-sda1-2000-5209, de fecha 30 de mayo de 2000, emitido por el Subadministrador de Devoluciones y Autorizaciones '1', en suplencia por ausencia del C. Administrador General de Grandes Contribuyentes, de la C. Administradora Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes, así como la Administradora de Servicios.
"12.- Documentales Privadas.- Consistente en copias certificadas notarialmente del oficio número 330-SAT-III-SDA1-2000-5210, de fecha 30 de mayo de 2000, emitido por el Subadministrador de Devoluciones y Autorizaciones '1', en suplencia por ausencia del C. Administrador General de Grandes Contribuyentes, de la C. Administradora Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes, así como la Administradora de Servicios.
"13.- Documentales Privadas.- Consistente en copias certificadas notarialmente del oficio número 330-SAT-III-SDA1-2000-5211, de fecha 30 de mayo de 2000, emitido por el Subadministrador de Devoluciones y Autorizaciones '1', en suplencia por ausencia del C. Administrador General de Grandes Contribuyentes, de la C. Administradora Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes, así como la Administradora de Servicios.

"14.- Documentales Privadas.- Consistente en copias certificadas notarialmente del oficio número 330-SAT-III-SDA1-2000-5212, de fecha 30 de mayo de 2000, emitido por el Subadministrador de Devoluciones y Autorizaciones '1', en suplencia por ausencia del C. Administrador General de Grandes Contribuyentes, de la C. Administradora Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes, así como la Administradora de Servicios."

(Reproducción literal y énfasis de esta Juzgadora)

De la revisión efectuada por esta Juzgadora a los documentos antes descritos, se advierte que los mismos no tienen relación alguna con:

a) La orden RIM960091/01, para práctica de la visita domiciliaria a la hoy actora, contenida en el oficio 330-SAT-VIII-6699 de 16 de mayo de 2001, emitida por el Administrador Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos;

b) La resolución contenida en el oficio 330-SAT-VIII-12026, emitida el 12 de mayo de 2006 por la Administradora de Auditoría a Grandes Contribuyentes Diversos "2", por suplencia del Administrador Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, en la cual se determina un crédito fiscal a cargo de la hoy actora en cantidad total de $304'563,798.57, que en el presente juicio tiene el carácter de resolución recurrida.

c) El recurso de revocación intentado por la actora en contra de la resolución descrita en el punto anterior, ni con la resolución contenida en el oficio 330-SAT-IV-4-B-2169/04 de 13 de julio de 2004, emitida por el titular de la Administración de Recursos y Procedimientos Administrativos, de la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, que resolvió el recurso de revocación, y que constituye la resolución impugnada en el presente juicio.

En efecto, del análisis practicado a dichos documentos, se aprecia que los mismos están relacionados a la solicitud y trámite de devolución del impuesto sobre la renta por pagos indebidos solicitados por la hoy actora respecto de los ejercicios 1994, 1995, 1996 y 1997, por tanto, son ajenos a la litis del concepto de impugnación en estudio.

Por otra parte, la actora no relaciona ninguno de dichos documentos con el concepto de impugnación en estudio.

Atento a que todo medio de convicción que se ofrezca y desahogue en el proceso debe guardar relación con algún punto controvertido, no es dable jurídicamente aportar pruebas para acreditar aspectos que no son tema de discusión entre las partes, por tanto, si las documentales no guardan ninguna relación con la litis planteada por las partes, deben desestimarse por inconducentes, debido a que no tuvieron como propósito probar los hechos constitutivos de su acción planteada por la actora, tal como lo ordena el artículo 230 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Apoya el anterior criterio, la tesis dictada por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido se reproducen a continuación:

"Séptima Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"205-216 Sexta Parte
"Página: 397
"Tesis Aislada
"Materia(s): Administrativa, Administrativa

"**PRUEBAS, OBLIGADA RELACIÓN CON LA LITIS.-** El órgano jurisdiccional sólo puede legalmente valorar las pruebas que tengan relación con la litis, según el principio establecido por el artículo 79 del Código Federal de

Procedimientos Civiles, supletorio del procedimiento contencioso en términos del artículo 197 del Código Fiscal de la Federación. Esto es, el juzgador no incurre en ilegal falta de valoración, cuando las pruebas invocadas no tienen relación con los hechos controvertidos.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 1755/85. Motores Fraccionales, S. A. 23 de enero de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: J. S. Eduardo Aguilar Cota. Secretario: Maximiliano Toral Pérez."

Por otra parte, es criterio del Pleno de esta Sala Superior que, la emisión de una sentencia por la Sala Superior de este Tribunal Federal constituye un hecho notorio para los Magistrados que la integraron e intervinieron en la discusión y votación de la misma en la sesión relativa, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, el cual se encuentra contenido en la jurisprudencia cuyo rubro y contenido se reproducen a continuación:

"Jurisprudencia
"Quinta Época.
"Instancia: Pleno
"R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año IV. No. 46. Octubre 2004.
"Tesis: V-J-SS-52
"Página: 128

"**HECHO NOTORIO.- LO CONSTITUYE PARA LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA UNA SENTENCIA EMITIDA POR ELLA.-** La emisión de una sentencia por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, constituye un hecho notorio para los Magistrados que la integraron e intervinieron en la discusión y votación de la misma en la sesión relativa, el cual

puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. (17)
"(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/29/2004)"

En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, en la tesis aislada cuyo contenido y alcance es el siguiente:

"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, Agosto de 2002
"Tesis: V.3o.15 A
"Página: 1301
"Materia: Administrativa
"Tesis aislada

"**HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA EL TRIBUNAL FEDERAL DF JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN LOS JUICIOS QUE ANTE ESA AUTORIDAD SE TRAMITEN Y TENGA CONOCIMIENTO POR RAZÓN DE SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL**.- Se considera que constituyen hechos notorios para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aquellos de los cuales tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional, pues al ser los Magistrados integrantes del citado órgano colegiado quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria, en términos del primer párrafo del artículo 237 de! Código Fiscal de la Federación, pueden invocar e introducir el criterio ahí sustentado en diverso juicio fiscal, puesto que si en un justiciable conexo a! de que se trate ya se emitió resolución, válidamente puede hacerse notar ese hecho y apoyarse en él, aun cuando las partes no lo hubiesen mencionado, bastando que se tenga a la vista dicha resolución para invocarla, pues es una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercer para

resolver una contienda jurisdiccional, máxime si una de las partes lo señaló como prueba, pues en ese caso menos aún puede soslayarse su examen.
"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

"Amparo directo 702/2001. Francisco Juan Jesús Luken Aguilar. lo. de marzo de 2002. unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Aquiles Gasca. Secretario: Miguel Ángel Medina Montes."

En esos términos, los Magistrados de esta Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa advierten que mediante sentencia definitiva dictada el 15 de noviembre de 2005, esta misma Segunda Sección **declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio de lesividad 21398/04-17-08-3/507/O5-S2-08-04,** promovido el 15 de julio de 2004 por el Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, en representación de la **SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,** quien demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 330-SAT-IV-4-B-7250/03 de 28 de mayo de 2003, emitida por el Subadministrador de Recursos y Procedimientos Administrativos, mediante el cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la contribuyente AERO CALIFORNIA, S.A. DE C.V., mediante el cual se determinó anular el diverso oficio 330-SAT-VIII-25197 de 29 de noviembre de 2002, que determinó un crédito fiscal en cantidad de $126'663,257.17, por concepto de impuesto sobre la renta, recargos y multas, por el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 1998.

La sentencia antes descrita fue confirmada en la ejecutoria de 17 de octubre de 2006, dictada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo D.A. 91/2006, que negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada por la demandada en dicho juicio de lesividad, en contra de dicha sentencia.

Si bien, la sentencia antes descrita declaró la nulidad de la resolución en la que se determinó un crédito fiscal a cargo de la actora en materia del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal de 1998, y en el caso a estudio, el impuesto determinado a

la actora **corresponde** al ejercicio fiscal de 2000, en ambos juicios la litis consiste en determinar **si los pagos efectuados a residentes en el extranjero por el arrendamiento de aviones y turbinas para uso comercial están sujetos a retención bajo el concepto de regalías en términos del artículo 12 del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, o bien, dichos pagos tienen la naturaleza de "beneficios empresariales" de conformidad con el artículo 7° del propio convenio, y por tanto, la actora estuvo liberada de efectuar retención alguna sobre el importe de los pagos realizados.**

En ese contexto, el análisis e interpretación de esta Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al artículo 12 del **Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta** debe prevalecer en ambos juicios, pues tanto en 1998 como en 2000, se mantuvo en sus términos el contenido de dicho artículo, mismo que hasta la fecha no ha sido motivo de modificación.

En los términos antes expuestos, los argumentos formulados por la actora en su primer concepto de impugnación son infundados para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, pues si como ya se señaló, los pagos efectuados por la hoy actora a residentes en el extranjero por el arrendamiento de aviones y turbinas para uso comercial están sujetos a retención bajo el concepto de regalías de conformidad con el artículo 12 del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, la deducción de dichos pagos estaba condicionada a que la actora cumpliera con las disposiciones fiscales correspondientes a la retención y entero del impuesto sobre la renta correspondiente, situación que no acreditó la actora en el presente juicio.

(...)

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 236, 237 y 239, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 20, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I. La parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su pretensión;

II. Se reconoce la VALIDEZ, tanto de la resolución impugnada como de la resolución recurrida, mismas que han quedado precisadas en el resultando primero de la presente sentencia, al tenor de los motivos y fundamentos lógico jurídicos expuestos anteriormente;

III. NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Octava Sala Regional Metropolitana de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa una vez que hubiere quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto, y en su oportunidad archívese el presente expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de junio de 2006, por unanimidad de 5 votos a favor de los CC. Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Silvia Eugenia Díaz Vega, Francisco Cuevas Godínez, Olga Hernández Espíndola y Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 5 de julio de 2007, y con fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción III y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el C. Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

V-P-2aS-760

RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES OPORTUNO EL QUE SE DEPOSITA EN EL SERVICIO POSTAL MEXICANO PARA SU ENVÍO DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- El segundo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que, cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse por el Servicio Postal Mexicano, mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante. En los términos expuestos, es apegado a derecho y a la equidad considerar que, también existe a su favor la posibilidad de presentar por correo certificado todas las promociones o recursos que sean necesarios para ejercer plenamente su derecho. Por lo anterior, resulta procedente el envío del recurso de reclamación a través del Servicio Postal Mexicano mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el promovente tenga su domicilio fiscal fuera de la sede de la Sala Regional, y que el depósito se realice dentro del plazo legal establecido. (12)

Recurso de Reclamación Núm. 3758/06-13-01-2/496/07-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de junio de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de junio de 2007)

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

V-P-2aS-761

SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LA AMONESTACIÓN PÚBLICA APLICABLE A UN SERVIDOR PÚBLICO, EN TANTO QUE LA CONDUCTA QUE SE SANCIONA NO ES CONSIDERADA GRAVE.- El artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece las sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos federales por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, entre otras, la amonestación pública o privada, la suspensión temporal del servidor o la destitución del puesto, mientras que el artículo 14 de la propia Ley dispone los elementos que deberán considerarse para la imposición de las sanciones, entre otros, la gravedad de la conducta que se sanciona. Por otra parte, los artículos 27 y 28 de la propia Ley disponen la procedencia de la suspensión de las resoluciones administrativas impuestas a servidores públicos que no sean de carácter económico, cuando a) la inejecución del acto impugnado no cause perjuicio al interés general, ni contravenga disposiciones de orden público; b) la inejecución del acto impugnado no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al servicio público; c) la ejecución de la sanción produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del servidor público; y d) no se trate de sanciones consideradas como graves o que exista reincidencia del servidor público. En esos términos, si la conducta que se sanciona con la amonestación pública no tiene el carácter de grave, en tanto que no tiene como propósito relevar al servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, resulta procedente el otorgamiento de la suspensión de su ejecución conforme al artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues en caso de negarse dicha suspensión, ello puede ocasionar daños o

perjuicios de difícil reparación al actor, esto es, a su propia imagen en el ámbito profesional. (13)

Recurso de Reclamación Núm. 3758/06-13-01-2/496/07-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de junio de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de junio de 2007)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO. A continuación, esta Segunda Sección procede al análisis de los requisitos de procedibilidad conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyo cumplimiento debe determinarse previo al estudio de fondo del recurso de reclamación, toda vez que conforme a esta disposición legal, compete a las Secciones de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de dictar la resolución al recurso de reclamación interpuesto, determinar si es o no procedente.

El artículo de referencia dispone textualmente:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

"**ARTÍCULO 62.-** Como único caso de excepción, **las sentencias interlocutorias que concedan o nieguen la suspensión definitiva, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sección de la Sala Superior en turno del Tribunal, mediante escrito que se presente ante la Sala Regional que haya dictado la sen-**

tencia, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva.

"Interpuesto el recurso en los términos señalados en el párrafo anterior, la Sala Regional ordenará correr traslado a la contraparte por el término de cinco días para que exprese lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido dicho plazo, la Sala Regional remitirá a la Sección de la Sala Superior que por turno corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes, copia certificada del escrito de demanda, de la sentencia interlocutoria recurrida, de su notificación **y del escrito que contenga el recurso de reclamación, con expresión de la fecha y hora de recibido.**

"Una vez remitido el recurso de reclamación en los términos antes señalados, se dará cuenta a la Sala Superior que por turno corresponda para que resuelva en el término de cinco días."

(Énfasis de esta Juzgadora)

Esta Segunda Sección de la Sala Superior considera que se cumple con el primer requisito de procedencia señalado en el párrafo primero del artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en tanto que el recurso de reclamación se interpone en contra de una sentencia interlocutoria dictada por una Sala Regional de este Órgano Jurisdiccional que otorgó la suspensión definitiva de la ejecución de la resolución impugnada.

En efecto, tal y como se señaló en el resultando 6o. de este fallo, el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia interlocutoria dictada por la Primera Sala Regional del Golfo el 06 de febrero de 2007, por la cual se otorgó la suspensión definitiva de la ejecución de la resolución impugnada.

Ahora bien, esta Juzgadora considera que el recurso de reclamación es intentado por parte legitimada para ello, pues fue promovido por la autoridad demandada en el presente juicio.

Por otra parte, esta Segunda Sección de la Sala Superior **considera SE CUMPLE con el requisito de oportunidad señalado en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo**, en tanto que el recurso de reclamación fue presentado ante este Tribunal Federal dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surtió efectos la notificación de la sentencia interlocutoria impugnada.

En efecto, la sentencia se notificó a las autoridades demandadas el 13 de marzo de 2007, tal y como se desprende del acuse que obra agregado en la carpeta de reclamación (folio 040 de la misma), por tanto, dicha notificación surtió sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el 14 de marzo de 2007.

Así, el plazo de cinco días hábiles previsto en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para promover el recurso de reclamación transcurrió del 15 al 22 de marzo de 2007, descontando de dicho cómputo el 17 y 18 de marzo, por corresponder a sábado y domingo, así como el 19 de marzo del propio año, por ser día inhábil según lo dispuesto en el Acuerdo G/1/2007 del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Federal en sesión de 3 de enero de 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero del propio año.

Es el caso que, el recurso de reclamación que nos ocupa fue depositado el 22 de marzo de 2007 ante la Oficina del Servicio Postal Mexicano para su envío a las Salas Regionales del Golfo de este Tribunal Federal, tal como se acredita con la impresión del sello de recepción que aparece en el reverso del folio 058 de la carpeta en que se actúa, habiéndose recibido en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales del Golfo el **27 de marzo de 2007**, tal como aparece la impresión del reloj checador

en el margen superior derecho de la primera hoja de dicho recurso (folio 41 de la carpeta en que se actúa).

Los Magistrados integrantes de esta Segunda Sección advierten que en el propio oficio en el que se interpone el recurso de reclamación, la autoridad señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el sito en Avenida Jacarandas 100, Nivel C1, Colonia Rancho Alegre I, Coatzacoalcos, Veracruz, Código Postal 96558.

Asimismo, advierten que, el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que, cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse por el Servicio Postal Mexicano, mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante.

En los términos expuestos, es apegado a derecho y a la equidad considerar que, también existe a favor de las partes, la posibilidad de presentar por correo certificado todas las promociones o recursos que sean necesarios para ejercer plenamente su derecho.

Por lo anterior, resulta procedente el envío del recurso de reclamación a través del Servicio Postal Mexicano mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el promovente tenga su domicilio fiscal fuera de la sede de la Sala Regional, y que el depósito se realice dentro del plazo legal establecido.

Resultan aplicables por analogía, las jurisprudencias dictadas por el Pleno de esta Sala Superior, cuyos rubros y contenidos se reproducen a continuación:

"**Jurisprudencia**
"Época: Primera
"**Instancia: Pleno**

"Fuente: R.T.F.F. Primera Época. Año XXIX. Nos. 337 - 348. Enero - Diciembre de 1965. 1966.
"Tesis: I-J-458
"Página: 27

"**CORREO, PROMOCIONES REMITIDAS POR**.- Determinación de su oportunidad. Habiendo establecido el Pleno, mediante tesis jurisprudencial de 31 de enero de 1938, reiterada en resoluciones de 22 de octubre de 1947 y 25 de febrero de 1953, que las promociones provenientes de la ciudad de México o fuera de ella pueden ser remitidas por correo porque es éste un servicio público a disposición de las partes, y que la oportunidad de aquéllas, depende de la fecha de su depósito, dicha tesis resulta violada si una Sala sobresee el juicio por extemporaneidad de la demanda tomando en cuenta la fecha en que fue recibida en el Tribunal y no la en que fue depositada.

"Juicio 3835164. Resolución del Pleno, queja de 8 de septiembre de 1965. Ponente, Magistrada Dolores Heduán Virués."

"**Jurisprudencia**
"Época: Primera
"**Instancia: Pleno**
"Fuente: R.T.F.F. Primera Época. Año XI. No. 121 - 132. Enero.- Diciembre 1947.
"Tesis: I-J-147
"Página: 64

"**TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- PROMOCIONES POR CORREO.- MOMENTO EN QUE DEBEN TENERSE POR PRESENTADAS ANTE DICHA ENTIDAD.-** Habiendo sustentado el Pleno del Tribunal Fiscal de la Federación, con fecha 31 de enero de 1938, al resolver la queja en el juicio número 22843/937, que toda promoción depositada oportunamente en el correo, dentro o fuera de la ciudad de México, debe estimarse

como promoción hecha en tiempo, en razón de que el correo es un servicio público destinado legalmente, y por regla, a la conducción de la correspondencia, teniendo las partes el derecho de usar el mencionado servicio público para el transporte de sus escritos dirigidos al Tribunal y que la misma debe estimarse como jurisprudencia, atentos los términos de la resolución del Pleno, de 22 de julio de 1946, que estableció que la jurisprudencia del Tribunal Fiscal no está constituida exclusivamente por las resoluciones que se dicten a propósito de contradicción de sentencias pronunciadas por las Salas, sino también por la tesis que se sustenten al fallar las quejas promovidas por las partes y, en general, todas aquellas resoluciones que, en su carácter de órgano supremo del Tribunal, dicte para unificar el criterio de las Salas, cabe concluir que, en todo caso, las Salas del Tribunal Fiscal, deberán tomar como base para computar los términos establecidos para la presentación de promociones, la fecha en que los interesados depositen en el correo las instancias relativas.

"Resolución del Pleno, de 22 de octubre de 1947, recaída a la queja interpuesta por María Arvea viuda de Estarameta, contra la sentencia pronunciada por la H. Tercera Sala en el juicio número 2988/942."

"**Jurisprudencia**
"Época: Primera
"**Instancia: Pleno**
"Fuente: R.T.F.F. Primera Época. Año II. No. s/n. Enero 1938.
"Tesis: I-J-49
"Página: 15

"**PROMOCIONES DEPOSITADAS EN EL CORREO.-** Deben tenerse como presentadas ante el Tribunal, en la fecha del depósito en la oficina respectiva, no obstante que éste se haga en la propia ciudad de México, residencia del Tribunal Fiscal de la Federación.

"Resolución del Pleno de 31 de enero de 1938. Queja ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Resolución Incidental."

Por lo anteriormente expuesto, **si el recurso se depositó** ante la Oficina del Servicio Postal Mexicano para su envío a las Salas Regionales del Golfo el **22 de marzo de 2007, su presentación se realizó de manera oportuna**, pues como se indicó anteriormente, el plazo de cinco días hábiles previsto en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para promover el recurso de reclamación transcurrió del 15 al 22 de marzo de 2007.

CUARTO.- (...)

De acuerdo con la resolución recurrida, en la parte anteriormente reproducida, la Primera Sala Regional del Golfo de este Tribunal Federal decidió otorgar la suspensión solicitada por el demandante, considerando para ello:

A) Que el actor promovió juicio contencioso administrativo respecto de la resolución de fecha 24 de octubre de 2006, emitida en el expediente administrativo R.A. 002/2006, por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica, en la que fincó a su cargo la sanción administrativa consistente en **amonestación pública**;

B) Que contrariamente a lo aseverado por la enjuiciada la suspensión que contempla el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es procedente aunque no exista una resolución expresa de la autoridad ejecutora que contenga un pronunciamiento destacado en cuanto a la negativa de la suspensión; máxime, que en los términos en que está redactado el informe rendido con motivo del incidente, se desprende la manifestación expresa de la representante de las enjuiciadas de la posible ejecución de la sanción, por tanto, en el supuesto inadmitido de declararse improcedente el incidente se podrían causar al actor los daños y perjuicios de difícil reparación;

C) Que de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, tratándose de sanciones administrativas impuestas a servidores públicos que no sean de carácter económico, procede de la suspensión siempre que concurran los requisitos que siguen: a) la inejecución del acto impugnado no cause perjuicio al interés general, ni contravenga disposiciones de orden público; b) la inejecución del acto impugnado no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al servicio público; c) la ejecución de la sanción produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del servidor público; y d) no se trate de sanciones consideradas como graves o que exista reincidencia del servidor público;

D) Que la sanción impugnada derivó de una responsabilidad no considerada grave; de ahí, que deba concederse la suspensión, porque además de ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 28, tercer párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en casos como el presente el interés de la sociedad no se vería afectado, en cambio, de no conceder la suspensión se pueden ocasionar daños o perjuicios de difícil reparación al actor, esto es, a su propia imagen en el ámbito profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos dicha sanción. Máxime que la sanción no implica la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público a que alude el artículo 27 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

E) Que aun cuando el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que en caso de revocar o modificar la resolución impugnada se restituirán los derechos del servidor público, el propio artículo prevé la suspensión como un derecho que puede ejercer el sancionado, a fin de evitar que su imagen se vea desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio.

Para los Magistrados integrantes de esta Segunda Sección son INFUNDADOS los agravios planteados por la recurrente, atento a las siguientes consideraciones.

Son INFUNDADOS los señalamientos formulados por la recurrente identificados anteriormente bajo el inciso **A)**, cuando aduce que, *la resolución recurrida rompe con los principios de congruencia, equidad e igualdad procesal, pues no resulta suficiente que el actor solicite la suspensión de la ejecución de los efectos de la resolución impugnada, pues el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo tiene una* ***conditio sine qua non*** *al establecer que, el demandante podrá solicitar la suspensión del acto administrativo impugnado cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con determinados requisitos*.

Es criterio de esta Juzgadora que la suspensión de la ejecución del acto impugnado, prevista por el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no sólo es procedente en los casos en los que dicha medida suspensiva fue solicitada a la autoridad ejecutora y ésta negó la suspensión, rechazó la garantía ofrecida o reinició la ejecución, sino que dicha solicitud es también procedente cuando se plantea de manera directa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin haberse solicitado de manera previa a la citada autoridad.

En efecto, en el juicio contencioso administrativo federal, la suspensión de la ejecución del acto impugnado se regula en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, numeral que es del tenor siguiente:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

"ARTÍCULO 28.- El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue

la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos.

"I. Podrá solicitarla en la demanda o en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala de conocimiento del juicio.

"II. Acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales que ofrezca, para correr traslado a cada una de las partes y una más para la carpeta de suspensión.

"III. Ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución, únicas admisibles en la suspensión.

"IV. Ofrecer garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza expedida por institución autorizada, para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada o a terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo.

"V. Los documentos referidos deberán expedirse a favor de la otra parte o de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citadas.

"VI. Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

"El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos:

"a) Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y

"b) Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.
"VII. Exponer en el escrito de solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, las razones por las cuáles considera que debe otorgarse la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite.
"VIII. La suspensión se tramitará por cuerda separada y con arreglo a las disposiciones previstas en este Capítulo.
"IX. El Magistrado Instructor, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos:
"a) Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable.
"b) Que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión, y
"c) Que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado.
"X. El auto que decrete o niegue la suspensión provisional, podrá ser impugnado por las autoridades demandadas mediante el recurso de reclamación previsto en el artículo 59 de esta Ley, dejando a salvo los derechos del demandante para que lo impugne en la vía que corresponda.
"XI. En el caso en que la ley que regule el acto administrativo cuya suspensión se solicite, no prevea la solicitud de suspensión ante la autoridad ejecutora, la suspensión tendrá el alcance que indique el Magistrado Instructor o la Sala y subsistirá en tanto no se modifique o revoque o hasta que exista sentencia firme.
"XII. Mientras no se dicte sentencia en el juicio, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

"XIII. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia firme favorable, la Sala ordenará la cancelación o liberación, según el caso, de la garantía otorgada.
"Asimismo, si la sentencia firme le es desfavorable, a petición de la contraparte o, en su caso, del tercero, y previo acreditamiento que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala, ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante el Tribunal.
"XIV. Si la solicitud de suspensión de la ejecución es promovida por la Autoridad demandada por haberse concedido en forma indebida."

Del texto del artículo transcrito, se desprende que en el mismo se reconoce la posibilidad de obtener la suspensión respecto de los diversos tipos de actos administrativos que se pueden impugnar en el juicio contencioso administrativo federal del que conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que válidamente podría decirse que en dicho numeral se reconocen distintos "tipos" de suspensión, dependiendo del acto impugnado respecto del que sea solicitada la medida suspensiva.

Lo anterior se confirma por el hecho mismo de que la fracción IX del propio artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, autoriza al Magistrado Instructor a otorgar la suspensión provisional de la ejecución del acto impugnado, siempre que con la misma no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, siempre que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable; se causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión; y sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado.

Por esas razones, los CC. Magistrados que integran la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal concluyen que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado que regula el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento

Contencioso Administrativo, no sólo es procedente en los casos en los que dicha medida suspensiva fue solicitada a la autoridad ejecutora y ésta negó la suspensión, rechazó la garantía ofrecida o reinició la ejecución, sino que dicha solicitud es también procedente cuando se plantea de manera **directa** ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin haberse solicitado de manera previa a la citada autoridad; conclusión que denota lo infundado del argumento de la autoridad recurrente.

Por tanto, considerar que lo previsto por el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se trata en realidad de requisitos exigidos para cada una de las fracciones del artículo referido, haría nugatoria la garantía de defensa del administrado, a través de la solicitud de suspensión ahí señalada, atento a que se excederían de los requisitos previstos para la suspensión en el artículo 124 de la Ley de Amparo y el particular no tendría oportunidad de obtener la suspensión sino a través de la vía de amparo.

Por otra parte, para los Magistrados de esta Segunda Sección, son INFUNDADOS los señalamientos formulados por la recurrente, identificados anteriormente bajo los incisos **B), C)** y **D)**, cuando aduce:

B) Que la fracción VII del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo impone al solicitante de la medida cautelar, la obligación de exponer en el escrito de solicitud las razones por las cuales considera debe otorgársele la suspensión y los perjuicios que se causarían en caso de ejecutarse los actos cuya suspensión solicita;

C) Que la Sala Regional aun cuando reconoce que no cuenta con los elementos necesarios, infiere del informe rendido por la autoridad, la posible ejecución de la sanción destacando que se podrían causar daños y perjuicios de difícil reparación, los cuales nunca fueron acreditados por el actor, mucho menos razonados por la Sala Regional en el sentido de revelar cuáles son esos daños y perjuicios de difícil reparación, y lo más grave, si efectivamente son de difícil reparación;

D) Que la Sala Regional sólo tomó en cuenta la sola solicitud del actor en su escrito de demanda, sin realizar el razonamiento lógico jurídico que toda autoridad debe hacer al momento de emitir su determinación, esto es, dejó de observar que todas las resoluciones deben tener una fijación clara y precisa de lo solicitado y lo que es procedente conforme a la norma aplicable.

Son infundados dichos señalamientos de la recurrente, ya que en la solicitud de suspensión de la ejecución de la resolución impugnada de su demanda, el actor expuso las razones por las cuáles consideró debía otorgársele la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión solicitó, cumpliendo así con lo ordenado por la fracción VII del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y por otra parte, del informe rendido por la autoridad, la Sala Regional advirtió sobre la posible ejecución de la sanción, lo que motivó el otorgamiento de la suspensión de la resolución impugnada, pues de llevar a cabo la autoridad la amonestación pública, aun en el caso de que la sentencia de fondo fuera favorable al hoy actor, existiría imposibilidad para restituir al actor en el goce de sus derechos vulnerados; esto es, su imagen en el ámbito personal y profesional.

En efecto, señala el artículo 27 (sic), fracción VII de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

"ARTÍCULO 28.- El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos.
"(...)
"VII. Exponer en el escrito de solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, las razones por las cuáles considera que debe otorgarse la medida

y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite.
"(...)"

(Énfasis de esta Juzgadora)

Teniendo a la vista el escrito de demanda, se observa que, el actor ocurrió a este Tribunal Federal a demandar la nulidad de la resolución de 24 de octubre de 2006, emitida en el expediente administrativo R.A. 002/2006, por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica, en la que fincó a su cargo la sanción administrativa consistente en **amonestación pública**.

Asimismo, en el capítulo de suspensión de la demanda, el actor solicitó la suspensión de la resolución impugnada, manifestando que, de consumarse, haría físicamente imposible restituirle en el goce de sus derechos vulnerados como lo es su imagen en el ámbito personal y profesional, más aún, que con la suspensión solicitada no se para perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público (folio 025 del expediente en que se actúa).

Por su parte, la Sala Regional otorgó la suspensión solicitada considerando que, aun cuando no advirtió la existencia de resolución expresa que negara la suspensión, en los términos del informe rendido por la autoridad se desprende la manifestación expresa del representante de las autoridades sobre la posible ejecución de la sanción, por tanto, consideró acreditada la procedencia de la solicitud, pues el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo permite el otorgamiento de la suspensión de la resolución impugnada, aunque no exista una resolución expresa denegatoria de la suspensión.

Para los Magistrados integrantes de esta Segunda Sección, la resolución de la Sala Regional se encuentra apegada a derecho, en atención a que, la suspensión de la ejecución de los actos impugnados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

La **apariencia del buen derecho** se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de tal forma que para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el solicitante, de modo tal que sea posible anticipar que la sentencia que resuelva el juicio en definitiva declarará la nulidad de la resolución impugnada.

Para llegar a dicha conclusión se deberá tomar en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la ilegalidad señalada, es decir, atender al derecho que se dice violado, considerando sus características y trascendencia.

En todo caso, dicho análisis debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados, lo cual sólo habrá de determinarse en la sentencia definitiva con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que la decisión tomada en relación con el otorgamiento de la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones.

En apoyo de lo anteriormente señalado, se cita en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido se reproducen a continuación:

"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, Diciembre de 2002
"Tesis: VI.3o.A. J/21
"Página: 581
"Materia: Común
"Jurisprudencia.

"**APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ALCANCES**.- Si bien es cierto que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar con cierto grado de acierto que obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Así pues, si en el caso de que se trate no es tan claro preestablecer con sólo "echar un vistazo" a la apariencia del buen derecho si la actuación de la autoridad está apegada a la ley, o bien, si es el peticionario de garantías quien tienen razón en cuanto la tilda de inconstitucional, no cobra aplicación la teoría en comento.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

"Incidente de suspensión (revisión) 111/2002. Maximiliano Jiménez Ramírez. 4 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán. Queja 37/2002. Cobe de México, S.A. de C.V. 2 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán. Queja 53/2002. Metales Kendal, S.A. de C.V. 13 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán. Queja 58/2002. Inmuebles de Oriente, S.A. de C.V. 8 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Héctor Alejandro Treviño de la Garza. Queja 61/2002. Metales Kendal, S.A. de C.V. 18 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: Jorge Arturo Gamboa de la Peña."

(Énfasis de esta Juzgadora)

De igual forma, resulta aplicable en lo conducente el precedente dictado por esta Segunda Sección, que se reproduce a continuación:

"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 343

"**RECURSO DE RECLAMACIÓN. EXAMEN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, AL MOMENTO DE RESOLVER SOBRE CONCEDER O NO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.-** La suspensión de la ejecución de los actos impugnados es una providencia cautelar en el juicio contencioso administrativo, que tiene como objeto preservar la materia del propio juicio, a afecto de evitar que se consume de manera irreparable la ejecución del acto de autoridad. Por su parte, la teoría de la figura de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, se basan, la primera, en un conocimiento preliminar del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que para conceder la suspensión solicitada; sea posible anticipar que en la sentencia del juicio, se declarará la nulidad del acto impugnado; y el segundo, sustentado en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. De lo anterior se desprende que la teoría en comento tiene como fin, flexibilizar la institución de la suspensión, en los casos en que es posible anticipar que en la sentencia se declarará la nulidad del acto impugnado, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora bien, si la finalidad de la teoría de la apariencia del buen derecho consiste en que la suspensión del acto impugnado, como medida cautelar, asegure la eficacia práctica de la sentencia estimatoria; nada impide que pueda aplicarse en sentido contrario. Lo anterior, en virtud de que existen casos en los que de un análisis inicial derivado de aproximarse al fondo del asunto, se pone de manifiesto, que la pretensión de la actora es notoriamente infundada o cuestionable, por lo que previo a resolver sobre la suspensión del acto impugnado, el juzgador puede analizar de modo preliminar la controversia a efecto de verificar si la pretensión es notoriamente infundada, hipótesis en la que deberá negar la medida suspensional solicitada, pues

de no considerarlo así, se permitiría que la parte actora abusara de la institución de mérito, al disfrutar de sus beneficios a pesar de lo cuestionable de su demanda; lo que desde luego no prejuzgaría sobre la certeza del derecho discutido, es decir, sobre la legalidad o ilegalidad del acto impugnado, ya que esto es propio de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal del que deriva el incidente de suspensión. (33)

"Recurso de Reclamación Núm. 2312/06-03-01-2/995/06-S2-09-05.- Resuelto por la por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
"(Tesis aprobada en sesión de 1° de marzo de 2007)

"PRECEDENTE:

"V-P-2aS-576
"Recurso de Reclamación Núm. 1581/06-03-01-8/780/06-S2-09-05 .- Resuelto por la por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de diciembre de 2006, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
"(Tesis aprobada en sesión de 23 de enero de 2007)"
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 74. Febrero 2007. p. 316"

En esos términos, si la Sala Regional del informe rendido por la autoridad advirtió sobre la posible ejecución de la sanción, es procedente el otorgamiento de la suspensión de la resolución impugnada en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que de no otorgarse la suspensión solicitada y la autoridad efectuara la amonestación pública, en el caso de que la sentencia de fondo fuera favorable al hoy actor, existiría imposibilidad

para restituir al actor en el goce de sus derechos vulnerados como lo es mi imagen en el ámbito personal y profesional.

En apoyo de lo anteriormente señalado, se cita la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resulta aplicable por analogía, cuyo rubro y contenido es el siguiente:

"Octava Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Apéndice de 1995
"Tomo VI, Parte SCJN
"Página: 347
"Tesis: 528
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común

"**SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.-** Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo.

"Octava Época:

"Contradicción de tesis. Varios 34/91. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de enero de 1993. Cinco votos."

Asimismo, para esta Juzgadora son INFUNDADOS los señalamientos formulados por la recurrente, identificados anteriormente bajo los incisos **E) y F)**, cuando aduce:

E) *Que el inciso c) de la fracción IX del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión provisional del acto impugnado, siempre y cuando con esa medida cautelar no se afecte el interés social, no se contravengan disposiciones de orden público ni quede sin materia el juicio, y se esté en los supuestos a que se refieren los tres incisos siguientes a la fracción IX del propio artículo 28, relativo a que se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado, sin necesidad de entrar al análisis del fondo del asunto, de tal forma que la Sala Regional mal interpreta los requisitos que exige el artículo 28 de la Ley Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (sic);*

F) *Que la Sala Regional no realizó el análisis lógico jurídico de los alcances que establece el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el cual prevé la restitución de derechos en el caso de obtenerse sentencia favorable, lo que no se traduciría en un daño de difícil reparación, como inadecuadamente lo afirma la Sala.*

Son infundados dichos señalamientos ya que, contrariamente a lo señalado por la recurrente, la Sala Regional otorgó la suspensión solicitada considerando que la sanción impugnada derivó de una responsabilidad no considerada grave, en cuyo caso, el interés de la sociedad no se vería afectado con el otorgamiento de dicha suspensión, en cambio, de no concederse, podrían ocasionarse al actor daños o

perjuicios de difícil reparación, particularmente en su imagen en el ámbito profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos dicha sanción.

En efecto, en esencia, la Sala Regional otorgó la suspensión de la resolución impugnada considerando que, la sanción impuesta por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica es de carácter administrativo, consistente en amonestación pública por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 8o, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, responsabilidad no considerada grave, siendo por tanto procedente el otorgamiento de la suspensión, porque además de ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 28, tercer párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el interés de la sociedad no se vería afectado, en cambio, de no conceder la suspensión se pueden ocasionar daños o perjuicios de difícil reparación al actor, esto es, a su propia imagen en el ámbito profesional, además de que dicha sanción no implica la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público a que alude el artículo 27 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Para los suscritos Magistrados de esta Segunda Sección, son apegadas a derecho las consideraciones de la Sala Regional para otorgar la suspensión definitiva de la resolución impugnada, atento a las consideraciones siguientes.

El artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del 01 de enero de 2006, en la fracción IX establece que, podrá concederse la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada siempre que no se trate de actos consumados de manera irreparable; a fin de evitar daños de difícil reparación, siempre que con la medida cautelar no se contravengan disposiciones de orden público, se afecte al interés de la sociedad, o quede sin materia el juicio, en los siguientes términos:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

"Artículo 28.- El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos:
"(...)
"IX. El Magistrado Instructor, en el auto que acuerde le solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos:
"a) Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable
"b) Que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión, y
"c) Que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado.
"(...)"

(Énfasis de esta Juzgadora)

Del artículo antes reproducido se advierte que la suspensión se otorgará siempre que no se contravengan disposiciones de orden público o se afecte al interés de la sociedad; en esos términos, tratándose de la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas debe atenderse al interés del particular, excepto cuando este interés pugna con el de la sociedad o el Estado, en cuyo caso debe prevalecer el interés colectivo.

En este sentido, **el interés social se traduce** en cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad pueda obtener un provecho o una ventaja o evitarse un

trastorno bajo múltiples y diversos aspectos, previniéndose un mal público, satisfaciéndose una necesidad colectiva o lográndose un bienestar común.

En cambio, **el orden público debe entenderse** como la situación y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen; es una noción en sí que bajo su imperio restringe la libertad individual; es la fórmula del bienestar general, y su función es asegurar el orden jurídico, pues se encuentra constituido por un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos y morales a los cuales la sociedad considera estrechamente vinculada a la existencia y conservación de la organización social establecida.

Cabe apuntar, que si bien, el Poder Judicial de la Federación en relación con el concepto de interés social y orden público sólo se produce la afectación cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría, sí ha señalado que para el otorgamiento de la suspensión deberán exponerse los motivos por los que se considera se ocasiona perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, principio que se desprende de la jurisprudencia número 81/2002, de la Segunda Sala, visible en la página 357 del Tomo XVI, julio de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto se reproduce a continuación:

> "**SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO**.- Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que

debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público."

Ahora bien, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprende de los artículos 108 a 114, en materia de los sujetos de responsabilidad, obligaciones y sanciones en el servicio público, especificando qué autoridades son competentes para conocer de dichas infracciones y los procedimientos que habrán de seguirse.

En este sentido, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en su artículo 8o. las obligaciones de todo servidor público, estableciendo en el artículo 13 las sanciones administrativas aplicables:

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

"Artículo 13.- Las sanciones por falta administrativa consistirán en:
"**I.- Amonestación privada o pública;**
"II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;

"III.- Destitución del puesto;
"IV.- Sanción económica, e
"V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
"Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de seis meses a un año de inhabilitación.
"Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.
"En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.
"En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley.
"Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.
"La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado."

(Énfasis de esta Juzgadora)

A su vez, en el artículo 14 de dicha Ley, se dispone que para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, así como: a) la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella; b) las circunstancias socioeconómicas del servidor público; c) el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; d) las condiciones exteriores y los medios de ejecución; e) la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y f) el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Los preceptos antes invocados revelan que las faltas cometidas por los servidores públicos al no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ameritan imposición de sanciones, que consistirán, entre otras, en la amonestación pública o privada, suspensión del servidor o su destitución del puesto, tomando en consideración, entre otros aspectos, la gravedad de su conducta.

Bajo esa óptica puede afirmarse que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es de orden público, ya que reglamenta la materia de los sujetos de responsabilidad y las obligaciones y sanciones en el servicio público; aunado al hecho de que la sociedad se encuentra interesada en que el incumplimiento a las obligaciones a que se encuentran sujetos los servidores públicos, se sancione de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes.

Por otra parte, el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, señala que los servidores públicos responsables en los términos de las resoluciones administrativas, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mientras que los artículos 27 y 28 de la propia Ley, establecen:

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

"Artículo 27.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a estas reglas:
"I.- En tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga el Código Fiscal de la Federación, y
"II.- En tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos:
"a) Que se admita el recurso;
"b) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del recurrente, y
"c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público."

"Artículo 28.- En los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los que se impugnen las resoluciones administrativas dictadas conforme a la Ley, las sentencias firmes que se pronuncien tendrán el efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. En el caso de ser revocada o de que la modificación así lo disponga, se ordenará a la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.
"El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá otorgar la suspensión cumpliendo los requisitos a que se refiere el artículo anterior.
"**No procederá la suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas que se impugnen mediante la interposición del recurso o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tratándose de infracciones graves o casos de reincidencia.**"

(Énfasis de esta Juzgadora)

Del contenido de los artículos antes reproducidos se desprende que, procederá la suspensión de las resoluciones administrativas impuestas a servidores públicos que no sean de carácter económico cuando, a) la inejecución del acto impugnado no cause perjuicio al interés general, ni contravenga disposiciones de orden público; b) la inejecución del acto impugnado no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al servicio público; c) la ejecución de la sanción produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del servidor público; **y d) no se trate de sanciones consideradas como graves o que exista reincidencia del servidor público**.

En el juicio principal, el actor impugnó la resolución administrativa impuesta por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica **consistente en amonestación pública** por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 8o, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El hecho de que la sanción administrativa impuesta al hoy actor sea una amonestación pública, pone de manifiesto que la sanción no tiene el carácter de grave, de ahí que sea apegada a derecho la decisión de la Sala Regional para otorgar la suspensión definitiva de la ejecución de la resolución impugnada, máxime que con su otorgamiento no se vería afectado el interés de la sociedad, en cambio, de no concederse ocasionaría al actor daños o perjuicios de difícil reparación, esto es, a su propia imagen en el ámbito profesional, lo que es de mayor peso, máxime que la sanción no implica la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público a que alude el artículo 27 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos transcrita.

De igual forma, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, no se desprende que el actor sea un reincidente que impida la aplicación del último párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de

los Servidores Públicos; además, que realizarse dicha amonestación pública, quedaría sin materia el juicio.

Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se reproduce a continuación:

"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XIX, Abril de 2004
"Página: 444
"Tesis: 2a./J. 34/2004
"Jurisprudencia
"Materia(s): Administrativa

"**RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO.-** La sanción que se impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio, aunado a que en esta hipótesis, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo.

"Contradicción de tesis 115/2003-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Décimo Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito y Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, todos en Materia Administrativa. 17 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

"Tesis de jurisprudencia 34/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de marzo de dos mil cuatro."

De lo antes expuesto, resultan infundados los señalamientos formulados por la recurrente, por tanto fue apegado a derecho que la Sala Regional otorgara la suspensión definitiva respecto de la sanción administrativa consistente en amonestación pública impuesta por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica consistente en amonestación pública por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 8o, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, considerando que, la sanción no tiene el carácter de sanción grave, en el juicio no existen constancias de que el actor sea un reincidente, asimismo, de no otorgarse dicha suspensión habría quedado sin materia el juicio.

En esos términos, la suspensión otorgada por la Sala Regional se ubicó en el supuesto del tercer párrafo del artículo 28, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues el interés de la sociedad no se vería afectado, en cambio, de no haber concedido la suspensión se habría ocasionado daños o perjuicios de difícil reparación al actor, esto es, a su propia imagen en el ámbito profesional.

Por último, para los Magistrados de esta Segunda Sección son INFUNDADOS los señalamientos formulados por la recurrente identificados anteriormente bajo el inciso **G)**, al indicar que, *en la resolución recurrida no se dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 50, en relación con el 75 y 76 de la Ley Federal de*

Procedimiento Contencioso Administrativo, al haberse señalado el rubro de los precedentes dictados por la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal Federal, ya que debió señalarse por lo menos los datos de identificación de la ejecutoria, señalándose en su orden y, en su caso, el tipo de asunto, el número del expediente, el nombre del promovente del juicio, la fecha de resolución, la votación, el ponente y el secretario.

Para llegar a dicha conclusión, resulta necesario revisar el contenido de los artículos 50, 75 y 76 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

"**Artículo 50.-** Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

"Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

"Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.

"Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se po-

drán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.
"En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada."

"**Artículo 75.-** Las tesis sustentadas en las sentencias pronunciadas por la Sala Superior, aprobadas por lo menos por siete magistrados, constituirán precedente una vez publicados en la Revista del Tribunal.
"También constituirán precedente las tesis sustentadas en las sentencias de las Secciones de la Sala Superior, siempre que sean aprobadas cuando menos por cuatro de los magistrados integrantes de la Sección de que se trate y sean publicados en la Revista del Tribunal.
"Las Salas podrán apartarse de los precedentes establecidos por el Pleno o las Secciones, siempre que en la sentencia expresen las razones por las que se apartan del mismo, debiendo enviar al Presidente del Tribunal copia de la sentencia."

"**Artículo 76**.- Para fijar jurisprudencia, el Pleno de la Sala Superior deberá aprobar tres precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario.
"También se fijará jurisprudencia por alguna Sección de la Sala Superior, siempre que se aprueben cinco precedentes no interrumpidos por otro en contrario."

(Énfasis de esta Juzgadora)

Del contenido de las disposiciones antes reproducidas se desprende que las mismas se refieren esencialmente a dos situaciones: a) sentencias que dicte este Tribunal Federal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que

se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios; b) la conformación de precedentes y jurisprudencias por el Pleno y las Secciones de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Sin embargo, del contenido de dichos artículos, no se desprende que, para considerar que las sentencias dictadas por este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se encuentren debidamente fundadas y motivadas cuando en ellas se haga la cita de precedentes o jurisprudencias aprobados por este mismo Tribunal, como parte de los datos de identificación deba señalarse el tipo de asunto, el número del expediente, el nombre del promovente del juicio, la fecha de resolución, la votación, el Ponente y el Secretario.

En efecto, el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que, las Salas de este Tribunal están obligadas a aplicar la jurisprudencia dictada por el propio Tribunal, salvo que contravenga la jurisprudencia del Poder Judicial Federal, sin expresar la forma en que habrá de hacerse la cita de dicha jurisprudencia, menos aún en los términos en que lo expresa la autoridad recurrente.

Por tanto, la sentencia interlocutoria de 6 de febrero de 2007 que otorgó al actor la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada cumple con la debida fundamentación y motivación legal que todo acto de autoridad debe contener, conforme lo dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que como se ha señalado con antelación, la Primera Sala Regional del Golfo expresa los razonamientos jurídicos y lógicos que la llevaron a emitir su determinación y los preceptos en que apoya sus razonamientos emitiendo así una resolución precisa y clara.

En tales condiciones, al resultar infundados los argumentos vertidos por la autoridad recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia interlocutoria dictada por la Primera Sala Regional del Golfo el 6 de febrero de 2007, a través de la cual se

declara la suspensión definitiva a los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo 3758/06-13-01-2.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 20, fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Es procedente pero **INFUNDADO** el recurso de reclamación interpuesto por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica, en consecuencia;

II.- Se confirma la sentencia interlocutoria de 6 de febrero de 2007;

III.- Envíese copia del presente fallo a la Primera Sala Regional del Golfo, para que sea integrada a la carpeta de suspensión correspondiente;

IV.- No ha lugar a devolver la carpeta de suspensión, considerando que la Primera Sala Regional del Golfo sólo remitió a esta Sala Superior copias certificadas de las constancias de dicha carpeta.

V. Notifíquese. Con copia autorizada de la presente resolución y en su oportunidad archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de junio de 2007, por mayoría de 4 votos a favor de los CC. Magistrados Licenciados Silvia Eugenia Díaz Vega, Francisco Cuevas Godínez, Olga Hernández Espíndola, Luis Carballo Balvanera y 1 con los puntos resolutivos del Magistrado Guillermo Domínguez Belloc.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada Licenciada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 5 de julio de 2007, y con fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción III y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el C. Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

V-P-2aS-762

VIOLACIÓN SUBSTANCIAL AL PROCEDIMIENTO. INCURRE EN ELLA CUANDO EL MAGISTRADO INSTRUCTOR QUE ADMITE LA DEMANDA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN QUE NO ES LA IMPUGNADA.- Si al examinarse un asunto se advierte que el Magistrado Instructor incurrió en una violación substancial al procedimiento al haber admitido la demanda respecto de una resolución que no fue la efectivamente controvertida, al omitir considerar de manera integral el escrito de demanda que constituye un todo jurídico; dicha violación debe subsanarse, pues de lo contrario quedaría en estado de indefensión la demandada a la cual se emplazó en relación con una resolución que no era la controvertida. Lo anterior se traduce en que se ordene la reposición del procedimiento para que se admita la demanda debidamente y se emplace a la autoridad respecto de la resolución efectivamente controvertida, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en relación con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. (14)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2120/06-06-02-6/350/07-S2-07-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de junio de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2007)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

Esta Juzgadora advierte que el Magistrado Instructor del juicio contencioso administrativo incurrió en violaciones substanciales al procedimiento, toda vez que admitió la demanda respecto de una resolución que no era la efectivamente impugnada y no obstante que la actora mediante diverso escrito hace de su conocimiento dicha irregularidad así como señala domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas, no se regulariza el procedimiento.

1.- En efecto, tal y como quedó narrado en los resultandos de este fallo la demanda se formuló para controvertir la resolución que confirmó la liquidación contenida en el oficio 19671 de 2 de septiembre de 2005, lo que se confirma del análisis integral al escrito de demanda en el cual se puede apreciar que la mayoría de los conceptos de impugnación son tendentes a controvertir la resolución recurrida confirmada, como se aprecia del contenido de los considerandos tercero, cuarto, quinto y séptimo en los cuales se argumenta la ilegalidad del oficio liquidatorio recurrido 19671 por vicios propios y en otros porque deriva de un diverso oficio 16593 de 9 de agosto de 2005, por el que se le dan a conocer las irregularidades encontradas por la autoridad aduanera que dieron lugar al inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera al que recayó dicha liquidación.

No pasa inadvertido para esta Juzgadora que en el escrito de demanda la actora equivocadamente citó como número del oficio de la resolución impugnada la referente al oficio 05301 de 21 de noviembre de 2005, y no el oficio 05273 de 18 de noviembre de 2005. Sin embargo, corresponde al Magistrado Instructor analizar de manera conjunta el escrito de demanda para dilucidar cuál era efectivamente la resolución impugnada que resolvió el recurso de revocación, máxime que la actora sí precisa la resolución recurrida liquidatoria que estimó se confirmó ilegalmente, como se aprecia del contenido integral del escrito de demanda que a continuación se cita en su parte conducente:

D E M A N D A

"(...)

"EXPONER:

"Que con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 13, 14, 15, 40, 47, 49, 50, 51 y 52 fracción II y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con la personalidad señalada vengo a promover JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en contra de la resolución contenida en el oficio **325-SAT-28-V-R2-(B)-05301** de fecha 21 de noviembre de 2005, emitido por el Administrador Local Jurídico de Nuevo Laredo perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, mediante la que se ordenó la emisión de una nueva resolución, dejando insubsistente la resolución contenida en el oficio **326-SAT-A24-3-(C)-019671** de fecha 02 de septiembre de 2005, emitida por la Aduana de Nuevo Laredo, a través de la cual se impuso en contra de mi representada un crédito fiscal en cantidad total $98,673.00 (NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100M.N), por concepto de impuesto general de importación, derecho de trámite aduanero, actualización recargos y multas; para lo cual de conformidad a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, hago de su conocimiento lo siguiente:

"I.- NOMBRE Y DOMICILIO FISCAL DEL ACTOR: Quedó precisado en el proemio de este escrito.

"II.- RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La resolución contenida en el oficio número **325-SAT-28-V-R2-(B)-05301** de fecha 21 de noviembre de 2005, emitido por el Administrador Local Jurídico de Nuevo Laredo, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, mediante la que se ordenó la emisión de una nueva resolución, dejando insubsistente la resolución contenida en el oficio **326-SAT-A24-3-(C)-019671** de fecha 02 de septiembre de 2005, emitida por la Aduana de Nuevo Laredo, a través de la cual se impuso en contra de

mi representada un crédito fiscal en cantidad total de $98,673.00 (NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), por concepto de impuesto general de importación, derecho de trámite aduanero, actualización, recargos y multas.

"(...)

"V.- FECHA NOTIFICACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.- Señalo bajo protesta de conducción verídica que el oficio número **325-SAT-28-V-R2-(B)-05301** de fecha 21 de noviembre 2005, emitido por el Administrador Local Jurídico de Nuevo Laredo, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, me fue notificado el día 17 de enero de 2006, como se acredita con el acta de notificación de esa fecha, por lo que esta demanda se encuentra asentada dentro del plazo que establece el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, siendo la fecha de su vencimiento el día lunes 27 de marzo de 2006.

"(...)

"QUINTO: Con fecha 13 de septiembre de 2005, fue notificado el oficio **326-SAT-A24-3-(C)-019671** de fecha 02 de septiembre de 2005, emitido por el Subadministrador de Control, de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Nuevo Laredo, de la Administración General de Aduanas, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, mediante la que se impuso en contra de mi representada un crédito fiscal en cantidad total de $98,673.00 (NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.), por concepto de impuesto general de importación, derecho de trámite aduanero, actualización, recargos y multas.

"SEXTO: El día 17 de noviembre de 2005 fue presentado recurso administrativo de revocación al que le correspondió el folio de trámite número 07985, en contra de la resolución contenida en el **326-SAT-A24-3-(C)-019671** de fecha

02 de septiembre de 2005, emitido por el Subadministrador de Control, de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Nuevo Laredo, de la Administración General de Aduanas, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria

"SÉPTIMO: Señalo bajo protesta de conducción verídica que con fecha 17 de enero de 2006, que notificado el oficio **325-SAT-28-V-R2-(B)-05301 (SIC)** de fecha 21 de noviembre de 2005, emitido por el Administrador Local Jurídico de Nuevo Laredo, del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual se ordenó la emisión de una nueva resolución, dejando insubsistente la resolución contenida en el oficio **326-SAT-A24-3-(C)-019671** de fecha 02 de septiembre de 2005 emitida por la Aduana de Nuevo Laredo a través de la cual se impuso en contra de mi representada un crédito fiscal en cantidad total de $98,673 00 (NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M N) por concepto de impuesto general de importación derecho de trámite aduanero actualización recargos y multas.

"(...)

"TERCERO: La resolución que por este medio se controvierte vulnera en perjuicio de mi representada las garantías constitucionales tuteladas por los artículos 14 y 16 en correlación con los diversos 38, fracción III, 132 y 133 fracción IV del Código Tributario Federal, ya que de conformidad al SEGUNDO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN debió ser revocada sin señalar efecto alguno, por lo siguiente:

"Como fue demostrado en el recurso de revocación, la resolución administrativa contenida en el oficio número **326-SAT-A24-3-(C)-016593** de fecha 09 de agosto de 2005, emitida por la Subadministración de Control de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Nuevo Laredo, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, mediante la cual se notificaron irregularidades, así como la diversa resolución contenida en el oficio **326-SAT-A24-3-(C)-019671** de fecha 02 de septiembre de 2005, se desprende que la autoridad para fundar su competencia estableció lo siguiente:

"(...)

"QUINTO: La resolución que se controvierte conculca en contra de los intereses de mi representada la garantía de seguridad jurídica tutelada por el artículo 16 Constitucional en correlación con el principio de legalidad tutelado por el artículo 38 fracción III en correlación a los diversos 132 y 133 fracción IV del Código Fiscal Federal, ya que de conformidad a lo expuesto en el CUARTO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN esta debió ser revocada por la autoridad y ya que el referido agravio no fue estudiado se inserta a la letra:

"(...)

"En este orden de ideas, la autoridad después de efectuado el despacho procedió a la revisión legal y contable del pedimento de importación y documentos anexos, detectando supuestas irregularidades determinando presuntivamente la procedencia de una liquidación del impuesto general de importación y luego notificando las irregularidades que implican la presunta omisión de contribuciones otorgando un plazo de diez días para presentar pruebas y alegatos mediante el oficio 326-SAT-A24-3-(C)-016593, sin embargo, previo a la instauración del procedimiento de comprobación en contra de mi representada la autoridad jamás emitió una orden debidamente fundada y motivada dejando a mi representada en completo estado de incertidumbre jurídica, hecho que desde este momento se niega en forma lisa y llana de conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, razón por la cual debe ser revocado el acto que se controvierte de conformidad a lo dispuesto por los artículos 132 y 133, fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

"(...)

"SÉPTIMO: Debe ser anulada en forma lisa y llana la resolución que se controvierte y el crédito fiscal que fue recurrido al vulnerar en contra de

ABASTECEDORA DE MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIAL, S. A. DE C.V., los artículos 14 y 16 Constitucionales en correlación a los diversos 38, fracción III, 132 y 133 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, pues la autoridad omitió entrar al estudio del SÉPTIMO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN, mismo que se inserta a la letra:

"Debe ser revocada la resolución administrativa contenida en el oficio número 326-SAT-A24-3-(C)-019671 de fecha 02 de septiembre de 2005, emitida por el Subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Nuevo Laredo de conformidad a lo dispuesto por los artículos 132 y 133 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, debido a que en lo referente al Capítulo de sanciones que se establecen en la resolución que se pone a su consideración, al ser éstas consecuencia de o accesorias del crédito principal, deben ser dejadas sin efectos al correr la suerte del primero.

"(...)

"VIII.- PRUEBAS

"(...)

"1.- Oficio de notificación de irregularidades número 326-SAT-A24-3-(C)-016593, así como el acta de notificación de fecha 11 de agosto de 2005 y el citatorio de fecha 10 de agosto de 2005.

"2.- Crédito fiscal contenido en el oficio 326-SAT-A24-3-(C)-019671 de fecha 02 de septiembre de 2005, así como el acta de notificación de fecha 13 de septiembre de 2005 y el citatorio de 12 septiembre de 2005.

"(...)

"6.- Resolución administrativa contenida en el oficio número 325-SAT-28-V-R2-(B)-05301 de fecha 21 de noviembre de 2005, emitida por la Administración Local Jurídica de Nuevo Laredo Tamaulipas.

"(...)"

2.- De igual forma, como se precisó en los resultandos de este fallo, el Magistrado Instructor admitió la demanda por lo que hace a la resolución contenida en el oficio 5301 que confirmó una diversa resolución liquidatoria contenida en el oficio 20148, que no es impugnada por la actora, como se demuestra del análisis integral al escrito de demanda, como se aprecia del auto admisorio que a continuación se cita:

"SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NORESTE
"EXPEDIENTE: 2120/06-06-06-02-6
"ACTOR: ABASTECEDORA DE MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C. V.

"Monterrey, Nuevo León, seis de abril de dos mil seis.- Visto el escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales del Noreste de este Tribunal el día 24 de marzo del año en curso, por medio del cual el C. RUBÉN MORENO IZAGUIRRE, en representación de la empresa denominada ABASTECEDORA DE MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIALES, S.A. DE C.V., personalidad que acredita con copia del primer testimonio de la escritura pública número 31,371, de 18 de abril de 2005, otorgada ante la fe del C. ARTURO RAMOS ARIAS, Notario Público Titular número 52, con ejercicio en Guadalajara, Jalisco, comparece impugnando la resolución contenida en el **oficio número 325-SAT-28-V-R2-(B)-05301**, de fecha 21 de noviembre de 2005, emitida por el C. Administrador Local Jurídico de Nuevo Laredo, mediante la cual se resuelve el recurso de revocación número RR 1638/2005, dejando insubsistente la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-A24-3-(C)-020148, de 8 de septiembre de 2005, emitido por la Aduana de

Nuevo Laredo, en la que se determina un crédito fiscal en cantidad de $246,173.00.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º, 14 y 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 11, 28, 30, 31 y 36, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en el artículo 23, fracción VI, del Reglamento Interior de este Tribunal, **SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA**; por lo que, con una copia simple de la misma y de sus anexos, córrase traslado a la autoridad que dictó la resolución impugnada, el C. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE NUEVO LAREDO, por conducto del C. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE MONTERREY, emplazándolo para que la conteste en el término que marca la ley, apercibido que de no hacerlo se aplicará lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se tienen por ofrecidas y exhibidas las pruebas indicadas en el capítulo respectivo de la demanda a excepción de la prueba marcada con el punto 3, consistente en el pedimento de importación número 3422-1001740, así como de sus anexos, toda vez que el pedimento se encuentra ilegible, además de que no anexó la traducción correspondiente a los anexos, por lo que con fundamento en el artículo 15, fracción IX y penúltimo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se requiere a la actora para que dentro del plazo de cinco días exhibiera ante esta Sala dicha probanza, con copia de la misma y del escrito por medio del cual de cumplimiento al requerimiento en cita, para el traslado relativo, apercibida que de no cumplir con lo indicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se tendrá por no ofrecida dicha probanza.- Dígase a la actora que conforme al artículo 5º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se tiene como abogado autorizado al C. BERNARDO BARAJAS ROMERO; en cuanto a los CC. JUAN ANTONIO DÍAZ MORFÍN, EDGAR ARÓN GONZÁLEZ MARQUEZ, MANUEL GONZÁLEZ SANTANA Y ERICK RETANA CORTÉS, se acordará lo conducente una vez que acrediten tener debidamente registrada su cédula profesional de Licenciados en Derecho ante este Tribunal.- Visto que el domicilio indicado para reci-

bir notificaciones ubicado en Avenida Juan Palomar y Arias número 481, tercer piso, entre las calles de Manuel Acuña y Mayas, Fraccionamiento Monráz, en Guadalajara, Jalisco, se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de esta Sala y que el domicilio fiscal de la empresa actora se ubica dentro de dicha jurisdicción, con fundamento en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con la fracción I del mismo precepto , notifíquese a la parte actora por lista.- Asimismo, de conformidad con el párrafo final del artículo 10 del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que cuentan con cinco días hábiles, para oponerse a que se publique la sentencia ejecutoriada respectiva con sus datos personales, en el entendido de que de no hacerlo, se tiene por aceptado que la sentencia se publicará sin dichos datos.- Comuníquese a las partes que si lo desean podrán señalar su clave o dirección de correo personal electrónico, a fin de que por este medio se les dé aviso de la emisión de los autos y resoluciones que se dicten en el juicio, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS."

3.- Irregularidad que trasciende al sentido de la resolución impugnada en virtud de que la autoridad demandada al formular su contestación a la demanda se pronunció respecto de la resolución contenida en el oficio 5301 y a la resolución liquidatoria confirmada por dicho oficio contenida en el oficio número 20148, que no fueron controvertidas en la demanda. Lo anterior como se constata del auto admisorio en el cual se emplazó a la autoridad demandada, con la contestación a la demanda que obra a fojas 135 a 175 del expediente, como se aprecia de la parte conducente de la contestación formulada por la autoridad emplazada:

C O N T E S T A C I Ó N

"SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

"ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA
"ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA DE MONTERREY

"Oficio Núm. 325-SAT-19-II-04-5299
"Exp. 300(18)28296

"Monterrey, Nuevo León, a 03 de julio de 2006.

"Asunto: Juicio de Nulidad 2120/06-06-02-6, promovido por ABASTECEDORA DE MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V.- Se contesta demanda.

"CC. MAGISTRADOS QUE
INTEGRAN LA SEGUNDA SALA
REGIONAL DEL NORESTE DEL H.
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA
"P r e s e n t e.

"FRANCISCO ARCEO GUERRERO, Administrador Local Jurídico de Monterrey, en representación del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio Administración Tributaria y de la autoridad demandada, con fundamento en el Artículo 24 fracción III del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2005, comparece para exponer:

"En relación con la demanda de nulidad instaurada por ABASTECEDORA DE MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V., en contra de

la resolución contenida en el oficio **No. 325-SAT-28-V-R2-(B)-05301** de 21 de noviembre de 2005, emitida por la Administración Local Jurídica de Nuevo Laredo, mediante la cual se resuelve el recurso de revocación número RR 1638/2005, dejando insubsistente la diversa contenida en el oficio número **326-SAT-A24-3-(C)-Q2Q148** de 08 de septiembre de 2005, emitida por la Aduana de Nuevo Laredo, mediante la cual se determinó un crédito fiscal en cantidad de $246,173.00; en vía de contestación a la demanda se manifiesta:

"REFUTACIÓN A LOS HECHOS DE DEMANDA

"Primero.- El punto de hechos que se contesta, ni se admite ni se niega por no ser un hecho propio de mi representada.

"Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo.- Los correlativos puntos de hechos se aceptan por estimarse ciertos.

"(...)"

4.- Máxime, que la actora presentó escrito de aclaración de la correcta resolución impugnada, con fecha 25 de agosto de 2006, como se indicó en el resultando 7º, que a continuación se cita:

"NOMBRE: ABASTECEDORA DE MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
"ASUNTO: ESCRITO EN ALCANCE
"EXPEDIENTE: 2120/06-06-02-6.

"H. SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NOROESTE
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL
Y ADMINISTRATIVA.
"P R E S E S E N T E.

"RUBÉN MORENO IZAGUIRRE, mexicano, mayor de edad, con carácter de representante legal de la empresa denominada ABASTECEDORA DE MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V., sin presentar modificación alguna en cuanto al domicilio convencional señalado y las personas autorizadas para recibir notificaciones, con el debido respeto comparezco a,

"EXPONER

"Que con la personalidad señalada, vengo con fundamento en los artículos 1, 2 y 14 fracciones del (sic) Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 11, fracción I, 28, fracción IV, 30 y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que el 24 de marzo de 2006 fue presentada demanda de nulidad en contra de la resolución administrativa contenida en el oficio 325-SAT-28-V-R2-(C)-05301 de fecha 21 de noviembre de 2005, siendo la resolución impugnada correcta la contenida en el oficio número 325-SAT-28-V-R2-(C)-05273 de fecha 18 de noviembre de 2005, relativa al recurso de revocación 1643/2005, en el que se deja insubsistente la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-A24-3(C)-019671 de fecha 02 de septiembre de 2005 emitido por la Aduana de Nuevo Laredo.

"Asimismo tal como se manifestó en el escrito inicial de demanda presentado con fecha 24 de marzo de 2006, de nueva (sic) se ofrecen como pruebas todas y cada una de las actuaciones que componen el expediente administrativo que tiene la autoridad demandada, de conformidad con el (sic) numerales 14 fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 2 fracción VI de la Ley Federal de Derecho del Contribuyente.

"Se señala como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Nogal número 214, colonia Granjas Económicas, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo anterior con fundamento en el artículo 14 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señalado.

"Además con fundamento en el artículo 67, último párrafo de la Ley Federal del (sic) Procedimiento Contencioso Administrativo, proporciono el siguiente correo personal electrónico: jdm@gorb.com.mx para efectos de recibir los avisos correspondientes.

"Por lo anteriormente expuesto y fundado a este H. Tribunal, atentamente se,

"PIDE

"ÚNICO.- Se tenga por presentado el presente escrito en tiempo y forma, en los términos que se plantean.

"A T E N T A M E N T E
"Monterrey, Nuevo León; a la fecha de su presentación.

"RUBÉN MORENO IZAGUIRRE
"REPRESENTANTE LEGAL DE
ABASTECEDORA DE MATERIAS PRIMAS
AGROINDUSTRIAL, S.A. C.V."

5.- Por lo cual resulta evidente que en el presente juicio no es posible la emisión de la resolución definitiva que ponga fin al juicio en virtud de que no se ha conformado la litis pues ésta se configura con la demanda y la contestación correspondiente respecto de la misma resolución impugnada en la demanda, y no cuando la autoridad se ha pronunciado en cuanto a la legalidad de una diversa resolución de la que pretendió controvertir la actora en su demanda, derivado del error incurrido por el Magistrado Instructor al admitir la demanda respecto de una resolución distinta a la que se pretendía atendiendo al análisis integral de la demanda que constituye un todo jurídico y que en todo caso ante la confusión de la demanda en el señalamiento del número de la resolución impugnada y la expresión de los conceptos de impugnación referentes a diversos actos administrativos, correspondía al Magistrado Instructor requerir a la actora la aclaración de su demanda.

6.- Violación al procedimiento contencioso administrativo que vulnera lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone que admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los 45 días siguientes a que surta efectos el emplazamiento.

Lo anterior, en virtud de que el emplazamiento por el Magistrado Instructor a la autoridad demandada resultó ilegal al realizarse respecto de una resolución impugnada distinta de la que se pretendía controvertir en la demanda.

7.- Por tanto, el Magistrado Instructor debe considerar para el emplazamiento de la autoridad demandada, el escrito aclaratorio presentado por la actora, el 25 de agosto de 2006, que precisa cuál es el número de oficio correcto de la resolución impugnada que confirmó la resolución liquidatoria recurrida 019671, mencionada esta última desde su escrito inicial de demanda y sobre la que versan los diversos conceptos de impugnación expresados en dicha demanda al estimar que la confirmación de tal liquidación no se sujetó a derecho.

8.- El Magistrado Instructor, al subsanar la violación cometida en cuanto a la admisión y emplazamientos incorrectos, deberá proveer lo conducente respecto del ofrecimiento de pruebas que pretende realizar la actora en su escrito aclaratorio de 25 de agosto de 2006, considerando que el momento oportuno para el ofrecimiento de pruebas lo era el escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 14 fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

9.- De igual forma, el Magistrado Instructor debe considerar el mismo escrito aclaratorio que, entre otros aspectos, señala como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el ubicado en Nuevo Laredo Tamaulipas, que se hace en los términos del artículo 14, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que a continuación se cita:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

"**ARTÍCULO 14.-** La demanda deberá indicar:
"**I.** El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala Regional competente, en cuyo caso, el domicilio señalado para tal efecto deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala competente.
"(...)
"En el supuesto de que no se señale domicilio del demandante para recibir notificaciones conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo o se desconozca el domicilio del tercero, las notificaciones relativas se efectuarán por lista autorizada, que se fijará en sitio visible de la propia Sala."

Por lo anterior, resulta evidente que es procedente ordenar se devuelvan los autos a la Segunda Sala Regional del Noreste de este Tribunal, para que el Magistrado Instructor subsane la omisión cometida, desde la admisión de la demanda, debiendo considerar como resolución impugnada la contenida en el oficio 5273 emitida por el Administrador Local Jurídico de Nuevo Laredo, que confirmó la liquidación recurrida contenida en el oficio 19671; emplazando a la autoridad demandada respecto de la resolución efectivamente controvertida en la demanda y pronunciándose respecto de los diversos aspectos a que se refiere el escrito aclaratorio de 25 de agosto de 2006, que se refieren a la pretendida intención de ofrecer en dicho escrito pruebas y en cuanto al señalamiento del domicilio convencional de la actora en Nuevo Laredo Tamaulipas para efectos del artículo 14, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en cuanto al señalamiento del correo electrónico para efectos de recibir los avisos correspondientes.

Es aplicable por analogía la tesis aislada II-TASS-1348, emitida por el Pleno de este Tribunal, publicada en la Revista del entonces Tribunal Fiscal de la Federa-

ción, Segunda Época, Año II, Número 12, Mayo-Junio de 1980, página 148, que a la letra se cita:

> "**VIOLACIONES SUSTANCIALES AL PROCEDIMIENTO.- SON AQUÉLLAS QUE AFECTAN EN SU DEFENSA A ALGUNA DE LAS PARTES Y POR ELLO DEBE ORDENARSE SU REPOSICIÓN**.- Si al examinarse un asunto en revisión se advierte que se incurrió en una violación sustancial del procedimiento, en tanto que de no subsanarla quedaría alguna de las partes en estado de indefensión, como sería la relativa a que habiéndose ordenado la acumulación de un juicio a otro, sólo se dicta sentencia respecto de éste, debe ordenarse su reposición para el efecto de que se subsane la irregularidad cometida.
>
> "Revisión No. 101/79.- Resuelta en sesión de 21 de mayo de 1980, por unanimidad de 6 votos.- Magistrado Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretaria: Lic. Arely Gómez González."

Hecho lo anterior, una vez cerrada debidamente la instrucción, previo otorgamiento a las partes del término para formular alegatos se remitan los autos del expediente original a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior para la emisión de la sentencia definitiva correspondiente que se emita por esta Segunda Sección de la Sala Superior.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50 y 239-A, fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I. Devuélvanse los autos originales del juicio a la Segunda Sala Regional del Noreste de este Tribunal, para el efecto de que se regularice el procedimiento en los términos precisados en el presente fallo.

II. En su oportunidad, y una vez integrado el expediente con todas las probanzas respectivas para resolver las cuestiones planteadas, se remitan los autos a esta

Segunda Sección de la Sala Superior, para que emita la resolución definitiva correspondiente.

III. Notifíquese.- Con copia certificada de este fallo, y cúmplase una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de junio de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor de los Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Silvia Eugenia Díaz Vega, Francisco Cuevas Godínez, Olga Hernández Espíndola y Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 4 de julio de 2007, y con fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción III y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

V-P-2aS-763

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. PROCEDE CONCEDERLA AUN Y CUANDO EL EMBARGO PRACTICADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOBRE BIENES MUEBLES DEL CONTRIBUYENTE, NO ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.- El embargo llevado a cabo por la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución no requiere estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad en términos del artículo 66 del Reglamento del Código Fiscal de Federación, el cual sólo prevé ese requisito tratándose del embargo en vía administrativa. (15)

Recurso de Reclamación Núm. 6457/06-12-03-8/514/07-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de julio de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de julio de 2007)

PRECEDENTES:

V-P-2aS-643
Recurso de Reclamación Núm. 4760/06-12-01-1/819/06-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de marzo de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Abril 2007. Núm. 76. p. 168

V-P-2aS-644

Recurso de Reclamación Núm. 6197/06-12-03-6/43/07-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.

(Tesis aprobada en sesión de 13 de marzo de 2007)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Abril 2007. Núm. 76. p. 168

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

V-P-2aS-764

DESECHAMIENTO DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN POR ACUERDO DE LA SALA DE CONOCIMIENTO DEL JUICIO.- ES IMPUGNABLE EN RECLAMACIÓN SI TIENE POR CONTENIDO LA NEGATIVA A LO SOLICITADO.- El artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece en forma enfática, como hipótesis de procedencia del recurso de reclamación, que se promueva en contra de las sentencias interlocutorias que concedan o nieguen la suspensión definitiva; por lo que las Salas Regionales deben resolver las solicitudes mediante una sentencia interlocutoria, de tal manera que si en el caso se emite un acuerdo de Sala, debe considerarse colmado el supuesto normativo, si el acto jurisdiccional combatido es un pronunciamiento colegiado de la Sala suscrito por sus tres integrantes, que tenga por contenido material la negativa a conceder dicha medida cautelar, no obstante que al concluir su argumentación denegatoria, la culmine señalando que se desecha la solicitud del interesado, pues tal pronunciamiento colectivo tiene carácter definitivo, dilucidando el fondo de la solicitud suspensional planteada y de otra suerte se dejaría en total estado de indefensión al solicitante. (16)

Recurso de Reclamación Núm. 12268/06-17-11-2/479/07-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de julio de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de julio de 2007)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN. El recurso de reclamación que se resuelve no resulta procedente, atendiendo a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se apuntan:

El artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece:

> "**Artículo 62.-** Como único caso de excepción, las sentencias interlocutorias que concedan o nieguen la suspensión definitiva, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sección de la Sala Superior en turno del Tribunal, mediante escrito que se presente ante la Sala Regional que haya dictado la sentencia, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva.
> "Interpuesto el recurso en los términos señalados en el párrafo anterior, la Sala Regional ordenará correr traslado a la contraparte por el término de cinco días para que exprese lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido dicho plazo, la Sala Regional remitirá a la Sección de la Sala Superior que por turno corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes, copia certificada del escrito de demanda, de la sentencia interlocutoria recurrida, de su notificación y del escrito que contenga el recurso de reclamación, con expresión de la fecha y hora de recibido.
> "Una vez remitido el recurso de reclamación en los términos antes señalados, se dará cuenta a la Sala Superior que por turno corresponda para que resuelva en el término de cinco días."

De la lectura al precepto legal transcrito, se desprende que la procedencia del recurso de reclamación, se sustenta en:

1. Que su interposición sea en contra de las sentencias interlocutorias que concedan o nieguen la suspensión definitiva y;

2. Que se presente dentro de los cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación respectiva.

Bajo ese orden de ideas, y a fin de determinar si se cumple el primero de los requisitos, esto es, si el recurso de reclamación se interpuso en contra de una sentencia interlocutoria que niegue la suspensión definitiva, es de señalar que en el caso, el mencionado recurso se promueve en contra del acuerdo de Sala de fecha 25 de abril de 2006, emitido por los Magistrados integrantes de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, por el que desecharon por notoriamente improcedente la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas, en los siguientes términos:

"**SUSPENSIÓN**
"**ACUERDO DE SALA**
"DÉCIMO PRIMERA SALA
"**REGIONAL METROPOLITANA**
"**EXPEDIENTE: 12268/06-17-11-2**
"**ACTOR: AUTOFINANCIAMIENTO**
"**MÉXICO, S.A. DE C.V.**

"México, Distrito Federal, a veinticinco de abril de dos mil seis.- Visto el escrito inicial de demanda recibido en este Tribunal el día 19 de abril de 2006, y tomando en cuenta que a folios 04 de autos, el enjuiciante solicita la suspensión del acto impugnado.- En este sentido con fundamento e el artículo 28, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece: 'El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo, cuando la autoridad niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución (…)'. Luego entonces y si bien, el enjuiciante e el escrito de cuenta, solicita la suspensión del acto impugnado, no menos cierto es, que del análisis realizado al capítulo de suspensión, se determina que el enjuiciante no acredita, ni demuestra encontrarse en los supuestos

a que se refiere el numeral en cita, ya que no acredita que la autoridad ejecutora le haya negado la suspensión, le haya rechazado la garantía ofrecida o reiniciado la ejecución, por lo tanto, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en términos del artículo 1º de la misma, **SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA**, ya que en el caso particular el enjuiciante no acreditó encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 28, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.-** Así lo resolvieron y firman por mayoría los CC. Magistrados María Sofía Sepúlveda Carmona y el Magistrado (sic) Gustavo Arturo Esquivel Vázquez, como Presidente e Instructor en el presente juicio, y un voto en contra de la C. Magistrada María de Jesús Herrera Martínez, mismos que integran la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana, ante el C. Francisco Javier Míreles Maldonado, Secretario de Acuerdos que actúa (sic) y da fe."

De la transcripción que antecede, se advierte que el acuerdo de Sala recurrido, desecha la solicitud de suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas, por considerarla notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 28, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual en lo conducente establece:

"**Artículo 28.-** El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos.
"(…)"

Asimismo, se advierte que la Sala de origen en esencia, precisó como motivo para negar la suspensión solicitada, que el actor no acreditó encontrarse en los su-

puestos señalados en el primer párrafo del artículo transcrito, esto es, que no demostró que la autoridad ejecutora le haya negado la suspensión, rechazado la garantía ofrecida o reiniciado la ejecución.

De lo anterior, se tiene que el acuerdo de Sala recurrido en la presente vía define la situación jurídica del particular en lo referente a la suspensión solicitada, pues para ello vierte fundamentos y motivos que en esencia la niegan.

Ello es así, pues es evidente que la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, al desechar por notoriamente improcedente la suspensión solicitada, conforme a lo previsto en el artículo 28 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, considerando que el actor no acreditó que la autoridad ejecutora le haya negado la suspensión, rechazado la garantía ofrecida o reiniciado la ejecución, con ello está haciendo un pronunciamiento definitivo y por ende, dilucidando el fondo de la cuestión suspensional planteada, lo que debe considerarse una resolución jurisdiccional que puede ser combatida mediante el recurso de reclamación previsto por el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyo texto quedó debidamente precisado en párrafos que anteceden.

Ahora bien, aun cuando es cierto que el artículo 62 de la Ley procesal citada, es enfático en establecer que el recurso de reclamación procede en contra de sentencias interlocutorias que concedan o nieguen la suspensión definitiva; por esta expresión debe entenderse cualquier resolución jurisdiccional adoptada por la Sala de origen, que materialmente defina la situación jurídica del justiciable en relación con la suspensión solicitada, y si esto como en el caso, se hizo mediante un acuerdo de Sala en el que la mayoría de los Magistrados integrantes de la misma niegan la suspensión de los actos impugnados, no obstante en apariencia sólo “desechan” la solicitud de la medida cautelar, es inconcuso entonces, que se trata en realidad de una sentencia interlocutoria que está poniendo fin al procedimiento de suspensión de la ejecución de los actos impugnados, razón por la cual en contra de la misma es plenamente procedente la interposición del recurso de reclamación previsto por el artículo en

comento, pues considerarlo de otra suerte se dejaría en total estado de indefensión al solicitante.

(...)

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 20, fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Ha resultado improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el representante de la parte actora, en consecuencia;

II.- Se desecha el recurso de reclamación por los fundamentos y motivos precisados en el considerando segundo de este fallo.

III.- Gírese atento oficio a la **Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal**, remitiéndole copia certificada de la presente sentencia para que sea agregada a la carpeta de suspensión.

IV.- NOTIFÍQUESE.- A las partes el presente fallo, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la H. Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de julio de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor de los CC. Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Silvia Eugenia Díaz Vega, Francisco Cuevas Godínez, Olga Hernández Espíndola y Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el día 7 de agosto de 2007, y con fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción III y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

V-P-2aS-765

EMBARGO DE LA NEGOCIACIÓN PRACTICADO POR LAS AUTORIDADES FISCALES DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, ES SUFICIENTE PARA ESTIMAR QUE EL INTERÉS FISCAL SE ENCUENTRA GARANTIZADO ANTE LA AUTORIDAD EJECUTORA Y POR ELLO PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.- Del contenido de los párrafos primero y séptimo, del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que no se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales, previéndose que no se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, de lo que se evidencia, que el Legislador Federal estableció en el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, que el embargo de bienes suficientes para garantizar el interés fiscal practicado por parte de la autoridad dentro del citado procedimiento, excluye la posibilidad de solicitar al contribuyente garantía adicional para estos efectos. Por lo tanto, el embargo de la negociación de un contribuyente, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, realizado en la vía ejecutiva por parte de la autoridad fiscal, se constituye como garantía del interés fiscal, y por ello si los créditos que se pretenden hacer efectivos a través de dicha ejecución se encuentran impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; se estima que se cumplen los requisitos que prevé la fracción VI, del artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que se conceda la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio, así como para que dicha suspensión surta sus efectos. (17)

Recurso de Reclamación Núm. 1104/06-14-01-5/515/07-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de julio de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en

contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.
(Tesis aprobada en sesión de 5 de julio de 2007)

EN EL MISMO SENTIDO:

V-P-2aS-766

Recurso de Reclamación Núm. 5641/06-01-01-6/437/07-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de julio de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Claudia Palacios Estrada.
(Tesis aprobada en sesión de 5 de julio de 2007)

PRECEDENTES:

V-P-2aS-698
Recurso de Reclamación Núm. 1224/06-08-01-9/283/07-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de mayo de 2007, por unanimidad de 4 votos.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de mayo de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 77. Mayo 2007. p. 526

V-P-2aS-720
Recurso de Reclamación Núm. 5558/06-12-01-4/344/07-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de mayo de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de mayo de 2007)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 78. Junio 2007. p. 304

V-P-2aS-741

Recurso de Reclamación Núm. 9572/06-11-02-3/413/07-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de junio de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.

(Tesis aprobada en sesión de 5 de junio de 2007)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 79. Julio 2007. p. 176

TERCERA PARTE

CRITERIOS AISLADOS DE SALA SUPERIOR Y SALAS REGIONALES

TESIS

PRIMERA SECCIÓN

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

DESPACHO ADUANERO. EN CASO DE RECLASIFICACIÓN ARANCELARIA, PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LA MERCANCÍA, PARA EFECTOS DE TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL, LA AUTORIDAD DEBE CONCEDER A LA IMPORTADORA PLAZO PARA QUE EXHIBA UN NUEVO CERTIFICADO Y PARA PRESENTAR LA RECTIFICACIÓN DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN.- La regla 3.5.6 de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 2000, establece que: "Cuando se importen mercancías bajo trato arancelario preferencial amparadas con un certificado de origen, de conformidad con algún tratado de libre comercio, y con motivo del dictamen de la Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos de la Administración General de Aduanas, les sea determinada una clasificación arancelaria diferente a la que el agente o apoderado aduanal declare en el pedimento, el importador contará por única vez con un plazo de 5 días contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho dictamen, para presentar una rectificación a dicho pedimento". Por su parte la regla 27 de la Resolución por la que se establecen las Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicada el 15 de septiembre de 1995 en el Diario Oficial de la Federación, señala: "Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 502(1)(c) del Tratado, y la fracción IV de la regla 25 de la presente Resolución, cuando el certificado de origen presentado sea ilegible, defectuoso, o no se haya llenado de conformidad con lo dispuesto en la Sección II de este Título, la autoridad podrá requerir al importador para que en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del

requerimiento, presente una copia del certificado de origen en que se subsanen las irregularidades mencionadas". En tal contexto es válido concluir que la autoridad aduanera, antes de pronunciarse sobre el origen de la mercancía importada para efectos del trato arancelario preferencial solicitado, deberá conceder previamente el plazo de 5 días que respectivamente establecen las reglas citadas, el primero para que la importadora esté en posibilidad de solicitar y exhibir un nuevo certificado para esclarecer cualquier duda que se tuviera sobre el origen de la mercancía y, el segundo, para presentar la rectificación de los pedimentos de importación, ya que de no hacerlo estará violando el procedimiento en perjuicio del particular, al no aplicar las disposiciones debidas en detrimento de su garantía de audiencia. (1)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3958/06-06-02-9/92/07-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de abril de 2007, por mayoría de 3 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Vázquez Galicia.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2007)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEXTO.- (...)

En este tenor, es de puntualizar que, contrario a lo manifestado por la autoridad demandada, la facultad contenida en la regla 27, no es de carácter discrecional sino obligatoria, no obstante que su texto indique "la autoridad **podrá** requerir al importador", pues ello no significa que deba entenderse como una posibilidad, habida cuenta que dicha regla precisa la forma en que ha de aplicarse el tratado internacional, de manera específica cuando el documento con el que se acredita el trato arance-

lario preferencial, certificado de origen, **sea presentado de forma incorrecta por el importador, a fin de permitir que lo corrija y presente un certificado de origen corregido.** Esto es, el dar oportunidad de demostrar el origen y procedencia de las mercancías no debe estar sujeto a la voluntad de la autoridad aduanera, sino que tal mandato deviene de la ley, por lo cual tal facultad no es potestativa sino obligatoria para la autoridad.

Al respecto, son aplicables al caso las tesis V-P-1aS-94 y V-P-1aS-229 emitidas por esta Primera Sección, que sustancialmente son iguales en su contenido y redacción, por lo que sólo se transcribe la primera, que dice:

> "**FACULTAD ESTABLECIDA EN LA REGLA 27 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA, DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995. NO ES POTESTATIVA, SINO OBLIGATORIA**.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en la tesis 2a. LXXXVI/97, que: 'En el ámbito legislativo el verbo 'poder' no necesariamente tiene el significado de discrecionalidad, sino que en ocasiones se utiliza en el sentido de 'obligatoriedad', (...), por lo que para descubrir la verdadera intención del creador de la ley, los principios filosóficos de derecho y de la hermenéutica jurídica aconsejan que es necesario armonizar o concordar todos los artículos relativos a la cuestión que se trate de resolver, (...) para llegar a la conclusión de que la disposición normativa en que se halla inserto, otorga una facultad potestativa o discrecional a la autoridad administrativa.' Ahora bien, partiendo del hecho de que una de las finalidades del Tratado de Libre Comercio de América del Norte consiste, de acuerdo a lo dispuesto por su artículo 102 (1) (a) y (e), en la eliminación de obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las Partes, así como crear procedimientos eficaces para la aplicación y

cumplimiento del Tratado, para su administración conjunta, y para la solución de controversias; y que conforme al artículo 502 (1) (c) del citado Tratado, el importador sólo está obligado a proporcionar una copia del certificado, cuando se lo solicite la autoridad aduanera; a juicio de esta juzgadora, el hecho de que en la regla 27 de la Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1995, se establezca que 'para los efectos de lo dispuesto en el artículo 502(1)(c) del Tratado, y la fracción IV de la regla 25 de la presente Resolución, cuando el certificado de origen presentado sea ilegible, defectuoso, o no se haya llenado de conformidad con lo dispuesto en la Sección II de este Título, la autoridad podrá requerir al importador a fin de que en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, presente una copia del certificado de origen en que se subsanen las irregularidades mencionadas', **no debe interpretarse como una facultad discrecional por la utilización del verbo poder, sino obligatoria, en virtud de que la regla señala los requisitos para su aplicación (cuando el certificado de origen se presente ilegible, defectuoso, o no se haya llenado de conformidad con lo dispuesto en la Sección II del Título III de la citada resolución), por lo que tal situación obliga a la autoridad a dar la oportunidad al importador de presentar un certificado de origen corregido.** Interpretar lo contrario equivaldría a dejar al arbitrio de la autoridad el otorgar o no la oportunidad a los importadores de demostrar el origen de las mercancías, creando con ello una desigualdad procedimental al otorgar a unos y no a otros dicha oportunidad; más aún carecería de sentido la regla en cuestión, si su trámite dependiera únicamente de la voluntad de la autoridad. (14)"

Por otra parte, es de precisar a la autoridad que la regla 27 aludida, se refiere a la posibilidad de requerir el certificado de origen válido, cuando sea ilegible o defectuoso o cuando dicho certificado no se haya llenado de conformidad con lo dispuesto por el Tratado.

Al respecto, cabe agregar que la conclusión alcanzada por esta Juzgadora obedece a que el certificado de origen exhibido por la hoy actora, al realizar el despacho aduanero de la importación correspondiente, adoleció del defecto de que en el mismo se asentó una fracción arancelaria inexacta en cuanto al tipo de mercancía que se importó, la cual a criterio de la autoridad aduanera resultó de difícil identificación.

En razón de lo anterior, es importante precisar lo que se debe entender por "defecto", por lo que en atención a la definición que ofrece el "Diccionario Enciclopédico Larousse", correspondiente al año de 2006, en lo que le es aplicable al caso tenemos lo siguiente: "**DEFECTO** (...) Imperfección (...) **Defecto de forma** (...) **Defecto legal**. DER. Falta de alguno de los requisitos exigidos por la ley para la validez de ciertos actos jurídicos. **Por defecto. Se dice de la diferencia o inexactitud** que no llega a lo que debiera (...)"

Ahora bien, a la luz de la definición del vocablo "defecto" en el contexto que se adecua al caso concreto, **en la especie el certificado de origen exhibido por el actor debe considerarse como un documento inexacto**, en tanto que al no haber consignado la fracción arancelaria correcta que correspondía a la mercancía importada, que resultó de difícil identificación, conlleva una **diferencia o inexactitud** que no da el dato correcto que debiera, de lo que también deviene en la connotación genérica de imperfección y consiguiente defecto del documento, mutación que se ubica en uno de lo supuestos previstos en la multicitada regla 27, que como ya se ha señalado prevé esencialmente que cuando el certificado de origen presentado sea ilegible **o defectuoso**, o no se haya llenado de conformidad con lo dispuesto en la Sección II del Título III, de la Resolución respectiva, donde se encuentra inserta la regla 27, **la autoridad podrá requerir al importador para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, presente una copia del certificado de origen en que se subsanen las irregularidades mencionadas.**

De lo anterior se concluye que, si la autoridad dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera, en ningún momento efectuó el requerimiento de los

certificados de origen corregidos, fue omisa en indicar al importador que tenía derecho a presentar nuevos certificados de origen, en los que subsanara las discrepancias observadas, luego existió un vicio de procedimiento que afectó las defensas del particular y trascendió al sentido de la resolución impugnada en este juicio, vulnerando su garantía de audiencia, porque de haber sido específicamente requeridos los certificados de origen corregidos, como era su obligación legal, habría existido la posibilidad de que la autoridad otorgara el trato arancelario preferencial al estar cierta del origen de las mercancías importadas de los Estados Unidos de América del Norte.

En cuanto al argumento de la actora de que la autoridad emisora de la resolución impugnada en este juicio, indebidamente dejó de valorar los certificados de origen corregidos que presentó en la instancia de revocación, **a juicio de esta Sentenciadora también le asiste la razón**, pues a pesar de que en el procedimiento administrativo aduanero la autoridad liquidadora no requirió los certificados de origen corregidos, en términos de la referida regla 27, éstos fueron corregidos y presentados por la recurrente en la instancia de revocación, pero la demandada no los tomó en cuenta al emitir la resolución controvertida en esta vía contenciosa, bajo el argumento que al no exhibir la recurrente la transcripción correspondiente, no puede valorar dichos certificados, debido a que el artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, señala que cuando se presente una promoción por escrito en idioma extranjero, se acompañará de la correspondiente traducción, motivo por el cual los consideró inválidos.

Lo anterior, patentiza una conducta indebida de la autoridad demandada, pues por una parte reconoce que no precluyó el derecho de la recurrente para presentar dichos documentos, sosteniendo que a ella no le corresponde requerir dichos certificados, dado que la obligación de ofrecer y exhibir las pruebas correctamente le corresponde a la recurrente, soslayando además que la autoridad que siguió el procedimiento administrativo aduanero, es la que debió requerirlos y no lo hizo, no obstante estar obligada a hacerlo en términos de lo dispuesto en el artículo 502, fracción I, inciso c) del Tratado y la multicitada regla 27; sin embargo, desestimó el argumento

de la recurrente en cuanto a la violación a dichas disposiciones por parte de la autoridad determinadora de los créditos, para revocar los créditos materia del recurso.

Además, porque la regla 21 de las Reglas en Materia Aduanera del Tratado, dispone que los certificados de origen que se exhiban en idioma inglés, español o francés **se deben considerar como válidos, pero, si la autoridad ante quien se exhibe, requiere de su respectiva traducción, deberá solicitarla al importador**; situación a la que válida y jurídicamente se debe aplicar lo preceptuado por los artículos 58, 79 y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, ordenamiento que regula la sustanciación y resolución del recurso de revocación, que establecen:

(...)

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 11, fracciones I, XIV y XV y segundo párrafo de esta fracción, 20, fracción I, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su debido enlace con el diverso 94 de la Ley de Comercio Exterior, 46, fracción I, 49, 50, 51, fracciones III y IV, 52, fracción II, y Transitorios de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, esta Primera Sección de la Sala Superior resuelve:

I.- La parte actora acreditó su pretensión de nulidad.

II.- Se declara la nulidad lisa y llana tanto de las resoluciones recurridas, como de la impugnada en juicio, precisadas en el resultando 1º de este fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los autos del juicio de nulidad a la Sala Regional que corresponda, una vez que haya quedado firme o, en su caso, se resuelva en definitiva el presente asunto; y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 19 de abril de 2007, por mayoría de 3 votos a favor de la ponencia de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, María del Consuelo Villalobos Ortíz y Manuel Luciano Hallivis Pelayo y un voto en contra del C. Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, quien se reservó su derecho para emitir voto particular.

Fue Ponente en este asunto la C. Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, cuya ponencia fue aprobada en sus términos.

Se elaboró el presente engrose el 26 de abril de 2007, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción III, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Firma el C. Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 3958/06-06-02-9/92/07-S1-02-03

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual se manifiesta en los siguientes términos:

VOTO PARTICULAR

Previo a expresar los motivos de mi desacuerdo estimo conveniente precisar los siguientes aspectos:

1. En el caso se demanda la nulidad de la resolución de 30 de marzo de 2006, emitida por el Administrador Local Jurídico de Nuevo Laredo al resolver el recurso

de revocación intentado por la empresa actora, en el sentido de que se emitan nuevas resoluciones, para lo cual deja insubsistentes las resoluciones recurridas, constituidas por dos liquidaciones ambas de 7 de diciembre de 2005, dictadas por el Subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de la misma localidad.

Las referidas liquidaciones se motivaron en la negativa de trato arancelario preferencial, toda vez que el certificado de origen que presentó la importadora, ampara la importación de la mercancía consistente en "*película de vinil con soporte de tela sin tejer*", clasificada en la fracción arancelaria 3921.90.99 con 3% de cuota ad valorem, sin embargo, la Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que en realidad se trata de un producto diverso al declarado, pues resultó ser "*lámina celular de resina sintética de cloruro de polivinilo pigmentada, recubierta por una de sus caras con una tela sin tejer de fibras sintéticas de poliéster como soporte*", por lo que debió clasificarse en la fracción arancelaria 3921.12.01 con 18% de cuota ad valorem, lo que llevó a la Aduana de Nuevo Laredo a determinar la no validez de los certificados de origen.

2. La importadora exhibió en el aludido recurso de revocación los certificados de origen corregidos pero en idioma inglés sin su traducción al español, por lo que la autoridad resolutora del recurso no los consideró.

En el considerando **sexto**, que inicia en la página 46, se analiza el segundo concepto de impugnación de la demanda, relativo a que la resolución recaída al recurso de revocación, así como los actos recurridos son ilegales, porque no se justifica la negativa de trato arancelario preferencial, en razón de que la autoridad aduanera dejó de aplicar las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues no obstante encontrarse obligada a requerir del importador la presentación del certificado de origen válido, como lo señala la regla 27 de la resolución por la que se establecen las reglas generales relativas a la aplicación de dicho Tratado, no lo hizo.

La actora también aduce que de conformidad con la regla 3.5.6. de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 2000 (transcrita en la página 112), cuando se importa mercancía bajo trato arancelario preferencial amparada con un certificado de origen, pero con motivo del dictamen de la Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se determina una clasificación diferente a la declarada en el pedimento; el importador contará por única vez con un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho dictamen, para presentar una rectificación al pedimento, pero en la especie, la autoridad desconoció el origen de la mercancía importada sin concederle previamente al importador, el plazo de cinco días que establecen las reglas citadas; que asimismo la Administración Local Jurídica de Nuevo Laredo desestimó los certificados de origen corregidos con la fracción arancelaria correcta (3921.12.01), por haberse exhibido en idioma inglés, omitiendo requerir la traducción al español, por lo que ahora en este juicio ofrece y exhibe tales certificados con su respectiva traducción.

En la página 79 se resuelve parcialmente fundado el referido concepto de impugnación, pero suficiente para declarar la nulidad de los actos impugnados, porque la autoridad aduanera y la resolutora del recurso violaron las reglas 25 y 27 de las Reglas Generales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al no haber requerido al importador los certificados de origen corregidos, además de que en el recurso de revocación no se valoraron los certificados corregidos que exhibió el recurrente.

La sentencia mayoritaria también determina en las páginas 113 a 115, que la autoridad debió requerir a la importadora para que en el plazo de cinco días que establece la regla 3.5.6. de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 2000, presentara la rectificación de los pedimentos y los certificados de origen, a efecto de que se tomaran en cuenta durante el procedimiento administrativo en materia aduanera.

Lo anterior porque la demandante sí presentó certificados de origen relativos a las mercancías importadas, sin embargo, no coincidían en cuanto a la mercancía que resultó del análisis de laboratorio ni con la fracción arancelaria respectiva, lo que según el criterio mayoritario actualiza el contenido de la regla 27 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues previo a negar el trato arancelario preferencial, la autoridad debió otorgar cinco días hábiles para presentar los certificados llenados con la fracción arancelaria determinada por el Laboratorio Central, pero la autoridad aduanera no cumplió con dicha regla.

La sentencia mayoritaria entra al análisis de los pedimentos de importación y de los certificados de origen corregidos exhibidos por el actor, estimando que además de las referidas violaciones procedimentales, fue ilegal que tales documentos no fueran valorados por la autoridad demandada en el recurso de revocación, aduciendo su falta de traducción al español. De dicho análisis concluye la mayoría, que la actora logró demostrar que las importaciones que realizó se refieren a mercancías originarias de los Estados Unidos de Norteamérica y por tanto tiene derecho al trato arancelario preferencial.

Respetuosamente discrepo de la solución que la mayoría sentenció en la presente contienda, pues a mi juicio no resulta aplicable lo dispuesto por la regla 27 de la Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ni los precedentes que se invocan en la página 127, ya que la misma establece la obligación a cargo de la autoridad aduanera, de requerir al importador para que en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, presente la copia del certificado de origen, **cuando éste sea ilegible, defectuoso o no se haya llenado de conformidad con lo dispuesto en la Sección II del Título III**, y en el caso concreto, el certificado de origen que exhibió la importadora **no resulta ilegible, defectuoso o no llenado de conformidad como se establece en las propias reglas**, sino que en el mismo se señaló una fracción arancelaria incorrecta, esto es, en la especie el certificado no

contenía ninguna irregularidad de las que expresamente señala la regla 27 en cita, sino se trata de mercancías y fracción arancelaria distintas a las determinadas por la autoridad, no teniendo por ende la obligación de requerir al importador la exhibición del certificado de origen corregido.

Aunado a lo anterior, se tiene que de conformidad con el artículo 89 de la Ley Aduanera, los datos contenidos en el pedimento son definitivos y solamente podrán modificarse mediante la rectificación del pedimento, siempre que no se modifique (entre otros aspectos) la descripción y demás características de las mercancías, puesto que tal precepto señala:

> "**Artículo 89.- Los datos contenidos en el pedimento son definitivos y sólo podrán modificarse mediante la rectificación a dicho pedimento**.
> "Los contribuyentes podrán rectificar los datos contenidos en el pedimento el número de veces que sea necesario, siempre que lo realicen **antes de activar el mecanismo de selección automatizado**. Una vez activado el mecanismo de selección automatizado, se podrá efectuar la rectificación de los datos declarados en el pedimento hasta en dos ocasiones, cuando de dicha rectificación se origine un saldo a favor o bien no exista saldo alguno, o el número de veces que sea necesario cuando existan contribuciones a pagar, **siempre que en cualquiera de estos supuestos no se modifique alguno de los conceptos siguientes**:
> "I. Las unidades de medida señaladas en las tarifas de las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, así como el número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar las mercancías.
> "***II. La descripción, naturaleza, estado y demás características de las mercancías que permitan su clasificación arancelaria***.
> "III. Los datos que permitan la identificación de las mercancías, en su caso.
> "IV. Los datos que determinen el origen de las mercancías.
> "V. El registro federal de contribuyentes del importador o exportador.

"VI. El régimen aduanero al que se destinen las mercancías, salvo que esta Ley permita expresamente su cambio.
"VII. El número de candados oficiales utilizados en los vehículos o medios de transporte que contengan las mercancías cuyo despacho se promueva.
"Se podrá presentar hasta en dos ocasiones, la rectificación de los datos contenidos en el pedimento para declarar o rectificar los números de serie de maquinaria, dentro de los noventa días siguientes a que se realice el despacho y dentro de quince días en otras mercancías, excepto cuando se trate de vehículos.
"Tratándose de importaciones temporales efectuadas por las empresas maquiladoras o con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se podrán rectificar dentro de los diez días siguientes a aquel en que se realice el despacho, los datos contenidos en el pedimento para aumentar el número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar las mercancías amparadas por dichos programas.
"Cuando se exporten mercancías para ser enajenadas en el extranjero, se podrán rectificar los datos contenidos en el pedimento el número de veces que sean necesarias, con el objeto de disminuir el número, volumen o peso de las mercancías por mermas o desperdicios, o bien, para modificar el valor de las mismas cuando éste se conozca posteriormente con motivo de su enajenación o cuando la rectificación se establezca como una obligación por disposición de la Ley.
"En ningún caso procederá la rectificación del pedimento, si el mecanismo de selección automatizado determina que debe practicarse el reconocimiento aduanero o, en su caso, el segundo reconocimiento, y hasta que éstos hubieran sido concluidos. Igualmente, no será aplicable dicha rectificación durante el ejercicio de las facultades de comprobación. La rectificación de pedimento no se debe entender como resolución favorable al particular y no limita las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras."

Por otra parte, de acuerdo con la regla 2.12.2 apartado B de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2005, la referida rectificación

del pedimento sería inválida, pues se describió una mercancía distinta a la presentada al despacho y de la cual se tomaron muestras. Tal regla señala en la parte conducente:

> "Regla 2.12.2.
> "**B.** Para el supuesto de la fracción III,
> "**1.** Se considera que se comete esta infracción, cuando se presente la rectificación al pedimento, tratándose de la importación de mercancías bajo trato arancelario preferencial o mercancías idénticas o similares a aquellas por las que deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva, amparadas con un certificado de origen, certificado de país de origen o constancia de país de origen, según sea el caso, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, ejercicio de facultades de comprobación o del dictamen de la Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos de la AGA, les sea determinada una clasificación arancelaria diferente a la que el agente o apoderado aduanal declaró en el pedimento, el importador tendrá un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a la notificación del acta que al efecto se levante de conformidad con los artículos 46 y 152 de la Ley, para presentar la rectificación a dicho pedimento, con la fracción arancelaria que corresponda a las mercancías y con la cantidad y unidad de tarifa aplicables a esta última fracción, ***siempre que la descripción de las mercancías declarada en el pedimento corresponda con las de las mercancías importadas*** (...)"

Es decir, que ni la Ley Aduanera ni la referida regla 2.12.2 de comercio exterior (normas de derecho doméstico), permiten la rectificación del pedimento cuando hay cambio en la descripción de las mercancías importadas.

Se debe aclarar que, el importador actor tuvo no el derecho pero sí la obligación de presentar un pedimento rectificado, puesto que la demandada levantó el acta de toma de muestras y mediante escrito de hechos u omisiones hizo del conocimiento de la demandante el resultado del dictamen aduanal, en el que se indicó a la importadora que la mercancía analizada tenía una composición distinta a la declara-

da, por lo que se debió declarar la fracción 3921.12.01 en lugar de la 3921.90.99, composición de mercancía y clasificación arancelaria que la demandante no controvierte y menos aún desvirtúa, lo que implica que tal reclasificación quedó consentida.

Efectivamente el ahora demandante tuvo conocimiento de que el certificado de origen que exhibió durante el despacho aduanero, contenía información incorrecta sin controvertir tal aspecto.

Es aplicable en apoyo de lo anterior el precedente V-P-2aS-577 publicado en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, número 74, correspondiente al mes de febrero de 2007, página 341, que dice:

> "**CLASIFICACIÓN ARANCELARIA INEXACTA DE MERCANCÍA DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN IMPORTADA BAJO EL TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.- CORRESPONDE AL AGENTE ADUANAL Y AL IMPORTADOR DESVIRTUAR DICHA INEXACTITUD CON LAS PRUEBAS IDÓNEAS CORRESPONDIENTES.-** Aun cuando quede plenamente acreditada la importación de mercancía bajo el trato arancelario por acreditarse el origen de la mercancía y el reconocimiento de la autoridad aduanera, corresponde al Agente Aduanal y al importador desvirtuar la atribución de la autoridad de la inexacta clasificación arancelaria de la mercancía de difícil importación, con las pruebas idóneas correspondientes, debiendo desvirtuar los dictámenes técnicos de laboratorio y el final de los peritos que auxilian al Administrador de la Aduana en los cuales se indica que de las muestras tomadas a las mercancías se encontró que se trataba de mercancía distinta a la declarada y por ello se sugiere una fracción arancelaria diversa a la manifestada por ser la específica correspondiente a la mercancía efectivamente importada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 68 del Código Fiscal de la Federación, corresponde al demandante probar que la clasificación arancelaria declarada era la exacta.

"Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1118/05-19-01-7/710/05-S2-09-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de enero de 2007, por unanimidad de 4 votos.- Magistrado Ponente. Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
"(Tesis aprobada en sesión de 16 de enero de 2007)

"PRECEDENTE:

"V-P-2aS-494
Juicio No. 777/05-19-01-1/561/05-S2-07-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de febrero de 2006, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
"(Tesis aprobada en sesión de 21 de febrero de 2006)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 68. Agosto 2006. p. 37"

Cabe precisar que la autoridad tampoco estaba obligada a requerir la rectificación de los pedimentos porque la regla 3.5.6. de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 2000, otorgue al importador el plazo de cinco días para efectuar tal rectificación, puesto que tal disposición claramente señala, que tal plazo se contará a partir del día siguiente de la notificación del dictamen que determina una clasificación diferente a la declarada en el pedimento, además de que tal disposición no hace sino complementar lo ordenado en la regla 25, fracción V, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que impone al importador el deber de presentar una rectificación al pedimento, pagando las contribuciones que hubiera omitido, cuando tenga conocimiento de que el certificado de origen contiene la información incorrecta, como en el caso sucedió, pues el importador no combate la rectificación arancelaria llevada a cabo por la autoridad, de donde resulta que debió observar el plazo de cinco días y presentar la documentación corregida pero ante la autoridad aduanera.

Por otra parte, al valorar en este juicio los pedimentos y certificados de origen corregidos, se priva o limita a la autoridad demandada de la oportunidad de llevar a cabo el ejercicio de sus facultades de verificación de origen a los importadores y exportadores de Estados Unidos de Norteamérica, como se lo permite el artículo 506 (10) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como las reglas 57 y 58 de la Resolución que establece las reglas generales relativas a la aplicación de las disposiciones en materia administrativa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que instituyen la facultad para la suspensión de trato arancelario preferencial, una vez que se hubieran determinado por dos veces o más, que un bien no califica como originario.

MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

LEY ADUANERA

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS U OMISIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA. TRATÁNDOSE DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN DEBE LEVANTARSE TAN PRONTO LA AUTORIDAD ADUANERA TENGA CONOCIMIENTO DEL DICTAMEN DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE.- El artículo 152 de la Ley Aduanera establece que cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del segundo reconocimiento en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 del mismo ordenamiento, es decir, cuando no se hayan embargado precautoriamente mercancías, las autoridades aduaneras harán esa determinación sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 150 de la ley citada, dando a conocer, mediante acta circunstanciada, los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, debiendo asentar las irregularidades observadas y señalando que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles para ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convengan. Sin embargo, el precepto en comento no establece el plazo en el que debe levantarse la mencionada acta circunstanciada cuando se trata de mercancía de difícil identificación que amerite le sea tomada una muestra para su análisis, pero atendiendo a los principios de impulsión de oficio y de celeridad que rigen la actividad administrativa, tan pronto las autoridades aduaneras tienen conocimiento de las irregularidades detectadas, esto es, tan pronto se emite el dictamen derivado del análisis de laboratorio practicado a la muestra tomada de la mercancía presentada, dichas autoridades están en aptitud legal y material de levantar el acta circunstanciada de hechos u omisiones para dárselos a conocer al contribuyente, en aras de garantizar su seguridad jurídica, ya que de lo contrario se dejaría que las autoridades arbitrariamente determinaran el momento para levantar dicha acta, con la cual inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera. (2)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4930/06-06-02-6/287/07-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 5 de junio de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor en el considerando tercero, por mayoría de 3 votos a favor en el considerando cuarto y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2007)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- (...)

Por tanto, conforme al artículo 152 de la Ley Aduanera vigente en el año 2002, en virtud de que como parte del reconocimiento aduanero se tomó una muestra de la mercancía importada y el resultado del análisis de laboratorio que se le practicó determinó la existencia de una inexacta clasificación arancelaria con omisión de impuestos, lo que hacía procedente la determinación de las contribuciones omitidas y, en su caso, la imposición de sanciones, aunado a que no fue aplicable el artículo 151 de dicha ley, porque no existió embargo precautorio, la autoridad aduanera debió proceder a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 del mismo ordenamiento, para lo cual, **tan pronto tuvo conocimiento de tal irregularidad debió dar a conocer a la actora, mediante escrito o acta circunstanciada, los hechos u omisiones que implicaran la irregularidad detectada**, señalándole que contaba con un plazo de diez días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convinieran, lo que no sucedió como se verá más adelante.

La anterior conclusión se obtiene del hecho de que si bien es cierto que tratándose del reconocimiento aduanero y en el caso de que sea necesario practicar el

muestreo de la mercancía importada a fin de determinar si existen irregularidades en la importación por tratarse de mercancía de difícil identificación, no es posible levantar el acta en la que se hagan constar por escrito las irregularidades detectadas en el mismo momento en que se presenta la mercancía porque primero se deberá practicar el análisis de laboratorio correspondiente; **no menos cierto es, que una vez que obtiene el resultado de ese análisis (dictamen técnico) y tiene conocimiento de la o las irregularidades detectadas, la autoridad aduanera está obligada a dárselas a conocer inmediatamente al importador**, ya que de lo contrario se dejaría en estado de inseguridad al interesado, quien al haber sido objeto de un reconocimiento aduanero y haberse tomado una muestra a su mercancía, así como practicado el análisis de laboratorio a la misma y emitido el dictamen correspondiente, no sabría cuándo la autoridad aduanera levantará el acta circunstanciada que dé inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera, lo que significa dejar al arbitrio de la autoridad la fecha de emisión de dicha acta.

En esto último radica el perjuicio que la actora hace valer como concepto de impugnación, ya que el oficio de irregularidades número 326-SAT-A24-3(C)-26454, se le da a conocer tres años y siete meses después (13 de diciembre de 2005) de que la autoridad aduanera tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades cometidas (dictamen de fecha 29 de mayo de 2002), sin que exista justificación legal alguna para tal dilación, siendo que desde esta última fecha la autoridad debió darle a conocer, mediante acta circunstanciada, los hechos u omisiones que implicaban la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, por ser la fecha en que la Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos emitió el oficio número 326-SAT-II-B-26225, en el que se dictaminó la existencia de una inexacta clasificación arancelaria de la mercancía declarada por la actora y el momento en el que la autoridad aduanera tuvo conocimiento de las irregularidades detectadas, estando ya en posibilidad legal y material de continuar con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, pero al no hacerlo esa dilación repercutió, por ejemplo, en que el cálculo de las actualizaciones y recargos determinados en la liquidación recurrida se efectuara sobre la base de datos correspondientes al mes de diciembre de 2005, que se generaron de manera

ilegal a consecuencia de la omisión por parte de la autoridad de notificarle tales irregularidades desde el momento en que ésta tuvo conocimiento de las mismas.

Aunado a lo anterior, el reconocimiento aduanero se practica tanto respecto de mercancía de fácil como de difícil identificación, es decir, con o sin levantamiento de acta de muestreo, pues el artículo 44 de la Ley Aduanera establece lo siguiente:

> "Artículo 44.- **El reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento consisten en el examen de las mercancías de importación o de exportación, así como de sus muestras**, para allegarse de elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado, respecto de los siguientes conceptos:
> "I. Las unidades de medida señaladas en las tarifas de las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, así como el número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar la mercancía.
> "II. La descripción, naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías.
> "III. Los datos que permitan la identificación de las mercancías, en su caso."

Por lo anterior, esta Primera Sección de la Sala Superior considera que a pesar de que el artículo 152 de la Ley Aduanera no prevé una fecha o momento exacto para que se levante el acta circunstanciada de hechos u omisiones tratándose de mercancías de difícil identificación, no debe perderse de vista que la autoridad aduanera, tan pronto tiene conocimiento de la irregularidad atribuida al importador, debe proceder, en aras de la seguridad jurídica de éste, a levantar el acta de hechos u omisiones, con el fin de evitar que quede a su arbitrio el momento en el que debe levantar dicha acta, pues acorde con los principios que rigen la actividad administrativa, como son los de impulsión de oficio y de celeridad, se debe verificar que en el caso específico dicha autoridad haya actuado conforme a esos principios; es decir, si actuó con oficiosidad en la tramitación del análisis de laboratorio requerido para la muestra tomada de la mercancía importada por la actora y si una vez que recibió el dictamen correspondiente procedió con celeridad a emitir el acta respectiva, ya que sólo así se mantiene incólume la garantía de seguridad jurídica.

Lo anterior es así porque los dos principios antes mencionados deben prevalecer en la actuación de la autoridad aduanera aun en el caso del reconocimiento de mercancías que se consideren de difícil identificación que hagan necesario practicar un muestreo para la identificación de las mismas, pues **una vez que se emite el dictamen técnico del análisis practicado y se detecta alguna irregularidad, la autoridad aduanera ya tiene conocimiento de su existencia y está en posibilidad de dársela a conocer al importador**, mediante el acta circunstanciada referida en el artículo 152 de la Ley Aduanera.

(...)

Por lo tanto, toda vez que la resolución impugnada confirmó un acto que se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas, es procedente declarar la nulidad lisa y llana tanto de aquélla como de ésta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50, 51, fracción IV, y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con relación al 20, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I. La demandante acreditó los hechos constitutivos de su acción; en consecuencia,

II. Se declara la nulidad de las resoluciones impugnada y recurrida, descritas en el resultando 1° de este fallo, por las razones y fundamentos señalados en el último considerando del mismo.

III. NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de la sentencia, devuélvanse los autos del juicio a la Sala Regional correspondiente, una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva, y en su oportunidad archívese el expediente.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión celebrada el día 5 de junio de 2007, por

unanimidad de cuatro votos a favor del considerando tercero de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, María del Consuelo Villalobos Ortíz, Jorge Alberto García Cáceres y Manuel Luciano Hallivis Pelayo, y por mayoría de tres votos a favor del considerando cuarto en adelante del conjunto de la sentencia, de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, María del Consuelo Villalobos Ortíz, y Manuel Luciano Hallivis Pelayo, y uno en contra del Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, quien se reservó su derecho para emitir voto particular.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 18 de junio de 2007 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción III y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada K'antunil Alcyone Arriola Salinas, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 4930/06-06-02-6/287/07-S1-01-03

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual respetuosamente se manifiesta en los siguientes términos:

VOTO PARTICULAR

Para mejor exposición del motivo de mi desacuerdo expongo lo siguiente:

En el considerando quinto, la mayoría procede al estudio conjunto de los conceptos de impugnación octavo y décimo, en donde la actora señala que se viola-

ron en su perjuicio los artículos 43, 46 y 152 de la Ley Aduanera, porque la autoridad aduanera tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades cometidas desde el 29 de mayo de 2002, fecha en que la Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos emitió el dictamen, por lo que también desde esa fecha debió notificársele el escrito de irregularidades, pero éste se le dio a conocer al actor hasta el 13 de diciembre de 2005, pasando por alto el plazo de cuatro meses que contempla el mencionado artículo 152.

A partir de la hoja 75 y hasta la 90, la sentencia determina que el oficio de irregularidades se le dio a conocer a la importadora 3 años y casi siete meses después de que la autoridad aduanera tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades, sin que exista justificación legal para tal dilación, de donde la mayoría concluye que desde el mismo 29 de mayo de 2002, en que la demandada recibió el dictamen debió darle a conocer al importador, mediante acta circunstanciada las irregularidades, pero fue hasta el 13 de diciembre de 2005, en que lo anterior se cumplió, sin que exista justificación legal alguna para tal dilación.

Mi discrepancia es en lo relativo a lo resuelto por la mayoría en el sentido de que, una vez que la autoridad conoce el dictamen emitido por el Laboratorio Central, informando que hay una incorrecta clasificación arancelaria, ésta deba formular de inmediato el escrito de hechos u omisiones, y en caso de no hacerlo incurra en una violación a los principios de impulsión de oficio y de celeridad.

En efecto, la sentencia mayoritaria señala que la Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos informó con fecha 29 de mayo de 2002, el resultado del análisis a las muestras tomadas, pero fue el 13 de diciembre de 2005, cuando se le notificó al actor el oficio de irregularidades, y aún considerando que el artículo 152 de la Ley Aduanera, no prevé una fecha o momento exacto para que se formule el escrito de irregularidades en los casos de mercancías de difícil identificación, se sostiene por la mayoría que tratándose de estos casos, deben prevalecer los principios de impulsión de oficio y de celeridad, cuestiones que planteó la demandante.

Por otra parte, lo cierto es que no existe precepto legal o reglamentario que obligue a la autoridad a notificar el escrito de hechos u observaciones dentro de un determinado plazo, contado a partir de que hubiera recibido el dictamen del laboratorio central, ni siquiera el numeral 152 de la Ley Aduanera que el actor invoca como violado, es decir, que el legislador no reglamentó plazo alguno sobre tal aspecto, sin que exista estado de incertidumbre para el gobernado, ya que el importador como cualquier otro contribuyente tiene protegida su garantía de seguridad jurídica por el artículo 67, del Código Fiscal de la Federación, que establece la caducidad de las facultades de liquidación por parte de la autoridad, y como cualquier otro contribuyente, en caso de resultar contribuciones a su cargo, deberá pagar las omisiones de impuestos en que incurra, actualizaciones, recargos y multas que le resulten, ya que incluso el plazo para que opere dicha caducidad se inicia a partir de que presentó el pedimento de importación y no se suspende porque la autoridad esté llevando a cabo el procedimiento de muestreo previsto por el artículo 66 del Reglamento de la Ley Aduanera, o bien, posterior a éste, aplique el artículo 152 de la Ley Aduanera.

No es obstáculo para mi consideración anterior, la jurisprudencia J/13 intitulada "**ACTA DE IRREGULARIDADES CON MOTIVO DEL RECONOCIMENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO. CUANDO SE TRATE DE MERCANCÍA DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN LA AUTORIDAD LA LEVANTARÁ TAN PRONTO TENGA CONOCIMIENTO DEL DICTAMEN PERICIAL CORRESPONDIENTE**", del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que se cita por la mayoría en las páginas 87 y 88, pues la expresión de "tan pronto tenga conocimiento", no es sinónimo de inmediatamente, sino que significa que existe un paso necesario previo a emitir el oficio de irregularidades.

Lo anterior lo considero así, porque la aludida jurisprudencia señala categóricamente que la diversa jurisprudencia 2a./J. 39/2006, relativa al principio de inmediatez, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivó del artículo 43 de la Ley Aduanera, no es aplicable cuando se trate de mercancía de difícil identificación **debi-**

do a que es necesario el levantamiento del acta de muestreo para que previo dictamen se determine si hubo irregularidades.

Por otra parte la tesis aislada IV.3o.A.76 A del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro: "***ACTA DE IRREGULARIDADES CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO PREVER EL MOMENTO DE SU LEVANTAMIENTO CUANDO LA MERCANCÍA RESULTE DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS*** **(INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 39/2006)**", que también invoca la mayoría, señala que el artículo 152 de la Ley Aduanera, al no prever el momento en que deba levantarse el escrito de irregularidades, tratándose de mercancías de difícil identificación, **no resulta inconstitucional**, y si bien es cierto hace referencia a los principios de impulsión de oficio y de celeridad que rigen la actividad administrativa, no menos cierto es que no precisa cómo es que tal aspecto deberá evaluarse o juzgarse, ni lo adujo el actor y tampoco lo expresó la mayoría.

Ahora bien, lo que la demandada llevó a cabo fue el reconocimiento de las muestras tomadas, ello a través del procedimiento de muestreo regulado por el artículo 66 del Reglamento a la Ley Aduanera, así como con apoyo en el diverso numeral 144, fracción XIV, de la misma Ley Aduanera, que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación y exportación, incluso para solicitar el dictamen que requiera al agente aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier otro perito, es decir, que la autoridad llevó a cabo el ejercicio de sus facultades de comprobación para verificar la verdad de lo declarado.

Por otra parte, el artículo 152 de la Ley Aduanera señala que en los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento aduane-

ro, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de documentos presentados durante el despacho **o del ejercicio de facultades de comprobación** en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, y no sea aplicable el artículo 151 del mismo ordenamiento legal, se puede proceder a su determinación sin necesidad de instaurar el procedimiento establecido en el artículo 150.

Así, la autoridad puede dar a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, otorgando al interesado un plazo de diez días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan, sin que señale limitación temporal alguna para tal efecto, por lo que estimo que la autoridad cuenta con cinco años a partir de que se presentó el pedimento de importación para ejercer sus facultades conforme la regla general que contempla el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, mientras que el principio de inmediatez a que se refiere el artículo 43 de la Ley Aduanera, no rige para el caso del trámite del despacho de mercancías de difícil identificación.

MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VISITADORES. ESTÁN PREVISTOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Si bien es cierto que el artículo 41, segundo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, al mencionar a los servidores públicos que asisten al Titular de las Administraciones de Recaudación, entre otros, no se refiere de manera expresa a los visitadores, tal omisión no implica inexistencia, ya que la función de los visitadores está contemplada en el Código Fiscal de la Federación, ordenamiento que regula el procedimiento de visita domiciliaria, aunado a que la actuación del visitador se desarrolla en el domicilio del contribuyente, independientemente del cargo que ostente dentro del Servicio de Administración Tributaria, mismo que es especificado al momento de circunstanciarse la identificación de los agentes de autoridad al inicio de la visita domiciliaria, en los términos del artículo 44, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. (3)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 45/02-07-02-5/202/04-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de julio de 2007, por mayoría de 3 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Virginia Pétriz Herrera.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de julio de 2007)

SALAS REGIONALES

PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA

LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

IMPUESTO AL ACTIVO. LAS ACCIONES EMITIDAS POR PERSONAS MORALES EN EL EXTRANJERO SON TÍTULOS DE CRÉDITO Y COMO TAL DEBEN SER CONSIDERADAS COMO ACTIVOS FINANCIEROS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 4 FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.- De conformidad con los artículos 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles las acciones de una persona moral son títulos de crédito que como tal, además de circular confieren a su tenedor el derecho literal que en ellos se incorpora, por tanto, las acciones emitidas por una persona moral residente en el extranjero constituyen títulos de crédito, que para efectos del artículo 4 fracción II de la Ley del Impuesto al Activo deben ser consideradas como activos financieros, además de que fue la intención del Legislador al realizar la reforma de fecha 26 de diciembre de 1990 del precepto legal citado, incluir las acciones como activos financieros con la expresa excepción de las acciones emitidas por las personas morales residentes en México. (1)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 38913/05-17-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de julio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Enrique Rábago de la Hoz.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.

SEGUNDA SALA REGIONAL METROPOLITANA

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ACTAS PARCIALES DE INICIO.- Como parte integrante del acta final de visita, deben reunir los mismos requisitos y formalidades de esta última, en términos de las fracciones IV, VI y VII del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, por lo que si la diligencia se entiende con el representante legal de la contribuyente visitada y al cierre de la referida acta parcial de inicio no estuviere presente, se debe suspender la diligencia y dejar citatorio para que esté presente a una hora determinada del día siguiente y si no comparece a firmar el acta o se niega a firmarla, ésta se reiniciaría y concluiría, asentando tales circunstancias, sin que ello afecte la validez y valor probatorio de la misma, pero no procede cerrar el acta de inicio sin firma del representante legal que atendió la diligencia y posteriormente reabrirla para hacer constar la ausencia de dicho representante legal y volverla a cerrar, sin su firma, pues este procedimiento carece de soporte legal y de certeza jurídica, por lo que resulta insuficiente para acreditar la intervención del representante legal en la diligencia. (2)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 10634/06-17-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de junio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Lucila Padilla López.- Secretario: Lic. Leopoldo Ramírez Olivares.

LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

DERECHO ADQUIRIDO O IURA QUAESITA.- LA REDUCCIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO PUEDE EFECTUARLA LA CONTROLADORA.- Un derecho adquirido nace por la consumación de un supuesto contemplado por la norma y por la misma razón se encuentra definitivamente incorporado al patrimonio

de una persona, aunque todavía no se haya hecho efectivo o esté pendiente de realización, es decir, el titular de un derecho adquirido es al mismo tiempo titular de un derecho subjetivo pleno, de contenido patrimonial, en el caso, de un crédito frente al fisco por la realización fáctica del supuesto normativo y por lo tanto es plenamente transmisible, tratándose de consolidación, de la controlada a la controladora, y por cuanto a fusión de empresas, de la fusionada a la fusionante, por lo que la deducción inmediata de inversiones de bienes nuevos de activo fijo efectuada por una empresa controlada o fusionada al amparo de los artículos segundo de los decretos publicados el 1° de noviembre de 1995 y el 24 de diciembre de 1996, genera a ésta el derecho a la reducción del impuesto al activo previsto por las reglas 325 y 10.6 de la Resolución Miscelánea para los ejercicios de 1996 y 1997, derecho que se transfiere a la controladora y a la fusionante en términos de los artículos 13, fracción I, de la Ley del Impuesto al Activo, 57-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que exista disposición alguna que impida o limite la transmisión de ese derecho. (3)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30715/04-17-02-9.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de junio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Lucila Padilla López.- Secretario: Lic. Leopoldo Ramírez Olivares.

SALA REGIONAL DEL NOROESTE III

LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

ACTIVOS FINANCIEROS. RESOLUCIÓN APOYADA EN UNA REGLA DE LA MISCELÁNEA FISCAL QUE VA MÁS ALLÁ DE LO QUE ESTABLECEN LAS LEYES TRIBUTARIAS.- Resulta ilegal la resolución que se apoya en una resolución miscelánea que establece una carga mayor a las obligaciones que le imponen normas Transitorias, pues, aun cuando las resoluciones misceláneas, tienen por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes fiscales expedidas por el Poder Legislativo, no pueden ir más allá de los límites de esas leyes, en observancia del principio de supremacía de la ley; de ahí que las leyes fiscales no pueden ser modificadas por una norma de carácter general emitida por órgano diverso al Legislativo, ya que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos deben observarse los mismos trámites establecidos para su formación. En ese contexto, se tiene que resulta ilegal la resolución que determina que la contribuyente no incluyó dentro de los activos financieros, determinada cantidad, que constituye las acciones emitidas por personas morales residentes en el país, apoyando su determinación en una regla que establece una carga mayor a la que imponen las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tomando en cuenta que la Ley del Impuesto sobre la Renta no define o establece lo que debe entenderse por activos financieros, sin embargo, la Ley del Impuesto al Activo, si bien, no define lo que se debe entender por activos financieros, sí establece lo que debe considerarse como tal, por lo que lógicamente si la Ley relativa a los activos, como lo es la Ley del Impuesto al Activo señala qué se debe considerar como activos financieros, se habrá de atender a tal concepto, pues el legislador en esa Ley ha establecido si no todo un catálogo de activos financieros, algunos de ellos, haciendo una exclusión de las acciones emitidas por personas morales residentes en México. Lo anterior, aun cuando el objeto y elementos de ambos impuestos son distintos, ambas leyes son complementarias, mas si se toma en cuenta que la regla de la resolución miscelánea que pretende aplicar

la autoridad, refiere su aplicación al artículo 4° de la Ley del Impuesto al Activo, sin embargo, pasa por encima de tal precepto al señalar que "*Por lo que respecta a la información para determinar el saldo de los activos financieros, se deberán incluir, entre otros, aquéllos que se establecen en el artículo 4° de la Ley del IMPAC, inclusive las acciones emitidas por personales morales residentes en el país, al 31 de diciembre de 2001*". En esas condiciones, no cabe más que concluir que la resolución que se apoya en una regla que va más allá de lo que establece el propio legislador en las leyes tributarias, resulta ilegal. (4)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3154/05-03-01-7.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de abril de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel Aguilar García.- Secretaria: Lic. Adina Guadalupe Ríos Beltrán.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A FAVOR DE PERSONAS FÍSICAS. EL HECHO DE QUE LOS RETENEDORES (PERSONAS MORALES), MANIFESTADOS EN LA DECLARACIÓN ANUAL POR EL CONTRIBUYENTE (PERSONA FÍSICA), NO LO HAYAN RELACIONADO EN LA DECLARACIÓN INFORMATIVA CONFORME AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO ES MOTIVO FUNDADO PARA RECHAZARLA.- El artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es inaplicable a los contribuyentes personas físicas, en cuanto que dicho precepto prevé las obligaciones que deben acatar las personas morales, al estar comprendido dentro del Título II, Capítulo VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por tanto, si el citado precepto bien regula la obligación de las personas morales de presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante las autoridades fiscales, la información correspondiente de las personas a las que les hubieran efectuado retenciones en el año de calendario anterior conforme a lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 127, de la citada Ley, esto es, respecto de los contribuyentes que

presten servicios profesionales a las personas morales, es indubitable que tal fundamento no puede servir como sustento del motivo de rechazo de la devolución del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente persona física, en cuanto que el hecho de que los retenedores personas morales, no hayan incluido al contribuyente persona física en sus declaraciones informativas, tal circunstancia no es atribuible a esta última, y más aún cuando éste no tiene ninguna forma de obligar a las personas morales que efectuaron la retención, a que lo incluyan en la declaración informativa respectiva. (5)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 873/06-03-01-8.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de agosto de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Teresa de Jesús Islas Acosta.- Secretario: Lic. David Gustavo Bustos Pérez.

LEY DE AGUAS NACIONALES

MEDIDA CAUTELAR. PROCEDE SU OTORGAMIENTO SI LA AUTORIDAD DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONSUMO DE DETERMINADOS METROS CÚBICOS DE AGUA, CUANDO EL ACTOR CUENTA CON UN PERMISO VIGENTE PARA ELLO.- El artículo 29 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales permite a la autoridad declarar la caducidad sobre el consumo de metros cúbicos de agua concesionados al particular cuando éste deje parcial o totalmente de explotar, usar o aprovechar durante dos años consecutivos, sin mediar causa justificada. Sin embargo, ante la existencia de un permiso vigente para el consumo de ciertos metros cúbicos de agua a la fecha de emisión de la resolución de caducidad, procede conceder en términos del artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo la medida cautelar que el actor solicita, debido a que con ello no se ocasionan perjuicios al interés social ni se quebrantan disposiciones de orden público, ya que, de ser así, la autoridad no hubiera concedido el permiso para tal consumo, además, con el otorgamiento de la medida cautelar se mantiene viva la materia del juicio de nulidad y hace más viable el efecto de la sentencia en el caso de

que resulte favorable a los intereses del demandante e impide que se causen daños y perjuicios de difícil reparación al actor al restringirle con la declaratoria de caducidad parcial o total la concesión que le fue otorgada para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales. (6)

Incidente de Medida Cautelar Núm. 1218/06-03-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 de septiembre de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Lic. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Primer Secretario de Acuerdos de la Tercer Ponencia de esta Sala, actuando en suplencia por ausencia temporal del C. Magistrado Instructor José Luis Ochoa Torres, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Secretaria: Lic. Mireya Guadalupe Quintero Sarabia.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DISCREPANCIAS FISCALES. INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- Carece de la debida fundamentación y motivación, la resolución que se sustenta en el oficio a través del cual se requiere a la actora para que explique por escrito la discrepancia observada por la autoridad en un ejercicio fiscal, dando como datos únicamente la compra-venta de un bien inmueble en el ejercicio completo, sin establecer mayores elementos, como los datos de ubicación y el nombre de la persona con la cual realizó la compra-venta, lo cual afecta la defensa del contribuyente, toda vez que no está en posibilidad de aclarar la discrepancia fiscal, pues es hasta la determinación del crédito fiscal que la autoridad establece mayores datos. (7)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2224/04-03-01-7.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de septiembre de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel Aguilar García.- Secretaria: Lic. Adina Guadalupe Ríos Beltrán.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DEDUCCIÓN DE INTERESES.- La reforma hecha al artículo 32 fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación del primero de diciembre de 2004 limita la deducción de intereses a las personas que tengan partes relacionadas cuya residencia se encuentre exclusivamente en el extranjero, y no a residentes en México, toda vez que la mencionada reforma estaba orientada a evitar prácticas indebidas y abusos generados por países exportadores de capital que buscan ubicar sus inversiones en países que ubican retenciones bajas o nulas a los ingresos por concepto de intereses pagados, en aquéllos que utilizan además el endeudamiento como instrumento para disminuir indebidamente la base del impuesto sobre la renta o reubicar las utilidades y pérdidas fiscales de una empresa a otra, así como en países con carga fiscal menor a la de México. (8)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 416/06-03-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de octubre de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Luis Ochoa Torres.- Secretario: Lic. Jorge Antonio Camarena Ávalos.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PARTES RELACIONADAS. CONFORME A LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL CINCO, LAS PERSONAS QUE SE CONSIDERAN PARTES RELACIONADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 215 DE LA PROPIA LEY, SON EXCLUSIVAMENTE LAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.- La ratio legis de dichos ordenamientos se orienta en el sentido de limitar la deducción de intereses a las personas que tengan partes relacionadas cuya residencia se encuentre exclusivamente en el extranjero, ya que, aun cuando el texto analizado desde el punto de vista de su semántica no hace una limitación expresa a tal tipo de contribuyentes;

tal conclusión se sustenta del análisis sistemático y teleológico tanto de las normas, como de la exposición de motivos y sesión donde se dictaminó el contenido de la fracción XXVI, del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que la comisión dictaminadora expresamente determinó que las reglas de subcapitalización deben aplicar únicamente entre partes relacionadas residentes en el extranjero y cuando empresas que son partes relacionadas de otra, contraten créditos con partes independientes. (9)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 416/06-03-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de octubre de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Luis Ochoa Torres.- Secretario: Lic. Jorge Antonio Camarena Ávalos.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

RECIBO DE PAGO QUE ACREDITA EL ENTERO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- El artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa prevé que este órgano conocerá de los juicios promovidos contra resoluciones definitivas que, entre otras cuestiones, determinen la existencia de una obligación fiscal; fijen en cantidad líquida o den las bases para una liquidación; nieguen la devolución de un ingreso regulado por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; impongan multas por infracción a las normas administrativas federales o causen un agravio en materia fiscal distinto a los anteriores. En tal virtud se pone de manifiesto que el recibo de pago por concepto de entero de multas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor por su propia naturaleza no constituye una resolución definitiva impugnable ante el Tribunal Federal

de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que no constituye un acto unilateral por parte de la autoridad administrativa mediante la cual cree, modifique, extinga o defina una situación jurídica al demandante a través de sus facultades de imperio que le cause una afectación, sino que únicamente constituye un comprobante que refleja que acudió a realizar el pago respectivo. (10)

Recurso de Reclamación Núm. 1406/06-03-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de octubre de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Lic. Jorge Antonio Camarena Ávalos, actuando en funciones de Magistrado por ausencia temporal del Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia.- Secretario: Lic. Sergio Angulo Verduzco.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMA AUTÓGRAFA. NO SE ACREDITA QUE UN DOCUMENTO LA CONTENGA, CON LA COPIA FOTOSTÁTICA CERTIFICADA QUE SE REALICE DEL MISMO.- Mediante copia fotostática certificada de un documento, no es factible acreditarse que éste haya sido firmado autógrafamente por la autoridad que lo emitió, si no se hace constar en dicha certificación que el original que se tuvo a la vista contiene firma autógrafa, pues dada la naturaleza de las fotocopias, la firma en ellas reproducida puede considerarse como facsimilar, por ello, para que tenga validez plena una copia certificada se debe dejar establecido que se cotejó, que efectivamente ostenta la firma autógrafa del funcionario que emitió el acto o resolución respectivo. (11)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1207/06-03-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 de diciembre de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Lic. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Primer Secretario de Acuerdos de la Tercera Ponencia de la Sala, actuando en funciones de Magistrado por ausencia temporal del Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia.- Secretario: Lic. Sergio Angulo Verduzco.

LEY ADUANERA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA CADUCIDAD ESPECIAL REGULADA POR EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY ADUANERA.- El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, que prevé la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, no es aplicable de manera supletoria al procedimiento administrativo en materia aduanera, regulado por el artículo 153 de la Ley Aduanera que establece que las autoridades aduaneras deberán emitir sus resoluciones dentro del plazo de cuatro meses, en virtud que no se contempla la existencia de la figura de la caducidad en la Ley Aduanera respecto de dicho procedimiento, pues para que opere la supletoriedad de una ley respecto de otra se requiere que se satisfagan en su totalidad los requisitos a saber: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir la admita expresamente y señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica respectiva; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en ese cuerpo jurídico no regulen la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y, d) que las disposiciones o principios con los que se llene la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Por lo tanto, si en el artículo 153 de la Ley Aduanera no se dispone la figura de caducidad ante la falta de dicho requisito, y por el contrario el mencionado numeral es enfático en disponer que las autoridades aduaneras deberán de emitir sus resoluciones dentro del plazo de cuatro meses, situación que permite determinar que tal precepto legal prevé facultades discrecionales y no regladas, porque una vez que éstas se ejercitan, las autoridades aduaneras quedan obligadas en emitir la resolución respectiva dentro de un plazo que no deberá exceder de cuatro meses. (12)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1575/06-03-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 de enero de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Lic. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Primer Secretario de Acuerdos de la Tercera Ponencia de la Sala, actuando en funciones de Magistrado por ausencia temporal del Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia.- Secretario: Lic. Sergio Angulo Verduzco.

LEY ADUANERA

ACREDITAMIENTO DE LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS DE VEHÍCULOS IMPORTADOS EN DEFINITIVA. PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN.- El artículo 146 de la Ley Aduanera, precisa que la legal estancia en el país de vehículos exportados de manera definitiva se acredita con el pedimento de importación respectivo, por lo cual, es incorrecto que la autoridad concluya que al no encontrar en el Departamento de Informática Contabilidad y Glosa los datos correspondientes al pedimento que en original se exhibe éste es insuficiente para el acreditamiento de la legal estancia en el país del vehículo que ampara, puesto que, esa exigencia no se encuentra previamente establecida por la ley de la materia, ello aunado a que el motivo de rechazo no se adminiculó con otro diverso como la autenticidad o veracidad del pedimento mostrado, o bien, la falta de coincidencia con los datos del automóvil en él descritos. (13)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1318/06-03-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 de febrero de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Lic. Jorge Antonio Camarena Ávalos, Primer Secretario de Acuerdos, en funciones de Magistrado por ausencia del Magistrado Instructor del presente juicio, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Orgánica de este Tribunal, así como el acuerdo G/92/2006, emitido por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de octubre de 2006.- Secretaria: Lic. Mireya Guadalupe Quintero Sarabia.

LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

IMPUESTO AL ACTIVO. ACREDITAMIENTO ADICIONAL CONFORME AL ARTÍCULO 9, REPRESENTA UN PAGO PROVISIONAL O AJUSTE EFECTIVAMENTE ENTERADO.- El segundo párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto al Activo establece la posibilidad de que los contribuyentes puedan acreditar contra el impuesto del ejercicio, la diferencia que resulte en cada uno de los tres ejercicios inmediatos anteriores conforme al siguiente procedimiento y hasta por el monto que no se hubiera acreditado con anterioridad. En ese contexto, es incorrecta la apreciación de la autoridad que determina que la contribuyente acreditó en exceso cierta cantidad, en concepto de impuesto sobre la renta en un ejercicio fiscal, pues no toma en cuenta que cubrió pagos provisionales por concepto de impuesto al activo de un ejercicio, lo que acredita con las respectivas declaraciones, cuyos importes sumados resultan exactamente la cantidad que dice la autoridad que la actora acreditó en exceso. Es así como la contribuyente, al presentar su declaración anual de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal, tomó en cuenta válidamente los pagos provisionales de impuesto al activo que vía acreditamiento cubrió con saldos a favor de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal, correspondiente a tres ejercicios inmediatos anteriores, en términos de lo establecido en el artículo 9, segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Activo vigente en el 2001, que si bien es cierto, la autoridad no recibió en numerario tal cantidad en ese ejercicio, fue realmente enterado por concepto de impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal, correspondiente a tres ejercicios inmediatos anteriores, y que optó en el ejercicio fiscal posterior a los tres años, por acreditarlo en pagos provisionales de impuesto al activo, por lo tanto, es correcto que la contribuyente haya tomado en cuenta en la declaración anual, como pagos provisionales, y consecuentemente, incorrecta la determinación de la autoridad de que acreditó en exceso impuesto sobre la renta, toda vez que el acreditamiento se puede considerar como una forma de pago de impuesto a cargo, en razón de que la actora enteró pagos provisionales de impuesto al activo con remanentes de saldo a favor de impuesto sobre la renta, extinguiendo con ello una obligación fiscal. (14)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4585/04-03-01-7.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de febrero de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Luis Ochoa Torres.- Secretaria: Lic. Adina Guadalupe Ríos Beltrán.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE VERIFICACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- TRATÁNDOSE DEL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO IMPUGNADO, CONFORME AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, DEBEN ANALIZARSE DE PRIMA FACIE LOS AGRAVIOS EN LOS CUALES SE SURTA UNA NULIDAD LISA Y LLANA (ABSOLUTA) DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIO ORIGEN, CUANDO DEL ANÁLISIS DE DICHA ORDEN SE ADVIERTA QUE LA AUTORIDAD CARECE DE COMPETENCIA PARA ORDENARLA.- Tratándose de actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, si el actor, denuncia la incompetencia de la autoridad emisora del acto impugnado, cuyo estudio es de orden preferente para la Sala Juzgadora, es de señalarse que conforme al principio de mayor beneficio, en relación con el de exhaustividad de las sentencias que se contiene en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, deben ser analizados en primer orden aquellos agravios en los cuales se surta una causal de nulidad lisa y llana, que le depare mayor beneficio en relación a los argumentos planteados por la accionante; de ahí que si al analizarse el procedimiento que le dio origen, de resultar fundado algún agravio, se estimara que éste le depararía mayor beneficio al actor en virtud de que, de declararse la nulidad por el vicio de incompetencia de la resolución determinante del adeudo, tal nulidad de la resolución sería lisa y llana, pero la misma no impide que la autoridad que sí sea competente en uso de sus atribuciones legales pueda dictar una nueva resolución, o bien, llevar a cabo un nuevo procedimiento, siempre y cuando en él no incurra en la misma violación, que constituyó el motivo de nulidad; en cambio, si se declara la

nulidad por incompetencia del funcionario emisor de la orden que dio inicio al procedimiento, implica la pérdida del derecho para la Comisión Federal de Electricidad de determinar o fijar en cantidad líquida una obligación a cargo del demandante, por lo que en el caso de resultar fundada tal causa de anulación, sería intrascendente que la autoridad emisora del acto impugnado hubiera fundado o no su competencia, porque ya no existiría el acto que le dio origen, circunstancia que acarrea mayores beneficios al accionante por tratarse de una nulidad lisa y llana en forma absoluta, pues la autoridad demandada no estaría facultada para imponer un adeudo a cargo del accionante en virtud de declararse la nulidad del procedimiento que dio origen al mismo; por lo que es de concluirse que dicha cuestión debe estudiarse de "prima facie" y con carácter excluyente de cualquier otra. (15)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2513/06-03-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 5 de marzo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Teresa de Jesús Islas Acosta.- Secretario: Lic. Ernesto Rodríguez Anaya.

PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO II

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. CASO EN EL QUE EL ACTA DE LA VISITA NO PUEDE SERVIR DE SUSTENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTA.- De la armónica interpretación de los artículos 38, primer párrafo, fracción IV, 42, primer párrafo, fracción V y 49, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, se obtiene que tratándose del procedimiento de fiscalización, cuyo objeto es verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales, no existe la posibilidad de que la infracción que se le impute al contribuyente se encuentre motivada en una presunción, como lo es, el que el personal visitador al realizar el arqueo de caja y detectar cierta cantidad de dinero en la máquina registradora, considere que por el hecho de estar esa cantidad en la caja de la contribuyente, se trata de una venta realizada dentro del periodo de revisión, respecto de la cual no se expidió el comprobante fiscal respectivo, pues precisamente por la naturaleza del procedimiento de fiscalización en comento, los hechos u omisiones que se le atribuyan a la contribuyente visitada como infracción, deben ser conocidos directamente por el personal visitador, respecto de operaciones realizadas en el periodo de la orden en cuestión; por tanto, si no existe certeza de que la cantidad de dinero que obra en la caja registradora de la contribuyente, es un ingreso recibido con motivo de una operación realizada en el periodo sujeto a revisión, resulta ilegal que la autoridad sancione a la actora con la multa prevista por el artículo 83, primer párrafo, fracción VII del Código Fiscal de la Federación, pues esa sanción es procedente en aquellos casos en que el contribuyente no haya expedido o no entregue comprobantes fiscales por las actividades que realiza, o bien, que los expida sin requisitos fiscales, siempre y cuando esas irregularidades sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación. (16)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1282/07-05-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-

trativa, el 22 de junio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Alma Orquídea Reyes Ruiz.- Secretaria Lic. Sandra Gabriela Martínez Rodríguez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

DEPOSITARIA DE BIENES EMBARGADOS. NO PUEDE CONSIDERARSE PERFECCIONADA, ANTE LA FALTA DE INVENTARIO DE LOS BIENES EMBARGADOS Y DE LA CONSTANCIA DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL DEPOSITARIO.- De una sana interpretación del artículo 153 del Código Fiscal de la Federación que regula la figura de la depositaria, se puede establecer, que para considerar debidamente perfeccionada esa figura jurídica, deben concurrir las siguientes circunstancias: a) la existencia de un embargo; b) la designación del depositario; c) la aceptación de dicha designación; d) la formulación de un inventario formal que individualice cada uno de los bienes sobre los que descansa el embargo o posterior depositaria; y e) la recepción de los bienes por el depositario. Lo anterior, pues la sola existencia de la designación y aceptación del cargo de depositario, es insuficiente para determinar el objeto o materia de dicha responsabilidad legal, lo cual sólo puede establecerse con la existencia del inventario de los bienes embargados y su constancia de recepción por el depositario, ya que de otra manera no puede acreditarse que le fueron entregados en custodia o guarda, bienes en específico, lo cual incluso, puede provocar un estado de indefensión a aquél, pues debe tenerse presente que pesa sobre la persona que tiene ese carácter, lo dispuesto por el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, comprendido en el apartado de delitos fiscales. (17)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 726/07-05-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de junio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Alma Orquídea Reyes Ruiz.- Secretario: Lic. Justino Manuel González González.

TERCERA SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO II

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ORDEN DE VISITA. IMPRESCINDIBLE LA CITA DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA FUNDAMENTAR LA COMPETENCIA MATERIAL OTORGADA A LOS VISITADORES PARA REQUERIR AL CONTRIBUYENTE VISITADO LA CONTABILIDAD, ASÍ COMO QUE PROPORCIONEN DATOS, INFORMES O DOCUMENTOS QUE SE LES REQUIERA.- Las argumentaciones de la autoridad para validar las actuaciones practicadas por la demandada, al amparo de la orden de visita en estudio, en el sentido de que los contribuyentes visitados deben de estarse a lo establecido por el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, que establece las obligaciones de los visitados para con los visitadores en ejercicio de sus facultades, no pueden ser atendibles, ya que si el legislador consagró a rango de texto legal, en la fracción II, del artículo 42 del ordenamiento en cita, un dispositivo que funda y describe específicamente el ejercicio físico de las facultades materiales de la autoridad al momento de auditar a los contribuyentes, entonces, es de reconocerse que es imprescindible que la autoridad emisora de la orden de visita justifique sus requerimientos de documentación, datos o informes, con base en este precepto legal, sin que se admita que la competencia para ejecutar dichos actos materiales de revisión se encuentra contenida en el artículo 42, fracción III y 45, del Código Fiscal de la Federación, pues la realidad es que existe otro dispositivo específico que es la fracción II, del referido artículo 42, del citado Código Tributario, que no puede ser soslayado por las demandadas para fundamentar debidamente sus actos de molestia, y en específico la competencia para facultar a los visitadores para que en el transcurso de una visita domiciliaria, procedan debidamente a requerir a los contribuyentes visitados, a fin de que éstos proporcionen todos los datos e informes al personal fiscalizador. Por tanto, si la autoridad es omisa en fundamentar en la orden de visita mencionada, el ejercicio físico de los actos materiales practicados por el personal

actuante en la auditoría de mérito, consistentes en el requerimiento de documentación, datos o informes; entonces es claro que los visitadores se excedieron en la ejecución de la orden de visita, pues por principio legal contenido en el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, esta facultad debía ser ordenada directamente por la autoridad competente para emitirla y no ejercida por iniciativa propia de dicho personal visitador. (18)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1206/07-05-03-5.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de junio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- Secretaria: Lic. Karla Verónica Zúñiga Mijares.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES. NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO COMO PREMISA EN TRATÁNDOSE DE APLICACIÓN DE MULTAS POR LA FALTA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO DE COMPENSACIÓN.- Si la actora en el juicio señala que la multa combatida impuesta por la falta de presentación del aviso de compensación es ilegal porque la autoridad no le otorgó plazo para formular alegatos previos a la imposición de la multa, así como tampoco le fue requerida la obligación de presentación de aviso de compensación, sino que se llevaron a cabo simultáneamente en la aplicación de la multa; es de señalarse que tal planteamiento es infundado ya que el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, tiene única y exclusiva injerencia con la compensación realizada y guarda relación directa con la infracción impuesta por no haber presentado el aviso de compensación, sin que para tales efectos se prevea que deba mediar requerimiento previo alguno, ya que la disposición en cita es clara al señalar como obligación a cargo de los contribuyentes, en caso de optar por la compensación de contribuciones a favor, la de presentar el aviso correspondiente, una vez efectuada la misma, sin que se encuentre previsto que la autoridad debe efectuar requerimiento alguno, pues la consecuencia directa del incumplimiento es precisamente la adecuación en el supuesto

de infracción a que se contrae el artículo 81, fracción I del Código Fiscal de la Federación, es decir, la no presentación del aviso, y por ende, la imposición de la multa prevista en el artículo 82, fracción I, inciso c) del mismo ordenamiento legal. (19)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2673/07-05-03-8.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de julio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- Secretario: Lic. Aurora Mayela Galindo Escandón.

LEY ADUANERA

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, NO APLICA A LA INSTANCIA DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO, PREVISTA EN LA LEY ADUANERA.- A la instancia de resarcimiento económico, que prevé el artículo 157 de la Ley Aduanera, no le aplica supletoriamente la caducidad de la instancia, prevista en el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues en primer lugar porque la Ley Aduanera, no permite la supletoriedad del referido Código, y además la figura de la caducidad de la instancia, tampoco se prevé en la Ley Aduanera, lo que no permite la aplicación supletoria de normas, ya que ello sólo opera, cuando se dan los siguientes elementos: 1.- Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale la ley aplicable; 2.- Que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata; 3.- Que no obstante la existencia de ésta, las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presente, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria, y; 4.- Que las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ahora bien, si no se generan los dos primeros elementos indicados, como son que la ley especial o sea la Ley Aduanera, permita la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, y además tampoco prevé la figura de la caducidad de la instancia en forma deficiente, pues ni siquiera se permite la misma, no es admisible la supletoriedad del referido

Código, aún más el hecho de que el Código Fiscal de la Federación sí sea supletorio de la Ley Aduanera, éste tampoco permite la figura de la caducidad, y por ende tampoco sería supletorio el Código de Procedimientos de trato, el que sólo lo es para el Código Tributario, mas no para las demás leyes especiales, en esa razón, en la especie no se dan los elementos para la aplicación supletoria de la caducidad de la instancia, que regula el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta inaplicable para resolver la instancia de resarcimiento económico que prevé el artículo 157 de la Ley Aduanera. (20)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1662/2007-05-03-1.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de julio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Manuel Bravo Hernández.- Secretario: Lic. Marco Antonio Esquivel Molina.

PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORESTE

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

FRACCIÓN ARANCELARIA.- ES INTRASCENDENTE SU CORRECCIÓN POR PARTE DEL IMPORTADOR EN ARAS DE GOZAR DE UN TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL AL AMPARO DEL TLCAN.- Si la autoridad aduanera determinó que la descripción de la mercancía consignada en los documentos que ampararon la operación de importación es distinta al resultado del análisis emitido por la Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos de la Administración General de Aduanas, y por ende, que la fracción arancelaria asentada en dichos documentos es incorrecta, resulta improcedente que el importador rectifique los documentos inicialmente presentados, cambiando la fracción arancelaria para el efecto de ubicarla en la que la autoridad determinó, pues no resultaría lógico ni jurídico pensar que si el cambio de fracción arancelaria derivó del hecho de que la mercancía declarada no era la misma que la realmente importada, puede el actor, por un lado, reconocer que la mercancía importada era diversa a la declarada en los pedimentos de importación y, por otro, corregir la fracción arancelaria en aras de gozar del trato arancelario preferencial. (21)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3960/06-06-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1° de junio de 2007, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Adriana Cabezut Uribe.- Secretaria: Lic. Mabel Vázquez Granados.

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

RECTIFICACIÓN DE PEDIMENTO.- NO ES OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD REQUERIRLA DE ACUERDO CON LA REGLA 3.5.6. DE LA

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2006.- Conforme a la regla citada, el importador tiene el derecho para presentar rectificaciones a los pedimentos, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que le sea notificado el dictamen de la Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos, por lo que, es de concluirse, que si bien, dicha regla prevé una *facultas optandi* para el importador, de ésta no se desprende también la obligación de la autoridad de requerirle la presentación de la rectificación del pedimento. (22)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3960/06-06-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1° de junio de 2007, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Adriana Cabezut Uribe.- Secretaria: Lic. Mabel Vázquez Granados.

PRIMERA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

COMPROBANTES FISCALES. NO ES OBLIGATORIO CUMPLIR CON REQUISITOS FORMALES POSTERIORES A SU IMPRESIÓN.- Cuando la autoridad sancionadora, haciendo uso de sus facultades discrecionales, imponga al particular una multa derivada de la visita de inspección de comprobantes fiscales, por no satisfacer los requisitos previstos en el artículo 133, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2001, para que ésta proceda, los mismos debieron requerirse al momento en que se imprimieron los comprobantes, pues es inconcuso que la autoridad considere que el particular incurre en una infracción por no incluir requisitos como la leyenda "efectos fiscales al pago", que fue adicionada con posterioridad a la impresión de éstos, ya que el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en su párrafo penúltimo, establece que los comprobantes podrán ser utilizados por el contribuyente durante los dos años siguientes, a la fecha de su impresión. (23)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1880/04-07-01-2.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de enero de 2005, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Antonieta Márquez Acevedo.- Secretaria: Lic. María Olimpia Guzmán Tamez.

LEY ADUANERA

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. TRATÁNDOSE DE MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIÓN A NORMAS OFICIALES MEXICANAS, EL VALOR COMERCIAL DE LAS MERCANCÍAS, NO CONSTITUYE FALTA DE MOTIVACIÓN, SI SE CONSIDERA EL DEL PEDIMENTO DE IM-

PORTACIÓN.- La autoridad demandada cumple con los requisitos de fundamentación y motivación consagrados en los artículos 16 Constitucional, en relación con el 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, si al momento de determinar que se comete infracción e imponer multa a la empresa contribuyente, por incumplimiento a las normas oficiales mexicanas relacionadas con las restricciones y regulaciones no arancelarias, se fundamenta en lo que contempla el artículo 176, fracción II, de la Ley Aduanera, y por ende, se hace acreedora a la multa señalada en el artículo 178, fracción IV, del citado Ordenamiento Legal, en consecuencia al citar tales dispositivos, expresando como motivo, el hecho de incumplir con las normas oficiales mexicanas, por virtud de que en el caso, dada la naturaleza de la sanción impuesta, no se requiere determinar la clasificación arancelaria y avalúo para calcular la base gravable, pues la naturaleza del acto consistía en verificar el cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias, y ante el incumplimiento a dichas normas, la base gravable para la determinación de la multa, la constituyó el valor comercial de la mercancía, que en el asunto es el declarado en el pedimento de importación, siendo innecesario motivar el origen de ese valor, toda vez que éste era conocido por la parte actora, sin que esta circunstancia sea una violación al principio de motivación. (24)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6933/04-07-01-2.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de marzo de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Antonieta Márquez Acevedo.- Secretaria: Lic. María Olimpia Guzmán Tamez.

SALA REGIONAL DEL CENTRO I

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

OBRAS DE URBANIZACIÓN.- LAS REALIZADAS POR LAS CONSTRUCTORAS EN LOS FRACCIONAMIENTOS NO CONSTITUYEN UNA ENAJENACIÓN SINO UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR LO QUE NO SE ENCUENTRAN EXENTAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONFORME AL ARTÍCULO 21-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN 2005.- El artículo 9, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contempla la exención del pago del impuesto en la enajenación de construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Asimismo, el diverso artículo 21-A del Reglamento de la ley en cita vigente en 2005, amplía la exención contenida en el artículo y fracción apuntados a la prestación de servicios de construcción de inmuebles destinadas a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, estableciendo que no se consideran destinados a casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, entre otras; por tanto, atendiendo a dichos preceptos legales no se considera como materia de la exención a las obras de urbanización realizadas en los fraccionamientos, independientemente de la denominación que se dé al contrato celebrado entre el propietario del inmueble y la empresa que realiza las obras de urbanización, ya que aun realizando un contrato de enajenación de obras, lo que en realidad se realiza es un contrato de prestación de servicios y no la transmisión del dominio del bien de que se trate, ya que la naturaleza del contrato celebrado no se lo da la denominación que del mismo hagan las partes, sino la naturaleza intrínseca del mismo, como es el prestar un servicio o transmitir la propiedad. Por ello, es que se considera que la realización de las obras por parte de la empresa urbanizadora no se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, por no ser una enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación. (25)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1836/05-08-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de febrero de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. María Concepción Aguilar Aréchiga.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

COSTO DE LO VENDIDO.- SU DETERMINACIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45-B DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2005, TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDAD COMERCIAL.- Partiendo del principio de obligatoriedad de la ley, consistente en el hecho de que la ley obliga a todas aquellas personas que se ubican en la hipótesis prevista en la disposición legal, se analiza la aplicación del supuesto legal contenido en el artículo 45-B, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el que se establecen los conceptos que intervienen para determinar el costo de lo vendido en tratándose de contribuyentes que realicen actividades comerciales que consistan en la enajenación de mercancías, siendo éstos: fracción I. El importe de las adquisiciones de mercancías disminuidas con el monto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre las mismas, efectuados en el ejercicio; así como, fracción II, los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas. Por tanto, a la luz de dicho precepto legal, las mercancías no enajenadas en el ejercicio, así como el de la producción en proceso al cierre del ejercicio de que se trate no se incluirán para determinar el costo de lo vendido, cuando se trate de personas con actividades comerciales consistentes en la enajenación de mercancías, no obstante que se contemplen en el último párrafo del artículo 45-C de la mencionada ley, ya que el mismo aplica sólo respecto de las personas que no realicen actividades comerciales consistentes en la enajenación de mercancías, es decir, que el mismo numeral excluye expresamente a las personas que regula el artículo 45-B de la citada ley, por tanto, dicho precepto legal no aplica para este tipo de personas. (26)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 184/06-08-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de noviembre de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. María Concepción Aguilar Aréchiga.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PRINCIPIO A CONTRARIO SENSU.- EN LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 45-C DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- Por lo que se refiere a la disposición contenida en el artículo 45-C de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece: "*45-C.- Los contribuyentes que realicen actividades distintas de las señaladas en el artículo 45-B de esta Ley, considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente:* (...)". La misma cobra aplicación al mismo tipo de contribuyentes, sólo en sentido contrario de lo que establece la norma, aplicando así el principio de a contrario sensu y no como lo pretende el demandante de extender una disposición legal a sujetos diferentes de aquéllos a los que regula, puesto que el principio lógico de interpretación de la norma conocido como a contrario sensu, es eminentemente gramatical y debe atenderse de manera estricta y únicamente al precepto que se interpreta, para así relacionarlo con el tipo de contribuyentes a los que se dirige la norma y no extender su aplicación aduciendo el principio en sentido contrario a otro tipo de contribuyentes a los que no regula la norma específica de que se trata, sino que por el contrario los excluye. (27)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 184/06-08-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de noviembre de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. María Concepción Aguilar Aréchiga.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RESOLUCIONES RECAÍDAS A CONSULTAS PLANTEADAS ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.- NO SON OBLIGATORIAS LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RECAÍDAS A LAS PLANTEADAS POR PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRIBUYENTE.- Tomando en consideración que toda resolución administrativa beneficia o afecta a su destinatario y no a una persona distinta de aquélla a la que se dirige, no obstante que exista resolución favorable en determinado sentido a una persona diferente de la que realiza la consulta, tal hecho no vincula a este Tribunal a tomar en consideración el criterio plasmado en la resolución recaída a una consulta planteada por una persona distinta del demandante, para resolver respecto de la legalidad o ilegalidad de la resolución que se controvierte, puesto que las resoluciones aun cuando versen sobre un mismo tema, y resulten contradictorias entre sí, ello no obliga al Tribunal a emitir pronunciamiento atendiendo a la diversa resolución, dada la autonomía de las mismas. (28)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 184/06-08-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de noviembre de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. María Concepción Aguilar Aréchiga.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INVENTARIO ACUMULABLE PREVISTO EN EL ARTÍCULO TERCERO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2004, AUNQUE NO CONSTITUYE UN INGRESO ES UN CONCEPTO ACUMULABLE A LA UTILIDAD FISCAL.- Del análisis armónico de los artículos 1, 10, 17 y 20, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Tercero Transitorio, fracción V, de la mencionada ley, (disposición esta última que establece que los inventarios acumulables se deberán acu-

mular a la utilidad fiscal para determinar tanto los pagos provisionales como el impuesto del ejercicio), se considera que un inventario no constituye un ingreso por el sólo hecho de haber sido adquirido, sin embargo, el artículo Tercero Transitorio, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, le da la naturaleza y denominación al inventario acumulable al establecer qué es un inventario acumulable y la forma de determinar el mismo, y para ello en términos del último párrafo de la fracción apuntada se establece que deberá acumularse a la utilidad fiscal en la doceava parte, por tanto, el inventario acumulable como su nombre lo indica deberá acumularse a la utilidad fiscal para determinar los pagos provisionales y por ende, el impuesto del ejercicio conforme al artículo tercero apuntado y no considerar su naturaleza a la luz de los artículos 1, 10, 17 y 20, de la Ley en cita, dado que los mismos no regulan el inventario acumulable. (29)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 547/06-08-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de marzo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. María Concepción Aguilar Aréchiga.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ORDEN DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE NOTIFICADA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO EL DESTINATARIO DE LA INSPECCIÓN SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD EN ESE LUGAR.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la orden de verificación o visita debe precisar el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta, por tanto, el hecho de que en la orden de verificación se señale como domicilio el de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por encontrarse privado de su libertad el destinatario, al haber sido sorprendido en flagrancia al cometer la infracción en la venta de aves

canoras, mismas que tenía en su poder y fue precisamente en función de dicha posesión que se emitió la orden; luego, el hecho de que en la orden se señale un domicilio distinto del domicilio del visitado, no constituye ilegalidad alguna, puesto que el mencionado artículo 162 de la Ley en cita, contempla como posibilidad el que se lleve a cabo en un domicilio distinto del demandante, puesto que lo que se realiza no es una visita domiciliaria, sino una inspección, misma que reviste una naturaleza jurídica distinta, ya que el artículo 1 de la Ley en cita establece que tiene como objeto la protección al ambiente en territorio nacional y las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, siendo de orden público las disposiciones de dicha ley; por tanto, se considera que las disposiciones legales que regulan la inspección no tienen por objeto la protección de la inviolabilidad del domicilio, sino que en todo caso lo que tutelan es la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente, de aquí que, atendiendo a ello se considere que una inspección puede realizarse aun en lugar distinto del domicilio del demandante. (30)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1336/06-08-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de marzo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. María Concepción Aguilar Aréchiga.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN

CRÉDITOS POR DIFERENCIAS DE FACTURACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- POR SER TARIFAS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS Y NO CRÉDITOS FISCALES, LA GARANTÍA OTORGADA TIENE POR OBJETO REPARAR EL DAÑO O INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A LA DEMANDADA SI NO SE OBTIENE SENTENCIA FAVORABLE.- La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2007, en el artículo 1, Apartado B, fracción VII, inciso 1, punto B, establece entre los ingresos de Organis-

mos y empresas los correspondientes a la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, los créditos determinados por la Comisión Federal de Electricidad por concepto de ajuste de facturación del suministro de energía son tarifas y no créditos fiscales, por lo que la garantía que se otorgue para obtener la suspensión del acto impugnado tiene por objeto reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se ocasionen al organismo demandado si el demandante no obtiene sentencia favorable. (31)

Incidente de Suspensión Núm. 393/07-08-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de abril de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. María Concepción Aguilar Aréchiga.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- CUANDO EL CRÉDITO IMPUGNADO CORRESPONDE A TARIFAS POR DIFERENCIAS DE FACTURACIÓN, PROCEDE OTORGARLA CONFORME A LAS FRACCIONES IV Y XI DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Respecto de las resoluciones que sólo determinan diferencias en la facturación del suministro de energía eléctrica, procederá la suspensión del acto impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracciones IV y XI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siempre y cuando se otorgue garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza expedida por institución autorizada, para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada o a terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable, y atendiendo a que no está prevista dicha medida suspensional ante la propia autoridad administrativa en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que regula el acto, por tanto, aquellas personas que se ubiquen en los supuestos de la fracción I, ("*Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica por un periodo normal de facturación.*"), del

artículo 26 de la ley mencionada, podrán tener la opción de obtener a través de la medida suspensional la prestación continuada del servicio, hasta en tanto se resuelve en lo principal el juicio. (32)

Incidente de Suspensión Núm. 393/07-08-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de abril de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. María Concepción Aguilar Aréchiga.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.- PROCEDE OTORGARLA CUANDO LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO LA CONSTITUYE UNA DETERMINACIÓN DE DIFERENCIAS EN LA FACTURACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Tratándose de resoluciones que sólo determinan diferencias en la facturación del suministro de energía eléctrica, procederá la suspensión del acto impugnado atendiendo a la inaplicabilidad de la tesis de la Primera Sección de este Tribunal, bajo el rubro: "*SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN, TRATÁNDOSE DEL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PROCEDE NEGARLA CUANDO EN EL INCIDENTE SE ACREDITE QUE EL ACTOR SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LAS FRACCIONES II, V Y VI, DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVO.*", lo anterior, dado que sólo determina el pago de diferencias por el suministro de energía eléctrica, el cual no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en las fracciones II, V y VI, del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para la suspensión del suministro de energía eléctrica, por tanto, aquellas personas que se ubiquen en los supuestos de las fracciones I. ("*Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica por un periodo normal de facturación.*"), III y IV, del numeral en cita, podrán tener la opción de obtener a

través de la medida suspensional la prestación continuada del servicio, hasta en tanto se resuelve en lo principal el juicio en que se actúa. (33)

Incidente de Suspensión Núm. 393/07-08-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de abril de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. María Concepción Aguilar Aréchiga.

SEGUNDA SALA REGIONAL HIDALGO-MÉXICO

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PARA SU ACREDITAMIENTO ES NECESARIO QUE EL COMPROBANTE FISCAL EN QUE SE SOPORTE DESCRIBA EL GASTO O SERVICIO QUE AMPARA A EFECTO DE DEMOSTRAR SI ÉSTE ES ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL CONTRIBUYENTE.- De conformidad con los artículos 5, fracción I y 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2005, para que sea acreditable el impuesto relativo, se establecen entre otros requisitos, que corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades de la empresa, por lo que en términos de la fracción V, del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2005, en los comprobantes que se expidan se debe precisar su descripción para advertir si cumplen con dicho requisito, sin embargo, ello no se demuestra con indicar de manera genérica "gastos", en el rubro de descripción de las facturas, puesto que no se podría aseverar que se trata de un gasto indispensable, ya que además no se presenta prueba alguna que permita advertir qué clase de gastos son los que amparan las facturas en cuestión, pues del artículo 31, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el referido ejercicio, se advierte que para considerar estrictamente indispensable un gasto se debe atender al objeto de cada empresa y al gasto específico de que se trate, esto es, si el servicio está relacionado directamente con la actividad preponderante del contribuyente; que sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de ésta; y, que de no producirse se podrían afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo; más con la exhibición de facturas que contienen en el rubro de descripción "GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE (...)", no se acredita tal supuesto, en tanto que no consta qué clase de contrato se celebró con las empresas que expiden las facturas, y sin que exista constancia alguna que permita advertir la naturaleza jurídica del servicio que recibió la contribuyente. (34)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5779/06-11-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de marzo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Victorino M. Esquivel Camacho.- Secretario: Lic. José Luis Méndez Zamudio.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS, ES ILEGAL QUE LA AUTORIDAD LA NIEGUE ARGUMENTANDO QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE NO HA EFECTUADO EL PAGO DE IMPUESTOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA DE AQUÉL.- Es ilegal la negativa de devolver el saldo a favor derivado del pago de impuestos con base en que el representante legal de la empresa no ha efectuado el pago de impuestos por la actividad propia de dicho representante; lo anterior porque la resolución negativa se hace depender del cumplimiento de obligaciones de una persona física, independiente del contribuyente solicitante, en este caso el representante legal de la empresa respecto de sus actividades propias, el cual, si bien, tiene en su poder el manejo jurídico de la empresa, también es verdad que la sociedad está constituida por diversas personas físicas asociadas con un fin común de lucro y depositan en una o varias de ellas esa representación legal que las faculta para comparecer ante terceros en los trámites inherentes a la misma; sin embargo, ello no limita o prohíbe que dichos asociados tengan actividades empresariales ajenas a la empresa, respecto de las cuales responderán a título personal ante la autoridad fiscalizadora, de las obligaciones fiscales que resulten y, por lo tanto, el incumplimiento de esas obligaciones a cargo del representante legal no puede servir como motivación para negar la devolución solicitada por la sociedad a la cual representan legalmente, ya que se trata de dos entes jurídicos independientes y con personalidad jurídica propia. (35)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3053/06-11-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de abril de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Avelino C. Toscano Toscano.- Secretario: Lic. Tulio Antonio Salanueva Brito.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA INHABILITACIÓN TEMPORAL, QUEDA SIN MATERIA CUANDO SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO.- Cuando se solicite el otorgamiento de una medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecución de una sanción de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación, presentar propuestas o celebrar contrato alguno con las entidades y dependencias del Ejecutivo Federal y las Entidades Federativas, en términos del artículo 60 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, deberá analizarse la fecha en que dicha sanción surtió efectos, y en caso de que el plazo, contado a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Circular por la que se comunica a la Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las Entidades Federativas que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la actora, haya llegado a su término antes de la interposición del incidente respectivo, la medida cautelar queda sin materia, pues la inhabilitación constituye un acto consumado. (36)

Incidente de Medida Cautelar de Suspensión Núm. 465/07-11-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de mayo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Victorino M. Esquivel Camacho.- Secretario: Lic. Omar Javier Mora Osorio.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

TERCERO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA SU EMPLAZAMIENTO SE DEBE ACREDITAR NO SOLAMENTE QUE TIENE UN INTERÉS LEGÍTIMO EN EL ASUNTO, SINO QUE ÉSTE SEA INCOMPATIBLE CON LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA.- Con-

forme a los principios generales del derecho procesal tienen el carácter de terceros interesados en juicio las personas que, siendo distintas al actor o demandado, les importe que el Órgano Jurisdiccional emita o no una resolución declarativa o constitutiva de derechos, o bien, impositora de una condena; sin embargo, en el juicio contencioso administrativo sustanciado ante este Tribunal, el artículo 3°, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sólo reconoce la calidad de tercero a la persona, distinta a la demandada, que tenga un derecho incompatible con la pretensión de la demandante, es decir, que le interese la subsistencia de la resolución impugnada a través de la declaratoria de su validez; por tal motivo no es dable emplazar a juicio a las personas que tengan un derecho coincidente o compatible con la pretensión de la parte actora, pues aunque tengan el carácter de terceros interesados, no cumplen con el requisito que exige el artículo comentado para tal efecto. (37)

Recurso de Reclamación Núm. 9911/06-11-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de mayo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Victorino M. Esquivel Camacho.- Secretario: Lic. Omar Javier Mora Osorio.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO ES NECESARIO EXHIBIR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CUANDO EL ACTOR MANIFIESTE QUE NO LA CONOCE.- Si bien es cierto que el artículo 15, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece como uno de los requisitos para la admisión de la demanda en el juicio contencioso administrativo, adjuntar el documento en donde conste la resolución impugnada, también lo es que el artículo 16, fracción II, de la misma ley procedimental, dispone que el actor podrá manifestar no tener conocimiento de la resolución que

pretenda impugnar, debiendo señalar únicamente la autoridad a la que atribuye su emisión, supuesto en el cual no es necesario exhibir el documento en donde conste dicha resolución para que se admita la demanda. (38)

Recurso de Reclamación Núm. 236/07-11-02-7.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de mayo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Victorino M. Esquivel Camacho.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Mendoza Camacho.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RECURSO DE QUEJA.- EL CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE ORDENÓ LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS, IMPLICA NO SOLAMENTE EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA PROCEDENTE, SINO TAMBIÉN QUE EL SALDO A FAVOR SEA PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN SU CUENTA BANCARIA.- Las sentencias definitivas dictadas por este Tribunal que han causado estado, deben ser cumplimentadas en el plazo legal de cuatro meses, de conformidad con el artículo 239 antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005; por lo cual si se ha ordenado a la autoridad demandada declare procedente la solicitud de devolución presentada por el contribuyente y, proceda en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, no basta que al rendir el informe relativo a la queja por incumplimiento de la sentencia la autoridad exhiba la declaratoria de procedencia de la devolución del saldo a favor solicitada, sino que además debe demostrar que llevó a cabo las diligencias que indica el artículo 22, octavo párrafo del citado Código, el cual dispone que es obligación del fisco federal pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17-A del propio ordenamiento legal desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquél en el que la devolución esté a disposición del

contribuyente. En estos términos, el cumplimiento formal y material de la sentencia implica que el cálculo del importe a devolver se realice a la fecha en que se efectúe el depósito en la institución financiera señalada en la solicitud de devolución, tal y como lo establece el propio artículo 22 mencionado, no siendo suficiente que en el informe rendido con motivo de la queja la autoridad sostenga la procedencia de la devolución y que el importe calculado se pondría a disposición del contribuyente. (39)

Queja Núm. 6286/05-11-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de mayo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Avelino C. Toscano Toscano.- Secretario: Lic. Tulio Antonio Salanueva Brito.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES, NO ES NECESARIO GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL CUANDO EL SOLICITANTE SEA MIEMBRO DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO.- El artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que la medida cautelar de suspensión de actos consistentes en la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal surtirá efectos cuando se constituya la garantía fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales; sin embargo, conforme el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, que no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos. Por tal motivo, si el solicitante pertenece al Sistema Bancario Mexicano, según el artículo 3° de la Ley de Instituciones de Crédi-

to, es procedente conceder la medida cautelar de suspensión, sin necesidad de garantizar el interés fiscal del crédito controvertido. (40)

Incidente de Medida Cautelar de Suspensión Núm. 591/07-11-02-4.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de mayo de 2007, por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Victorino M. Esquivel Camacho.- Secretario: Lic. José Luis Méndez Zamudio.

LEY ADUANERA

NOTIFICACIÓN AL AGENTE ADUANAL DURANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE MUESTREO DE MERCANCÍAS, DEBE ENTENDERSE DIRECTAMENTE CON ÉSTE, SIENDO ILEGAL LA DILIGENCIA PRACTICADA POR CONDUCTO DE ALGÚN DEPENDIENTE.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracción I de la Ley Aduanera, los agentes y apoderados aduanales serán representantes legales de los importadores, tratándose de las actuaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías, que se celebren dentro del recinto fiscal, lo cual ocurre -entre otros casos- con el levantamiento del acta de muestreo de mercancías que se lleva a cabo durante el reconocimiento aduanero, en cuyo caso, no se puede considerar como legal una notificación hecha a un dependiente del agente aduanal que se funda en el citado precepto legal, porque es evidente que esta diligencia no se entendió directamente con el interesado, pues no debe perderse de vista que el agente o apoderado aduanal son responsables solidarios ante el fisco federal del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, de sus accesorios y de las infracciones que se cometan durante el traslado de las mercancías, y quienes en términos del artículo 129 de la Ley Aduanera tienen obligación de fijar un domicilio para oír y recibir notificaciones, razón por la cual, la notificación al agente aduanal del acta de muestreo debe efectuarse directamente con el interesado, salvo que exista citatorio previo realizado con las formalidades establecidas en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación. Así las cosas, la diligencia de tal naturaleza practicada al agente aduanal: “POR

CONDUCTO DEL DEPENDIENTE" no tiene sustento legal, pues dicho dependiente no tiene conferidas facultades para representar a la empresa importadora y tampoco al agente aduanal, y al hacerse de este modo se violentan las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual vicia el acta de muestreo de mercancías, así como también la resolución emitida con base en ella. (41)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 394/07-11-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de mayo de 2007, por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Instructor: Avelino C. Toscano Toscano.- Secretario: Lic. Tulio Antonio Salanueva Brito.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

JUICIO SIN MATERIA.- SE ACTUALIZA ESTA HIPÓTESIS DE SOBRESEIMIENTO CUANDO EN UN JUICIO ANTECEDENTE SE ANULÓ EN FORMA ABSOLUTA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA EN SEDE ADMINISTRATIVA CUYA LEGALIDAD TAMBIÉN FUE PLANTEADA EN EL JUICIO NATURAL CON BASE EN EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA.- Acorde con lo dispuesto en el artículo 9, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo procede el sobreseimiento si el juicio queda sin materia; lo cual ocurre en los casos en que se impugna una resolución que resuelve un recurso administrativo en el que se confirmó el crédito originalmente recurrido y durante la secuela del procedimiento se acredita que ese acto originalmente recurrido ya fue anulado mediante una sentencia definitiva dictada por una Sala Regional de este Tribunal, pues con ello se demuestra que no existe materia de juzgamiento, al haberse anulado en forma lisa y llana el acto originario que constituye el adeudo fiscal recurrido administrativamente, cuya legalidad en forma de litis abierta propuso el actor en forma exclusiva en el juicio natural, porque ya no hay materia para su estudio,

al haberse analizado en otro juicio el fondo del asunto y con cuyo resultado de anulación absoluta se satisface plenamente la pretensión originaria del demandante. (42)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8903/06-11-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de junio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Avelino C. Toscano Toscano.- Secretario: Tulio Antonio Salanueva Brito.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO 2001, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1º Y 6º DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PORQUE EN ÉL SE ESTABLECE EL SUJETO, OBJETO Y LA BASE PARA EL CÁLCULO DE DICHA CONTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE PAGO ÚNICO POR JUBILACIÓN.- Conforme al principio de reserva legal, previsto por los artículos 1º y 6º del Código Fiscal de la Federación, en concordancia con el diverso 31, fracción IV de la Carta Fundamental, únicamente en la ley especial promulgada conforme a los requisitos constitucionales pueden establecerse los elementos relativos a una contribución: es decir, el sujeto, objeto, base, tasa y tarifa. Por lo tanto, el artículo 84 reglamentario de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año 2001, es violatorio de ese principio ya que el mismo dispone que en tratándose del pago único por concepto de jubilación que exceda de nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al mes, el impuesto anual se calculará acumulando a los demás ingresos del año de calendario de que se trate, la parte gravada del monto anual que por jubilación, pensión o haber de retiro hubiera percibido en dicho año de calendario, y aplicando la tasa que a dichos ingresos corresponda al monto gravado que percibiría en los siguientes años de no haber pago único; en cuyo caso,

resulta incuestionable que el precepto en cuestión, está señalando las bases para realizar el pago de una contribución conforme a lo siguiente: 1º.- Señala como sujetos en quienes recae este impuesto a los pensionados que reciban un pago único por concepto de jubilación. 2º.- Prevé como objeto de la contribución el pago cuyo monto exceda de nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al mes. 3º.- Señala como base de ese impuesto, el monto que por concepto de jubilación hubiera recibido el contribuyente. Por lo tanto, tal artículo es violatorio del mencionado principio al tener que acudir a lo previsto en las disposiciones de rango inferior para el cálculo y pago de la contribución. (43)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1548/07-11-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de junio de 2007, por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Avelino C. Toscano Toscano.- Secretario: Tulio Antonio Salanueva Brito.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

PRESCRIPCIÓN.- EL PLAZO PARA LA CONFIGURACIÓN DE ESTA FIGURA JURÍDICA SE INTERRUMPE CUANDO AL CONTESTAR LA DEMANDA LA AUTORIDAD EXHIBE EL INFORME DE ASUNTO NO DILIGENCIADO EN EL QUE EL EJECUTOR HACE CONSTAR QUE EL CONTRIBUYENTE ABANDONÓ SU DOMICILIO FISCAL Y ÉSTE AL AMPLIAR LA DEMANDA NO REFUTA ESTE HECHO, NI EL ALCANCE JURÍDICO DE LAS CONSTANCIAS EXHIBIDAS POR LA AUTORIDAD.- El cuarto párrafo del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación dispone que se interrumpirá el plazo de prescripción cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente, por lo que si al contestar la demanda en vía de excepción la autoridad exhibe como prueba informes de asuntos no diligenciados con los que demuestra que se interrumpió el plazo de la prescripción al desaparecer el contribuyente de su domicilio fiscal, sin que al ampliar la demanda la contribuyente refute éste hecho, ni desvirtúe el alcance jurídi-

co de la constancia exhibida por la autoridad, con ello se acredita la hipótesis de excepción prevista en el artículo 146, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación y, por lo tanto, el argumento de prescripción debe declararse infundado. (44)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5210/06-11-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de julio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Avelino C. Toscano Toscano.- Secretario: Lic. Tulio Antonio Salanueva Brito.

SALA REGIONAL PENINSULAR

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

COMPROBANTES SIMPLIFICADOS. NO ESTÁN OBLIGADOS A EXPEDIRLOS QUIENES REALICEN OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN GENERAL MENORES A CIEN PESOS, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.4.15, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE ABRIL DEL 2006.- La regla 2.4.15, de la Resolución Miscelánea Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril del 2006, dispone en su segundo párrafo, que cuando el interesado no solicite el comprobante fiscal que reúna los requisitos fiscales, los contribuyentes deberán de expedir un comprobantes simplificado cuando el importe de la operación sea mayor a $100.00; luego entonces, si de la verificación efectuada al establecimiento se conoció que la parte actora efectuó la venta de una ampicilina 500MG y un Ambroxol por la suma de $45.00, la cual constituye una venta al público en general, es inconcuso que no se encontraba obligada a expedir comprobante simplificado alguno y por ello la autoridad no la podía sancionar en términos del artículo 83, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, el cual establece como infracción no expedir o no entregar comprobantes de sus actividades, cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin requisitos fiscales. (45)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2090/06-16-01-6.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de abril de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra.- Secretario: Lic. Juan Carlos Cámara Maldonado.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

COMPETENCIA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PUEDE CONOCER DE ASUNTOS EN LOS QUE SE CONTROVIERTA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA CALIFICACIÓN NEGATIVA DEL REGISTRADOR ADSCRITO AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL.- El artículo 1º, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece que dicho ordenamiento no será aplicable, entre otras materias, a la justicia agraria, sin embargo, el numeral 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, establece que: "Contra la calificación negativa, procederá el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Si transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el promovente no interpone el recurso de revisión, se pondrá a disposición del interesado la documentación respectiva". Por lo tanto, si en el caso particular, la cuestión que se está ventilando ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no es una que tenga relación con un pronunciamiento del Tribunal Agrario, de las que refiera el Título Décimo, Capítulo Primero, de la Ley Agraria, sino de resoluciones recaídas a los recursos de revisión interpuestos en contra de las diversas que denegaron la inscripción de contratos de enajenación de derechos, y si el artículo 83, de la citada Ley Federal de Procedimiento Administrativo, prevé que los interesados afectados por los actos o resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales correspondientes, luego entonces, este Tribunal Federal puede conocer de las mismas, al ser un Tribunal que está ejerciendo su función jurisdiccional. (46)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1332/06-16-01-3.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de mayo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra.- Secretaria: Lic. Ligia Elena Aguayo Martín.

LEY ADUANERA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, SU ILEGALIDAD AL HABERSE INSTRUIDO LA ORDEN DE VISITA EN MATERIA ADUANERA EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD ADUANERA.- El artículo 150 de la Ley Aduanera, señala que las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esa ley. En esta virtud, si la autoridad aduanera en ejercicio de sus facultades de comprobación, emitió una orden de visita domiciliaria e instauró un procedimiento, citando a la contribuyente para que se presentara en sus instalaciones en el término de tres días, y toda vez que dicha contribuyente no se presentó en el referido término, procedió a levantar el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera en sus oficinas, su proceder deviene ilegal al instaurar un procedimiento híbrido, toda vez que la visita ordenada a través de la orden de visita domiciliaria correspondiente, conforme a lo previsto por los numerales 43 fracción I y 44, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que refieren que la orden de visita, deberá indicar el lugar o lugares donde debe efectuarse la visita, y que la visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden, debió llevarse a cabo en el domicilio indicado en la propia orden, no así en las instalaciones de la autoridad aduanera. (47)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2004/06-16-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de junio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Jaime Romo García.- Secretaria: Lic. Irma M. G. Serralta Ramírez.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

MULTAS DE APREMIO.- FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ELLAS.- La Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a lo establecido en el

artículo 111 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, está facultada a citar a las partes a una audiencia conciliatoria, en la que procurará avenir los intereses de las partes, la cual, deberá tener lugar, por lo menos, cuatro días después de la fecha de notificación de la reclamación al proveedor, pudiendo celebrarse tal conciliación, vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso la Procuraduría o las partes podrán solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos. Ahora bien, el artículo 114, segundo párrafo de la misma Ley, establece que el conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes, la audiencia de conciliación hasta en tres ocasiones. Dado lo anterior, es a más tardar, al reanudarse la audiencia de conciliación, con motivo de la tercera suspensión, que el conciliador deberá establecer si las partes llegaron a un convenio o no y en caso de que esto no fuera posible se hará constar en el acta que se levante, dando por terminada la audiencia. Por lo anterior, no es procedente la aplicación de una multa de apremio, cuando una de las partes no asista a una diligencia que tenga como objeto la reanudación de la audiencia, con motivo de una cuarta o posterior suspensión de la misma, ya que la ley limita a sólo tres, las ocasiones en que se puede suspender la audiencia conciliatoria y, por ende, si la autoridad suspende en más de tres ocasiones la misma, todo lo actuado resulta ilegal, por contravenir lo preceptuado en el artículo 114, segundo párrafo de la Ley que se comenta. (48)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2171/06-16-01-7.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de junio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Jaime Romo García.- Secretario: Lic. Juan Pablo Zapata Sosa.

LEY ADUANERA

IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE FÓSFOROS CLASIFICADOS EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 3605.00.01.- EL DESPACHO ADUANERO CORRESPONDIENTE, DEBE REALIZARSE POR ADUANA AUTORIZADA, CUANDO DERIVE DE LA INTRODUCCIÓN AL PAÍS, PERO NO

CUANDO SE REALICE CON MOTIVO DE LA EXTRACCIÓN DE TALES MERCANCÍAS DEL LUGAR EN QUE SE ALMACENABAN EN DEPÓSITO FISCAL.- El anexo 21, apartado A, fracción V, de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para los años 2004 y 2005, dispone que tratándose del despacho aduanero de las mercancías que se introduzcan al país, para destinarlas a los regímenes aduaneros de importación definitiva, temporal, así como para depósito fiscal, tratándose entre otras, de "fósforos" que se clasifican en la fracción arancelaria 3605.00.01, sólo podrá realizarse ante las Aduanas de Ciudad Juárez, Nogales, Nuevo Laredo y Veracruz. Ahora bien, si conforme al artículo 35 de la Ley Aduanera, el despacho aduanero de las mercancías, consiste en realizar todos y cada uno de los actos y formalidades, necesarios para cumplir los requisitos exigidos por la Ley Aduanera, a efecto de destinar una mercancía a un régimen aduanero determinado, entendiéndose con esto, que el despacho aduanero de las mercancías que se introducen al país, finaliza cuando se han realizado todos y cada uno de los trámites que la misma Ley Aduanera exige, para destinarlas al régimen aduanero elegido por el importador, entonces, si las mercancías introducidas al país, consisten en fósforos, se clasifican en la fracción arancelaria 3605.00.01, fueron destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal y la importadora realizó todos los trámites relacionados con el despacho aduanero correspondiente, ante la Aduana de Veracruz, entonces, cumplió con la obligación de importar por aduana autorizada, como lo dispone el referido Anexo 21. Por tanto, la importación definitiva de dichas mercancías, efectuada con posterioridad, ya no tenía que realizarse necesariamente, por alguna de las Aduanas autorizadas en el referido Anexo, pues no se tramitó con motivo de la introducción al país de las mismas, sino por virtud de su extracción del lugar en que se almacenaban en depósito fiscal, acorde a lo establecido en el artículo 120, fracción I de la Ley Aduanera. (49)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 177/07-16-01-7.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de junio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Jaime Romo García.- Secretario: Lic. Juan Pablo Zapata Sosa.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

INTEGRACIONES SOLICITADAS POR LA AUTORIDAD DE MANERA ESPECIAL. NO FORMAN PARTE DE LA CONTABILIDAD DE LA CONTRIBUYENTE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 26 A 29 DE SU REGLAMENTO.- De una interpretación sistemática a los artículos 28 del Código Fiscal de la Federación, y 26 a 29 de su Reglamento, se sigue que la contabilidad y los documentos que la integran, la componen los registros y cuentas especiales a que obligan las disposiciones fiscales, los que llevan los contribuyentes aun cuando no sean obligatorios, y los libros y registros sociales a que obliguen otras leyes, los papeles de trabajo, registros, cuentas especiales, equipos y sistemas electrónicos, así como la documentación comprobatoria; se establece de igual manera que la contabilidad debe integrarse por los libros diario y mayor, y finalmente se mencionan los requisitos que debe cumplir la citada contabilidad, tales como que la información que se lleve debe identificar cada operación, acto o actividad, relacionándolas con la documentación comprobatoria, etcétera. Ahora bien, en términos generales, fuera de los libros diario y mayor, no existen parámetros específicos en cuanto a qué documentos en especial conforman la contabilidad y qué datos deben contener tales documentos; de donde se sigue que la contabilidad se integra por todos aquellos documentos que el particular lleva de la manera en que sean de su utilidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por la ley; en esa medida, la autoridad al ejercer sus facultades de comprobación, es menester que se limite a solicitar los documentos, datos e informes que conforman la contabilidad de la contribuyente, respetando la manera en que ésta la lleve, y no solicitar que tales documentos, datos e informes le sean proporcionados a manera de integraciones, de la forma concreta y específica en que la propia autoridad lo indique, esto es, que en términos generales la autoridad debe solicitar los documentos que integren la contabilidad de manera genérica, sin solicitar una forma especial de configuración que impliquen que el gobernado se vea en la necesidad de elaborar papeles de trabajo o “integraciones especiales” que no tenía, y que si bien pueden ser obtenidos a partir de los datos que se contienen en la contabilidad y que pueden ser revisados por la autoridad, la cuestión es que

de momento no formaban parte de la contabilidad y tienen que elaborarse a petición de la autoridad de una forma específica. De ahí que se considere que la documentación que la autoridad solicita a manera de integraciones especiales, no están expresamente especificadas en la ley, y por ende no pueden ser solicitadas por ella, por no ser parte de la contabilidad, la cual en todo caso debe ser revisada por la autoridad en la forma en que se encuentra, y a partir de esos determinar si la manera en que aparece satisface los requisitos de ley, y si con ellas se acredita el legal cumplimiento de las obligaciones respectivas. (50)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1923/06-16-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de junio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Jaime Romo García.- Secretario: Lic. Alejandro Ramírez Rico.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

AUTORIDADES COORDINADAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS FEDERALES.- AL FUNDAR SU COMPETENCIA DEBEN SEÑALAR LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO DE LA LEGISLATURA ESTATAL QUE AUTORIZÓ O APROBÓ, EL CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL.- Conforme al artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, las autoridades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para recibir las participaciones que establezca esa propia Ley, deberán celebrar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un convenio que debe ser autorizado o aprobado por la Legislatura de la Entidad Federativa de que se trate y que tanto el citado convenio, como el decreto aprobatorio respectivo, deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico oficial del Estado. Por su parte, el artículo 13 de la misma Ley, dispone que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los Estados que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de ad-

ministración de ingresos federales. Acorde a lo anterior, para que una entidad federativa, pueda actuar como autoridad fiscal, mediante la celebración de un convenio de coordinación, antes, tiene que haber celebrado con el mismo Gobierno Federal, un Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, debiéndose cumplir con las exigencias establecidas en el referido artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal. Así las cosas, la fundamentación de la competencia de la autoridad coordinada, no se soporta únicamente con la mención de los preceptos en los que se establecen atribuciones para revisar, determinar y cobrar impuestos federales, como el Convenio de Colaboración Administrativa o las normas Locales o el Reglamento Interior de la autoridad fiscal correspondiente, sino que además, debe señalarse la fecha de publicación del Decreto por el que el Congreso del Estado, autorizó o aprobó el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, lo anterior, pues de no hacerlo, se deja en estado de indefensión al particular, ya que se le causa incertidumbre, respecto a si el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, fue debidamente aprobado por el Congreso Estatal y por ende, si tiene eficacia legal. Con lo que, se incumple por parte de la autoridad demandada, el requisito de legalidad previsto en el artículo 38 fracciones III y IV del Código Fiscal de la Federación y que recoge la garantía de legalidad tutelada en el artículo 16 Constitucional, que exige que los actos que infrinjan molestia a los particulares deben ser emitidos por autoridad competente y deben estar debidamente fundados y motivados. (51)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2189/06-16-01-7.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de julio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Jaime Romo García.- Secretario: Lic. Juan Pablo Zapata Sosa.

SALA REGIONAL DEL CARIBE

LEY ADUANERA

DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN LLEVADO A CABO POR LA AUTORIDAD ADUANERA.- SUPUESTO EN QUE SU ACTUACIÓN NO SE AJUSTA A DERECHO.- Partiendo del hecho de que en última instancia, la autoridad aduanera determinó el valor de la mercancía embargada, apoyándose en el precio de unidades que se comercializan en ventas por personas que no tienen nexos comerciales con los importadores, ni están vinculados con éstos; no obsta para considerar legal su actuación, que se limitara a referir que el precio respectivo lo obtuvo mediante datos proporcionados por comerciantes del tipo de mercancía como la embargada, al no proporcionar al gobernado mayores indicios que le permitieran constatar: 1.- Que la información de mérito efectivamente fue solicitada, 2.- A quién o quiénes se solicitó, y 3.- La respuesta que se obtuvo de los mismos; a efecto de satisfacer el principio de motivación legal que debe cumplir dicho acto y para no dejar en indefensión al particular. Aunado a lo anterior, debe puntualizarse, que el pronunciamiento esgrimido por este Órgano Colegiado, no implica que para la legalidad de la actuación de la autoridad, se deba citar el nombre de cada uno de los comerciantes que venden el tipo de mercancía que fue embargada. Por el contrario, se determina en el sentido de que por lo menos, la autoridad debe precisar en el acto de molestia, la información obtenida de los comerciantes efectivamente consultados, circunstancia que no resulta gravosa o nugatoria de sus facultades de comprobación, si partimos del hecho de que en todo caso, al afirmar que obtuvo la información de comerciantes de este tipo de mercancía, resulta inconcuso que la autoridad solicitó dicha información a ciertos comerciantes que venden determinado tipo de mercancía, y que en su caso, proporcionaron una respuesta concreta al planteamiento respectivo, información con la que evidentemente debe contar la autoridad; pues según lo asentado en el acto de molestia, es precisamente en la que se apoyó para emitir su acto. No escapa a la aprecia-

ción de esta Juzgadora, la circunstancia de que para llegar a este punto, la enjuiciada agotó la aplicación de los procedimientos previstos en la Ley Aduanera para determinar la base gravable del impuesto general de importación, y en tal medida, podía determinar el valor respectivo aplicando los métodos previstos, en orden sucesivo y por exclusión, con mayor flexibilidad, o conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional o la documentación comprobatoria de las operaciones realizadas en territorio extranjero. Sin embargo, la amplia potestad que le otorgó el legislador para determinar el valor respectivo en casos como el que nos ocupa, no implica el extremo de relevar a la autoridad de motivar adecuadamente su resolución, precisando correctamente las cuestiones de modo, tiempo y lugar de los hechos en que apoya la emisión del acto que restringe la esfera jurídica del particular, por lo que al no hacerlo así, su actuación deviene en ilegal. (52)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1197/06-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1º de junio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygosa.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

INCIDENTE DE MEDIDAS CAUTELARES. TRATÁNDOSE DE ACTOS DE NATURALEZA NEGATIVA.- Conforme a lo dispuesto por el primer párrafo, del artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el juicio contencioso administrativo pueden decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, bajo dos condicionantes, a saber: 1) que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia; o, 2) que impidan que el acto controvertido pueda ocasionar un daño irreparable a la parte actora. Sin embargo, esas hipótesis de procedencia no deben analizarse de manera aislada, dado que el juzgador debe examinar la viabilidad del otorgamiento de

la medida cautelar que se pida, con vista a la naturaleza del acto que la origina, así como a los datos demostrativos del interés que asiste al que la solicita y de las consecuencias o efectos que pueda producir a éste la realización de los actos que den origen a su solicitud. Por lo tanto, tratándose de actos de naturaleza negativa simple, entendiéndose como tales los que implican el rechazo a una solicitud del particular, la medida cautelar que se solicite no es viable de concederse, toda vez que los efectos de ésta resultan propios de la decisión final que aborde la Sala del conocimiento al resolver el fondo del asunto. Lo anterior es así, porque de concederse la medida cautelar solicitada en esos términos, se darían efectos constitutivos de derechos a la misma, pues traducirían ese rechazo en un permiso, lo cual solamente puede ser susceptible de pronunciamiento en la sentencia definitiva del Tribunal que, en su caso, declare la nulidad de la resolución impugnada. (53)

Incidente de Medida Cautelar Núm. 324/07-20-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de julio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Nicandro Gómez Alarcón.- Secretario: Lic. Rogelio Olvera Márquez.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, SU PROCEDENCIA Y RESOLUCIÓN.- En tratándose de la medida cautelar solicitada por la actora, inherente a la suspensión de la ejecución del crédito fiscal impugnado, debe determinarse infundado el argumento de defensa expuesto por la autoridad recaudadora, en el sentido de que la incidentista no acredita ubicarse en alguno de los supuestos de procedencia para dicha suspensión, como lo son el que la autoridad niegue la suspensión, rechace la garantía o reinicie la ejecución; atento a que la suspensión en comento, prevista en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una especie, dentro de la gama de medidas cautelares procedentes en el juicio de

nulidad; lo anterior, conlleva a determinar que condicionar de forma irrestricta su acceso, a la existencia previa de los extremos antes referidos, no harían sino entorpecer la factibilidad de la medida cautelar de mérito. Consecuentemente, resulta igualmente infundado que la autoridad fiscal aduzca que mediante diverso ocurso presentado ante ella, con posterioridad a la solicitud instada ante esta Sala, la promoverte le solicitó directamente la suspensión de la ejecución del acto impugnado, sin que haya podido llevar a cabo la calificación de la garantía ofrecida, ya que tal como se ha precisado con antelación, la accesibilidad a la medida cautelar solicitada ante este Órgano Jurisdiccional, no se encuentra supeditada a la previa solicitud y respuesta obtenida en ese sentido por parte de la autoridad fiscal; y en tal medida, la circunstancia de que a la fecha, la autoridad no haya podido calificar debidamente la garantía del interés fiscal de mérito, derivada de una diversa solicitud que con posterioridad la ocursante le ha formulado directamente, no constituye impedimento legal para que este Cuerpo Colegiado, resuelva sobre la medida cautelar en comento. (54)

Incidente de Medida Cautelar Núm. 363/07-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de julio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygosa.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

SALA REGIONAL DEL PACÍFICO-CENTRO

LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES

RECURSO DE REVOCACIÓN, INAPLICABILIDAD DEL BENEFICIO OTORGADO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES, DE CONTAR CON UN PLAZO DUPLICADO PARA SU INTERPOSICIÓN.- El numeral 23 de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, señala que en la notificación del acto, se indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse y, que de no contenerse esa información en la resolución administrativa, el contribuyente contará con el doble del plazo legal para interponer el medio de defensa que corresponda, siendo la norma poco clara en cuanto a si la información se debe contener en la notificación o en el acto que se notifica, sin embargo, lo que queda claro es la intención del legislador de proteger el derecho de defensa de los gobernados, obligando a la autoridad a informar al contribuyente de los medios de defensa que tiene a su alcance, el plazo que tiene para ello y ante quien debe formularse, por lo que si esa información se contiene en el acto de molestia o en la constancia de notificación que se entrega al particular, se cumple plenamente con el propósito de la norma y en esa medida no es aplicable la ampliación al doble del plazo para interponer el medio de defensa correspondiente. (55)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3906/06-21-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de mayo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Ricardo Arteaga Magallón.- Secretaria: Lic. Sonia Sánchez Flores.

LEY ADUANERA

PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA LEGAL ESTANCIA DE MERCANCÍA EXTRANJERA. NO

SE TIPIFICA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 184, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA, SI SE EXHIBE DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 155 DE DICHA LEY.- Tal y como lo indica el actor en su concepto de impugnación, sería aplicable el artículo 184, fracción I, de la Ley Aduanera, invocada por la autoridad en el supuesto de que la actora no hubiese cumplido con el requerimiento de la autoridad en el término previsto por el artículo 155 de la Ley Aduanera; es decir, si la autoridad le otorgó el plazo de 10 días a la actora para exhibir la documentación con la que subsanara las observaciones detectadas por la propia autoridad, y la contribuyente no hubiese presentado la documentación dentro de ese plazo, sino con fecha posterior, es claro que en ese supuesto se actualizaría la infracción contemplada por el artículo 184, fracción I, de la Ley Aduanera; sin embargo, en el caso, el requerimiento se formuló a la hoy actora el día 22 de febrero de 2006, en que se levantó el acta parcial de inicio, y el escrito se presentó el 8 de marzo del mismo año; esto es, transcurrieron sólo 9 días, por lo que se cumplió dentro del plazo legal el requerimiento formulado por la autoridad y no se cometió la infracción que invoca la demandada en su resolución. En resumen, si el visitado exhibe dentro del plazo de 10 días a que alude el artículo 155 de la Ley Aduanera, la documentación que acredite la legal estancia en el país de la mercancía de procedencia extranjera embargada durante la visita, no puede considerarse susceptible de incurrir al mismo tiempo en la infracción, por la presentación extemporánea de dicha documentación, tipificada en el artículo 184, fracción I, de la propia Ley, puesto que se estaría en el absurdo de que los plazos legales previstos para desahogar debidamente el procedimiento administrativo de verificación y comprobación, al mismo tiempo implicarían infracciones administrativas sancionables, atribuyendo así al legislador manifestaciones normativas totalmente contradictorias. Semejante interpretación de la ley dejaría de observar, con resultado absurdo además, el principio hermenéutico de que los textos legales que puedan parecer contradictorios han de entenderse de manera que sean compatibles entre sí, en cuanto expresan la voluntad legislativa, cuya intención es de que sean observados tales textos. (56)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3732/06-21-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el

18 de mayo de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Juan Manuel Terán Contreras.- Secretario: Lic. Raúl Tovar Gutiérrez.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEMANDA. DEBE ESTAR FIRMADA POR QUIEN PROMUEVE Y NO POR QUIEN OSTENTA PODER OTORGADO POR EL PROMOVENTE.- Si el escrito de demanda no fue firmado por quien lo formuló o por el promovente del juicio de nulidad, infringiendo con ello lo dispuesto por el artículo 4° primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el representante de la recurrente, no puede pretender demostrar su legitimación para suscribir el escrito de demanda, al amparo del Poder Notarial que se anexó al escrito de demanda. El escrito de demanda debe estar firmado por quien lo formule, o sea por quien promueve, lo cual se evidencia convencionalmente por la designación que hace el propio promovente al inicio del escrito que suscribe, de su nombre y el carácter con el que promueve -por su propio derecho, o en representación de una persona física y/o jurídica- y es el caso que por disposición expresa de ley la firma es un signo inequívoco de la manifestación de la voluntad del promovente, y por ende le da existencia y admisibilidad a su promoción; por lo que, si el escrito de demanda no fue firmado por quien lo formuló o por el promovente, sino por otra persona, trae como consecuencia que sea un acto inexistente y deba tenerse por no presentada la demanda conforme a lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin que obste para ello que el escrito de demanda se hubiera firmado por quien señale que el promovente le confirió Poder General para Pleitos y Cobranzas, toda vez que no fue quien lo formuló o promovió el juicio de nulidad. (57)

Recurso de Reclamación Núm. 19/07-21-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de junio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Juan Manuel Terán Contreras.- Secretario: Lic. Raúl Tovar Gutiérrez.

CUARTA PARTE

RESOLUCIONES Y VOTOS PARTICULARES DE SALA SUPERIOR

PLENO

V-RyVP-SS-20

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE AL INCIDENTE DE INCOMPETENCIA NÚM. 350/06-19-01-3/750/06-PL-10-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de febrero de 2007, por mayoría de 5 votos a favor, 2 votos con los puntos resolutivos, y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 16, fracción III, 28 y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con los diversos 29 fracción I y 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal es competente para resolver el incidente de incompetencia por razón de territorio.

SEGUNDO.- Es procedente el incidente de incompetencia en razón del territorio, en virtud de que se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 29, 30 y 39, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la cuestión incidental es planteada por una de las partes en juicio, con el objeto de que el Pleno de la Sala Superior determine, conforme a la sede de la autoridad demandada, la Sala Regional a la que corresponde el conocimiento del negocio.

(...)

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 44 Constitucional, 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 16 fracción

III, 28 y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I. Ha resultado procedente y fundado el incidente de incompetencia promovido por el Titular de la Unidad Administrativa encargada de la defensa jurídica de la Secretaría de Economía y por el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

II. Es competente para conocer del presente asunto, la Sala Regional Metropolitana que en turno corresponda.

III. Mediante oficio que se destine a la Sala Regional Chiapas-Tabasco, remítasele copia de esta resolución para su conocimiento.

IV. Notifíquese.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 26 de febrero de 2007, por mayoría de cinco votos a favor de los Magistrados Alejandro Sánchez Hernández, Olga Hernández Espíndola, Luis Carballo Balvanera, Guillermo Domínguez Belloc y Manuel Luciano Hallivis Pelayo; dos votos con los puntos resolutivos de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Silvia Eugenia Díaz Vega, y un voto en contra del Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, quien se reservó su derecho para formular voto particular. Estuvieron ausentes los Magistrados Luis Malpica y de Lamadrid y María del Consuelo Villalobos Ortíz.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 19 de marzo de 2007, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 fracción VI y 37 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Firma el Magistrado Luis Malpica

y de Lamadrid, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Lic. Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN EL INCIDENTE DE INCOMPETENCIA NÚM. 350/06-19-01-3/750/06-PL-10-02

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual se expresa en los siguientes términos:

V O T O P A R T I C U L A R

La mayoría de los integrantes del Pleno de la Sala Superior consideró fundado el incidente de incompetencia planteado por el Director Adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, para lo cual tomó en cuenta que el acto impugnado se trataba del Decreto que reforma el diverso por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2003 y sobre esa base determinó que la Sala Regional que era competente para conocer del juicio era la Sala Regional Metropolitana que en turno correspondiera.

Mi motivo de desacuerdo con la mayoría es porque considero que previamente a resolver el incidente de incompetencia planteado por la autoridad, se debió determinar la procedencia del juicio contencioso administrativo, es decir, si se surte la competencia por razón de materia de este Tribunal.

En efecto, previo a resolver el incidente de incompetencia por cuestión de territorio, se debió determinar si se actualizaba la competencia por materia de este

Tribunal, porque no tendría razón de ser que se determinara la Sala Regional competente para conocer de un juicio por razón de territorio, si el acto impugnado no es de aquéllos de los que pueda conocer el Tribunal, por eso considero que era necesario que primeramente se determinara si se surtía la competencia de este Tribunal por materia y luego por razón de territorio.

En el caso estimo que no se surte la competencia por materia de este Tribunal, ya que el Decreto que reforma el diverso por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, fue emitido por el Titular del Ejecutivo Federal en ejercicio de su facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I Constitucional, por lo que en el caso resulta que se actualiza el supuesto de improcedencia previsto por el artículo 8, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece:

> "ARTÍCULO 8.- Es improcedente el juicio ante este tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:
> "(...)
> "IX.- Contra reglamentos
> "(...)"

Entonces, estimo que el acto combatido en el juicio contencioso administrativo, no debió considerarse resolución impugnada por no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y sí entre los supuestos de improcedencia del juicio, existiendo la imposibilidad de resolver el incidente de incompetencia por razón de territorio, como lo hizo la mayoría, sobre la base de tomar en cuenta la sede de la autoridad emisora de la resolución impugnada, ya que la resolución señalada como impugnada, como expresé, se trata de un Decreto emitido por el Ejecutivo Federal en ejercicio de su facultad reglamentaria.

Entonces, estimo que el Magistrado Instructor que recibió la demanda de nulidad es el que debió haber decidido conforme al artículo 36 fracción I de la Ley

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a desechar la demanda al actualizarse el supuesto del artículo 8 fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque primero se debe resolver si el juicio procede por razón de materia y luego la determinación de la competencia por razón de territorio.

MAG. JORGE A. GARCÍA CÁCERES

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ EN EL INCIDENTE DE INCOMPETENCIA NÚM. 1164/06-04-01-8/17508/06-17-11-2/828/06-PL-08-02, relacionado con la tesis V-P-SS-901, publicada en R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 32

V O T O P A R T I C U L A R

El suscrito Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, disiente del criterio mayoritario sostenido por los Magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver un incidente de incompetencia por razón de territorio con base en actuaciones inexactas de la Sala de origen, la Sala Regional del Golfo Norte.

Efectivamente, de las constancias del expediente en que se actúa, se desprende claramente que la Sala Regional del Norte Centro I de este Tribunal, con fecha 8 de mayo de 2006, por una parte, dictó un Acuerdo en el que se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del asunto, y por otra el Magistrado Instructor Héctor Francisco Hernández Cruz, dictó en la misma fecha, un diverso Acuerdo en el que tuvo por reconocida la personalidad del promovente y tuvo por formuladas las manifestaciones vertidas en el escrito presentado por la actora el 3 de mayo del mismo año, reservándose su análisis para el momento procesal oportuno.

De acuerdo a ello, existen dos actuaciones de la Sala Regional del Norte Centro I, en la primera (en el Acuerdo de la Sala) declinó su competencia por razón de territorio para conocer del asunto; y en la segunda (en el acuerdo que proveyó dentro del procedimiento contencioso administrativo), asumió su competencia para conocer del juicio.

Ahora bien, tales actuaciones se realizaron el mismo día, el 8 de mayo de 2006, por lo que es evidente que resultan contradictorias.

Sobre el particular, considero aplicable en su contexto, la jurisprudencia V-J-SS-26 de esta Sala Superior, publicada en la Revista de este Tribunal, No. 36 correspondiente al mes de diciembre de 2003, página 11; en la parte que señala que un pronunciamiento que implique una aceptación tácita del juicio no necesariamente se refiere a la admisión de una demanda, sino también a un apercibimiento de tener por no presentada la demanda y por no ofrecidas las pruebas, como se ve enseguida:

> "**INCOMPETENCIA. EL REQUERIMIENTO DEL INSTRUCTOR, PREVIO A LA ADMISIÓN A LA DEMANDA, TRAE IMPLÍCITA LA ACEPTACIÓN TÁCITA DE LA COMPETENCIA, POR LO QUE CON POSTERIORIDAD A ESA ACTUACIÓN YA NO PODRÁ DECLINARLA VÁLIDAMENTE.-** El primer párrafo del artículo 218 del Código Fiscal de la Federación, le impone a las Salas Regionales de este Tribunal el deber de declararse incompetente de plano, cuando se promueva un juicio del que otra deba conocer, por razón de territorio. La expresión 'declararse incompetente de plano', cuando se promueva un juicio del que otra deba conocer, por razón de territorio. La expresión 'declararse incompetente de plano' debe entenderse en el sentido de que la declaratoria de incompetencia tendrá que operar de inmediato, sin que medie alguna gestión o requerimiento de ningún tipo a las partes que implique abocarse al conocimiento del juicio, ya que la intención del legislador al emplear la palabra 'de plano', no pudo ser otra sino que la declaratoria de incompetencia se haga antes de que se realice algún pronunciamiento en el juicio, que no necesariamente tiene que ser cuando se admite una demanda, sino también cuando se hace un apercibimiento de tener por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, porque en ambos casos el juzgador inició la tramitación y conocimiento del juicio, aceptando con ello tácitamente la competencia del juicio, puesto que un requerimiento de esa magnitud sólo es posible efectuarlo cuando previamente se ha aceptado la competencia que le atribuyó la enjuiciante a la Sala Regional al presentar la demanda, por lo que con posterioridad a esa actuación ya no podrá declinarla válidamente. (3)

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 22 de agosto de dos mil tres.- Firman el Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Lic. Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe."

De la lectura de la jurisprudencia anterior, se desprende que la intención del Legislador al señalar en el primer párrafo del artículo 218 del Código Fiscal de la Federación, que las Salas Regionales de este Tribunal, cuando se promueve un juicio del que otra Sala debe conocer por razón de territorio, deben declararse incompetentes de plano, significa que la declaratoria de incompetencia tiene que operar sin que medie actuación alguna de la Sala que implique abocarse al conocimiento del juicio.

Ello, aplicado al caso en análisis implica que la Sala de Origen no debió proveer dentro del procedimiento contencioso administrativo instaurado, reconociéndole la personalidad al promovente, puesto que con ello asumía la competencia para conocer del juicio. Sin que pueda aceptarse que con esta actuación solamente se agregó al expediente la promoción presentada, dado que de manera expresa se tuvo por presentado el escrito por parte del actor con el carácter con el que se ostentó, por lo que no queda duda de que existía una aceptación de la competencia de la Sala con esta actuación jurisdiccional.

Y si bien es cierto, que en la misma fecha los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Golfo Norte I suscribieron el Acuerdo de incompetencia por razón de territorio, por lo que podría considerarse que dicho Acuerdo prevalece sobre el del Magistrado Instructor, lo cierto es que, quien provee en el expediente que por turno le corresponde aceptando la competencia de la Sala, en cualquier juicio, es el Magistrado Instructor, por lo que los efectos procesales de tales actuaciones en este caso, son similares.

Así es, si una de las actuaciones de la Sala de origen implicó la aceptación de su competencia para conocer del asunto, en aplicación de la jurisprudencia anterior-

mente analizada y atendiendo al hecho de que el demandante presentó su demanda ante la Sala Regional del Norte Centro I, dentro de cuya circunscripción territorial señaló domicilio para oír notificaciones, debió declararse fundado el incidente de incompetencia planteado por la Décima Sala Regional Metropolitana, y el no efectuarse así, constituye el motivo por el cual me aparto del criterio sustentado por la mayoría de integrantes del Pleno de la Sala Superior, en este caso concreto.

MAG. ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

V-RyVP-SS-21

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE AL INCIDENTE DE RECUSACIÓN NÚM. 13419/06-17-06-1/120/07-PL-11-05.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de mayo de 2007, por mayoría de 7 votos a favor, 2 votos con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica y de Lamadrid.- Secretario: Lic. José Antonio Rivera Vargas.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con el diverso 35, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, este Pleno de la Sala Superior considera que en el caso concreto, al haber resultado fundado el incidente de recusación que nos ocupa, respecto de dos de los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Regional Metropolitana, y dado que no puede conocer del asunto ninguno de ellos, los cuales conforman la mayoría de ese Órgano Colegiado, **se estima procedente el cambio de radicación del juicio a diversa Sala Regional Metropolitana**, aclarándose que para efectos del Sistema Integral de Control de Juicios, tanto la Sexta Sala Regional Metropolitana, como la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas, deberán darlo de baja y consecuentemente, esta última darlo de alta como demanda nueva en diversa Sala Regional Metropolitana que por turno corresponda, asignándole un nuevo número de expediente.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 16 fracciones VII y XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 29, fracción IV, 34 y 35, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; se resuelve:

R E S O L U T I V O S:

I.- Es **improcedente** el incidente de recusación interpuesto por el C. Tesorero del Distrito Federal, en lo que concierne a la C. Magistrada Nidya Narváez García.

II.- Es **procedente y fundado** el citado incidente de recusación, únicamente respecto de los Magistrados María de los Ángeles Garrido Bello y Alberto Machuca Aguirre, integrantes de la Sexta Sala Regional Metropolitana, en el juicio contencioso administrativo número **13419/06-17-06-1**.

III.- El Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, considera procedente el cambio de radicación del juicio a diversa Sala Regional Metropolitana, para que los Magistrados integrantes de la misma conozcan de la impugnación planteada por el Tesorero del Distrito Federal.

IV.- Remítanse los autos originales del juicio a la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas, a fin de que para efectos del Sistema Integral de Control de Juicios, se dé de baja en la Sexta Sala Regional Metropolitana y, consecuentemente, de alta en diversa Sala Regional Metropolitana que por turno corresponda, debiendo dicha Oficialía de Partes, reingresarlo como demanda nueva, asignándole un nuevo número de expediente.

V.- NOTIFÍQUESE a las partes y a la Sexta Sala Regional Metropolitana, con copia autorizada de esta resolución.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 16 de mayo de 2007, por mayoría de 7 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Francisco Cuevas Godínez, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Guillermo Domínguez Belloc y Luis Malpica y de Lamadrid; 2 con los puntos resolutivos de los Magistrados María del Consuelo Villalobos Ortíz y Luis

Carballo Balvanera y 1 en contra del Magistrado Jorge Alberto García Cáceres quien se reservó su derecho para formular voto particular.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Luis Malpica y de Lamadrid, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 30 de mayo de 2007, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Luis Malpica y de Lamadrid, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Lic. Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN NÚM. 13419/06-17-06-1/120/07-PL-11-05

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual se expresa en los siguientes términos:

V O T O P A R T I C U L A R

La mayoría de los integrantes del Pleno de la Sala Superior, en el considerando tercero, estimaron que el incidente de recusación era procedente respecto de los Magistrados María de los Ángeles Garrido Bello y Alberto Machuca Aguirre, integrantes de la Sexta Sala Regional Metropolitana, pues se encuentran impedidos para conocer del juicio 13419/06-17-06-1, por actualizarse una de las hipótesis previstas en el artículo 10 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Respetuosamente discrepo del criterio mayoritario que me he permitido sintetizar en el párrafo precedente, porque, en mi opinión, el incidente de recusación es

improcedente al igual que el juicio en el que se actúa, pues en el resultando primero del presente fallo se precisó que el actor compareció a demandar la nulidad del formulario múltiple de pago número MP-11897545 de fecha 26 de enero de 2006, emitido por el Administrador Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, por el cual se le impone al actor una multa identificada con el número de crédito 1187811, en cantidad de $17,644.00; negando a su vez, que se le hubiera notificado la resolución determinante del crédito.

De lo anterior se advierte que la resolución impugnada en el presente juicio no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que a la letra señala:

> "**Artículo 11.-** El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:
> "**I.** Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.
> "**II.** Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.
> "**III.** Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.
> "**IV.** Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.
> "**V.** Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

"Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.

"**VI.** Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"**VII.** Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada.

"**VIII.** Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.

"**IX.** Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como sus organismos descentralizados.

"**X.** Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente.

"**XI.** Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

"**XII.** Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"**XIII.** Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
"**XIV.** Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.
"**XV.** Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.
"Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.
"El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.
"También conocerá de los juicios que se promuevan contra una resolución negativa ficta configurada, en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen las disposiciones aplicables o, en su defecto, por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, conocerá de los juicios que se promuevan en contra de la negativa de la autoridad a expedir la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.
"No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa."

Del precepto transcrito se advierte que serán impugnables en el juicio contencioso administrativo ante este Tribunal, las resoluciones que cumplan con los siguientes requisitos:

1.- Que sean resoluciones definitivas, entendiendo por éstas las que pongan fin a un procedimiento, que no admitan recurso en contra o que dicho medio de defensa sea optativo; y

2.- Que encuadre dentro de uno de los supuestos previstos en las fracciones I a XV.

En el presente caso, la resolución impugnada, detallada anteriormente, no cumple con ninguno de los requisitos señalados, pues si bien el actor argumenta que a través del formulario múltiple de pago, la autoridad demandada le impone una multa, lo cierto es que dichos formularios no determinan multas, pues son requisitados por el contribuyente, para que a través de ellos, pueda llevar a cabo el pago de la multa, que tuvo que haberse determinado a través de una resolución anterior. Aunado a que no es una resolución definitiva, pues no pone fin a un procedimiento.

En atención a lo anterior, la demanda nunca debió haberse admitido por el Magistrado Instructor, y consecuentemente tampoco debió darse trámite al incidente de recusación, pues como se señaló, el juicio es improcedente, lo que conlleva a que el incidente también sea improcedente.

MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

V-RyVP-SS-22

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA EXCUSA NÚM. 13419/06-17-06-1/881/06-PL-11-06.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de mayo de 2007, por mayoría de 7 votos a favor, 2 votos con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica y de Lamadrid.- Secretario: Lic. José Antonio Rivera Vargas.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Ahora bien, a juicio de este Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la excusa que nos ocupa **ha quedado sin materia**, conforme a las siguientes consideraciones:

Resulta un hecho notorio, lo que se invoca atento a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que en esta misma sesión, previo al análisis de la presente excusa, se estudió y resolvió el incidente de recusación 13419/06-17-06-1/120/07-PL-11-05, interpuesto por el C. Tesorero del Distrito Federal (parte actora en el juicio 13419/06-17-06-1), con anterioridad a que formularan excusa los Magistrados referidos, resolviéndose dicho incidente como fundado respecto de los Magistrados **María de los Ángeles Garrido Bello** y **Alberto Machuca Aguirre**, en virtud de que se acreditó que se ubican en la causal de impedimento prevista en la fracción V del artículo 10, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que no podían conocer del juicio planteado en la especie.

Es aplicable por analogía, la tesis de jurisprudencia VII.3o.C. J/3, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 1531, cuyo texto establece:

"**HECHO NOTORIO. SI ESTÁN LISTADOS EN LA MISMA SESIÓN DOS O MÁS ASUNTOS RELACIONADOS, LO CONSTITUYE PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO EL RESULTADO DE UNO SI ÉSTE INCIDE EN LA MATERIA DE LOS DEMÁS.-** En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los Magistrados que integran órganos colegiados pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, las circunstancias de las cuales tengan conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional; por ende, si están listados para la misma sesión dos o más asuntos relacionados y, de acuerdo al orden establecido para el estudio de los mismos, resuelven uno que, dado su resultado, incide en la materia de los subsecuentes que se relacionen con éste, aun cuando dicha resolución no esté engrosada en el toca respectivo, por ser precisamente los Magistrados quienes intervinieron en su discusión y votación, en uso de la facultad potestativa que les otorga la ley para dirimir una contienda judicial, es legal que lo invoquen como medio probatorio para fundar lo determinado en los posteriores que guarden estrecha relación con los mismos.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

"Incidente de suspensión (revisión) 60/2002. Nora Patricia Ramos Algalán. 22 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Mario A. Flores García. Secretaria: Claudia Vázquez Montoya.

"Amparo directo 458/2002. María Teresa Martínez Melo o María Teresa Martínez de Torres y otro. 5 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos.

Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretario: Martín Jesús García Monroy.

"Amparo en revisión 313/2002. Mónica Patricia Castro Gaona. 20 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretario: Martín Jesús García Monroy.

"Amparo en revisión 332/2002. Banco Nacional de México, S.A. 3 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretaria: Esther Carús Medina."

De acuerdo con lo anterior, es evidente que se encuentra resuelta la materia de la excusa planteada tanto por la Magistrada **María de los Ángeles Garrido Bello**, como por el Magistrado **Alberto Machuca Aguirre**, esto es, que dejen de conocer del presente juicio.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 16, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con los diversos 10, 11 y 12, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; se resuelve:

R E S O L U T I V O S :

I.- Ha quedado sin materia, la excusa formulada por los Magistrados **Alberto Machuca Aguirre** y **María de los Ángeles Garrido Bello**, para conocer del juicio contencioso administrativo número **13419/06-17-06-1**, de acuerdo a las razones vertidas en el último considerando de este fallo.

II.- NOTIFÍQUESE a las partes y a los Magistrados Alberto Machuca Aguirre y María de los Ángeles Garrido Bello, adscritos a la Sexta Sala Regional Metropolitana, con copia autorizada de esta resolución.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 16 de mayo de 2007, por mayoría de 7 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Francisco Cuevas Godínez, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Guillermo Domínguez Belloc y Luis Malpica y de Lamadrid; 2 con los puntos resolutivos de los Magistrados María del Consuelo Villalobos Ortíz y Luis Carballo Balvanera y 1 en contra del Magistrado Jorge Alberto García Cáceres quien se reservó su derecho para formular voto particular.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Luis Malpica y de Lamadrid, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 30 de mayo de 2007, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Luis Malpica y de Lamadrid, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Lic. Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN LA EXCUSA NÚM. 13419/06-17-06-1/881/06-PL-11-06

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual se expresa en los siguientes términos:

V O T O P A R T I C U L A R

La mayoría de los integrantes del Pleno de la Sala Superior, en el considerando tercero, estimaron que la excusa planteada por los Magistrados María de los Ángeles Garrido Bello y Alberto Machuca Aguirre, integrantes de la Sexta Sala Regional Metropolitana, había quedado sin materia, pues previo al análisis de la presente excusa se resolvió como fundado el incidente de recusación para conocer del juicio 13419/06-17-06-1, por haberse actualizado una de las hipótesis previstas en el artículo 10 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Respetuosamente discrepo del criterio mayoritario que me he permitido sintetizar en el párrafo precedente, porque, en mi opinión, la excusa es improcedente al igual que el juicio en el que se actúa, pues en el resultando primero del presente fallo se precisó que el actor compareció a demandar la nulidad del formulario múltiple de pago número MP-11897545 de fecha 26 de enero de 2006, emitido por el Administrador Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, por el cual se le impone al actor una multa identificada con el número de crédito 1187811, en cantidad de $17,644.00; negando a su vez, que se le hubiera notificado la resolución determinante del crédito.

De lo anterior se advierte que la resolución impugnada en el presente juicio no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que a la letra señala:

> "**Artículo 11.-** El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:
> "**I.** Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

"**II.** Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.
"**III.** Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.
"**IV.** Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.
"**V.** Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.
"Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.
"**VI.** Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"**VII.** Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada.
"**VIII.** Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentra-

lizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.

"**IX.** Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como sus organismos descentralizados.

"**X.** Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente.

"**XI.** Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

"**XII.** Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"**XIII.** Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

"**XIV.** Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.

"**XV.** Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.

"Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

"El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.

"También conocerá de los juicios que se promuevan contra una resolución negativa ficta configurada, en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen las disposiciones aplicables o, en su defecto, por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, conocerá de

> los juicios que se promuevan en contra de la negativa de la autoridad a expedir la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.
> "No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa."

Del precepto transcrito se advierte que serán impugnables en el juicio contencioso administrativo ante este Tribunal, las resoluciones que cumplan con los siguientes requisitos:

1.- Que sean resoluciones definitivas, entendiendo por éstas las que pongan fin a un procedimiento, que no admitan recurso en contra o que dicho medio de defensa sea optativo; y

2.- Que encuadre dentro de uno de los supuestos previstos en las fracciones I a XV.

En el presente caso, la resolución impugnada, detallada anteriormente, no cumple con ninguno de los requisitos señalados, pues si bien, el actor argumenta que a través del formulario múltiple de pago, la autoridad demandada le impone una multa, lo cierto es que dichos formularios no determinan multas, pues son requisitados por el contribuyente, para que a través de ellos, pueda llevar a cabo el pago de la multa, que tuvo que haberse determinado a través de una resolución anterior. Aunado a que no es una resolución definitiva, pues no pone fin a un procedimiento.

En atención a lo anterior, la demanda nunca debió haberse admitido por el Magistrado Instructor, y consecuentemente tampoco debió darse trámite a la excusa en cuestión, pues como se señaló, el juicio es improcedente, lo que conlleva a que la presente instancia también sea improcedente.

MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES NÚM. 2034/96-04-02-9/ac1/761/00-PL-07-04-NN, relacionado con la tesis V-P-SS-915, publicada en R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 78. Junio 2007. p. 23

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual se expresa en los siguientes términos:

V O T O P A R T I C U L A R

La mayoría de los integrantes del Pleno de la Sala Superior, en el considerando tercero del presente fallo, estimaron que el incidente de nulidad de notificaciones era improcedente por extemporáneo, pues la incidentista manifestó que conoció el acuerdo mediante el cual se tuvo por presentada la demanda de amparo el 28 de marzo de 2007, y fue hasta el 10 de abril de ese mismo año cuando interpuso el incidente de nulidad de notificaciones, es decir, después del plazo de cinco días que prevé el artículo 223 del Código Fiscal de la Federación.

Respetuosamente discrepo del criterio mayoritario que me he permitido sintetizar en el párrafo precedente, porque considero que el incidente de nulidad de notificaciones es improcedente, sin embargo, no por las razones expresadas en el proyecto, sino por las siguientes consideraciones:

El artículo 217 del Código Fiscal de la Federación prevé:

"**Artículo 217.-** En el juicio contencioso administrativo sólo serán de previo y especial pronunciamiento:
"(...)
"**III.** El de nulidad de notificaciones.
"(...)"

Del precepto transcrito se advierte que el incidente de nulidad de notificaciones será de previo y especial pronunciamiento, lo que significa que deberá tramitarse y resolverse antes de que se concluya el juicio contencioso administrativo, para lo cual deberá suspenderse el procedimiento hasta que se resuelva dicho incidente.

Ahora bien, el juicio contencioso administrativo inicia con el primer acuerdo dictado por el Magistrado Instructor o por la Sala, ya sea de prevención o de admisión de demanda, y concluye con la notificación de la sentencia definitiva; en ese sentido, el incidente de nulidad de notificaciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 transcrito, únicamente procede en contra de las notificaciones que se lleven a cabo dentro del juicio, es decir, contra la notificación de los acuerdos dictados por el Magistrado Instructor o la Sala, las notificaciones de las sentencias interlocutorias y la notificación de la sentencia definitiva.

En el presente caso, el juicio contencioso administrativo concluyó con la notificación de la sentencia definitiva dictada el 11 de septiembre de 2006, diligencia que se llevó a cabo el 22 de enero de 2007, y el incidente de nulidad de notificaciones se interpuso en contra de la notificación del acuerdo de fecha 14 de febrero de 2007, a través del cual se tuvo por presentada la demanda de amparo y se ordenó remitir los autos del juicio al rubro citado al Tribunal Colegiado del Primer Circuito que en turno corresponda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, 163, 167 y 169 de la Ley de Amparo, que a la letra establecen:

> "**Artículo 44.-** El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta Ley"

> "**Artículo 163.-** La demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá presentare por conducto de la autoridad respon-

sable que lo emitió. Ésta tendrá la obligación de hacer constar al pie del escrito de la misma, la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada y la de presentación del escrito, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; la falta de constancia se sancionará en los términos del artículo siguiente."

"**Articulo 167.-** Con la demanda de amparo deberá exhibirse una copia para el expediente de la autoridad responsable y una para cada una de las partes en el juicio constitucional; copias que la autoridad responsable entregará a aquéllas, emplazándolas para que, dentro de un término máximo de diez días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos."

"**Articulo 169.-** Al dar cumplimiento la autoridad responsable a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior, remitirá la demanda, la copia que corresponda al Ministerio Público Federal y los autos originales al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del término de tres días. Al mismo tiempo rendirá su informe con justificación, y dejará copia en su poder de dicho informe.
"Al remitir los autos, la autoridad responsable dejará testimonio de las constancias indispensables para la ejecución de la resolución reclamada, a menos que exista inconveniente legal para el envío de los autos originales; evento éste en el que lo hará saber a las partes, para que dentro del término de tres días, señalen las constancias que consideren necesarias para integrar la copia certificada que deberá remitirse al tribunal de amparo, adicionadas las que la propia autoridad indique.
"La autoridad responsable enviará la copia certificada a que se refiere el párrafo anterior en un plazo máximo de tres días al en que las partes hagan el señalamiento; si no lo hace, se le impondrá una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. Igual sanción se le impondrá si no da cumplimiento oportunamente a la obligación que le impone el primer párrafo de este propio precepto."

De los artículos transcritos, se desprende que la demanda de amparo directo deberá tramitarse por conducto de la autoridad responsable, quien tendrá la obligación de hacer constar la fecha de notificación al quejoso de la resolución recurrida y la fecha de presentación del amparo, en ese sentido, el escrito correspondiente deberá presentarse con las copias necesarias para cada una de las partes y para el expediente de la autoridad; una vez cumplido con dicho requisito, la autoridad responsable deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para que conozca del juicio de amparo.

En el caso que nos ocupa, la demanda de amparo se promovió en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 de septiembre de 2006, dictada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, por lo que a través de acuerdo de fecha 14 de febrero de 2007, el Presidente de este Tribunal, en calidad de autoridad responsable, ordenó turnar los autos del presente juicio al Tribunal Colegiado del Primer Circuito en turno, para que resolviera el juicio de amparo en cuestión.

Mediante acuerdo de fecha 27 de marzo de 2007, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, admitió a trámite la demanda de amparo radicada con el número D.A. 87/2007.

No obstante que se encontraba concluido el juicio contencioso administrativo que nos ocupa y en trámite el juicio de amparo, mediante oficio número 1102.1.-1783 de fecha 3 de abril de 2007, el Director General Adjunto Jurídico Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, interpuso incidente de nulidad de notificaciones, en contra de la notificación del acuerdo de fecha 14 de febrero de 2007, por el que se tuvo por presentada la demanda de amparo y ordenó turnar los autos del presente juicio al Tribunal Colegiado del Primer Circuito en turno, para que resolviera el juicio de amparo en cuestión.

En ese sentido, el incidente de nulidad de notificaciones descrito debió desecharse de plano, pues en primer término, se interpuso contra la notificación de

un acuerdo dictado fuera del juicio contencioso administrativo, una vez que se había dictado y notificado la sentencia definitiva y en segundo lugar, dicho incidente no procedía en contra de la notificación de un acuerdo emitido por este Tribunal en calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, máxime que las notificaciones de dicho acuerdo se deben hacer a la luz de la Ley de Amparo y no de las disposiciones aplicables al juicio contencioso administrativo, pues en ese caso el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo actúa en auxilio de la justicia federal y no puede hacer pronunciamiento alguno en relación al juicio de amparo.

A lo anterior resulta aplicable la tesis III.1o.A.20 K, de la Novena Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 770, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta número V, Marzo de 1997, que a la letra señala:

> "**AMPARO DIRECTO, DEMANDA DE. LA AUTORIDAD RESPONSABLE CARECE DE FACULTADES PARA RESOLVER CUESTIONES RESPECTO DE LAS CUALES NO TIENE ATRIBUCIONES LEGALES.-** De acuerdo con los artículos 44, 163, 167, 169 y 174 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable únicamente tiene las facultades y atribuciones expresamente establecidas en esos dispositivos legales, como dar trámite a las demandas de amparo directo interpuestas en contra de sus actos, por lo que si dicha autoridad resuelve cuestiones relativas a desechar, fijar competencias o proveer respecto del libelo constitucional, con excepción de lo referente a la suspensión del acto reclamado, lo hace en contravención de sus atribuciones legalmente conferidas, en atención a que corresponde exclusivamente a los Tribunales Colegiados proveer respecto de aquellos temas.
>
> "PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

"Reclamación 11/96. Gustavo Pimienta Ruiz y otros. 21 de noviembre de 1996. Mayoría de votos. Ponente: Rogelio Camarena Cortés. Disidente: Guillermo David Vázquez Ortiz. Secretario: José Vega Cortés.

"Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV-Agosto, tesis IV.2o.13 K, pág. 658."
(Énfasis añadido)

De la tesis transcrita se desprende que la autoridad responsable no tiene facultades para pronunciarse en el juicio de amparo, sino, en su caso, únicamente respecto de la suspensión de la ejecución del acto reclamado, por lo que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su calidad de autoridad responsable en los juicios de amparo directo, una vez presentada la demanda de amparo, únicamente deben dar el trámite correspondiente previsto en los artículos 44, 163, 167, 169 y 174 de la Ley de Amparo, cualquier pronunciamiento distinto a la remisión de los autos al Tribunal Colegiado o a la suspensión de la ejecución del acto reclamado, es violatorio de dichos preceptos.

En consecuencia, tramitar el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto en contra de la notificación del acuerdo que tuvo por presentada la demanda de amparo y que ordena la remisión de los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para su resolución, contravino las disposiciones citadas.

MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO LUIS CARBALLO BALVANERA EN EL INCIDENTE DE INCOMPETENCIA NÚM. 8671/06-17-07-8/5345/06-07-03-7/324/07-PL-02-02, relacionado con la tesis V-P-SS-916, publicada en R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 78. Junio 2007. p. 29

El que suscribe expone a continuación las razones por las cuales se aparta de lo resuelto por la mayoría en el caso a estudio.

La mayoría de los magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior, determinaron en el considerando tercero del presente fallo, que resultó infundado el incidente de incompetencia planteado por la Tercera Sala Regional de Occidente, por lo que concluyeron que la competente para conocer del juicio principal, es precisamente dicha Sala Regional, no así la Séptima Sala Regional Metropolitana.

La determinación que antecede se sustenta, básicamente, en las siguientes consideraciones:

1.- Que de acuerdo a los señalamientos realizados en el escrito de demanda, se desprende que la parte actora impugna: a) las resoluciones determinantes de los créditos fiscales 051695233, 056695233, 051695233, y 056695233, mismos que niega conocer en términos del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; b) la notificación de dichas resoluciones determinantes; y c) los mandamientos de ejecución, requerimientos de pago y actas de embargo, a través de los cuales, se pretende hacer efectivos los aludidos créditos fiscales.

2.- Que de los documentos que contienen los citados mandamientos de ejecución, requerimientos de pago y actas de embargo, se advierte que estos actos impugnados fueron expedidos por el Jefe de la Oficina para Cobros Juárez de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3.- Que si la sede de la autoridad emisora de los actos impugnados se encuentra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es evidente que le corresponde conocer del juicio por razón de territorio a la Tercera Sala Regional de Occidente, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y, 23, fracción VII y 24, fracción VII del Reglamento Interior del propio Tribunal.

4.- Que no es óbice a la determinación que antecede, que mediante acuerdo de 28 de marzo de 2006, la Magistrada Instructora de la Séptima Sala Regional Metropolitana, haya concedido la suspensión provisional de la ejecución de los actos impugnados; ya que tal determinación no implica la aceptación tácita de la competencia para conocer del asunto.

5.- Que el otorgamiento de la suspensión provisional, tiene como propósito únicamente preservar la materia del juicio y no se encuentra dirigida a allegarse de elementos para la solución del asunto, sino a evitar que entre el momento de la declaratoria de incompetencia de la Sala Regional y aquél en que se asume la competencia por la diversa Sala Regional a la que la primera envía los autos, el demandante sufra algún daño o perjuicio, si durante ese lapso la autoridad pretende ejecutar el acto combatido.

6.- Que al otorgar la suspensión provisional, la Magistrada Instructora no realiza gestión o requerimiento alguno que implique que se ha decidido tácitamente conocer del asunto, sino simplemente evitar que el enjuiciante quede en estado de indefensión al no poder obtener al menos la suspensión provisional del acto impugnado por haberse suscitado un incidente de incompetencia, con lo cual la finalidad de la suspensión se haría nugatoria y la tutela jurisdiccional sería ineficaz en contravención a la garantía individual de acceso a la justicia contemplada en el artículo 17 Constitucional.

No comparto la forma y términos en que se resolvió el incidente de incompetencia que nos ocupa, porque el artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece en su parte conducente lo siguiente:

> "**Artículo 30.-** Cuando ante una de las Salas Regionales se promueva juicio de la que otra deba conocer por razón de territorio, **se declarará incompetente de plano** y comunicará su resolución a la que en su concepto corresponderá ventilar el negocio, enviándole los autos.
> "(…)"
>
> (El énfasis es nuestro)

Como se advierte, el precepto legal transcrito le impone a las Salas Regionales de este Tribunal, el deber de declararse incompetentes de plano, cuando se promueva un juicio del que otra deba conocer por razón de territorio, lo que significa que en estos casos, la declaratoria de incompetencia tendrá que operar sin que exista algún requerimiento, gestión o actuación del Magistrado Instructor ante el cual se radicó la demanda, que implique abocarse al conocimiento del juicio.

En el caso que nos ocupa, la Magistrada Instructora de la Séptima Sala Regional Metropolitana, mediante acuerdo de 28 de marzo de 2006, transcrito en la página 12 de la sentencia no compartida, concedió la suspensión provisional de la ejecución de los actos impugnados y le requirió a la autoridad demandada para que en el plazo de 3 días hábiles, rindiera su informe de ley, apercibida que de no hacerlo o que el informe rendido no se refiriera específicamente a los hechos que le imputa la demandante, se tendrían por ciertos los mismos.

Las precisiones que anteceden, evidencian que en el caso concreto existió una actuación de la Magistrada Instructora que sí implicó la aceptación tácita de la competencia para conocer del juicio, ya que al conceder la suspensión de la ejecución de los actos impugnados y al efectuar el citado requerimiento a la autoridad demandada,

está comprometiendo a la Sala Regional de la cual es parte integrante, a conocer del asunto, lo que se corrobora pues un pronunciamiento de esa magnitud sólo es posible efectuarlo cuando la Sala previamente ha aceptado la competencia que le atribuyó la enjuiciante al presentar la demanda, por lo que es inconcuso que con posterioridad a esa actuación ya no puede declinarla válidamente.

El criterio que antecede, es congruente y se ajusta a la tesis de jurisprudencia V-J-SS-26, sustentada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal y que en el caso se dejó de observar por la mayoría, no obstante que su aplicación es obligatoria en términos del artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que en dicha jurisprudencia se postula, en lo substancial, que la intención del legislador al emplear la palabra "**de plano**", no pudo ser otra sino que la declaratoria de incompetencia se haga de inmediato, sin que medie alguna gestión o requerimiento de ningún tipo a las partes que implique abocarse al conocimiento del juicio, que no necesariamente tiene que ser cuando se admite una demanda, sino también cuando se hace un pronunciamiento como el efectuado por la Magistrada Instructora de la Séptima Sala Regional Metropolitana.

La citada tesis de jurisprudencia **V-J-SS-26**, se encuentra visible en la Revista editada por el propio Tribunal, Quinta Época, número 36, correspondiente al mes de diciembre de 2003, cuyo rubro y texto es el siguiente:

> "**INCOMPETENCIA. EL REQUERIMIENTO DEL INSTRUCTOR, PREVIO A LA ADMISIÓN A LA DEMANDA, TRAE IMPLÍCITA LA ACEPTACIÓN TÁCITA DE LA COMPETENCIA, POR LO QUE CON POSTERIORIDAD A ESA ACTUACIÓN YA NO PODRÁ DECLINARLA VÁLIDAMENTE.-** El primer párrafo del artículo 218 del Código Fiscal de la Federación, le impone a las Salas Regionales de este Tribunal el deber de declararse incompetente de plano, cuando se promueva un juicio del que otra deba conocer, por razón de territorio. La expresión 'declararse incompetente de plano' debe entenderse en el sentido de que la declaratoria de incompetencia tendrá que operar de inmediato, sin que medie alguna gestión o requeri-

miento de ningún tipo a las partes que implique abocarse al conocimiento del juicio, ya que la intención del legislador al emplear la palabra "de plano", no pudo ser otra sino que la declaratoria de incompetencia se haga antes de que se realice algún pronunciamiento en el juicio, que no necesariamente tiene que ser cuando se admite una demanda, sino también cuando se hace un apercibimiento de tener por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, porque en ambos casos el juzgador inició la tramitación y conocimiento del juicio, aceptando con ello tácitamente la competencia del juicio, puesto que un requerimiento de esa magnitud sólo es posible efectuarlo cuando previamente se ha aceptado la competencia que le atribuyó la enjuiciante a la Sala Regional al presentar la demanda, por lo que con posterioridad a esa actuación ya no podrá declinarla válidamente. (3)

"(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/24/2003, de 22 de agosto de 2003)

"**PRECEDENTES:**

"**V-P-SS-289**
"Juicio No. 282/02-03-01-1/8408/02-17-11-3/750/02-PL-01-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de noviembre de 2002, aprobado por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
"(Tesis aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2002)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 30. Junio 2003. p. 151.

"**V-P-SS-290**
"Juicio No. 567/02-15-01-4/637/02-08-01-5/996/02-PL-04-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de enero de 2003, aprobado por mayoría de 7 votos a

favor y 4 en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
"(Tesis aprobada en sesión de 17 de enero de 2003)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 30. Junio 2003. p. 151.

"**V-P-SS-310**
"Juicio No. 264/01-02-01-9/18594/02-17-10-7/107/02-PL-01-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de febrero de 2003, por unanimidad de 8 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Martha Elizabeth Ibarra Navarrete.
"(Tesis aprobada en sesión de 24 de febrero de 2003)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 31. Julio 2003. p. 127."

Por otra parte, es importante señalar que en la sentencia no compartida se determinó que la Séptima Sala Regional Metropolitana, es incompetente por razón de territorio para conocer del juicio, lo que significa que lo actuado por la Magistrada Instructora de dicha Sala, es nulo de pleno derecho atento a lo establecido en el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, según lo dispone su artículo 1º.

En tal virtud, no puede sostenerse por la mayoría para justificar su determinación que el otorgamiento de la suspensión provisional, tiene como propósito preservar la materia del juicio y evitar que el demandante sufra algún daño o perjuicio, ya que al resultar nulo todo lo actuado por la Magistrada Instructora de la Séptima Sala Regional Metropolitana, es inconcuso que la suspensión provisional concedida a la demandante, no puede surtir plenos efectos jurídicos.

Por lo anterior, considero que si la intención es que se proteja la materia del juicio y evitar que la actora sufra algún daño o perjuicio, debió determinarse que

correspondía seguir conociendo la Sala Regional en la que uno de sus integrantes otorgó la suspensión provisional, pues el efecto jurídico que se produjo al decidir el Magistrado Instructor sobre la suspensión del acto impugnado, es la aceptación tácita de la competencia que le atribuyó la parte actora.

Cabe señalar, que el efecto jurídico que postulo en este voto particular, mantiene un respeto puntual a las reglas sobre competencia territorial de las salas regionales que integran este Tribunal, sin que por ello se disminuya la importancia que tiene proveer sobre la suspensión del acto administrativo impugnado, lo cual debe ser asumido por el Órgano Jurisdiccional competente.

A fin de tener una ilustración comparativa, quiero resaltar que en materia de suspensión conviene tener presente la experiencia del juicio de amparo, en donde se ha desarrollado toda una doctrina de carácter proteccionista, tan es así que en esa materia existe disposición expresa en la Ley de Amparo, que autoriza a un juez de amparo incompetente, para proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución del acto reclamado, como se corrobora de lo establecido en los artículos 17 y 54 de la Ley en comento que son del tenor siguiente:

> "**Artículo 17.-** Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En este caso, el Juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y, habido que sea, ordenará que se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado."

"**Artículo 54.-** Admitida la demanda de amparo ningún juez de Distrito podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva.
"En los casos de notoria incompetencia del juez de Distrito ante quien se presente la demanda, el juez se limitará a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando se trate de actos de los mencionados en el artículo 17, remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al juez de Distrito que considere competente. Fuera de estos casos, recibida la demanda, el juez de Distrito, sin proveer sobre su admisión y sin substanciar incidente de suspensión, la remitirá con sus anexos al juez de Distrito que corresponda."

(El énfasis es nuestro)

Como se advierte, el artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Amparo, faculta a un juez de amparo incompetente a proveer sobre la suspensión provisional, únicamente cuando el acto reclamado es de los mencionados en el artículo 17 de la misma Ley, esto es, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal (penas de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, etc.).

De acuerdo con lo anterior, es evidente que el legislador atendiendo a la gravedad o trascendencia que tienen determinados actos sobre la esfera jurídica de los particulares, facultó al juez de amparo para hacer un pronunciamiento respecto a la suspensión solicitada, previamente a su declaratoria de incompetencia, pero fuera de estos casos el fin protector de la suspensión no se actualiza, ya que el juez incompetente debe remitir la demanda de garantías con sus anexos al juez de Distrito que corresponda, sin proveer sobre su admisión y sin substanciar incidente de suspensión.

Cabe referir, que a diferencia de la regulación que existe en la Ley de Amparo, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no existe precepto legal alguno que establezca que una Sala Regional incompetente por razón de territorio, pueda actuar decretando la suspensión de la ejecución del acto impugnado y con posterioridad pueda declararse incompetente, como aconteció en el caso concreto, de ahí que no comparta la determinación de la mayoría, porque al aceptar como válida esta actuación, están integrando la ley que rige el procedimiento contencioso, pues le otorgan competencia territorial a una Sala Regional a fin de que se pronuncie sobre la suspensión solicitada, sin que exista disposición legal expresa que respalde tal determinación.

En las razones anteriores, baso mi voto en contra de la sentencia que nos ocupa.

MAG. LUIS CARBALLO BALVANERA

QUINTA PARTE

ACUERDOS GENERALES

SALA SUPERIOR.
SEGUNDA SECCIÓN.
ACUERDO G/S2/5/2007.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 30, fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia V-J-2aS-26, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA V-J-2aS-26.

RECURSO DE RECLAMACIÓN EXTEMPORÁNEO.- El artículo 62, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el recurso se presentará en el plazo de 5 días siguientes a aquél en el que surta efectos la notificación de la sentencia interlocutoria que conceda o niegue la suspensión definitiva, materia de la impugnación, por lo que, debe desecharse por extemporáneo si se presenta fuera de dicho plazo.

PRECEDENTES RELACIONADOS:

V-P-2aS-534.
Recurso de Reclamación 291/06-03-01-4/494/06-S2-09-05, interpuesto por la recurrente y demandante Blanca Catalina Fonseca Herrera. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 29 de agosto de 2006, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Luis Carballo Balvanera, Secretaria: Licenciada Mónica Guadalupe Osornio Salazar. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Número 73. Enero 2007. Tomo III. Página 1232.

V-P-2aS-591.
Recurso de Reclamación 9659/05-12-01-9/ac1/723/06-S2-09-05, interpuesto por el Administrador Local Jurídico de Puebla Sur, en el Juicio Contencioso Administrativo promovido por Rústicos San Rafael, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 1º de febrero de 2007, por unanimidad 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Luis Carballo Balvanera, Secretario: Licenciado Oscar Elizarrarás Dorantes. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Número 74. Febrero 2007. Página 508.

V-P-2aS-616.
Recurso de Reclamación 1799/06-03-01-9/946/06-S2-07-05, interpuesto por Ramiro Lara Arroyo, autorizado del demandante Enrique Páez Arce. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 27 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada María Elda Hernández Bautista. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Número 75. Marzo 2007. Página 241.

V-P-2aS-617.
Recurso de Reclamación 1349/06-08-01-9/66/07-S2-08-05, interpuesto por Rosalía Sánchez Ramírez, autorizada de la demandante Ajial de México, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 1º de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Manuel Ángel Sánchez. Precedente aprobado en esa misma fecha. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Número 75. Marzo 2007. Página 241.

V-P-2aS-618.
Recurso de Reclamación 592/06-14-01-5/137/07-S2-08-05, interpuesto por la recurrente y demandante Grupo Guerrero de Infraestructura, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 15 de marzo de 2007, por unanimidad de

4 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Francisco Javier Marín Sarabia. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Número 75. Marzo de 2007. Página 241.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves veintiuno de junio de dos mil siete.- Firman para constancia, el Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR.
SEGUNDA SECCIÓN.
ACUERDO G/S2/6/2007.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 30, fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia V-J-2aS-27, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA V-J-2aS-27.

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, TRATÁNDOSE DE UNA MULTA ADMINISTRATIVA NO FISCAL.- PARA OTORGARSE SE REQUIERE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL.- El artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la posibilidad de que el demandante solicite ante este Tribunal la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, lo cual procederá y surtirá sus efectos, si ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Así una multa impuesta por una autoridad administrativa no fiscal no resulta ser un accesorio de una contribución pero sí constituye un crédito fiscal. En efecto, el artículo 3° del Código Fiscal de la Federación, establece que son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, entre otros, y que también son aprovechamientos los derivados de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias. Por su parte, el artículo 4° del citado Código consigna que son créditos fiscales, los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovecha-

mientos. Por lo que, si una multa es impuesta por una autoridad administrativa distinta de la fiscal, constituye un crédito fiscal y la autoridad respectiva puede exigir dicho pago que no hubiese sido cubierto o garantizado dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, con base en lo dispuesto en la parte conducente del artículo 145 del Código invocado. En consecuencia, la suspensión operará en forma simultánea con el otorgamiento de la garantía, tal como se establece en el artículo 28, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

PRECEDENTES RELACIONADOS:

V-P-2aS-556
Recurso de Reclamación 602/06-14-01-9/587/06-S2-07-05, interpuesto por el recurrente y demandante Javier Silva López. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 17 de octubre de 2006, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada María Elda Hernández Bautista. Precedente aprobado en la sesión privada ordinaria celebrada en esa misma fecha. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Tomo III. Número 73. Enero 2007. Página 1377.

V-P-2aS-592
Recurso de Reclamación 2674/06-12-01-9/887/06-S2-08-05, interpuesto por la recurrente María del Carmen Carrasco Mazzoco, representante legal de la demandante Servicio Santa María, S. A. de C. V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 15 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretaria: Licenciada Claudia Lucía Cervera Valeé. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Número 74. Febrero 2007. Página 509.

V-P-2aS-633
Recurso de Reclamación 4034/06-17-02-9/885/06-S2-07-05, interpuesto por la recurrente y autoridad demandada Titular del Área de Responsabilidades del Órgano

Interno de Control, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el Juicio Contencioso Administrativo promovido por Telecomunicaciones Modernas y Servicios Avanzados, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 13 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada María Elda Hernández Bautista. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Número 75. Marzo 2007. Página 378.

V-P-2aS-634
Recurso de Reclamación 852/06-14-01-4/821/06-S2-10-05, interpuesto por el recurrente y demandante David Cherem Ades. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 13 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Secretaria: Licenciada Gabriela Badillo Barradas. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Número 75. Marzo 2007. Página 378.

V-P-2aS-661
Recurso de Reclamación 2109/06-16-01-2/234/07-S2-09-05, interpuesto por el recurrente y demandante Carlos Eduardo Figueroa Vadillo. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 12 de abril de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Luis Carballo Balvanera, Secretario: Licenciado Oscar Elizarrarás Dorantes. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Número 76. Abril 2007. Página 388.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves veintiuno de junio de dos mil siete.- Firman para constancia, el Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR.
SEGUNDA SECCIÓN.
ACUERDO G/S2/7/2007.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 30, fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia V-J-2aS-28, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA V-J-2aS-28.

CONCEPTOS DE ANULACIÓN.- LA FALTA DE CITA DE LOS PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS, NO ES SUFICIENTE PARA DESESTIMARLOS.- Si en la demanda de nulidad se expresan argumentos lógico jurídicos suficientes que tiendan a evidenciar la ilegalidad de la resolución impugnada, ello es suficiente para que esta Juzgadora proceda a su análisis, puesto que para que se estudie un concepto de anulación, basta que en la demanda se exprese claramente la causa de pedir -causa petendi- ya que en el artículo 208, fracción VI del Código Fiscal de la Federación, no se exige como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de anulación se haga con formalidades rígidas y solemnes. Además, la demanda no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, como así se establece en el artículo 237 del Código en cita. Por tanto, es razonable tener como concepto de anulación, el razonamiento que se haga, aun cuando el mismo no guarde un apego estricto a la forma lógica del silogismo, puesto que es suficiente que en alguna parte del escrito de demanda se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es el agravio que la actora estima le causa la resolución impugnada y los motivos que originaron dicho agravio, para que esta Juzgadora deba estudiarlo con-

forme al principio de que todo Tribunal examina los hechos y resuelve conforme a derecho, “iura novit curia” recogido por el artículo 237 del citado Código.

PRECEDENTES RELACIONADOS:

IV-P-2aS-104
Juicio de Nulidad 100(20)65/98/225/98, promovido por Cientec, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública celebrada el jueves 28 de enero de 1999, por unanimidad 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada María Luisa de Alba Alcántara. Precedente aprobado en la sesión privada celebrada en esa misma fecha. Publicado en la Revista de la Cuarta Época. Año II. Número 9. Abril 1999. Página 209.

IV-P-2aS-223
Juicio de Nulidad 828/96-07-01-2/ac1/99-S2-07-04, promovido por Rovi Textil, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública celebrada el martes 9 de noviembre de 1999, por mayoría de 4 votos a favor, y 1 voto más con los puntos resolutivos. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada María Luisa de Alba Alcántara. Precedente aprobado en la sesión privada celebrada en esa misma fecha. Publicado en la Revista de la Cuarta Época. Año III. Número 20. Marzo 2000. Página 181.

IV-P-2aS-321
Juicio Nulidad 3180/99-11-03-4/399/00-S2-07-04, promovido por Almacenadora Creditzam, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 6 de junio de 2000, por mayoría de 4 votos a favor, y 1 voto en contra. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada María Luisa de Alba Alcántara. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de la Cuarta Época. Año III. Número 29. Diciembre 2000. Página 234.

V-P-2aS-306
Juicio Contencioso Administrativo 2246/02-09-01-9/808/03-S2-09-01, promovido por Industrias Therme, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública celebrada el martes 23 de septiembre de 2003, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Luis Carballo Balvanera, Secretaria: Licenciada Mónica Guadalupe Osornio Salazar. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de la Quinta Época. Año IV. Número 40. Abril 2004. Tomo I. Página 217.

V-P-2aS-624
Juicio Contencioso Administrativo 34877/04-17-04-6/444/06-S2-06-03[09], promovido por Biorad, S.A. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 6 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Luis Carballo Balvanera, Secretario: Licenciado Salvador Jesús Mena Castañeda. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de la Quinta Época. Año VII. Número 75. Marzo de 2007. Página 345

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves veintiuno de junio de dos mil siete.- Firman para constancia, el Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe

SALA SUPERIOR.
SEGUNDA SECCIÓN.
ACUERDO G/S2/8/2007.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 30, fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia V-J-2aS-29, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA V-J-2aS-29.

SUPLENCIA DE LOS ADMINISTRADORES DE ADUANAS.- BASTA INVOCAR EL FUNDAMENTO LEGAL QUE LA ADMITA, PARA QUE RESULTE PROCEDENTE.- En términos del artículo 10, penúltimo párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado oficialmente el 22 de marzo de 2001, los Administradores de las Aduanas serán suplidos, indistintamente, por los Subadministradores o por los Jefes de Departamento que de ellos dependan, sin que la disposición legal conmine a la autoridad suplente a motivar en el acto respectivo los motivos de su actuación por ausencia del titular, o las causas que la originaron, resultando suficiente para cumplir con el mandamiento del artículo 16 Constitucional, el señalamiento en la resolución o acto emitido por la autoridad suplente, del precepto legal que admite dicha suplencia, y la indicación de que su suscripción la realiza supliendo al Titular de la Aduana.

PRECEDENTES RELACIONADOS:

V-P-2aS-391
Juicio Contencioso Administrativo 23268/03-17-02-1/311/04-S2-10-03, promovido por Aluplastic, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 14 de septiembre de 2004, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Secretaria: Licenciada Gabriela Badillo Barradas. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año V. Tomo I. Número 49. Enero 2005. Página 357.

V-P-2aS-522
Juicio Contencioso Administrativo 2669/05-09-01-1/194/06-S2-08-03, promovido por PPG Industries de México, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 8 de agosto de 2006, por unanimidad 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretaria: Licenciada Claudia Lucía Cervera Valeé. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Número 73. Enero 2007. Tomo II. Página 1068.

V-P-2aS-523
Juicio Contencioso Administrativo 3404/05-07-03-4/423/06-S2-09-03, promovido por Cecohesa, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 3 de octubre de 2006, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Luis Carballo Balvanera, Secretaria: Licenciada Rosa Guadalupe Olivares Castilla. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Tomo II. Número 73. Enero 2007. Página 1068.

V-P-2aS-606
Juicio Contencioso Administrativo 31875/04-17-08-9/274/06-S2-09-03, promovido por Duplan, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes

27 de febrero 2007, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Luis Carballo Balvanera, Secretario: Licenciado Oscar Elizarrarás Dorantes. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Número 75. Marzo 2007. Página 163.

V-P-2aS-607
Juicio Contencioso Administrativo 29765/04-17-11-7/27/06-S2-10-03, promovido por Duplan, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 27 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Secretaria: Licenciada Isabel Margarita Messmacher Linartas. Precedente aprobado en esa misma sesión. Publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Número 75. Marzo de 2007. Página 163.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves veintiuno de junio de dos mil siete.- Firman para constancia, el Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SEXTA PARTE

JURISPRUDENCIAS Y TESIS
DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

JURISPRUDENCIAS

PLENO

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ESTABLECE LOS MESES DE ACREDITAMIENTO QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA EFECTUAR EL AJUSTE RESPECTIVO (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004).
(P./J. 3/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. Pleno, febrero 2007, p. 5

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ EL AJUSTE BASADO EN LA PROPORCIÓN DE ACREDITAMIENTO DE UN MES ANTERIOR, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). (P./J. 4/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. Pleno, febrero 2007, p. 6

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ EL AJUSTE DEL IMPUESTO ACREDITABLE EN MATERIA DE INVERSIONES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). (P./J. 1/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. Pleno, febrero 2007, p. 7

VALOR AGREGADO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL ACREDITAMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES GRAVADAS, EXENTAS O MIXTAS QUE TENGAN INVERSIONES EN LOS TÉRMINOS DEL PROPIO PRECEPTO (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). (P./J. 2/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. Pleno, febrero 2007, p. 9

VALOR AGREGADO. LA REMISIÓN QUE HACE EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO A LOS PORCENTAJES MÁXIMOS DE DEDUCCIÓN DE INVERSIONES ESTABLECIDOS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). (P./J. 5/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. Pleno, febrero 2007, p. 10

VALOR AGREGADO. LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA OPCIÓN PREVISTA POR EL ARTÍCULO 4o.-B DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, RESULTAN INOPERANTES (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). (P./J. 6/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. Pleno, febrero 2007, p. 11

PRIMERA SALA

EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD.
(1a./J. 97/2006)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, enero 2007, p. 231

FINES EXTRAFISCALES. LAS FACULTADES DEL ESTADO EN MATERIA DE RECTORÍA ECONÓMICA Y DESARROLLO NACIONAL CONSTITUYEN UNO DE SUS FUNDAMENTOS. (1a./J. 28/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, marzo 2007, p. 79

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DESDE SU COMISIÓN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE CONOCIMIENTO DEL ILÍCITO Y DE SU AUTOR, AQUÉLLA SE ACTUALIZARÁ EN UN PLAZO DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE ESE MOMENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). (1a./J. 73/2006)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, enero 2007, p. 322

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 25 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE MAYO DE 2004, NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE NO SE RIGEN POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. (1a./J. 17/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 476

RENTA. EL ARTÍCULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OTORGAR UNA OPCIÓN PARA CALCULAR EL GRAVAMEN A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006). (1a./J. 18/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 509

SEGUNDA SALA

ACTIVO. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. (2a./J. 13/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2a. Sala, febrero 2007, p. 669

AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. EL CONSENTIMIENTO DE LA NORMA GENERAL RECLAMADA, POR FALTA DE IMPUGNACIÓN DE APLICACIONES ANTERIORES, TIENE SU FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE AMPARO (MATERIA ADMINISTRATIVA). (2a./J. 1/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, enero 2007, p. 489

AUTORIDADES ADUANERAS. EL PLAZO DE 4 MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE HASTA EL 2 DE FEBRERO DE 2006, PARA QUE EMITAN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE EN ESE NUMERAL SE ESTABLECE, DEBE EMPEZAR A CONTARSE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE AL RESPECTO SE LEVANTE. (2a./J. 206/2006)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, enero 2007, p. 490

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS O EL CRÉDITO FISCAL CORRESPONDIENTE, PARA FUNDARLA BASTA CITAR EL ARTÍCULO 42, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (2a./J. 207/2006)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, enero 2007, p. 491

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS. AL SER LA SUSPENSIÓN DE SU REGISTRO UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LE CAUSA AGRAVIO EN MATERIA FISCAL, ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 11 DE SU LEY ORGÁNICA.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "materia fiscal"debe entenderse todo lo relacionado con la recaudación de impuestos o de multas o con las sanciones impuestas por infracciones a las leyes tributarias. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis 2a. XI/2003, que el requerimiento de información y/o documentos que formula el fisco federal al contador público autorizado que dictaminó los estados financieros, con copia al contribuyente, en términos del artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, constituye una resolución definitiva que afecta a ambos, respecto de la cual, si se pretende su nulidad, es necesario impugnarla a través del juicio contencioso administrativo de manera destacada, ya que se impone al profesionista señalado por el desempeño de su actividad. Ahora bien, la expresión "que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores"contenida en el artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se refiere a una afectación relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales, así como a los casos distintos a aquellos en los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco, por la determinación de una obligación fiscal en cantidad líquida; por la negativa de la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales; o por la imposición de multas por infracción a las normas administrativas federales. En consecuencia, la suspensión del registro que autoriza a un contador público para dictaminar estados financieros para efectos fiscales, constituye una resolución definitiva que causa un agravio en materia fiscal diferente a los supuestos señalados y, por ende, es impugnable a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual debe agotarse previamente al juicio de garantías. (2a./J. 21/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2a. Sala, febrero 2007, p. 733

CRÉDITO AL SALARIO. TIENE LA NATURALEZA DE UN ESTÍMULO FISCAL Y, POR ELLO, NO RESULTAN APLICABLES LAS GARANTÍAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN, NI SE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DESTINO AL GASTO PÚBLICO. (2a./J. 16/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 275

CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO SURTE EFECTOS SIN GARANTÍA ALGUNA.
(2a./J. 26/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 299

CUOTAS COMPENSATORIAS. LA FACULTAD PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL EXAMEN DE SU VIGENCIA, NO CADUCA CUANDO SE DICTA FUERA DEL PLAZO DE 220 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89 F, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR.
(2a./J. 39/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 300

DECOMISO. EL SISTEMA PREVISTO EN LA LEY ADUANERA PARA IMPONER TAL SANCIÓN A LA IMPORTACIÓN ILEGAL DE MERCANCÍAS, NO SE RIGE POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE PROHÍBE LAS MULTAS EXCESIVAS. (2a./J. 20/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 301

DERECHO SOBRE AGUA. PARA LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE SU COBRO, CONFORME AL ARTÍCULO 229 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LA AUTORIDAD PUEDE OPTAR POR CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE PREVÉ ESE NUMERAL PARA CALCULAR EL VOLUMEN USADO, EXPLOTADO O APROVECHADO. (2a./J. 200/2006)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, enero 2007, p. 553

EQUIDAD TRIBUTARIA. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.
(2a./J. 31/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 334

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2004. CUMPLE CON EL REQUISITO FORMAL DE LA PREVIA APROBACIÓN DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA. (2a./J. 22/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 409

INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. (2a./J. 201/2006)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, enero 2007, p. 637

RENTA. EL ARTÍCULO 130 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ESE IMPUESTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, AL LIMITAR EL BENEFICIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XV, INCISO A), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA LAS GARANTÍAS DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA Y DE RESERVA DE LEY. (2a./J. 36/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 512

RENTA. LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002,QUE PREVÉN EL PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL CRÉDITO AL SALARIO Y QUE ÉSTE SÓLO PUEDE DISMINUIRSE CONTRA DICHO TRIBUTO A CARGO DEL PATRÓN O DEL RETENIDO A TERCEROS, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. (2a./J. 9/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2a. Sala, febrero 2007, p. 734

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ESTÁN LEGITIMADOS EL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS MENCIONADOS EN LA PARTE FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETA-

RÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA INTERPONER AQUEL RECURSO EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE ESA DEPENDENCIA, CUANDO ÉSTE ACUDE AL JUICIO DE GARANTÍAS CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 22 DE ENERO DE 2003).- El artículo 19 de la Ley de Amparo establece que las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de garantías; sin embargo, tal limitación no es aplicable cuando un órgano del Estado es llamado a esa contienda constitucional con el carácter de tercero perjudicado, supuesto en el cual el órgano respectivo puede ser representado por un tercero diverso al titular o al que legalmente lo representa, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del citado ordenamiento. Por tanto, cuando el Secretario de Hacienda y Crédito Público es señalado como tercero perjudicado en un juicio de amparo en el que se reclama una sentencia emitida por una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe estimarse que en términos de lo previsto en los artículos 200 del Código Fiscal de la Federación (vigente en dos mil dos) y 105 del reglamento interior de esa dependencia, el Procurador Fiscal de la Federación, el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, el Director General de Amparos contra Leyes y el Director General de Amparos contra Actos Administrativos, pueden válidamente ostentar, indistintamente, la representación del titular de la referida Secretaría e interponer en su nombre el recurso de revisión en contra del fallo que emita el respectivo Tribunal Colegiado de Circuito. (2a./J. 17/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 540

SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA NATURALEZA DE LA NORMA QUE REGULA EL PROGRAMA RELATIVO ES FORMALMENTE ADMINISTRATIVA PERO MATERIALMENTE LABORAL, POR LO QUE LOS CONFLICTOS Y EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE SURJAN CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDE A AUTORIDADES ESPECIALIZADAS EN ESTA ÚLTIMA MATERIA. (2a./J. 35/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 556

TRATADOS INTERNACIONALES. ADMITEN DIVERSAS DENOMINACIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTENIDO. (2a./J. 10/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2a. Sala, febrero 2007, p. 738

TRATO PREFERENCIAL ARANCELARIO. SI EL QUEJOSO CONTRIBUYENTE OPTÓ POR ESTE BENEFICIO, SE ACTUALIZA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS POR DIFERENCIAS DE TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR. (2a./J. 24/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 608

VALOR AGREGADO. EL AJUSTE DEL ACREDITAMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO GENERA INCERTIDUMBRE JURÍDICA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). (2a./J. 30/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 662

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ EL AJUSTE DEL IMPUESTO ACREDITABLE EN MATERIA DE INVERSIONES, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). (2a./J. 29/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 664

VALOR AGREGADO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL IMPUESTO ACREDITABLE CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY RELATIVA NO ES INCOMPRENSIBLE Y, POR TANTO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). (2a./J. 27/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 665

VALOR AGREGADO. EL TRATO DIVERSO QUE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO OTORGA EN MATERIA DE ACREDITAMIENTO A LOS CONTRIBUYENTES QUE REALICEN INVERSIONES FRENTE A LOS QUE NO LO HAGAN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). (2a./J. 32/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 666

VALOR AGREGADO. LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, APOYADOS EN SITUACIONES PARTICULARES O HIPOTÉTICAS, SON INOPERANTES (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). (2a./J. 28/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 667

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. (I.4o.A. J/48)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 4o. T.C. del 1er. C., enero 2007, p. 2121

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. (I.6o.C. J/52)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 6o. T.C. del 1er. C., enero 2007, p. 2127

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

PAGO DE LO INDEBIDO. NO SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DE CONTRIBUCIONES PAGADAS CON BASE EN UNA LEY QUE CON POSTERIORIDAD FUE DECLARADA INCONSTITUCIONAL. (I.7o.A. J/34)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 7o. T.C. del 1er. C., enero 2007, p. 2148

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO

DOCTRINA. LA CITA O INVOCACIÓN DE UNA POSICIÓN TEÓRICA DETERMINADA NO IMPLICA QUE SEA ACERTADA, NI OBLIGATORIA PARA LOS ÓRGANOS JUDICIALES. (II.2o.P. J/24)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o.T.C. del 2o. C., febrero 2007, p. 1436

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

ACTA DE IRREGULARIDADES CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO. CUANDO SE TRATE DE MERCANCÍA DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN LA AUTORIDAD LA LEVANTARÁ TAN PRONTO TENGA CONOCIMIENTO DEL DICTAMEN PERICIAL CORRESPONDIENTE (INAPLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 39/2006). (IV.3o.A. J/13)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 4o. C., febrero 2007, p. 1401

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD

PROMOVIDO POR UN PENSIONADO O JUBILADO CONTRA LA NEGATIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO O DE LOS ÓRGANOS DEPENDIENTES DE ÉSTE, DE PAGAR DIFERENCIAS RESPECTO DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE DICHO INSTITUTO.- Del análisis al artículo 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que este órgano es competente para conocer y resolver respecto de resoluciones de carácter administrativo dictadas en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Luego, toda resolución dictada por dicha entidad o por los órganos competentes dependientes de ella en ese entorno de pensiones, se ubica en el citado supuesto competencial. Aunado a lo anterior, debe ponderarse que la gratificación anual que prevé el último párrafo del artículo 57 de la ley que rige dicho instituto en favor de los jubilados y pensionados, es un concepto que guarda íntima relación con la propia pensión, por tres razones: la primera, porque el derecho a recibirla depende de que se obtenga una pensión de cualquier naturaleza; la segunda, porque se otorga sin distingo a todos los que legalmente gozan del carácter de jubilados y pensionados; y, la tercera, porque por más que materialmente se entregue por separado de la pensión, se cuantifica según la cuota diaria que corresponde a ésta. Bajo ese orden de ideas se concluye que cualquier determinación que dicho instituto adopte en un plano de supra a subordinación sobre el otorgamiento de tal gratificación anual, como la negativa de pagar diferencias respecto de ésta, constituye en puridad jurídica una resolución administrativa dictada en materia de pensiones civiles con cargo al referido instituto y, por ende, su impugnación es susceptible de conocerse por el mencionado tribunal. (IV.3o.A. J/14)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 4o. C., marzo 2007, p. 1558

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES POR NOVEDOSOS SI SE REFIEREN A LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN EL JUICIO FISCAL Y ELLO NO SE PLANTEÓ ANTE LA SALA DEL CONOCIMIENTO (ALCANCES DE LA TESIS 2a. LXXII/2006).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXII/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 403, de rubro: "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA OMITE PRONUNCIARSE AL RESPECTO, TAL CUESTIÓN PUEDE PLANTEARSE EN LA DEMANDA DE AMPARO.", sostuvo que de conformidad con el artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el numeral 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada y si no hace el pronunciamiento respectivo, ese tema puede plantearse en el amparo directo a efecto de que el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del asunto resuelva dicha cuestión. Sin embargo, de la ejecutoria que dio origen a tal criterio se advierte que sólo se refiere a aquellos casos en que se viertan argumentos respecto a la "carencia"de competencia de la autoridad administrativa y no cuando se plantee la falta de fundamentación de su competencia territorial, pues son dos aspectos distintos. Por ello, cuando se viertan conceptos de violación en amparo directo encaminados a evidenciar la falta de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa, sin haberse esgrimido conceptos de anulación sobre el mismo tema ante la Sala Fiscal, aquéllos, deben declararse inoperantes por novedosos; es decir, como en tal supuesto no se está en presencia de un alegato atinente a la "carencia"de competencia que obligue al

juzgador de amparo a emprender su análisis, sí debe aplicarse la regla establecida por el propio Tribunal Supremo en el sentido de que el acto reclamado no debe analizarse a la luz de razonamientos o hechos que no conoció la autoridad responsable.
(VI.3o.A. J/62)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 6o. C., marzo 2007, p. 1487

DOMICILIO FISCAL. EL SIMPLE AVISO DE SU CAMBIO POR EL CONTRIBUYENTE NO ES SUFICIENTE PARA TENER COMO NUEVO EL AHÍ SEÑALADO. (VI.3o.A. J/61)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 6o. C., febrero 2007, p. 1450

MULTAS NO TRIBUTARIAS. EN EL ACTO DE SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. (VI.3o.A. J/60)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 6o. C., febrero 2007, p. 1490

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO

NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. EL CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO NO ES UN REQUISITO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE DEBA CUMPLIRSE POR EL DILIGENCIARIO AL PRACTICARLA. (VII.1o.A.T. J/32)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 7o. C., marzo 2007, p. 1542

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO

REVISIÓN FISCAL. SU PROCEDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005), NO SÓLO SE ENCUENTRA SUPEDITADA A QUE EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LAS AUTORIDADES AHÍ SEÑALADAS, Y QUE SE INTERPONGA OPORTUNAMENTE, SINO TAMBIÉN A LA NATURALEZA PROPIA DEL ASUNTO.- Conforme a la fracción III del citado artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, la procedencia del recurso de revisión fiscal no sólo está condicionada a que se trate de una resolución cuya autoría sea responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales y que, además, se encuentre interpuesto oportunamente; sino que es necesario que, aunado a ello, se atienda a la naturaleza del asunto, determinada por el origen de la resolución materia de examen en la sentencia definitiva recurrida, en correspondencia directa con lo resuelto en el propio fallo por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, en correlación con la sustancia misma de lo decidido en la potestad contenciosa administrativa, lo que se corrobora con la verificación de que el asunto coincida con alguna de las diferentes hipótesis previstas en los incisos que integran la fracción III del citado artículo 248 (con excepción del d) y del e) que no constituyen propiamente condiciones de procedencia); de no atenderse a este último requisito -el de la naturaleza del asunto- se tornarían letra muerta los distintos supuestos específicos de procedencia del recurso claramente diferenciados en dicha fracción, lo que atentaría contra el carácter excepcional de tal medio impugnativo. (VII.2o.C. J/26)

S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T.C. del 7o. C., febrero 2007, p. 1576

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO

REVISIÓN FISCAL. POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE LA LEY SÓLO EL ABOGADO GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRI-

CIDAD TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO, EN REPRESENTACIÓN DE DICHO ORGANISMO.- Del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, se advierte que el recurso de revisión fiscal se instituyó como un mecanismo de defensa excepcional a favor de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad que obtuvieron un fallo adverso, cuya procedencia se condicionó a la satisfacción de ciertos requisitos formales como el relativo a la legitimación, facultad que se dio a la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica, por ser la que cuenta con el personal y los elementos necesarios para que el citado medio de impugnación se interponga con la formalidad que requieren los asuntos respectivos a fin de asegurar la adecuada defensa de dichas autoridades. En este sentido, no es jurídicamente posible aceptar que un superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, o un apoderado o representante legal del organismo recurrente tengan legitimación procesal para interponer el recurso de mérito, pues no obstante que en términos de los artículos 14, fracción III, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 8o., fracciones XVII y XVIII, del estatuto orgánico de la citada paraestatal, su director general tiene originalmente, entre otras facultades, la de representarla como apoderado general para pleitos y cobranzas e inclusive la de delegar y revocar poderes, dentro de las cuales no se encuentra la de interponer el recurso de revisión fiscal, luego, la facultad conferida a las autoridades demandadas en el juicio de nulidad para impugnar la legalidad de las resoluciones definitivas emitidas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que les sean adversas, necesariamente debe ejercerla por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, que por disposición expresa de la ley, es el abogado general de la Comisión Federal de Electricidad, de conformidad con los artículos 3o., apartado B, fracción VII y 15, fracciones V y VI, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. (XXI.2o.P.A. J/9)

S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T.C. del 21er. C., febrero 2007, p. 1562

TESIS

PLENO

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4º., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ UNA LIMITANTE PARA EFECTOS DEL ACREDITAMIENTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1º. DE DICIEMBRE DE 2004). (P. V/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. Pleno, febrero 2007, p. 13

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4º., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ UNA LIMITANTE PARA EFECTOS DEL ACREDITAMIENTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1º. DE DICIEMBRE DE 2004). (P. VI/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. Pleno, febrero 2007, p. 14

PRIMERA SALA

ACTIVO. PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO, LAS PERSONAS MORALES QUE CONSOLIDAN ESTADOS FINANCIEROS PUEDEN ELEGIR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5o.-A DE LA LEY DE LA MATERIA. (1a. XLVII/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 631

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL ARTÍCULO 60, PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (1a. V/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, enero 2007, p. 471

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. LOS ARTÍCULOS 59 Y 60, PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN IV DE ESTE ÚLTIMO, DE LA LEY RELATIVA RESPETAN EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. (1a. IV/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, enero 2007, p. 472

AGENTES ADUANALES. LOS ARTÍCULOS 164, FRACCIÓN IV Y 165, FRACCIÓN III, DE LA LEY ADUANERA, AL PREVER CAUSAS DE SUSPENSIÓN EN SUS FUNCIONES, ASÍ COMO DE CANCELACIÓN DE LA PATENTE RESPECTIVA, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002).
(1a. II/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, enero 2007, p. 472

AUTOMÓVILES NUEVOS. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ DIVERSOS SUPUESTOS DE EXENCIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2005). (1a. I/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, enero 2007, p. 473

CONSOLIDACIÓN FISCAL. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO, RESULTAN INOPERANTES, PUES LA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DERIVA DE LA DECISIÓN DE TRIBUTAR BAJO DICHO RÉGIMEN.(1a. XLIV/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 632

CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 57 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA SANCIONARLOS, NO EXCE-

DE LOS LÍMITES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.(1a. XX/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 634

DEDUCCIÓN DE GASTOS NECESARIOS E INDISPENSABLES. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (1a. XXX/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 637

DEDUCCIONES. CRITERIO PARA SU INTERPRETACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (1a. XXVIII/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 638

DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. (1a. XXIX/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 638

DEMANDA DE NULIDAD ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO. EL ARTÍCULO 207, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, AL DISPONER QUE DEBE DEPOSITARSE EN EL LUGAR DONDE RESIDE EL DEMANDANTE, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL.- El citado precepto al disponer que cuando la demanda de nulidad se envíe por correo certificado debe depositarse en la oficina del Servicio Postal Mexicano del lugar en que reside el demandante, cuando éste tenga su domicilio en un lugar distinto al de la sede de la Sala Fiscal que deba conocer de la controversia, no transgrede el derecho a la tutela jurisdiccional contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se trata de un requisito de procedibilidad razonable para iniciar el procedimiento admi-

nistrativo que no impide que los afectados hagan valer un medio jurídico de defensa, ni retarda arbitraria o indefinidamente la función de administrar justicia. Por el contrario, si se permitiera enviar la demanda desde un lugar distinto al del domicilio del demandante o al de residencia de la Sala respectiva, se entorpecería la función jurisdiccional por el tiempo que perdería el actor en trasladarse o por el tiempo que tardaría en llegar a la Sala competente; de ahí que lejos de obstaculizar su derecho de acceso a la justicia, el aludido requisito la hace expedita. (1a. LXXIV/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, marzo 2007, p. 259

DEMANDA DE NULIDAD ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO. EL ARTÍCULO 207, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, AL DISPONER QUE DEBE DEPOSITARSE EN EL LUGAR DONDE RESIDE EL DEMANDANTE, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.- El citado precepto, al establecer la obligación de que la demanda de nulidad sea depositada exclusivamente en la oficina del Servicio Postal Mexicano del lugar en que reside el demandante, no viola la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional, pues no impide que el demandante sea oído en juicio; por el contrario, prevé un beneficio para el demandante, pues establece una opción alterna a la regla general a que se refiere el primer párrafo del propio artículo -que la demanda debe ser presentada directamente ante la Sala Regional competente, en los casos en los que el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala o cuando ésta se encuentre en el Distrito Federal y el domicilio del demandante fuera de él-. Esto es, precisamente con el objeto de que esté en aptitud de presentar su demanda, cuando su residencia sea en distinto lugar al de la sede de la Sala Fiscal que deberá conocer de la controversia le permite enviarla por correo certificado, sujetándole al cumplimiento del requisito o formalidad de que lo haga desde la oficina del Servicio Postal del lugar de su residencia; lo cual, lejos de violar la garantía de audiencia o derecho de defensa, implica una facilidad para que los gobernados accedan a ella. (1a. LXXV/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, marzo 2007, p. 260

EQUIDAD TRIBUTARIA. SU ÁMBITO DE APLICACIÓN COMPRENDE DISPOSICIONES LEGALES QUE TRASCIENDEN AL MONTO DE LA OBLIGACIÓN FISCAL DE PAGO, AUNQUE NO AFECTEN DIRECTAMENTE LA CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN. (1a. XXXIV/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 639

ESTÍMULO FISCAL. LA MEDIDA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 TIENE ESA NATURALEZA Y NO LA DE UNA EXENCIÓN. (1a. XXXIII/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 640

ESTÍMULOS FISCALES. EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.
(1a. XXXV/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 641

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN VIII, INCISO J), DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES, RELATIVO A DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA REFORMA AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, AL EXCLUIR A LAS EMPRESAS QUE CONSOLIDAN PARA EFECTOS FISCALES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD. (1a. XLVIII/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 642

FINES FISCALES Y EXTRAFISCALES. (1a. XXXVI/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 643

INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS APLICABLES EN MATERIA TRIBUTARIA. (1a. XXV/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 648

INFRACCIONES FISCALES PREVISTAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO LES SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (1a. XXVI/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 649

INTERÉS JURÍDICO DEL RECURRENTE PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN, SE ACTUALIZA CUANDO EN UN JUICIO DE NULIDAD LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO ESTUDIA ALGÚN CONCEPTO DE ANULACIÓN Y EL TRIBUNAL COLEGIADO CONCEDE EL AMPARO POR CUESTIONES DE LEGALIDAD Y OMITE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD.- La falta de estudio de alguno de los conceptos de anulación hechos valer en un juicio de nulidad no constituye una violación procedimental, sino que se trata de una cuestión de mera legalidad, por lo que si el quejoso interpone un amparo directo, en contra de una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y plantea como conceptos de violación la omisión en su estudio y por otra parte, la inconstitucionalidad de las normas en que se fundamentó la sentencia recurrida, si el Tribunal Colegiado concede el amparo por la cuestión de legalidad y omite estudiar la de constitucionalidad, -situación que le hubiera otorgado un mayor beneficio- el quejoso tiene interés jurídico para interponer el recurso de revisión ante la ausencia del estudio de los planteamientos de constitucionalidad, ya que de lo contrario habrá consentido la constitucionalidad de las normas reclamadas. De ahí, que el momento procesal oportuno para reclamar la falta de estudio de los planteamientos de constitucionalidad de los preceptos reclamados que le fueron aplicados en la primera sentencia del juicio de nulidad, es en el primer amparo interpuesto en su contra. (1a. XXIV/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 651

INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ESTABLEZCA QUE EL DEPOSITARIO DESIGNADO TENDRÁ ESE CARÁCTER O EL DE ADMINISTRADOR, SIN REPRODUCIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, NO LO TORNA INCONSTITUCIONAL. (1a. LXVII/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, marzo 2007, p. 262

LAS INFRACCIONES FISCALES SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y POR LAS GARANTÍAS DEL DERECHO PENAL, EN LO QUE RESULTEN APLICABLES.
(1a. XXVII/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 652

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 14, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER QUE SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA CUANDO EXISTEN TERCEROS INTERESADOS Y NO SE PROPORCIONE SU NOMBRE Y DOMICILIO, NO VIOLA EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho a la tutela judicial, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede verse conculcado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. En congruencia con tal criterio, se concluye que el artículo 14, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2005, al prever que cuando existan terceros interesados y no se proporcione su nombre y domicilio se tendrá por no presentada la demanda, no viola el derecho a la tutela jurisdiccional, en virtud de que se trata de un requisito de procedibilidad razonable y proporcional a la luz del derecho al acceso a la justicia en tanto que es indispensable para comenzar

un proceso jurisdiccional que salvaguarde dos elementos esenciales para el adecuado acceso a la jurisdicción: el equilibrio procesal y la expeditez en la impartición de justicia, pues si se eximiera al demandante de dicho requisito, se lesionarían las garantías de audiencia, igualdad entre las partes y el acceso a la justicia de su contraparte -en este caso los terceros interesados-, ya que la parte afectada no podría ser llamada a juicio ni podría alegar sus resistencias y excepciones en el proceso. Asimismo, la exigencia de proporcionar el nombre y domicilio de los terceros interesados resulta razonable en términos de procurar una justicia expedita, pues de dispensar al demandante de dicho requisito de procedibilidad el actuario o notificador se vería en la complicada tarea de buscar sujetos indeterminados a lo largo del país, lo que implicaría que los procedimientos no podrían resolverse dentro de los plazos y términos que establece la ley, además de que se diezmarían los recursos personales y materiales con que cuenta el juzgador para impartir justicia. (1a. LIII/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 656

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 14, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER QUE SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA CUANDO EXISTEN TERCEROS INTERESADOS Y NO SE PROPORCIONE SU NOMBRE Y DOMICILIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.- El artículo 14, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2005, al prever que cuando existan terceros interesados y no se proporcione su nombre y domicilio se tendrá por no presentada la demanda, no resulta ser una disposición desmedida ni viola la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que, en primer lugar, no impone una consecuencia inmediata, sino que previamente obliga al juzgador a requerir al promovente para que subsane dicha falta dentro del término de cinco días, apercibiéndolo de la consecuencia jurídica que traería el incumplimiento de dicho requerimiento; en segundo, porque la determinación de tener por no presentada la demanda no deja sin defensa al impetrante de garantías, pues la citada Ley

establece en su artículo 59 el recurso de reclamación como un medio para impugnar, entre otras, dicha resolución. Por ello, es claro que se satisfacen las garantías de defensa y respeto de las formalidades esenciales del procedimiento contenidas en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. (1a. LIV/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 657

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o.-C DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006). (1a. LI/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 658

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o.-C DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006). (1a. LII/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 659

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XII, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, QUE DEFINE EL CONCEPTO "CONTRAPRESTACIÓN", NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006). (1a. VIII/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, enero 2007, p. 478

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 11, AMBOS DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, AL DEFINIR EL CONCEPTO "CONTRAPRESTACIÓN"NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006). (1a. VII/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, enero 2007, p. 478

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006). (1a. IX/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, enero 2007, p. 479

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 25 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (1a. LV/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 659

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 25 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DEL TRABAJO. (1a. LVI/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 660

RENTA. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR LA EXPRESIÓN "O DE CUALQUIER OTRO TIPO" NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. (1a. CXCI /2006)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, enero 2007, p. 480

RENTA. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2004, COMPRENDE A LA QUITA COMO INGRESO GRAVABLE, SIN QUE SEA NECESARIA UNA MENCIÓN EXPRESA EN EL REFERIDO ORDENAMIENTO. (1a. CXC/2006)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, enero 2007, p. 481

RENTA. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2004, EN TANTO COMPRENDE A LA QUITA COMO INGRESO GRAVABLE, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. (1a. CXCII/2006)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, enero 2007, p. 482

RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL IMPÚESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE LA NO DEDUCIBILIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES, NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. (1a. XXXI/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 661

RENTA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, VIOLA LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. (1a. LXX/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, marzo 2007, p. 265

RENTA. EL ARTÍCULO 52, SEGUNDO PÁRRAFO, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 47, FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, VIOLAN LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (1a. LXXI/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, marzo 2007, p. 266

RENTA. EL ARTÍCULO 129 DEL REGLAMENTO DE LA EY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006). (1a. LVII/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 663

RENTA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "INGRESO"PARA EFECTOS DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.- Si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta no define el término "ingreso", ello no implica que carezca de sentido o que ociosamente el legislador haya creado un tributo sin objeto, toda vez que a partir del análisis de las disposiciones legales aplicables es posible definir dicho concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. Ahora bien, para delimitar ese concepto debe apuntarse que el ingreso puede recibirse de muchas formas, ya que puede consistir en dinero, propiedad o servicios, incluyendo alimentos o habitación, y puede materializarse en efec-

tivo, valores, tesoros o productos de capital, además de que puede surgir como compensación por: servicios prestados; el desarrollo de actividades comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras o silvícolas; intereses; rentas, regalías o dividendos; el pago de pensiones o seguros; y por obtención de premios o por recibir donaciones, entre otras causas. Sin embargo, la enunciación anterior no debe entenderse en el sentido de que todas estas formas de ingreso han de recibir el mismo trato o que todas se consideran acumulables, sino que el listado ilustra la pluralidad de actividades que pueden generar ingresos. Aunado a lo anterior, es particularmente relevante que la legislación aplicable no establece limitantes específicas al concepto "ingreso", ni acota de alguna manera las fuentes de las que éste podría derivar, dada la enunciación amplia de los artículos 1o. y 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establecen que las personas morales están obligadas al pago del tributo respecto de todos sus ingresos y que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. Así, se desprende que la mencionada Ley entiende al ingreso en un sentido amplio, pues incluye todo lo recibido o realizado que represente una renta para el receptor, siendo innecesario que el ingreso se traduzca en una entrada en efectivo, pues incluso la propia Ley reconoce la obligación de acumular los ingresos en crédito, de tal suerte que el ingreso se reconoce cuando se han actualizado todos los eventos que determinan el derecho a recibir la contraprestación y cuando el monto de dicha contraprestación puede conocerse con razonable precisión. En ese sentido, se concluye que la regla interpretativa para efectos del concepto "ingreso"regulado en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta es de carácter amplio e incluyente de todos los conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio del contribuyente, salvo que el legislador expresamente hubiese efectuado alguna precisión en sentido contrario, como acontece, por ejemplo, con el segundo párrafo del citado artículo 17. (1a. CLXXXIX/2006)

S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, enero 2007, p. 483

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 1998. NO PROCEDE SU ANÁLISIS EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN, TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE LA FRACCIÓN IX, DEL

ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL Y 83, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. (1a XLV/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1a. Sala, febrero 2007, p. 664

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JULIO DE 1997, QUE PREVÉ UN PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS EN MATERIA DE PENSIONES, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. (1a. XVIII/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, enero 2007, p. 485

VALOR AGREGADO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO RESPECTO DEL ARTÍCULO 2o.-C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, POR TRANSGREDIR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). (1a. LXXIII/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, marzo 2007, p. 268

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o.-C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DEL GRAVAMEN PARA QUIENES TRIBUTAN CONFORME AL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). (1a. LXXII/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, marzo 2007, p. 269

VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA SU IMPORTACIÓN DEFINITIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE AGOSTO DE 2005, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD. (1a. LXVI/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1a. Sala, marzo 2007, p. 270

SEGUNDA SALA

VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004). (2a. III/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, enero 2007, p. 823

AUTOMÓVILES NUEVOS. EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). (2a. XIX/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 701

AUTOMÓVILES NUEVOS. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO RELATIVO AL ESTABLECER DIVERSAS EXENSIONES AL TRIBUTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2005). (2a. XIII/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 701

CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 6º. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DE AUTODETERMINAR LAS CONTRIBUCIONES, SIN PREVER REMUNERACIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 5º. DE LA CONSTITUCIÓN. (2a. V/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2a. Sala, febrero 2007, p. 741

JURISPRUDENCIA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA FISCAL. PROCEDE SU APLICACIÓN MIENTRAS ÉSTA NO SEA REFORMADA.- El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias P./J. 112/99 y P./J. 89/97, publicadas en el Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 19 y Tomo VI, diciembre de 1997, página 10, con los rubros: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA."y "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO.", respectivamente, sostuvo que los efectos de una sentencia que concede el amparo contra leyes son los de proteger al quejoso no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, sino también contra su aplicación futura, lo que significa que esa ley no será válidamente aplicada al gobernado en el futuro, y que cuando una ley es reformada procederá un nuevo juicio de garantías, aun cuando su contenido sea similar o igual, por tratarse de un nuevo acto legislativo, lo que a *contrario sensu* implica que mientras no sea reformado el texto legal se está ante el mismo acto legislativo. En ese tenor, si la jurisprudencia sobre la constitucionalidad de una norma fiscal no está limitada por el principio de anualidad, resulta evidente que su aplicación será procedente mientras no sea reformada.
(2a. IV/2007)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2a. Sala, febrero 2007, p. 741

RENTA. LOS ARTÍCULOS 127, 177 Y SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO CREAN INDEFINICIÓN PARA APLICAR LA EXCLUSIÓN GENERAL ANUAL EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, RESPECTO DE PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES. (2a. XIV/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 708

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE NULIDAD POR NO HABERSE AGOTADO

PREVIAMENTE A SU PROMOCIÓN EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES.- Conforme al criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LV/89, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 123, la suplencia de la queja deficiente prevista en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, la cual debe ser clara y patente, obvia, innegable e indiscutible, y cuya existencia no pueda derivarse de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales establece que contra los actos o resoluciones definitivas de "la Autoridad del Agua"que causen agravio a particulares, se podrá interponer el recurso de revisión. En ese sentido, el desechamiento de la demanda en el juicio de nulidad por no haberse agotado previamente el mencionado medio de defensa no constituye una violación manifiesta de la ley que haga procedente la suplencia de la queja deficiente, ya que la consecuencia legal del referido desechamiento resulta de la aplicación del indicado artículo 124, así como del diverso numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aunado a que el actor del juicio de nulidad no queda sin defensa, pues tiene la oportunidad de recurrir el desechamiento a través de la reclamación. (2a. XX/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 710

TERRITORIALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. SU FUNDAMENTO DERIVA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL.
(2a. VII/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 711

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO PRIMERO, PARTE SEGUNDA, DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL). (2a. IX/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 712

VALOR AGREGADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO PRIMERO, PARTE SEGUNDA, DE LA LEY RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL). (2a. VIII/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 712

VALOR AGREGADO. LA IMPOSIBILIDAD DE QUE LOS CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES EXENTAS PUEDAN ACREDITAR EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004). (2a. XII/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 713

VALOR AGREGADO. LAS EXENCIONES CONTENIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PERSIGUEN FINES EXTRAFISCALES GENÉRICOS, FRENTE A LOS ESPECÍFICOS PRETENDIDOS POR LA TASA DEL 0%. (2a. XI/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 714

VALOR AGREGADO. LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO REALTIVO SUJETOS A LA TASA DEL 0% Y LOS EXENTOS, NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES JURÍDICAS SEMEJANTES PARA EFECTOS DEL ACREDITAMEINTO. (2a. X/2007)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2a. Sala, marzo 2007, p. 715

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES, ES FACTIBLE EL ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LAS NORMAS JURÍDICAS IMPLÍCITAMENTE APLICADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ORIGEN. (I.1o.A.139 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1611

ESTÍMULOS FISCALES. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL DOS PARA LA ACTIVIDAD DEL AEROTRANSPORTE NO SE LIMITA A LOS CONTRIBUYENTES QUE TENGAN EN SUS ACTIVOS EXCLUSIVAMENTE AVIONES.
(I.1o.A.144 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1707

EXENCIÓN FISCAL, AL AFECTAR EL NACIMIENTO Y CUANTÍA DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. SU APLICACIÓN DEBE SER ESTRICTA. (I.1o.A.145 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1707

MEDIDA PRECAUTORIA, LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE LA REGULAN NO GENERA EFECTOS RETROACTIVOS. (I.1o.A.146 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1824

SUSPENSIÓN CONTRA LA EJECUCIÓN O COBRO DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS EN MATERIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. SON APLICABLES, POR IDENTIDAD DE RAZÓN, LAS REGLAS QUE RIGEN TRATÁNDOSE DEL COBRO DE CONTRIBUCIONES. (I.1o.A.141 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1897

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LA GARANTÍA REVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA DEBE FIJARSE Y REQUERIR SU EXHIBICIÓN POR LA AUTORIDAD ANTE LA QUE SE SOLICITA AQUÉLLA. (I.1o.A.140 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1898

VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LA AUTORIDAD ADUANERA NO ESTÁ FACULTADA PARA EMITIR LA ORDEN RESPECTIVA CUANDO AQUÉLLAS SE ENCUENTRAN EN UN RECINTO FISCAL O FISCALIZADO. (I.1o.A.143 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1915

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA, TIENE OBLIGACIÓN DE IDENTIFICARSE EN ACATAMIENTO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.
(I.2o.A.48 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1801

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

BANCO DE MÉXICO. NATURALEZA Y EFECTOS DE LA PUBLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. (I.3o.C.601 C)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 1er.C., marzo 2007, p. 1613

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

ACTO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. LO CONSTITUYE LA RECEPCIÓN DEL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN. (I.4o.A.566 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 4o. T.C. del 1er. C., marzo 2007, p. 1581

ACTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, POR TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. SÓLO EN PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN O REMATE DEBE ESPERARSE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN PARA PROMOVER AMPARO. (I.4o.C.18 K)

S.J.F. IX Época. T. XXV. 4o. T.C. del 1er. C., marzo 2007, p. 1583

DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PUEDE ORDENARLA AL RESOLVER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SI YA TRANSCURRIERON LOS PLAZOS QUE TIENE LA AUTORIDAD FISCAL PARA RESOLVER LO CONDUCENTE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003).- En términos del artículo 22, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación (vigente en 2003), la devolución de un saldo a favor debe efectuarse dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, informes y documentos que señala el reglamento del código o dentro de los cuarenta días en que se presentó la solicitud tratándose de devoluciones que se efectúen mediante depósito en cuenta bancaria del contribuyente y, para verificar la procedencia de la devolución, se podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la solicitud, los datos, informes o documentos adicionales que se consideren necesarios y que estén relacionados con la misma. Por tanto, aun cuando la autoridad fiscal tiene la facultad de determinar respecto de la devolución del saldo a favor solicitado, sólo puede hacerlo al tenor y conforme a las reglas establecidas en la propia disposición de manera vinculatoria, de manera que si no lo hace en estos términos, precluye esa facultad, es decir, pierde su oportunidad para negar la devolución del saldo a favor solicitado, al no oponerse o decidir al respecto dentro de los plazos señalados. En ese orden de ideas, es inatendible el argumento de la autoridad en el sentido de que debió respetársele su facultad para decidir si declaraba procedente o no la solicitud de devolución de saldo a favor y, por el contrario, es correcta la determinación de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de ordenar a dicha autori-

dad dictar otra resolución -en lugar de la negativa ficta impugnada- a fin de que devuelva al particular el saldo a favor en los términos solicitados. (I.4o.A.558 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 4o. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1696

DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LA AUTORIDAD NO PUEDE ARGUMENAR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD RELATIVA O REQUERIR DATOS, INFORMES O DOCUMENTOS ADICIONALES SI TRANSCURRIERON LOS PLAZOS PARA RESOLVER LO CONDUCENTE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). (I.4o. A.557 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 4o. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1696

MARCA. PREVIA CONCESIÓN DE SU REGISTRO DEBE OTORGARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A QUIEN EN DIVERSO PROCEDIMIENTO SOLICITÓ LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN POR EL USO DE UNA SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSIÓN, AUN CUANDO LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO PREVEA LA FIGURA DE TERCERO OPOSITOR. (I.4o.A.552 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 4o. T.C. del 1er. C., enero 2007, p. 2265

ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. EL HECHO DE QUE ESTÉ DIRIGIDA ÚNICAMENTE A UNO DE LOS COPROPIETARIOS DEL INMUEBLE MOTIVO DE LA REVISIÓN Y NO A TODOS, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (I.4o.A.551 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 4o. T.C. del 1er. C., enero 2007, p. 2282

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. QUIEN PRESENTA UNA DENUNCIA O QUEJA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INEXISTENCIA DE AQUÉLLA. (I.4o.A.572 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 4o. T.C. del 1er. C., marzo 2007, p. 1765

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

PENSIÓN JUBILATORIA. LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA INTEGRACIÓN DE LA. SON IMPRESCRIPTIBLES POR LO QUE EL JUICIO DE NULIDAD PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO. (I.5o.A.52 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 5o. T.C. del 1er. C., enero 2007, p. 2288

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 5º., FRACCIÓN VII Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉ EL DESECHAMIENTO DE LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUTRIAL, QUE INCUMPLAN EL REQUISITO A QUE ALUDE SIN MEDIAR REQUERIMIENTO Y DENTRO DE LOS DOS MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE ENTREGUEN, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. (1.5o.A.56 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 5o. T.C. del 1er. C., marzo 2007, p. 1748

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

AMPARO DIRECTO CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA POR EL PLENO O LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SI LA DEMANDA RELATIVA SE PRESENTA ANTE LA SALA REGIONAL DE DICHO ÓRGANO QUE SE ENCARGÓ DE LA INSTRUCCIÓN DEL JUICIO Y, POR ELLO, ES RECIBIDA EXTEMPORÁNEAMENTE POR AQUELLAS AUTORIDADES, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO.- La fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías es improcedente cuando la demanda correspondiente se presenta extemporáneamente,

es decir, después de que han transcurrido los plazos previstos por los artículos 21 y 22 de ese cuerpo legal. Asimismo, tratándose de la presentación de la demanda de amparo directo, los artículos 163 y 165 de la ley de la materia prevén, respectivamente, que debe hacerse ante de la autoridad responsable, so pena de que, hacerlo ante autoridad distinta, no interrumpirá los aludidos plazos. Por su parte, los artículos 16 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establecen, respectivamente, cuáles son los asuntos que corresponden a la competencia del Pleno y de las Secciones de la Sala Superior; a su vez, el artículo 30 de dicha ley señala que las Salas Regionales conocerán de los juicios que se describen en el artículo 11, con excepción de los que corresponda resolver al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior. En ese tenor, si se promueve amparo contra una sentencia definitiva dictada por el Pleno o las Secciones de la Sala Superior y la demanda se presenta ante la Sala Regional que se encargó de la instrucción del juicio, es claro que no se interrumpen los plazos previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo y, por tanto, para establecer la oportunidad de la presentación del escrito correspondiente, debe atenderse a la fecha de su recepción en el Pleno o las Secciones de la Sala Superior, por ser las autoridades responsables para efectos del juicio constitucional, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo y si de dicho cómputo se advierte que transcurrió el plazo de mérito, debe decretarse el sobreseimiento con fundamento en la fracción III del artículo 74, en relación con la fracción XII del numeral 73 de la Ley de Amparo. (I.7o.A.505 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 7o. T.C. del 1er. C., marzo 2007, p. 1589

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). CONTRA SU RESOLUCIÓN QUE ORDENA A UNA INSTITUCIÓN DE SEGUROS LA CONSTITUCIÓN E INVERSIÓN DE UNA RESERVA TÉCNICA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SI PREVIAMENTE NO SE AGOTARON LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS.- La determinación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros por la cual obliga a una institución de seguros para que efectúe la constitución e inversión de una reserva técnica específica para las obligaciones pendientes

de cumplir, en términos del artículo 68, fracción X, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, es impugnable, optativamente, mediante el recurso de revisión ante dicha comisión o por medio del juicio contencioso administrativo, seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con el artículo 99 de la citada ley, ya que esa resolución pone fin a un procedimiento de conciliación que es distinto al arbitral. En tal virtud, si la quejosa promueve juicio de amparo indirecto contra tal acto, sin que previamente haya agotado los medios de defensa ordinarios, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, máxime que los artículos 24 a 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevén mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado. (I.7o.A.494 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 7o. T.C. del 1er. C., enero 2007, p. 2201

CUOTAS COMPENSATORIAS. EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89 F DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR NO SE CONTRAPONE AL ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 11.4 DEL "ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VI DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 1994. (I.7o.A.501 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 7o. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1686

CUOTAS COMPENSATORIAS. LA RESOLUCIÓN DERIVADA DEL EXAMEN DE SU VIGENCIA EMITIDA FUERA DEL PLAZO DE 220 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89 F DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR ES ILEGAL. (I.7o.A.502 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 7o. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1687

ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. SU CÁLCULO DE MANERA MENSUAL BASE "1994=100", EXPRESADOS CONFOR-

ME A LA "BASE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2002=100", NO SON CONTRARIOS A LOS ARTÍCULOS 17-A Y 21 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO. (I.7o.A.490 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 7o. T.C. del 1er. C., marzo 2007, p. 1692

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO NO CONLLEVA LA IMPROCEDENCIA DE AQUÉL, AÚN CUANDO EN AMBOS SE HAYAN IMPUGNADO LOS MISMOS ACTOS. (I.7o.A.504 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 7o. T.C. del 1er. C., marzo 2007, p. 1708

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL CONTRIBUYENTE AFECTADO POR EL EMBARGO CONTRA LA REMOCIÓN DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA Y EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO DEPOSITARIO CON ESE CARÁCTER (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). (I.7o.A.499 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 7o. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1804

NULIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI EL ACTOR AFIRMA DESCONOCER EL CRÉDITO FISCAL QUE ORIGINÓ LOS ACTOS DE EJECUCIÓN IMPUGNADOS Y LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA SE ALLANA A ÉSTA SIN EXHIBIR LA CONSTANCIA DE AQUÉL NI SU NOTIFICACIÓN. LA DECLARATORIA RESPECTIVA SÓLO PUEDE SER RESPECTO DE LOS EXPRESAMENTE COMBATIDO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). ((I.7o.A.503 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 7o. T.C. del 1er. C., marzo 2007, p. 1732

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. NO CAUSA PERJUICIO AL VISITADO EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD FISCAL OMITA REVISAR Y DETERMINAR ALGÚN RUBRO DEL OBJETO DE AQUÉLLA.
(I.7o.A.495 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 7o. T.C. del 1er. C., enero 2007, p. 2283

RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN I, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE CONTRA EL REQUERIMIENTO DE ALGUNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA LA EXHIBICIÓN DE UN BILLETE DE DEPÓSITO DENTRO DE UN TÉRMINO PRECISO Y CON CIERTAS CARACTERÍSTICAS, EN SUSTITUCIÓN DE OTRO QUE NO REÚNE LOS REQUISITOS PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES. (I.7o.A.493 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 7o. T.C. del 1er. C., enero 2007, p. 2317

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. AL DICTAR SUS SENTENCIAS, CUANDO EN JUICIO SE COMBATE UN ACTO EMITIDO POR VIRTUD DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE OTRO ANTERIOR, DEBE EXAMINAR LOS ASPECTOS DE AQUÉL QUE TENGAN AUTONOMÍA EN RELACIÓN CON EL INICIALMENTE IMPUGNADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).- De conformidad con el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos previstos en los ordenamientos legales aplicables al caso concreto, para lo cual, las sentencias deben dictarse de manera pronta, completa e imparcial. Además, en estricto acatamiento al principio de congruencia, el artículo 237, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, dispone que las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben resolver sobre la pretensión de la parte actora que se deduzca de la demanda. En esas condi-

ciones, cuando alguna de las Salas del mencionado órgano jurisdiccional haya declarado la nulidad de algún acto administrativo para el efecto de que sea emitido uno nuevo, en el ulterior juicio contencioso administrativo promovido contra la resolución dictada en cumplimiento del fallo, deben examinarse los conceptos de anulación que combatan aspectos que tengan autonomía respecto al primer acto de la autoridad atacado en el juicio anterior, como pueden ser las cuestiones competenciales y los aspectos formales que deben observarse para el dictado del acto; sin que ello implique la transgresión al diverso principio de cosa juzgada, en tanto que de resultar fundados los argumentos de la parte actora, la determinación de la Sala afectará de manera exclusiva a la segunda resolución administrativa, sin modificar las decisiones que cobraron firmeza. La conclusión se justifica por la circunstancia de que la actuación de la autoridad administrativa al dar cumplimiento a las sentencias dictadas en los juicios contencioso administrativos, no está exenta del cumplimiento de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas a favor de los gobernados en los artículos 14 y 16 constitucionales; de ahí que en cumplimiento al principio de congruencia externa que deben observar todas las sentencias, es necesario que en el nuevo juicio se examinen los temas autónomos propuestos en la demanda de nulidad. (I.7o.A.500 A)

S.J.F. IX Época. T. XXV. 7o. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1913

DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL SEIS), EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, QUE LA LEY DE AMPARO.- La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en vigor a partir del uno de enero de dos mil seis, en su artículo 28 exige mayores requisitos para la suspensión de los actos impugnados, que los establecidos en la Ley de Amparo, por lo siguiente. Conforme a lo dispuesto por el párrafo primero de

ese precepto, se entiende que el demandante, para poder solicitar la suspensión en el juicio de nulidad, está obligado a acudir previamente ante la autoridad administrativa correspondiente a pedir la suspensión de la ejecución del acto que considere le agravia, ya que sólo en la hipótesis de que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, que son los tres supuestos a que se refiere el citado párrafo primero, podrá el afectado solicitar en el juicio de nulidad la suspensión de la ejecución de dicho acto, lo que evidentemente entraña un requisito mayor; por su parte, en la fracción III del numeral de referencia, se exige como requisito para la procedencia de la suspensión, aportar las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; en tanto que en la fracción VII, se impone al solicitante la obligación de exponer las razones por las cuales considera que debe otorgársele la suspensión y los perjuicios que se le causarían en caso de ejecutarse los actos cuya suspensión solicite; mientras que en el inciso c) de la fracción IX, se establece que el Magistrado instructor podrá decretar la suspensión provisional del acto impugnado, siempre y cuando con esa medida cautelar no se afecte al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público ni quede sin materia el juicio y se esté en los supuestos a que se refieren los tres incisos siguientes a la fracción en comento, relativo el inciso c), a que se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado, por lo que tendrá que ser notoria y manifiesta la ilegalidad del acto administrativo impugnado en el juicio de nulidad, para que pueda concederse la suspensión del mismo; en cambio, en la Ley de Amparo no se prevé como requisito o condición para la procedencia de la suspensión, el ofrecimiento de pruebas documentales, ni se exige que el agraviado, en el escrito respectivo exponga las razones que a su parecer, justifiquen por qué solicita la medida suspensional, y los posibles perjuicios que con la ejecución del acto impugnado pudieran originársele; además, si bien se prevé la aplicación del criterio de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, no se establece como condición o requisito para la procedencia de la suspensión que sea evidente la ilegalidad del acto reclamado, sino como un medio para poder apreciar, en determinados casos, si es procedente la concesión de esa medida cautelar atendiendo a la

ilegalidad manifiesta del acto impugnado y a los daños que pudiera originar para el agraviado su ejecución y la tardanza en resolver en definitiva sobre dicho acto; en tales condiciones, al ser mayores los requisitos establecidos en el artículo 28 de la ley invocada a los exigidos en la Ley de Amparo para la suspensión de los actos reclamados, no existe para el afectado la obligación de agotar el juicio de nulidad, previamente al juicio de amparo, al actualizarse la excepción al principio de definitividad prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. (I.12o.A.52 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 12o. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1680

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

DESTITUCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA ORDENA, DEBE CUMPLIRSE A TRAVÉS DE LA REINSTALACIÓN, EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE HUBIERA TENIDO DERECHO AUN CUANDO AQUÉLLA NO LO ESTABLEZCA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL ÁMBITO FEDERAL HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002). (I.13o.A.130 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 13er. T.C. del 1er. C., marzo 2007, p. 1671

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA AMPLIACIÓN AL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA CONTENIDA EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LO PREVISTO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SÓLO ES APLICABLE A LOS ASUNTOS INICIADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2006.- De conformidad con los artículos 197, último párrafo y 237 a 239 del Código Fiscal de la Federación, de aplicación a los asuntos iniciados con anterioridad al uno de enero de dos mil seis, según lo previsto en los artículos primero y cuarto transitorios de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no sigue sólo el modelo con-

tencioso de mera anulación (en donde la labor de Juez consiste únicamente en determinar la regularidad del acto administrativo), ni tampoco el de plena jurisdicción (en donde se precisa la existencia y medida de un derecho subjetivo del particular), y menos aún un modelo en que pueda sustituirse a las autoridades demandadas en pronunciamientos que no hayan sido materia de las resoluciones impugnadas en el juicio de nulidad, sino uno de jurisdicción híbrida, en el cual resolverá sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, pero siempre en relación con los fundamentos y los motivos de las resoluciones en controversia, en la parte que continúen afectando al particular, y no respecto a cuestiones que no se hayan tratado en ellas, de tal suerte que, en el supuesto en que la litis en el juicio de nulidad sea, por ejemplo, la procedencia de una instancia o petición, en caso de declarar la nulidad de la o de las resoluciones impugnadas, no podrá pronunciarse en cuanto a los aspectos de fondo, puesto que en el procedimiento contencioso administrativo, de acuerdo con los artículos invocados, rige el principio de litis abierta sólo por lo que respecta a los fundamentos y a los motivos de esas resoluciones, pero no en relación con cuestiones que no sean materia de éstas, lo que permite al interesado hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso para combatir únicamente los preceptos jurídicos aplicados al caso concreto, así como las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas en que la autoridad demandada haya sustentado su determinación, pero no aspectos que sean ajenos a la fundamentación y motivación de las resoluciones impugnadas, sea que provengan de un recurso, o que se impugnen directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y, en congruencia con lo anterior, las sentencias que dicte el citado tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con la resolución impugnada, pero no respecto a fundamentos y motivos que no la sustenten, reconociendo la validez de la resolución impugnada, declarando su nulidad absoluta (lisa y llana), o declarando la nulidad para efectos. Ahora bien, es cierto que en los artículos 1o. y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aplicable respecto a los asuntos que inicien su trámite a partir del uno de enero de dos mil seis, se establece la ampliación del principio de litis abierta previsto con anterioridad en los artículos 197, último párrafo y 237 del Código Fiscal de la Federación, permitiéndose así que las Salas del Tribunal Federal

de Justicia Fiscal y Administrativa se sustituyan a las autoridades demandadas en aquellos casos en los cuales hubiere sido desechado el recurso por la autoridad resolutora, supuesto en el cual la resolución objeto del recurso podrá ser analizada por el tribunal siempre y cuando la Sala Regional competente hubiese determinado la procedencia del medio de defensa señalado, ello con la finalidad de evitar el reenvío a la sede administrativa entrando al estudio de la propia resolución recurrida y coadyuvando a la justicia pronta y expedita. Empero, al señalar el referido artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: "Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la presente ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda.", se concluye que los artículos 1o. y 50 de ese ordenamiento jurídico estarán en vigor a partir del uno de enero de dos mil seis, respecto de aquellos asuntos que inicien su trámite en esa fecha. (I.13o.A.126 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 13er. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1805

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, DE RECAUDACIÓN, DE AUDITORÍA FISCAL, Y JURÍDICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. LA CITA EN EL ACTO ADMINISTRATIVO DEL ARTÍCULO SEGUNDO, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL ACUERDO POR EL QUE SE SEÑALA EL NOMBRE, SEDE Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE ESAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ES SUFICIENTE PARA FUNDAR AQUELLA COMPETENCIA. (I.15o.A.76 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 15o. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1663

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS. EL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULAN ESE TRIBUTO, SUSCEPTIBLE DE RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO, SE ACTUALIZA EN LA PRIMERA DECLARACIÓN DE PAGO PROVISIONAL QUE PRESENTE EL ENAJENANTE O IMPORTADOR.
(I.15o.A.77 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 15o. T.C. del 1er. C., febrero 2007, p. 1795

MERCANCÍAS EMBARGADAS QUE PASAN A SER PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL. EL INGRESO RELATIVO PARA EL ESTADO NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL, PUES CONSTITUYE UN APROVECHAMIENTO. (I.15o.A.71 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 15o. T.C. del 1er. C., enero 2007, p. 2268

RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR LA IMPOSIBILIDAD DE DEVOLVER MERCANCÍAS EMBARGADAS. EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY ADUANERA NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD AL NO ESTABLECER EN ESE SUPUESTO EL PAGO DE INTERESES A CARGO DEL FISCO FEDERAL. (I.15o.A.70 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 15o. T.C. del 1er. C., enero 2007, p. 2322

RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR LA IMPOSIBILIDAD DE DEVOLVER MERCANCÍAS EMBARGADAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY ADUANERA. EN ESE SUPUESTO NO RESULTA APLICABLE EL PAGO DE INTERESES, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TODA VEZ QUE SE ESTÁ EN EL CASO DE UN INGRESO A TÍTULO DE APROVECHAMIENTO PARA EL ESTADO. (I.15o.A.72 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 15o. T.C. del 1er. C., enero 2007, p. 2322

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO

CONTRIBUYENTES QUE TRIBUTAN BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS. SI OPTAN POR LLEVAR LA CONTABILIDAD SIMPLIFICADA NO SÓLO DEBEN ASENTAR SUS INGRESOS, EGRESOS Y REGISTRO DE INVERSIONES Y DEDUCCIONES, SINO TAMBIÉN LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS EN SUS CUENTAS BANCARIAS DURANTE EL EJRCICIO FISCAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2001). (III.1o.A.137 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 3er. C., febrero 2007, p. 1683

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO

CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO ARGUMENTA QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CONTIENE FIRMA FACSIMILAR Y, POR TANTO, DEBE EXHIBIR EL DOCUMENTO EN ORIGINAL O EN COPIA AL CARBÓN QUE LE FUE NOTIFICADO Y NO UNA COPIA CERTIFICADA DE ÉL.
(III.2o.C.1 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2do. T.C. del 3er. C., febrero 2007, p. 1657

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINSTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO

LITIS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO ESTÁN FACULTADAS PARA DILUCIDAR CUESTIONES INTRODUCIDAS EN LA CONTESTACION DE LA DEMANDA QUE NO FUERON PLANTEADAS POR EL ACTOR (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEM-

BRE DE 2005).- Conforme al artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda en relación con la resolución impugnada. De lo que se infiere que si la demandada en su contestación, pretendiendo justificar el acto impugnado, introdujo una cuestión que el actor en el juicio de nulidad no expresó en su demanda mediante el concepto de anulación que orientar su intención de hacer valer determinada defensa, la Sala no está facultada para analizar tal planteamiento, menos aún en su perjuicio, decretando la nulidad de tal acto, pues ello traería como consecuencia que se variara la litis efectivamente planteada en el escrito de demanda y se transgrediera el principio de congruencia a que se refiere la norma de mérito. (III.4o.A.6 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 4o. T.C. del 3er. C., marzo 2007, p. 1711

NULIDAD EN EL JUICIO FISCAL. LA DECRETADA POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEMANDADA, DEBE SER PARA QUE ÉSTA ACTÚE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DISCRECIONALES Y NO LISA Y LLANA O PARA EFECTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).- De conformidad con los artículos 238, fracción II y 239, fracción III, última parte y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, así como de las tesis de jurisprudencia 2a./J. 52/2001 y 2a./J. 149/2005, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomos XIV y XXII, noviembre de 2001 y diciembre de 2005, páginas 32 y 366, respectivamente, de rubros: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO."y "MULTAS FISCALES QUE NO CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA GÉNESIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECRETAR LA NULI-

DAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR DERIVAR AQUÉLLAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES.", se concluye que cuando en un juicio de nulidad seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se controvierte una resolución en la cual, con base en las facultades discrecionales de la autoridad se determinó imponer una multa por infracción a disposiciones de índole fiscal y dicho acto, en cuanto a la competencia territorial del ente se refiere, se encuentra deficientemente fundado porque no señaló la parte del precepto que le da legitimación para emitir el acto de molestia, la declaratoria de nulidad no debe ser lisa y llana ni para efectos; esto es, no se puede imponer la obligación de emitir otra actuación tendente a sustituir aquella tildada de nula, pues ese proceder podría tener como consecuencia obligar a un ente sin facultades a emitir un pronunciamiento ilegal, ni se pueden fijar directrices a la autoridad respecto de sus atribuciones discrecionales, pues de esa manera se coartaría su poder de elección; por tanto, si el acto en cuestión resulta ilegal por deficiente fundamentación, sólo procederá decretar su nulidad (sin decir si es lisa y llana o para efectos) y la autoridad a quien le fue anulado tendrá expedito su libre arbitrio para proceder al ejercicio de sus facultades, siempre y cuando la ley aplicable se lo permita. (III.4o.A.1 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 4o. T.C. del 3er. C., febrero 2007, p. 1830

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA FISCAL. PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, PÁRRAFO TERCERO, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD LA CARGA DE PROBAR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA PERSONA MORAL CONTRIBUYENTE QUE OMITIÓ PRESENTAR EL AVISO CORRESPONDIENTE. (III.4o.A.3 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 4o. T.C. del 3er. C., febrero 2007, p. 1885

REVISIÓN FISCAL PARA QUE PROCEDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI EL ASUNTO ES DE CUANTÍA INDETERMINADA, ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD ACREDITE EN EL JUICIO DE NULIDAD LA RE-

LATIVA A LA HIPÓTESIS RESPECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). (III.4o.A.4 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 4o. T.C. del 3er. C., febrero 2007, p. 1886

SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA. SI SE PRODUCE CON MOTIVO DE LA FALTA DE EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS EN QUE SE APOYÓ LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PARA RESOLVER UN RECURSO EN SEDE ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA Y NO PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD REVOQUE LOS ACTOS QUE ORIGINARON SU INTERPOSICIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).- Del penúltimo párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, se advierte que cuando la Sala Fiscal conozca sobre la juridicidad de una resolución dictada en un recurso administrativo, está obligada a analizar la legalidad del acto o resolución impugnados, siempre que cuente con los elementos suficientes para hacerlo. En ese tenor, si la Sala anuló la resolución negativa ficta impugnada porque la autoridad demandada no expresó los motivos y fundamentos por los que no resolvió oportunamente el recurso en sede administrativa por el que se impugnaron créditos fiscales, ello se traduce en una violación de fondo en términos del numeral 215 de ese código y vigencia y, por tanto, no es correcto que la nulidad sea para el efecto de que se ordene a la autoridad que los revoque, pues tal proceder se aparta de los principios de celeridad y de economía procesal a que se contrae el numeral citado en primer lugar, que tienen como finalidad evitar los reenvíos en casos de sentencias que anulen resoluciones recaídas a un recurso administrativo y obliguen a la autoridad que emitió la resolución (negativa ficta) a emitir una nueva, es decir, impedir un paso administrativo más; además, se rompe con la finalidad de la negativa ficta que es evitar que se afecte la esfera jurídica del quejoso ante la abstención de la autoridad de emitir la resolución correspondiente, postergando a la impartición de justicia indefinidamente; consecuentemente, en esos casos la Sala debe declarar la nulidad lisa y llana de la resolución negativa ficta y, consecuentemente, la de los indicados créditos fiscales. (III.4o.A.9 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 4o. T.C. del 3er. C., marzo 2007, p. 1795

SUPLENCIA DE LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN, EN LOS ACTOS DE AUTORIDAD DE LOS INFERIORES JERÁRQUICOS DEL JEFE DE LA OFICINA DE COBROS DEBE HACERSE REFERENCIA A QUE EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN SE REALIZA POR ACUERDO DEL TITULAR DE LA SUBDELEGACIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006). (III.4o.A.8 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 4o. T.C. del 3er. C., marzo 2007, p. 1811

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL REQUERIMIENTO HECHO AL DEMANDANTE PARA QUE PRESENTE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONLLEVA A EXIGIR, ADEMÁS, COPIA DEL ESCRITO A TRAVÉS DEL CUAL SE LE DA CUMPLIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).- El requerimiento para que el interesado allegue los documentos omisos y una o más copias de ellos, tiene como objetivo correr traslado de esas constancias a las autoridades demandadas en términos del artículo 209, en relación con el 198 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, para efecto de que se encuentren debidamente enteradas del acto de molestia así como de las pretensiones del promovente, con la intención de que puedan efectuar una adecuada defensa de los intereses del fisco federal; por tanto, si además se exige copia del escrito a través del cual se da cumplimiento a dicho requerimiento, tal evento se encuentra apartado de los preceptos legales que regulan el trámite y la sustanciación del juicio administrativo, pues el mencionado libelo no encierra o aporta un hecho o prueba distintos de los contenidos en el escrito de nulidad, es decir, no altera o modifica la litis sobre la cual habrá de contestar la autoridad demandada, por tal motivo no es

necesario ese pedido pues, incluso, la mención de los documentos que fueron aportados a través de aquél se precisan en el acuerdo respectivo, del cual sí tiene obligación la Sala Fiscal de correr traslado a las autoridades demandadas. (IV.1o.A.71 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1er. T.C. del 4o. C., enero 2007, p. 2259

REQUERIMIENTO. ANTE SU PARCIAL INCUMPLIMIENTO LA SALA FISCAL DEBE EMITIR Y NOTIFICAR EN FORMA INMEDIATA EL PROVEÍDO RESPECTIVO, A EFECTO DE QUE EL INTERESADO, DE ESTAR EN TIEMPO, LO CUMPLA CABALMENTE.- Los artículos 208 y 209 del Código Fiscal de la Federación, sólo establecen la carga para el promovente del juicio de nulidad de exhibir todos y cada uno de los documentos que ofrece como probanzas con copias para el traslado respectivo, so pena de tenerlas por no ofrecidas o, en su caso, si la omisión trata de una documental que justifica la acción intentada, tener por no presentada la demanda; en tal virtud, si la Sala Fiscal requiere dichos documentos juntamente con su reproducción y, además fotocopia del escrito a través del cual se dé cumplimiento a la prevención y éste no es aportado por el interesado al dar cumplimiento, en forma inmediata, la Sala Fiscal debe emitir y notificar el proveído correspondiente a efecto de hacer del conocimiento del particular la inconsistencia en que incurrió, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y así, en caso de estar dentro del plazo concedido para dar cumplimiento a aquel requerimiento, esté en aptitud de exhibir la documental respectiva, de lo contrario, se coartaría la igualdad procesal de las partes, pues la fotocopia que se requiere no es de los documentos exigidos por los preceptos mencionados, como tampoco prevén consecuencia alguna ante su incumplimiento. (IV.1o.A.70 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 4o. C., marzo 2007, p. 1764

REVISIÓN FISCAL. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE AL DECLARARSE LA NULIDAD DE UN CRÉDITO FISCAL SE DECRETÓ EL REPARTO DE UTILIDADES SIN QUE HAYAN SIDO LLAMADOS A JUICIO COMO TERCEROS INTERESADOS LOS TRABAJADORES DE LA PERSONA MORAL ACTORA NI TAMPOCO SE REQUIRIÓ A LA PROMOVENTE PARA QUE SEÑALARA EL NOM-

BRE Y DOMICILIO DEL SINDICATO RESPECTIVO O A SU REPRESENTANTE LEGAL, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y ORDENAR A LA SALA CORRESPONDIENTE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA VIOLACIÓN COMETIDA.- El artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Tribunales Colegiados de Circuito al conocer de los recursos de revisión que se interpongan contra las sentencias definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo, se sujetarán a los trámites que la Ley de Amparo fije para la revisión en amparo indirecto; por su parte, el diverso 91, fracción IV, de la ley de la materia, dispone que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito encontraren al conocer de la revisión que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, revocarán la sentencia recurrida y mandarán reponer el procedimiento. En congruencia con lo anterior, si el órgano colegiado al conocer de una revisión fiscal advierte que los trabajadores de la persona moral que obtuvo la nulidad del crédito fiscal impugnado no fueron señalados en la demanda como terceros interesados, pese a que tienen interés en la subsistencia del acto destacado por haberse decretado, entre otras circunstancias, el reparto de utilidades en su favor, y el Magistrado instructor de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tampoco requirió a la promovente para que señalara el nombre y domicilio del sindicato de trabajadores de la empresa o su representante legal, es evidente que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento contencioso administrativo, al no ser escuchados los trabajadores terceros interesados, quienes por esa razón carecieron de oportunidad para impugnar dicha violación; en tal virtud, para no dejarlos en estado de indefensión, el órgano jurisdiccional federal de oficio debe revocar la sentencia revisada y ordenar la reposición del procedimiento, para que en términos del artículo 208, fracción VII, y penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, se prevenga a la promovente para que subsane dicha irregularidad, a fin de que los trabajadores sean debidamente llamados o emplazados a juicio y en caso de que no lo haga, se tenga por no presentada la demanda de nulidad. (IV.Io.A.72 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 4o. C., febrero 2007, p. 1886

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETÓ LA ACUMULACIÓN DE JUICIOS, SI EN UNO DE ELLOS ESTABA CERRADA LA INSTRUCCIÓN QUEDANDO PENDIENTE SÓLO EL DICTADO DE LA SENTENCIA Y SE DEJÓ SIN EFECTOS LO ACTUADO HASTA ANTES DE LA ETAPA DE ALEGATOS, AL TENER DICHOS ACTOS UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De conformidad con la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Como complemento a lo anterior, el Alto Tribunal del país en diversos criterios jurisprudenciales ha establecido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior, lo que se actualiza cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio. En ese orden de ideas, si en un juicio contencioso administrativo la Sala Fiscal, ante la promoción de una excitativa de justicia decide proveer en relación con una solicitud de la autoridad demandada respecto a acumular un diverso juicio de aquel de donde derivan los actos reclamados en el cual se encontraba cerrada la instrucción en términos del artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, y deja sin efectos lo actuado en éste hasta antes de la etapa de alegatos, es evidente que los descritos constituyen actos

dentro del juicio que deben calificarse como intraprocesales por cuanto no afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, que aun cuando se identifican como violaciones formales las consecuencias que producen afectan a los particulares en grado predominante o superior, pues se les sujeta a continuar e intervenir en un procedimiento en el que únicamente restaba dictar sentencia, quedando expuestos ahora a las vicisitudes de un juicio acumulado que puede ser innecesario, máxime si se considera que existe la posibilidad de que no haya similitud ni relación entre los actos impugnados en los juicios de nulidad involucrados, lo cual no actualizaría los objetivos perseguidos con la acumulación. En esa tesitura, se concluye que tales actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación en la medida en que se comete una violación palmaria y sobresaliente en perjuicio de la parte quejosa, porque la sentencia definitiva que se llegara a dictar resolviendo el fondo, aun siendo favorable a sus intereses, no la restituiría en los derechos que ya habían ingresado a su esfera jurídica desde que, habiendo agotado las etapas procesales correspondientes, el juicio de nulidad de origen estaba en condiciones de ser resuelto, ni tampoco podría restituírsele en el transcurso del tiempo que, debido a la acumulación de juicios, tendría que esperar hasta que ese procedimiento estuviese en posibilidad de ser fallado, a más de que se vulneraría el equilibrio procesal de admitirse a la parte demandada pruebas, posiblemente fuera del término legal, lo que desde luego constituye una violación procesal que produce una afectación exorbitante a los derechos sustantivos de los particulares, que debe ser impugnada a través del juicio de garantías indirecto conforme al numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que no se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis prevista por el artículo 145 de la citada ley. (IV.2o.A.189 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2o. T.C. del 4o. C., enero 2007, p. 2243

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. SI POR VIRTUD DEL RECURSO DE REVOCACIÓN SE ORDENA SU REPOSICIÓN, LA AUTORIDAD DEBE DICTAR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RELATIVA DENTRO DEL PLAZO DE CUATRO MESES, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY ADUANERA. (IV.2o.A.188 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2o. T.C. del 4o. C., enero 2007, p. 2297

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE NIEGA LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, PUES NO SE TRATA DE UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS.- Conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar la suspensión del acto reclamado deben tomarse en cuenta, entre otros aspectos, la naturaleza de la violación, su carácter, su peculiaridad, su importancia y trascendencia. En atención a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que contra los actos negativos, que son aquellos por los que las autoridades se rehúsan a acceder a las pretensiones de los gobernados, no es dable conceder esta medida cautelar, puesto que implicaría darle efectos restitutorios, propios de la sentencia que concede el amparo. Por tanto, si el acto reclamado lo constituye la resolución emitida por una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que niega la suspensión de los actos derivados del procedimiento administrativo de ejecución, la medida suspensional impetrada es improcedente, ello porque si bien es cierto que la negativa de la suspensión del acto combatido dictada en el juicio contencioso administrativo, deja eventualmente a la autoridad en posibilidad de realizar dicha ejecución, también lo es que no por ello puede decirse que se trata de un acto negativo con efectos positivos, pues tal ejecución no es consecuencia natural de la negativa aludida, sino de la naturaleza ejecutiva de ese mandamiento, que encuentra sustento, en todo caso, en las facultades legales con las que se encuentre investida la autoridad que la emite, de conformidad con los artículos 145 y 151 del Código Fiscal de la Federación. Además de que esa actuación sólo implica el rechazo a una solicitud, y bajo ningún aspecto contiene una conducta de hacer de la autoridad. De ahí, que resulte evidente la improcedencia de la concesión de la medida precautoria impetrada en el incidente, en contra de la negativa de la suspensión del acto combatido dictada en el juicio contencioso administrativo. (IV.2o.A.187 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2o. T.C. del 4o. C., enero 2007, p. 2372

VISITA DOMICILIARIA. EL OTORGAMIENTO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS PARA DESVIRTUAR HECHOS U OMISIONES CONSIGNADOS EN LAS ACTAS PARCIALES O CORREGIR LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL DE SEIS MESES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46-A, SEGUNDO PÁRRAFO, ÚLTIMA PARTE, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2005, NO TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (IV.2o.A.191 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T.C. del 4o. C., marzo 2007, p. 1833

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

ACTA DE IRREGULARIDADES CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO PREVER EL MOMENTO DE SU LEVANTAMIENTO CUANDO LA MERCANCÍA RESULTE DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 39/2006). (IV.3o.A.76 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 4o. C., febrero 2007, p. 1601

PAGO EN PARCIALIDADES DE CRÉDITOS FISCALES. SI LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA EMANA DE UNA RESOLUCIÓN GENERAL DE APOYO A DEUDORES EMITIDA POR EL EJECUTIVO FEDERAL EN USO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 39 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PREVISTA EN EL

DIVERSO ARTÍCULO 66 DEL ORDENAMIENTO LEGAL MENCIONADO. (VI.3o.A.80 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 4o. C., febrero 2007, p. 1839

SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AUN CUANDO SE TRATE DE UN SUPUESTO ESPECIAL DE PROCEDENCIA, DEBEN CUMPLIRSE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I A V Y VII DE DICHO NUMERAL. (IV.3o.A.78 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 4o. C., febrero 2007, p. 1901

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO

AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 200, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUENTAN CON FACULTADES PARA PRESENTAR LA DEMANDA DE AMPARO EN NOMBRE DE LOS ACTORES EN EL JUICIO TRAMITADO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).- Las facultades con que cuenta el autorizado para recibir notificaciones en términos del artículo 200, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco (idéntico al último párrafo del ordinal 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en vigor a partir del uno de enero de dos mil seis), deben entenderse señaladas de manera enunciativa y no limitativa, ya que partiendo de la premisa de que tal nombramiento debe hacerse por escrito y recaer en un licenciado en derecho, una vez que se ejerció el derecho de acción mediante el escrito de demanda, ello implica que el demandante, por sí o a través de su representante legal, confiere al referido profesional la capacidad procesal necesaria para actuar en su nombre, dentro del juicio contencioso administrativo y de

los procedimientos que de él deriven, en defensa de los derechos de su autorizante, quedando facultado no sólo para hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, como expresamente se consagra en el precepto y párrafo citados, sino también para efectuar cualquier acto procesal que implique la adecuada defensa del autorizante, realizando lo necesario para que prosperen sus pretensiones. Sostener lo contrario implicaría transgresión a las garantías individuales de audiencia y defensa contenidas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, pues ello se traduciría en que, una vez ejercido el derecho de acción a través de la presentación de la demanda, fuese necesario realizar actos procesales distintos a los señalados con anterioridad, para estar en aptitud de obtener una resolución o sentencia favorable, incumpliéndose así con las formalidades del procedimiento, que son las que resultan necesarias para garantizar una defensa adecuada. Debe destacarse además, que el hecho de que el último párrafo del numeral 200 de la invocada codificación, no señale de manera expresa que el autorizado puede realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, no significa que no pueda hacerlo ya que, en términos de los razonamientos mencionados, debe considerarse que aquél es un auténtico representante judicial, pues al ser profesional del derecho no hay razón legal para limitar sus facultades en tal sentido, sino que debe estimarse que sus atribuciones comprenden las antes mencionadas, conforme a la responsabilidad profesional que se le ha conferido; de lo anterior se sigue, por consecuencia, que también cuenta con la facultad de promover el juicio de amparo en representación de su autorizante, toda vez que su objetivo es proteger al gobernado de los actos de autoridad que violen sus garantías individuales, resultando así un medio de impugnación adecuado para salvaguardar la pretensión de los particulares que figuran como partes en el juicio seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en virtud de lo benéfico que en determinado caso pudiese resultarles el fallo constitucional, tomando en consideración que mientras que el juicio de amparo no se resuelve, el litigio continúa sub júdice. (V.2o. P.A.8 A)

S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T.C. del 5o. C., febrero 2007, p. 1620

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. LA OBLIGACIÓN DE ANALIZARLA POR PARTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y, EN SU OMISIÓN, POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SE ACTUALIZA SIEMPRE Y CUANDO LA LITIS EN EL ASUNTO RESPECTIVO LO PERMITA.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 99/2006, derivada de la contradicción de tesis 44/2006-SS, ha sostenido que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentran obligadas a efectuar el pronunciamiento por cuanto hace a la competencia de la autoridad demandada; sin embargo, ello debe entenderse siempre y cuando la litis en el asunto respectivo lo permita, es decir, que sea factible abordar en cuanto al fondo su estudio, porque de lo contrario, de no permitirlo, como por ejemplo cuando fue desechado el recurso de revocación en relación con la resolución determinante del crédito fiscal cuestionado, al haberse interpuesto dicho medio de defensa fuera del término de cuarenta y cinco días previsto en el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, ello excluye cualquier pronunciamiento, en el aspecto de legalidad, relativo al fondo del asunto, incluso el relativo a la competencia de la autoridad emisora de dicha resolución determinante del crédito y de sus antecedentes, por no haber sido combatidos en el momento procesal oportuno. En un caso así, también resulta inaplicable la tesis 2a. LXXII/2006 de la propia Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, referente a que si el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa omite pronunciarse al respecto, tal cuestión puede plantearse en la demanda de amparo y el Tribunal Colegiado de Circuito debe analizarla; puesto que si la litis en el juicio natural no se lo permitía a la responsable, la cual ante la extemporaneidad del recurso de revocación no habría podido abordar en cuanto al fondo el tema de competencia de la autoridad emisora de la resolución determinante del crédito, menos podría hacerlo el Tribunal Colegiado, atendiendo a las razones antes expuestas. (VI.1o.A.218 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 6o. C., febrero 2007, p. 1660

DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO. ES IMPROCEDENTE QUE LA SALA FISCAL CONDENE A LA AUTORIDAD A REALIZARLA, SIN QUE ANTES HAYA MEDIADO LA PROMOCIÓN RESPECTIVA DEL CONTRIBUYENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Aun cuando conforme a dicho precepto, las autoridades hacendarias tienen obligación de devolver las cantidades pagadas indebidamente y las procedentes en términos de las leyes fiscales, ya sea de manera oficiosa, o bien a petición de parte interesada, lo cierto es que esa disposición también establece determinadas formalidades para ello. En ese contexto, si el quejoso pretende la devolución de una cantidad pagada indebidamente por concepto de un crédito anulado por la sala fiscal, más las actualizaciones y recargos que procedan conforme a la ley, resulta correcto que la responsable no condene a la demandada a efectuar la devolución en los términos pretendidos por el entonces actor, pues en este tipo de supuestos es necesario que el contribuyente presente la solicitud respectiva ante la autoridad demandada, sin perjuicio de que lo haga con base en la nulidad decretada en el fallo reclamado, habida cuenta que no corresponde a la Sala ordenar la devolución de modo directo y sin que antes hubiese mediado la promoción del particular, pues al efecto el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, regula una tramitación específica para solicitar la devolución del pago de lo indebido, aunado a que la Sala no puede sustituirse a la autoridad recaudadora decidiendo de primera instancia sobre una solicitud de devolución. Hipótesis distinta se actualizaría si mediante el juicio contencioso-administrativo de origen se hubiera impugnado una resolución recaída a una petición de devolución, pues en tal supuesto la responsable pudiera estar en aptitud jurídica de condenar a la demandada a efectuar la devolución cuestionada, precisamente porque de manera previa existiría un pronunciamiento de la exactora en algún sentido. (VI.1o.A.217 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 6o. C., febrero 2007, p. 1697

MULTA FISCAL MÍNIMA. CUANDO LA PARTE ACTUALIZADA SE ENCUENTRA INCORPORADA AL TEXTO DEL PRECEPTO CORRESPONDIENTE A TRAVÉS DE UN DECRETO LEGISLATIVO, LA AUTORIDAD

NO ESTÁ OBLIGADA A EXPRESAR LOS MOTIVOS QUE LA CONDUJERON A IMPORTAR ESE MONTO. (VI.1o.A.216 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 6o. C., febrero 2007, p. 1825

NOTIFICACIÓN DE UNA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. ALGUNA IRREGULARIDAD COMETIDA AL CIRCUNSTANCIAR EL ACTA RELATIVA AL CITATORIO PREVIO, SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE CONVALIDARSE, POR REGLA GENERAL, SI LA DILIGENCIA CORRESPONDIENTE A DICHO CITATORIO O AL ACTA PARCIAL DE INICIO, SE ENTIENDE DE MANERA DIRECTA CON EL CONTRIBUYENTE INTERESADO O CON SU REPRESENTANTE LEGAL. (VI.1o.A.213 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1er. T.C. del 6o. C., enero 2007, p. 2273

NOTIFICACIÓN FISCAL. PARA CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES SEÑALADAS POR EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL CINCO, ES INSUFICIENTE SI EN EL CITATORIO NO SE ASIENTA, ENTRE OTRAS, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE REQUIRIÓ LA PRESENCIA DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL, AUNQUE TAL REQUISITO SÍ SE EXPRESE EN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN. (VI.1o.A.215 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1er. T.C. del 6o. C., enero 2007, p. 2275

PAGO EN PARCIALIDADES. LA NEGATIVA PARA AUTORIZAR LA SOLICITUD RESPECTIVA, ES UNA RESOLUCIÓN QUE CAUSA AGRAVIO EN MATERIA FISCAL CUYA LEGALIDAD PUEDE SER ANALIZADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- De conformidad con el artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ese órgano jurisdiccional es competente para conocer de resoluciones que originen un agravio en materia fiscal a los contribuyentes, distinto del que señalan las fracciones previas de dicho precepto. En atención a ello, aun cuando la autorización de pago en parcialidades de un crédito fiscal es una facultad discrecional de las autoridades fiscales, esa discrecionalidad no implica que

éstas puedan actuar de forma arbitraria sin sujetarse a las disposiciones legales y a la garantía de la debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad. En ese sentido, dado que la resolución en la que se niega la autorización de pago en parcialidades ocasiona un agravio en materia fiscal al solicitante, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para resolver sobre su legalidad en términos del precepto legal inicialmente invocado. (VI.1o.A.214 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1er. T.C. del 6o. C., enero 2007, p. 2285

REVISIÓN FISCAL. NO ES EL MEDIO IDÓNEO PARA HACER VALER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (VI.1o.A.211 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1er. T.C. del 6o. C., enero 2007, p. 2349

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. EL MANDAMIENTO QUE CONTIENE LA ORDEN RELATIVA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO AUTÓNOMAMENTE, POR NO FORMAR PARTE DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR. (VI.3o.A.285 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 3er. T.C. del 6o. C., enero 2007, p. 2324

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA UTILIZACIÓN DE NÚMEROS PARA EXPRESAR LA HORA Y FECHA DE SU ENTREGA NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UNA ABREVIATURA QUE GENERA DUDAS

EN EL PARTICULAR DEL MOMENTO EN QUE LA AUTORIDAD INICIÓ SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN. (VII.2o.A.T.65 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T.C. del 7o. C., febrero 2007, p. 1835

RENTA. LOS HONORARIOS A MIEMBROS DE CONSEJOS DIRECTIVOS, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, AL ASIMILARSE A LOS INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, A LOS SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL, SON SUSCEPTIBLES DE LOS SUBSIDIOS CONTEMPLADOS PARA ESTOS ÚLTIMOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO RELATIVO. (VII.2o.A.T.67 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T.C. del 7o.C., febrero 2007, p. 1881

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO

REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO. EL MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DEBE NOTIFICARSE AL CONTRIBUYENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (IV.1o.A.70 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 7o. C., marzo 2007, p. 1764

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO

ALEGATOS DE BIEN PROBADO. NO LO SON LOS ARGUMENTOS AJENOS A LA LITIS DEL JUICIO DE NULIDAD, POR LO QUE LA SALA FISCAL NO ESTÁ OBLIGADA A ANALIZARLOS EN LA SENTENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).- "Alegar de bien probado"significa recapitular en forma sintética y en el momento oportuno

las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio; para lo cual, el párrafo primero del artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, ordena que diez días después de concluida la sustanciación del juicio contencioso administrativo el Magistrado instructor notifique por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos y que si éstos se presentan oportunamente deben ser motivo de análisis en la sentencia; tema éste, que únicamente se refiere a los alegatos de bien probado. De ahí que si en el escrito de alegatos presentado en el juicio de nulidad, la parte actora expone diversos argumentos ajenos a la litis, los cuales no se hicieron valer en el momento procesal oportuno, resulta inconcuso que dichos alegatos no son de bien probado y, por ello, la Sala Fiscal no tiene obligación alguna de analizarlos en la sentencia. (VIII.1o.83 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T. C. del 8o. C., febrero 2007, p. 1603

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO

REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN DE SOLICITUD EMITIDA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR LA QUE SE REQUIERE LA EXHIBICIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL CONTRIBUYENTE ES ILEGAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). (VIII.2o.79 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2o. T.C. del 8o. C., enero 2007, p. 2347

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD PARA EFECTOS, PARA DETERMINAR SI EXISTE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD POR OMISIÓN EN EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD DEBE ATENDERSE A CUÁLES FUERON LOS QUE SE DEJARON DE ANALIZAR Y DETERMINAR SI CORRESPONDE A AQUELLOS QUE SON DE ESTUDIO PREFERENTE.- El artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del uno de enero de dos

mil seis, dispone en su segundo párrafo, que cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la Sala deberá examinar primero aquellas que pudieran llevar a declarar la nulidad lisa y llana. Ahora bien, de dicha disposición se advierte que el precepto privilegia el estudio de los argumentos que pudieran derivar en un mayor beneficio al actor, pues sólo en el caso de que las llamadas violaciones de fondo resulten infundadas, la Sala debe proceder al estudio de aquellos conceptos de nulidad en los que se reclaman omisiones de los requisitos formales o vicios del procedimiento y que puedan originar una nulidad para efectos, pues el estudio de estas últimas devendría innecesario, si se hubiera estimado cometida una violación de fondo que lleva a una nulidad lisa y llana; en concordancia con lo anterior, debe considerarse que cuando la Sala declara la nulidad para efectos, considerando actualizada alguna de las causales previstas en el artículo 51, fracciones II y III, de la citada ley, omitiendo analizar diversos argumentos del actor, al plantearse esa omisión en los conceptos de violación, el Tribunal Colegiado de Circuito, debe analizar si los conceptos de anulación cuyo estudio fue omitido por la responsable se refieren a irregularidades que pudieran incidir en una nulidad lisa y llana, o bien llevar a un mayor beneficio a la parte quejosa, pues sólo entonces podría concluirse que la omisión de la Sala trasgredió o no el principio de legalidad, al contravenir lo ordenado por el artículo 50 antes mencionado. (VIII.2o.80 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T.C. del 8o. C., marzo 2007, p. 1796

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y UNA ENTIDAD PARAESTATAL RESPECTO DE LA DEVOLUCIÓN DE GASTOS MÉDICOS.- De conformidad con el artículo 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con el numeral 295 de la Ley del Seguro Social, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001, el citado órgano es competente para conocer de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social con motivo de las controversias suscitadas entre dicho organismo y una entidad paraestatal en su calidad de patrón, respecto de la devolución de gastos

por servicios médicos que erogó. Lo anterior no se contrapone a la jurisprudencia P./J. 1/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 12, de rubro: "SEGURO SOCIAL. LA ACCIÓN DE PAGO EJERCITADA CONTRA EL INSTITUTO POR GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA NEGATIVA A BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA U HOSPITALARIA A UN ASEGURADO, BENEFICIARIO O PENSIONADO, O POR RESULTAR DEFICIENTE, ES DE NATURALEZA CIVIL Y SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A UN JUEZ DEL FUERO COMÚN.", toda vez que en ésta interpretó el artículo 275 de la abrogada Ley del Seguro Social, de similar redacción al reformado el veinte de diciembre de dos mil uno, y que actualmente corresponde al 295 de la ley vigente, el cual contempla que las controversias que se representen entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (VIII.2o.81 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T.C. del 8o. C., marzo 2007, p. 1826

VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LA SALA FISCAL NO ESTÁ OBLIGADA A PRECISAR EL PRECEPTO QUE FACULTA AL ADMINISTRADOR DE UNA ADUANA PARA NOMBRAR VARIOS VERIFICADORES Y QUE ÉSTOS ACTÚEN CONJUNTA O SEPARADAMENTE.- La Sala Fiscal no está obligada a citar el precepto que faculta al administrador de una aduana para nombrar varios verificadores y que éstos actúen conjunta o separadamente en la verificación de vehículos de procedencia extranjera, pues esa es una obligación de la autoridad que emite el acto de molestia; lo anterior es así, porque el hecho de que no exista fundamento que autorice el proceder de la demandada, es suficiente para estimar ilegal la resolución impugnada, al ejercer una facultad con la que no cuenta, además de que exigir dicho proceder a la Sala Fiscal equivaldría imponerle una obligación inherente a la autoridad hacendaria que emite el acto de molestia, lo que no es su función, pues ésta se cumple cuando analiza la legalidad de la resolución impugnada, a la luz de los preceptos que en ella se invocan y los agravios expresados por la parte actora. (VIII.2o.78 A)

S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2o. T.C. del 8o. C., enero 2007, p. 2389

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS U OMISIONES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 46 Y 152 DE LA LEY ADUANERA. A CONSTITUIR UN ACTO DE MOLESTIA PARA SU EMISIÓN ES NECESARIO INVOCAR CON CLARIDAD Y DETALLE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ORDENAMIENTO QUE PREVEA LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PAR HACERLO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 57/ 2001 Y 2a./J. 115/2005) (VIII.3o.61 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 8o. C., marzo 2007, p. 1579

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE INTRODUCEN ARGUMENTOS DE FONDO NO PROPUESTOS EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE NULIDAD.- Los argumentos de fondo que se esgrimen en los agravios y que no se hicieron valer en la contestación de la demanda de nulidad ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que dictó la sentencia, no deben ser tomados en consideración en la revisión fiscal. Lo anterior con base en el principio de congruencia, consistente en que las resoluciones judiciales deben ajustarse a lo planteado por las partes en la demanda, en si ampliación si la hubo, y en la contestación a una y otra, sin añadir cuestiones jurídicas no propuestas en forma oportuna por aquéllas; por lo que resulta inadmisible que en el recurso de revisión fiscal interpuesto contra la sentencia de nulidad se atiendan argumentos no expuestos ante la Sala resolutora.
(XIX.1o.19 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 8o. C., marzo 2007, p. 1586

CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE AL ACTOR CUANDO AFIRMA QUE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA CONTIENE FIRMA FACSIMILAR Y NO AUTÓGRAFA, PERO EN LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN SE ASENTÓ LO

CONTRARIO.- Si el particular en un juicio contencioso administrativo tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sostiene que la resolución impugnada le fue notificada con firma facsimilar, y de la constancia de notificación que obra en autos se advierte que en ella se asentó que se entregó al particular el original de la resolución con firma autógrafa, conforme al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, corresponde al demandante en el juicio de nulidad demostrar que el acto impugnado contiene una reproducción de la firma del funcionario que supuestamente emite la resolución administrativa, debiendo ofrecer los medios de prueba que resulten idóneos. (VIII.3o.58 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 3er. T.C. del 8o. C., enero 2007, p. 2199

DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA BASTA CON PRECISAR QUE LA AUTORIDAD ANTE LA CUAL DEBEN FORMULARSE LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE PROCEDAN CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES FISCALES ES LA QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. (VIII.3o.64 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 8o. C., marzo 2007, p. 1666

DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL RELATIVA SON APLICABLES A TODOS LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES FISCALES EN GENERAL Y NO SÓLO AL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN INICIADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR. (VIII.3o.59 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 8o. C., marzo 2007, p. 1667

PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL. EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL CONSIDERAR COMO GESTIÓN DE COBRO PARA INTERRUMPIR EL PLAZO RELATIVO "CUALQUIER ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SIN ESPECIAFICAR CUÁLES SON ESAS ACTUACIONES O ACTOS, NO CONTRAVIENE LAS

GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. (VIII.3o.60 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 8o. C., marzo 2007, p. 1746

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. (VIII.3o.62 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 8o. C., marzo 2007, p. 1798

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS Y CIVIL DEL DÉCIMO CIRCUITO

DEMANDA DE NULIDAD. EFECTOS RESPECTO A LA OMISIÓN EN ADJUNTAR LAS DIFERENTES DOCUMENTALES Y PRUEBAS QUE EXIGE EL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005. (XIV.1o.A.C.20 C)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 10o. C., febrero 2007, p. 1691

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 299 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO, QUE AUTORIZA LA DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL PAGO DE LAS

CUOTAS ENTERADAS SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SIN CAUSACIÓN DE INTERESES, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
(XII.3o.10 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 3er. T.C. del 12o. C., enero 2007, p. 2353

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO

AMPLIACIÓN DE LA VISITA DOMICILIARIA O DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. DURANTE ELLA PUEDEN PRACTICARSE ACTOS DISTINTOS DEL QUE LA MOTIVÓ, EN ATENCIÓN A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (XIV.1o.A.C.19 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1er. T.C. del 14o. C., enero 2007, p. 2191

MULTAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. SI LAS INFRACCIONES SON DE DIVERSA NATURALEZA, PROCEDE IMPONERLAS RESPECTO DE CADA UNA DE ELLAS. (XIV.1o.A.C.18 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1er. T.C. del 14o. C., enero 2007, p. 2269

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO

RECLAMACIÓN EN EL JUICIO FISCAL. SI LA FECHA DE DEPÓSITO DEL ESCRITO RELATIVO ANTE LA OFICINA DE CORREOS ES INCIERTA NO DEBE DESECHARSE ESE RECURSO POR EXTEMPORÁNEO.- Cuando el recurso de reclamación es interpuesto a través de correo certifica-

do, y de las constancias del juicio fiscal se advierte que la fecha de su depósito es incierta, ante la falta de datos que establezcan con precisión cuándo se depositó el escrito relativo en la oficina de correos, la Sala Fiscal no debe desecharlo por extemporáneo, toda vez que al existir duda respecto de si ha transcurrido o no el plazo legal para su interposición, debe admitirse a trámite. (XV.3o.34 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T.C. del 2o. C., marzo 2007, p. 1755

SENTENCIA DE NULIDAD. SI AL DICTARLA LA SALA FISCAL OMITE PRONUNCIARSE SOBRE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO POR LA DEMANDANTE, PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO.- De la fracción III, inciso d), del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, de similar redacción al numeral 63, fracción III, inciso d) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que son recurribles las sentencias de las Salas Regionales por violaciones procesales cometidas durante el procedimiento que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo; consecuentemente, si en el juicio de nulidad se dicta sentencia definitiva sin resolver el recuro de reclamación interpuesto por la parte demandante, deben tenerse por acreditados esos extremos y ordenarse la reposición del procedimiento, a efecto de subsanar la violación procedimental en que se incurrió. (XV.3o.33 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 15o. C., marzo 2007, p. 1794

VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LOS PROPIETARIOS O EMPLEADOS DE TALLERES AUTOMOTRICES QUE LOS CONDUZCAN CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES QUE PREVÉ LA REGLA 2.10.3. DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2003, NO ESTÁN OBLIGADOS A ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL BIEN NI LA CALIDAD MIGRATORIA DEL DUEÑO. (XV.3o.31 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 3er. T.C. del 15o. C., marzo 2007, p. 1831

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVAS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO

IMPORTACIÓN TEMPORAL DE MERCANCIAS NO AMPARADAS EN UN PROGRAMA DE MAQUILA. CONSIDERAR QUE ACTUALIZA LA INFRACCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 176 DE LA LEY ADUANERA, DERIVADA DE LA INTERPRETACIÓN *A CONTRARIO SENSU* DEL NUMERAL 104 DE ESE ORDENAMIENTO E IMPONER LA SANCIÓN RESPECTIVA, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA QUE CONSAGRA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EL DE APLICACIÓN ESTRICTA DE LAS LEYES FISCALES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA. (XVII.2o.P.A.30 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T. C. 17o. C., marzo 2007, p. 1687

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO

AGENTE ADUANAL. PARA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE SU PATENTE NO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA INICIADO CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN, PUES SON INDEPENDIENTES. (XIX.1o.19 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. 19o. C., marzo 2007, p. 1585

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EMITIDAS POR EL JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN DE FUNDARLAS Y MOTIVARLAS. (XIX.1o.18 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. 19o. C., marzo 2007, p. 1759

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO

NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO, TRATÁNDOSE DE LAS PRACTICADAS EN EL DOMICILIO CONVENCIONAL, NO EXISTE LA OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE QUE LA PERSONA A NOTIFICAR VIVE EN ÉL (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). (XIX.1o.A.C.27 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 1er. T.C. del 19o. C., febrero 2007, p. 1828

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO

ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI AL ANALIZAR LA OPORTUNIDAD EN QUE FUERON PRESENTADOS, SE ADVIERTE QUE EL AUTO DE LA SALA FISCAL GENERA CONFUSIÓN, AL SEÑALAR UN PLAZO MAYOR PARA EL EFECTO DE COMPUTAR CUÁNDO EMPIEZA A CORRER EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS QUE PARA FORMULARIOS PREVÉ EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE ESTARSE A LO MÁS FAVORABLE AL PROMOVENTE.- De acuerdo con el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, diez días después de concluida la sustanciación del procedimiento y de no existir cuestión pendiente que impida su resolución, el Magistrado instructor debe notificar por lista a las partes que tienen un término de cinco día para formular alegatos por escrito, el cual empezará a correr el día siguiente del en que surta sus efectos la notificación, por disposición del numeral 284 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación tributaria en la vigencia antes mencionada en términos de su precepto 197.

Empero, si en el auto respectivo se concedió a las partes el plazo de cinco días y se precisó que empezará a computarse diez días hábiles después de que surtiera efectos la notificación de ese proveído, es evidente que dicho plazo es mayor y distinto al que previene la ley y, por tanto, ello es una circunstancia incongruente que produce confusión entre quienes tienen la necesidad de hacer el cómputo respectivo; por consiguiente, al analizar la oportunidad en que fueron presentados los alegatos, debe estarse a lo más favorable para el promoverte, porque de lo contrario se incurriría en denegación de justicia. (XX.2o.43 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T.C. 20o. C., marzo 2007, p. 1587

LITIS. NO SE ALTERA SI EL *AD QUEM*, PARA DILUCIDAR SOBRE LA NATURALEZA LABORAL O ADMINISTRATIVA DEL ACTO IMPUGNADO, ABUNDA EN CONCEPTOS JURÍDICOS VINCULADOS CON LA CONTROVERSIA PLANTEADA EN EL JUICIO DE NULIDAD.
(XX.2o.40 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2o. T.C. del 20o. C., enero 2007, p. 2262

NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. CUANDO INICIALMENTE NO CONSTA EN EL ACTA RELATIVA A QUIÉN SE REQUIRIÓ LA PRESENCIA DEL INTERESADO, PERO EN ELLA SE ASIENTAN LOS DATOS DE QUIEN LA RECIBIÓ, SE PRESUME QUE SE TRATA DE LA MISMA PERSONA Y, POR ENDE, SE CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA DEBIDA CIRCUNSTANCIACIÓN. (XX.2o.41 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2o. T.C. del 20o. C., enero 2007, p. 2276

RENTA. LA LIBERACIÓN DE LAS INFRACCIONES O SANCIONES A LOS PARTICULARES QUE POR EL MONTO DE LOS INGRESOS QUE OBTENGAN ENCUADREN EN EL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES, PREVISTA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, SÓLO OPERA RESPECTO DE AQUELLAS OMISIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

FORMALES OCURRIDAS EN EL PERIODO ANUAL DE SU VIGENCIA Y NO RESPECTO DE LAS DE EJERCICIOS ANTERIORES. (XX.2o.38 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 2o. T.C. del 20o. C., enero 2007, p. 2318

VISITAS DOMICILIARIAS. PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES, EL VISITADOR DEBE ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA QUE EL LOCAL EN EL QUE SE EFECTÚA SE ENCUENTRA ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL Y LOS MEDIOS QUE UTILIZÓ PARA CONSTATAR ESA CIRCUNSTANCIA. (XX.2o.44 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T. C. 20o. C., marzo 2007, p. 1834

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO

NEGATIVA FICTA. NO SE CONFIGURA SI SE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN EXPRESA ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE EXCEDA EL PLAZO DE TRES MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (XXI.1o.P.A.66 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1er. T.C. del 21er. C., enero 2007, p. 2271

REVISIÓN FISCAL. LOS DELEGADOS DESIGNADOS EN EL JUICIO DE NULIDAD CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).- La interpretación armónica de los artículos 5o., cuarto párrafo, y 63 de la citada legislación, lleva a sostener que los delegados nombrados por las autoridades demandadas para intervenir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los juicios en los que son parte, no tienen legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, toda vez que el primero de esos preceptos contiene disposiciones genéricas aplicables para la sustanciación del juicio de nulidad, al disponer

en lo conducente que, en el procedimiento contencioso administrativo, las autoridades demandadas podrán designar delegados para que a su nombre reciban notificaciones, formulen promociones de trámite, rindan pruebas, presenten alegatos, y en su caso, interpongan recursos; mientras que, el segundo de los artículos mencionados, prevé hipótesis específicas para la tramitación de la revisión fiscal, al determinar que las resoluciones que pronuncien las Salas Regionales del citado tribunal, podrán ser combatidas por la autoridad inconforme mediante dicho recurso, sólo que tal impugnación deberá efectuarse a través de la unidad encargada de la defensa jurídica del ente de gobierno correspondiente, de manera que si las facultades de los delegados cesan cuando se resuelve el juicio de nulidad, resulta que no les corresponde interponer la revisión fiscal, en virtud de que esta atribución concierne a la referida unidad administrativa. (XXI.1o.P.A.65 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1er. T.C. del 21er. C., enero 2007, p. 2348

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO

EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA FISCAL. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO AUTORIZA SIN HABERSE DETERMINADO NI CUANTIFICADO PREVIAMENTE UN CRÉDITO FISCAL. VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1998). (XXI.2o.P.A.45 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T.C. 21er. C., marzo 2007, p. 1679

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA ILEGALIDAD DE LA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN DE UN REQUERIMIENTO PREVIO, NO TRAE LA MISMA CONSECUENCIA EN AQUÉLLA. (XXI.2o.P.A.46 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T.C. 21er. C., marzo 2007, p. 1736

REVISIÓN FISCAL. LOS ADMINISTRADORES LOCALES JURÍDICOS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS EN LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES. (XXI.2o.P.A.47 A)
S.J.F. IX Época. T. XXV. 2o. T.C. 21er. C., marzo 2007, p. 1786

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO

REVISIÓN FISCAL. TRATÁNDOSE DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA UNA RESOLUCIÓN DERIVADA DE LA IMPUGNACIÓN DE UNA NEGATIVA FICTA, SI AL FALLAR LA SALA FISCAL SÓLO TRATÓ ASPECTOS FORMALES DE LA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA CONTROVERTIDA, AUN CUANDO ÉSTA, EN EL FONDO, INVOLUCRE EL PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE NO FUE MATERIA DEL JUICIO AL SER DE CUANTÍA INDETERMINADA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).- El artículo 248, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, dispone que el recurso de revisión fiscal es procedente contra las sentencias definitivas que dicten las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando la resolución se refiera a un asunto cuya cuantía exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de su emisión; sin embargo, cuando al impugnarse una negativa ficta respecto de una consulta formulada a la autoridad sobre las bases para la determinación de una contribución, la materia del asunto planteado ante la Sala Fiscal sólo versó sobre cuestiones atinentes a las formalidades de la determinación administrati-

va al contestar la demanda y se declaró su nulidad para el efecto de que se emitiera una nueva debidamente fundada y motivada, es claro que se trata de un asunto de cuantía indeterminada, pues inicialmente no se reclamó la nulidad de pagos hechos que por concepto de cualquier contribución se hubiese impuesto al particular, ni la resolución anulada fijó a cargo de él cantidad alguna, aun cuando en el fondo se involucre ese tema, sino que, simplemente se atendió a cuestiones formales, sin tocar aspectos que no fueron materia del juicio contencioso administrativo.
(XXII.1o.47 A)
S.J.F. IX. Época. T. XXV. 1er. T.C. del 22o. C., enero 2007, p. 2350

SÉPTIMA PARTE

ÍNDICES GENERALES

ÍNDICE ALFABÉTICO DE JURISPRUDENCIAS DE SALA SUPERIOR

CONCEPTOS de anulación.- La falta de cita de los preceptos legales violados, no es suficiente para desestimarlos. V-J-2aS-28 (3) 12

RECURSO de reclamación extemporáneo. V-J-2aS-26 (1) 7

SUPLENCIA de los administradores de aduanas.- Basta invocar el fundamento legal que la admita, para que resulte procedente. V-J-2aS-29 (4) 15

SUSPENSIÓN del procedimiento administrativo de ejecución, tratándose de una multa administrativa no fiscal.- Para otorgarse se requiere garantizar el interés fiscal. V-J-2aS-27 (2) 9

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR

ACEPTACIÓN tácita de la competencia. El cumplimiento de un requerimiento de la autoridad sin controvertir sus atribuciones legales, no indica la conformidad del actor con las mismas. V-P-1aS-413 (1) 19

ACTA de muestreo de mercancías de difícil identificación; constituye un acto de molestia para el gobernado. V-P-1aS-418 (2) 21

DESECHAMIENTO de la solicitud de suspensión por acuerdo de la Sala de conocimiento del juicio.- Es impugnable en reclamación si tiene por contenido la negativa a lo solicitado. V-P-2aS-764 (16) 156

DESISTIMIENTO del recurso de reclamación.- Tal circunstancia conduce a declarar que queda sin materia el señalado medio de defensa. V-P-1aS-426 (6) 40

DOBLE tributación.- Aplicación de los comentarios al modelo de la organización para la cooperación y el desarrollo económico, conforme a la Convención de Viena. V-P-2aS-757 (9) 50

DOBLE tributación.- Aplicación obligatoria de los comentarios al modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. V-P-2aS-758 (10) 51

EMBARGO de la negociación practicado por las autoridades fiscales dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, es suficiente para estimar que el interés fiscal se encuentra garantizado ante la autoridad ejecutora y por ello para suspender la ejecución del acto impugnado. V-P-2aS-765 (17) 163

RECURSO de reclamación contemplado en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Documentos que se deben remitir a la Sección de la Sala Superior que por turno corresponda, para que ésta lo resuelva. V-P-1aS-424 (4) 36

RECURSO de reclamación. Es oportuno el que se deposita en el Servicio Postal Mexicano para su envío dentro del plazo de cinco días a que se refiere el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. V-P-2aS-760 (12) 98

REGALÍAS. Su concepto a la luz de lo establecido por el Convenio para evitar la doble tributación e impedir la evasión fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. V-P-2aS-759 (11) 53

RESOLUCIÓN de los recursos administrativos.- Alcance de lo preceptuado en el artículo 132 del Código Fiscal de la Federación. V-P-2aS-756 (8) 48

SUPLENCIA por ausencia y delegación de facultades, constituyen conceptos diferentes y, por ende, no tienen las mismas consecuencias jurídicas. V-P-1aS-423 (3) 34

SUSPENSIÓN de la ejecución del acto administrativo impugnado.- La solicitud previa a la autoridad demandada no es un requisito para su procedencia, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. V-P-1aS-427 (7) 45

SUSPENSIÓN de la ejecución del acto impugnado. Procede concederla aun y cuando el embargo practicado en el procedimiento administrativo de ejecución, sobre bienes muebles del contribuyente, no esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad. V-P-2aS-763 (15) 154

SUSPENSIÓN de la ejecución. Vigilar la suficiencia de la garantía del interés fiscal corresponde a la autoridad ejecutora y no a la Sala Regional del conocimiento. V-P-1aS-425 (5) 38

SUSPENSIÓN. Procede otorgarla respecto de la amonestación pública aplicable a un servidor público, en tanto que la conducta que se sanciona no es considerada grave. V-P-2aS-761(13) 99

VIOLACIÓN substancial al procedimiento. Incurre en ella cuando el Magistrado Instructor que admite la demanda respecto de una resolución que no es la impugnada. V-P-2aS-762 (14) 136

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALA SUPERIOR

ACTA circunstanciada de hechos u omisiones prevista en el artículo 152 de la Ley Aduanera. Tratándose de mercancías de difícil identificación debe levan-

tarse tan pronto la autoridad aduanera tenga conocimiento del dictamen de laboratorio correspondiente. (2) 186

DESPACHO aduanero. En caso de reclasificación arancelaria, previamente a la determinación del origen de la mercancía, para efectos de trato arancelario preferencial, la autoridad debe conceder a la importadora plazo para que exhiba un nuevo certificado y para presentar la rectificación del pedimento de importación. (1) 169

VISITADORES. Están previstos en el Código Fiscal de la Federación. (3) 196

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES

ACREDITAMIENTO de la legal estancia en el país de vehículos importados en definitiva. Pedimento de importación. (13) 208

ACTAS parciales de inicio. (2) 198

ACTIVOS financieros. Resolución apoyada en una regla de la miscelánea fiscal que va más allá de lo que establecen las leyes tributarias. (4) 200

ARTÍCULO 84 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año 2001, es violatorio del principio de reserva de ley establecido en los artículos 1º y 6º del Código Fiscal de la Federación porque en él se establece el sujeto, objeto y la base para el cálculo de dicha contribución por concepto de pago único por jubilación. (43) 239

AUTORIDADES coordinadas en materia de administración de ingresos federales.- Al fundar su competencia deben señalar la fecha de publicación del decreto de la Legislatura Estatal que autorizó o aprobó, el Convenio de adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal. (51) 248

CADUCIDAD de la instancia, no aplica a la instancia de resarcimiento económico, prevista en la Ley Aduanera. (20) 216

COMPETENCIA. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede conocer de asuntos en los que se controvierta la resolución dictada en el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, interpuesto en contra de la calificación negativa del registrador adscrito al Registro Agrario Nacional. (46) 243

COMPROBANTES fiscales. No es obligatorio cumplir con requisitos formales posteriores a su impresión. (23) 220

COMPROBANTES simplificados. No están obligados a expedirlos quienes realicen operaciones con el público en general menores a cien pesos, de conformidad con la regla 2.4.15, de la resolución miscelánea fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril del 2006. (45) 242

COSTO de lo vendido.- Su determinación conforme a lo dispuesto en el artículo 45-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, tratándose de contribuyentes con actividad comercial. (26) 223

CRÉDITOS por diferencias de facturación del suministro de energía eléctrica.- Por ser tarifas que corresponden a ingresos de organismos y empresas y no créditos fiscales, la garantía otorgada tiene por objeto reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se ocasionen a la demandada si no se obtiene sentencia favorable. (31) 227

DEDUCCIÓN de intereses. (8) 204

DEMANDA. Debe estar firmada por quien promueve y no por quien ostenta poder otorgado por el promovente. (57) 256

DERECHO adquirido o iura quaesita.- La reducción del impuesto al activo puede efectuarla la controladora. (3) 198

DEPOSITARIA de bienes embargados. No puede considerarse perfeccionada, ante la falta de inventario de los bienes embargados y de la constancia de su recepción por parte del depositario. (17) 213

DETERMINACIÓN de la base gravable del impuesto general de importación llevado a cabo por la autoridad aduanera.- Supuesto en que su actuación no se ajusta a derecho. (52) 250

DEVOLUCIÓN de impuestos, es ilegal que la autoridad la niegue argumentando que el representante legal de la contribuyente no ha efectuado el pago de impuestos por la actividad propia de aquél. (35) 232

DEVOLUCIÓN del impuesto sobre la renta a favor de personas físicas. El hecho de que los retenedores (personas morales), manifestados en la declaración anual por el contribuyente (persona física), no lo hayan relacionado en la declaración informativa conforme al artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no es motivo fundado para rechazarla. (5) 201

DISCREPANCIAS fiscales. Indebida fundamentación y motivación. (7) 203

EXPEDICIÓN de comprobantes fiscales. Caso en el que el acta de la visita no puede servir de sustento para la imposición de multa. (16) 212

FIRMA autógrafa. No se acredita que un documento la contenga, con la copia fotostática certificada que se realice del mismo. (11) 206

FRACCIÓN arancelaria.- Es intrascendente su corrección por parte del importador en aras de gozar de un trato arancelario preferencial al amparo del TLCAN. (21) 218

FUNDAMENTACIÓN y motivación. Tratándose de multas impuestas por infracción a normas oficiales mexicanas, el valor comercial de las mercancías, no constituye falta de motivación, si se considera el del pedimento de importación. (24) 220

IMPORTACIÓN definitiva de fósforos clasificados en la fracción arancelaria 3605.00.01.- El despacho aduanero correspondiente, debe realizarse por aduana autorizada, cuando derive de la introducción al país, pero no cuando se realice con motivo de la extracción de tales mercancías del lugar en que se almacenaban en depósito fiscal. (49) 245

IMPUESTO al activo. Acreditamiento adicional conforme al artículo 9, representa un pago provisional o ajuste efectivamente enterado. (14) 209

IMPUESTO al activo. Las acciones emitidas por personas morales en el extranjero son títulos de crédito y como tal deben ser consideradas como activos financieros para efectos del artículo 4 fracción II de la Ley del impuesto relativo. (1) 197

IMPUESTO al valor agregado.- Para su acreditamiento es necesario que el comprobante fiscal en que se soporte describa el gasto o servicio que ampara a efecto de demostrar si éste es estrictamente indispensable para los fines del contribuyente. (34) 231

INCIDENTE de medidas cautelares. Tratándose de actos de naturaleza negativa. (53) 251

INTEGRACIONES solicitadas por la autoridad de manera especial. No forman parte de la contabilidad de la contribuyente de acuerdo con lo establecido por los artículos 28 del Código Fiscal de la Federación y 26 a 29 de su reglamento. (50) 247

INVENTARIO acumulable previsto en el artículo tercero de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre del 2004, aunque no constituye un ingreso es un concepto acumulable a la utilidad fiscal. (29) 225

JUICIO sin materia.- Se actualiza esta hipótesis de sobreseimiento cuando en un juicio antecedente se anuló en forma absoluta la resolución recurrida en sede administrativa cuya legalidad también fue planteada en el juicio natural con base en el principio de litis abierta. (42) 238

MEDIDA cautelar consistente en la suspensión de la ejecución del acto impugnado, su procedencia y resolución. (54) 252

MEDIDA cautelar de suspensión de la ejecución de créditos fiscales, no es necesario garantizar el interés fiscal cuando el solicitante sea miembro del Sistema Bancario Mexicano. (40) 236

MEDIDA cautelar de suspensión de la ejecución de una inhabilitación temporal, queda sin materia cuando se trata de un acto consumado. (36) 233

MEDIDA cautelar. Procede su otorgamiento si la autoridad declara la caducidad del consumo de determinados metros cúbicos de agua, cuando el actor cuenta con un permiso vigente para ello. (6) 202

MULTAS de apremio.- Fundamentación y motivación de ellas. (48) 244

NOTIFICACIÓN al agente aduanal durante el levantamiento del acta de muestreo de mercancías, debe entenderse directamente con éste, siendo ilegal la diligencia practicada por conducto de algún dependiente. (41) 237

OBRAS de urbanización.- Las realizadas por las constructoras en los fraccionamientos no constituyen una enajenación sino una prestación de servi-

cios, por lo que no se encuentran exentas del impuesto al valor agregado conforme al artículo 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en 2005. (25) 222

ORDEN de inspección en materia de vida silvestre notificada en la Dirección de Seguridad Pública Municipal cuando el destinatario de la inspección se encuentre privado de su libertad en ese lugar. (30) 226

ORDEN de verificación emitida por la Comisión Federal de Electricidad.- Tratándose del análisis de la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, conforme al principio de mayor beneficio, deben analizarse de prima facie los agravios en los cuales se surta una nulidad lisa y llana (absoluta) del procedimiento que le dio origen, cuando del análisis de dicha orden se advierta que la autoridad carece de competencia para ordenarla. (15) 210

ORDEN de visita. Imprescindible la cita del artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, para fundamentar la competencia material otorgada a los visitadores para requerir al contribuyente visitado la contabilidad, así como que proporcionen datos, informes o documentos que se les requiera. (18) 214

PARTES relacionadas. Conforme a lo previsto en la fracción XXVI del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil cinco, las personas que se consideran partes relacionadas en términos del artículo 215 de la propia Ley, son exclusivamente las residentes en el extranjero (9) 204

PRESCRIPCIÓN.- El plazo para la configuración de esta figura jurídica se interrumpe cuando al contestar la demanda la autoridad exhibe el informe de asunto no diligenciado en el que el ejecutor hace constar que el contribuyente abandonó su domicilio fiscal y éste al ampliar la demanda no refuta este hecho, ni el alcance jurídico de las constancias exhibidas por la autoridad. (44) 240

PRESENTACIÓN extemporánea de documentación que acredita la legal estancia de mercancía extranjera. No se tipifica infracción del artículo 184, fracción I, de la Ley Aduanera, si se exhibe dentro del término previsto por el artículo 155 de dicha ley. (56) 254

PRINCIPIO a contrario sensu.- En la interpretacion del artículo 45-C de la Ley del Impuesto sobre la Renta. (27) 224

PROCEDIMIENTO administrativo en materia aduanera. La caducidad prevista en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, no es aplicable supletoriamente a la caducidad especial regulada por el artículo 153 de la Ley Aduanera. (12) 207

PROCEDIMIENTO administrativo en materia aduanera, su ilegalidad al haberse instruido la orden de visita en materia aduanera en las oficinas de la autoridad aduanera. (47) 244

RECIBO de pago que acredita el entero de multas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. No constituye una resolución definitiva impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (10) 205

RECTIFICACIÓN de pedimento.- No es obligación de la autoridad requerirla de acuerdo con la regla 3.5.6. de la Resolución miscelánea de comercio exterior para 2006. (22) 218

RECURSO de queja.- El cumplimiento a una sentencia definitiva dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la que se ordenó la devolución de impuestos, implica no solamente el dictado de la resolución que la declara procedente, sino también que el saldo a favor sea puesto a disposición del contribuyente en su cuenta bancaria. (39) 235

RECURSO de revocación, inaplicabilidad del beneficio otorgado en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, de contar con un plazo duplicado para su interposición. (55) 254

REQUERIMIENTO de obligaciones. No se encuentra contemplado como premisa en tratándose de aplicación de multas por la falta de presentación del aviso de compensación. (19) 215

REQUISITOS para la admisión de la demanda en el juicio contencioso administrativo, no es necesario exhibir el documento en que conste la resolución impugnada cuando el actor manifieste que no la conoce. (38) 234

RESOLUCIONES recaídas a consultas planteadas ante la autoridad administrativa.- No son obligatorias las resoluciones administrativas recaídas a las planteadas por personas distintas del contribuyente. (28) 225

SUSPENSIÓN de la ejecución del acto reclamado.- Cuando el crédito impugnado corresponde a tarifas por diferencias de facturación, procede otorgarla conforme a las fracciones IV y XI del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (32) 228

SUSPENSIÓN de la ejecución del acto impugnado.- Procede otorgarla cuando la resolución impugnada en el juicio la constituye una determinación de diferencias en la facturación del suministro de energía eléctrica. (33) 229

TERCERO en el juicio contencioso administrativo, para su emplazamiento se debe acreditar no solamente que tiene un interés legítimo en el asunto, sino que éste sea incompatible con la pretensión de la parte actora. (37) 233

ÍNDICE DE RESOLUCIONES Y VOTOS PARTICULARES

RESOLUCIÓN correspondiente a la excusa Núm. 13419/06-17-06-1/881/06-PL-11-06. V-RyVP-SS-22 275

RESOLUCIÓN correspondiente al incidente de incompetencia Núm. 350/06-19-01-3/750/06-PL-10-02. V-RyVP-SS-20 259

RESOLUCIÓN correspondiente al incidente de recusación Núm. 13419/06-17-06-1/120/07-PL-11-05. V-RyVP-SS-21 268

VOTO particular que formula el C. Magistrado Alejandro Sánchez Hernández en el incidente de incompetencia Núm. 1164/06-04-01-8/17508/06-17-11-2/828/06-PL-08-02 264

VOTO particular que formula el C. Magistrado Jorge Alberto García Cáceres en la excusa Núm. 13419/06-17-06-1/881/06-PL-11-06 278

VOTO particular que formula el C. Magistrado Jorge Alberto García Gáceres en el incidente de incompetencia Núm. 350/06-19-01-3/750/06-PL-10-02 261

VOTO particular que formula el C. Magistrado Jorge Alberto García Cáceres en el incidente de recusación Núm. 13419/06-17-06-1/120/07-PL-11-05 270

VOTO particular que formula el C. Magistrado Jorge Alberto García Cáceres en el incidente de nulidad de notificaciones Núm. 2034/96-04-02-9/ac1/761/00-PL-07-04-NN 283

VOTO particular que formula el C. Magistrado Luis Carballo Balvanera en el incidente de incompetencia Núm. 8671/06-17-07-8/5345/06-07-03-7/324/07-PL-02-02 289

ÍNDICE DE ACUERDOS GENERALES

RECURSO de reclamación extemporáneo. G/S2/5/2007 301

SUSPENSIÓN del procedimiento administrativo de ejecución, tratándose de una multa administrativa no fiscal.- Para otorgarse se requiere garantizar el interés fiscal. G/S2/6/2007 304

CONCEPTOS de anulación.- La falta de cita de los preceptos legales violados, no es suficiente para desestimarlos. G/S2/7/2007 307

SUPLENCIA de los administradores de aduanas.- Basta invocar el fundamento legal que la admita, para que resulte procedente. G/S2/8/2007 310

ÍNDICE ALFABÉTICO DE JURISPRUDENCIAS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

CONCEPTOS de violación en el amparo directo. Son inoperantes por novedosos si se refieren a la falta de fundamentación de la competencia territorial de la autoridad administrativa en el juicio fiscal y ello no se planteó ante la Sala del conocimiento (Alcances de la tesis 2a. LXXII/2006). (VI.3o.A. J/62) 327

CONTADOR público autorizado para dictaminar estados financieros. Al ser la suspensión de su registro una resolución definitiva que le causa agravio en materia fiscal, es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en términos de la fracción IV del artículo 11 de su Ley Orgánica. (2a./J. 21/2007) 318

REVISIÓN en amparo directo. Están legitimados el Procurador Fiscal de la Federación y los servidores públicos mencionados en la parte final del párrafo primero del artículo 105 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para interponer aquel recurso en representación del titular de

esa dependencia, cuando éste acude al juicio de garantías con el carácter de tercero perjudicado (Legislación vigente hasta el 22 de enero de 2003). (2a./J. 17/2007) 321

REVISIÓN fiscal. Por disposición expresa de la ley sólo el abogado general de la Comisión Federal de Electricidad tiene legitimación para interponer ese recurso, en representación de dicho organismo. (XXI.2o.P.A. J/9) 329

REVISIÓN fiscal. Su procedencia conforme al artículo 248, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2005), no sólo se encuentra supeditada a que el asunto se refiera a una resolución emitida por las autoridades ahí señaladas, y que se interponga oportunamente, sino también a la naturaleza propia del asunto. (VII.2o.C. J/26) 328

TRIBUNAL Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Tiene competencia para conocer del juicio de nulidad promovido por un pensionado o jubilado contra la negativa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de los órganos dependientes de éste, de pagar diferencias respecto de la gratificación anual prevista en el artículo 57 de la ley que rige dicho Instituto. (IV.3o.A. J/14) 325

ÍNDICE ALFABÉTICO DE TESIS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

ALEGATOS de bien probado. No lo son los argumentos ajenos a la litis del juicio de nulidad, por lo que la Sala Fiscal no está obligada a analizarlos en la sentencia (Legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005). (VIII.1o.83 A) 380

AGRAVIOS inoperantes en la revisión fiscal. Lo son aquellos que introducen argumentos de fondo no propuestos en la contestación a la demanda de nulidad. (VIII.3o.58 A) 384

ALEGATOS en el juicio contencioso administrativo. Si al analizar la oportunidad en que fueron presentados, se advierte que el auto de la Sala Fiscal genera confusión, al señalar un plazo mayor para el efecto de computar cuándo empieza a correr el término de cinco días que para formularios prevé el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, debe estarse a lo más favorable al promovente. (XX.2o.43 A) 390

AMPARO directo contra una sentencia dictada por el Pleno o las Secciones de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Si la demanda relativa se presenta ante la Sala Regional de dicho órgano que se encargó de la instrucción del juicio y, por ello, es recibida extemporáneamente por aquellas autoridades, procede decretar el sobreseimiento. (I.7o.A.505 A) 352

AUTORIZADOS en términos del artículo 200, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Cuentan con facultades para presentar la demanda de Amparo en nombre de los actores en el juicio tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005). (V.2o.P.A.8 A) 374

CARGA de la prueba en el juicio de nulidad. Corresponde al actor cuando afirma que la resolución administrativa impugnada contiene firma facsimilar y no autógrafa, pero en la constancia de su notificación se asentó lo contrario. (VIII.3o.58 A) 384

COMISIÓN Nacional para la Protección y Defensa al usuario de servicios financieros (Condusef). Contra su resolución que ordena a una institución de seguros la constitución e inversión de una reserva técnica, es improcedente el juicio de amparo indirecto si previamente no se agotaron los medios de defensa ordinarios. (I.7o.A.494 A) 353

COMPETENCIA de la autoridad demandada. La obligación de analizarla por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, en su omisión, por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza siempre y cuando la litis en el asunto respectivo lo permita. (VI.1o.A.218 A) 376

CONTENCIOSO administrativo. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (vigente a partir del uno de enero de dos mil seis), exige mayores requisitos para la suspensión de los actos impugnados, que la Ley de Amparo. (I.12o.A.52 A) 357

DEMANDA de amparo indirecto. Cuando se reclama la resolución que decretó la acumulación de juicios, si en uno de ellos estaba cerrada la instrucción quedando pendiente sólo el dictado de la sentencia y se dejó sin efectos lo actuado hasta antes de la etapa de alegatos, al tener dichos actos una ejecución de imposible reparación no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. (IV.2o.A.189 A) 370

DEMANDA de nulidad enviada por correo certificado. El artículo 207, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, al disponer que debe depositarse en el lugar donde reside el demandante, no transgrede el derecho a la tutela jurisdiccional.
(1a. LXXIV/2007) 333

DEMANDA de nulidad enviada por correo certificado. El artículo 207, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, al disponer que debe depositarse en el lugar donde reside el demandante, no transgrede la garantía de audiencia. (1a. LXXV/2007) 334

DEVOLUCIÓN de saldo a favor. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede ordenarla al resolver el juicio contencioso administrati-

vo, si ya transcurrieron los plazos que tiene la autoridad fiscal para resolver lo conducente (Legislación vigente en 2003). (I.4o.A.558 A) 350

DEVOLUCIÓN del pago de lo indebido. Es improcedente que la Sala Fiscal condene a la autoridad a realizarla, sin que antes haya mediado la promoción respectiva del contribuyente, en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. (VI.1o.A.217 A) 377

INTERÉS jurídico del recurrente para interponer recurso de revisión, se actualiza cuando en un juicio de nulidad la autoridad responsable no estudia algún concepto de anulación y el Tribunal Colegiado concede el amparo por cuestiones de legalidad y omite el estudio de las cuestiones de constitucionalidad. (1a. XXIV/2007) 336

JUICIO contencioso administrativo. El requerimiento hecho al demandante para que presente alguno de los documentos a que alude el artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, no conlleva a exigir, además, copia del escrito a través del cual se le da cumplimiento (Legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005). (IV.1o.A.71 A) 367

JUICIO contencioso administrativo. La ampliación al principio de litis abierta contenida en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo respecto de lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, sólo es aplicable a los asuntos iniciados a partir del 1 de enero de 2006.(I.13o.A.126 A) 359

JURISPRUDENCIA sobre la constitucionalidad de una norma fiscal. Procede su aplicación mientras ésta no sea reformada. (2a. IV/2007) 344

LITIS en el juicio de nulidad. Las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no están facultadas para dilucidar cuestiones introducidas en la contestación de la demanda que no fueron planteadas por el actor (Legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005). 363

NULIDAD en el juicio fiscal. La decretada por deficiente fundamentación de la competencia territorial de la autoridad administrativa demandada, debe ser para que ésta actúe en ejercicio de sus facultades discrecionales y no lisa y llana o para efectos (Legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005). (III.4o.A.1 A) 364

PAGO en parcialidades. La negativa para autorizar la solicitud respectiva, es una resolución que causa agravio en materia fiscal cuya legalidad puede ser analizada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (VI.1o.A.214 A) 378

PROCEDIMIENTO contencioso administrativo. El artículo 14, penúltimo párrafo, de la Ley Federal Relativa, al prever que se tendrá por no presentada la demanda cuando existen terceros interesados y no se proporcione su nombre y domicilio, no viola el derecho a la tutela jurisdiccional.(1a. LIII/2007) .. 337

PROCEDIMIENTO contencioso administrativo. El artículo 14, penúltimo párrafo, de la Ley Federal Relativa, al prever que se tendrá por no presentada la demanda cuando existen terceros interesados y no se proporcione su nombre y domicilio, no viola la garantía de audiencia. (1a. IX/2007)..... 338

RECLAMACIÓN en el juicio fiscal. Si la fecha de depósito del escrito relativo ante la oficina de correos es incierta no debe desecharse ese recurso por extemporáneo. (XV.3o.34 A)..... 387

RENTA.Qué debe entenderse por “ingreso” para efectos del Título II de la Ley del Impuesto Relativo. (1a. CLXXXIX/2006) 341

REQUERIMIENTO. Ante su parcial incumplimiento la Sala Fiscal debe emitir y notificar en forma inmediata el proveído respectivo, a efecto de que el interesado, de estar en tiempo, lo cumpla cabalmente. (IV.1o.A.70 A) 368

REVISIÓN fiscal. Los delegados designados en el juicio de nulidad carecen de legitimación para interponerla (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo). (XXI.1o.P.A.65 A) 392

REVISIÓN fiscal. Si el Tribunal Colegiado de Circuito advierte que al declararse la nulidad de un crédito fiscal se decretó el reparto de utilidades sin que hayan sido llamados a juicio como terceros interesados los trabajadores de la persona moral actora ni tampoco se requirió a la promovente para que señalara el nombre y domicilio del sindicato respectivo o a su representante legal, debe revocar la sentencia y ordenar a la sala correspondiente reponer el procedimiento para que se subsane la violación cometida. (IV.1o.A.72 A) 368

REVISIÓN fiscal. Tratándose de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, es improcedente ese recurso contra una resolución derivada de la impugnación de una negativa ficta, si al fallar la Sala Fiscal sólo trató aspectos formales de la determinación administrativa controvertida, aun cuando ésta, en el fondo, involucre el pago de contribuciones que no fue materia del juicio al ser de cuantía indeterminada (Legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005). (XXII.1o.47 A) 394

SENTENCIA de nulidad. Si al dictarla la Sala Fiscal omite pronunciarse sobre el recurso de reclamación interpuesto por la demandante, procede reponer el procedimiento. (XV.3o.33 A) 388

SENTENCIAS del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando se declara la nulidad para efectos, para determinar si existe violación a la garantía de legalidad por omisión en el estudio de los conceptos de nulidad debe atenderse a cuáles fueron los que se dejaron de analizar y determinar si corresponde a aquellos que son de estudio preferente. (VIII.2o.80 A) 381

SENTENCIA que declara la nulidad de una resolución negativa ficta. Si se produce con motivo de la falta de expresión de los motivos y fundamentos en que se apoyó la omisión de la autoridad para resolver un recurso en sede administrativa, debe ser lisa y llana y no para el efecto de que la autoridad revoque los actos que originaron su inteposición (Legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005). (III.4o.A.9 A) 366

SUPLENCIA de la queja deficiente en materia administrativa. No constituye una violación manifiesta de la Ley para efectos de su procedencia el desechamiento de la demanda en el juicio de nulidad por no haberse agotado previamente a su promoción el recurso de revisión previsto en el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales. (2a. XX/2007) 345

SUSPENSIÓN en el amparo. Es improcedente si el acto reclamado lo constituye la resolución emitida por una sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que niega la suspensión de los actos derivados del Procedimiento Administrativo de Ejecución, pues no se trata de un acto negativo con efectos positivos.(IV.2o.A.187 A) 372

TRIBUNAL Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es competente para conocer de las controversias suscitadas entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y una entidad paraestatal respecto de la devolución de gastos médicos. (VIII.2o.81 A) 382

TRIBUNAL Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Al dictar sus sentencias, cuando en juicio se combate un acto emitido por virtud de la declaratoria de nulidad de otro anterior, debe examinar los aspectos de aquél que tengan autonomía en relación con el inicialmente impugnado (Legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005). (I.7o.A.500 A) 356

VERIFICACIÓN de vehículos de procedencia extranjera. La Sala Fiscal no está obligada a precisar el precepto que faculta al administrador de una aduana para nombrar varios verificadores y que éstos actúen conjunta o separadamente. (VIII.2o.81 A) 383

VEHÍCULOS de precedencia extranjera. Los propietarios o empleados de talleres automotrices que los conduzcan cumpliendo con los requisitos y condiciones que prevé la regla 2.10.3. de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2003, no están obligados a acreditar la propiedad del bien ni la calidad migratoria del dueño. (XVII.3o.31 A) 388

DIRECTORIO DE LA REVISTA

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA:
Mag. Luis Malpica y de Lamadrid

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES:
Lic. Juan Carlos Ramírez Villena

Compilación, clasificación, ordenación y revisión de tesis, elaboración de índices, corrección tipográfica y vigilancia de la edición:

Lic. Ana Lidia Santoyo Ávila
C. Elba Carolina Anguiano Ramos
C. Alejandra Abril Mondragón Contreras

PUBLICACIÓN OFICIAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Certificado de Licitud de Título No. 3672
Certificado de Licitud de Contenido No. 3104
Número de Reserva al Título en Derechos de Autor: 04-2001-012517410700-102
Distribuidor principal: Fideicomiso para Promover la Investigación del Derecho Fiscal y Administrativo, Insurgentes Sur 881 Torre 'O', Piso 12, Colonia Nápoles, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03810, México , D.F.
Impresión:Talleres Gráficos de México. Secretaría de Gobernación, Av. Canal del Norte No. 80, Col. Felipe Pescador, C.P. 06280, México D.F.
Insurgentes Sur No. 881, Torre 'O', Piso 12, Col. Nápoles, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F.

Las obras podrán adquirirse en la Dirección General de Publicaciones, en las Librerías Jurídicas Especializadas y en las Salas Regionales Foráneas, o bien, por correo, enviando cheque a nombre del Fideicomiso para Promover la Investigación del Derecho Fiscal y Administrativo, a la siguiente dirección:

DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES

Insurgentes Sur No. 881, Torre "O" Piso 12, Col. Nápoles
Deleg. Benito Juárez. C.P. 03810
México, D.F.
Tel. 50-03-70-00 Ext. 3219

LIBRERÍAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS

METROPOLITANAS

SUCURSAL INSURGENTES

INSURGENTES SUR No. 881, TORRE "O" PISO 12, COL. NÁPOLES
DELEG. BENITO JUÁREZ. C.P. 03810
MÉXICO, D.F.

SUCURSAL TLALNEPANTLA

AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
No. 18 - P.B. LOCAL COL. CENTRO
C.P. 54000 TLALNEPANTLA EDO. DE MÉX.
TEL. (55)53 84 05 44

FORÁNEAS

SUCURSAL TORREÓN
BLVD. DIAGONAL REFORMA
No. 2984
ZONA CENTRO,
C.P. 27000, TORREÓN, COAH.
TEL. 01 (871) 79 38 937

SUCURSAL CELAYA
EJE VIAL MANUEL J.CLOUTHIER
NORPONIENTE No. 508
FRACCIÓN DE LA SEGUNDA
SECCIÓN DE LA HACIENDA
SAN JUANICO
C.P. 38020 CELAYA, GTO.
TEL. 01 (461) 6 14 20 89

SUCURSAL OAXACA
AV. PINO SUÁREZ 700 INTERIOR 16-B
COL. CENTRO
C.P. 68000 OAXACA, OAX.
TEL. 01 (951) 51 37 899

SUCURSAL CULIACÁN
PASEO NIÑOS HÉROES No. 520
ORIENTE, P.B.
COL. CENTRO
C.P. 80000, CULIACÁN, SIN.
TEL. 01 (667) 7 12 90 39

SUCURSAL ACAPULCO
AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 63-2° PISO
LOCALES C-1 Y C-2 FRACC. CLUB DEPORTIVO
INTERIOR DEL CENTRO DE CONGRESOS COPACABANA
C.P. 39690, ACAPULCO, GRO.
TEL. 01 (744) 4 81 36 39

DIRECTORIO
SALAS REGIONALES FORÁNEAS

PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE
PRIVADA 5B-SUR, No. 4302,
ENTRE 43 PTE. Y 7 SUR
COL. HUEXOTITLA,
C.P. 72530
PUEBLA, PUEBLA
TEL. 01 (222) 2 43 34 05

SALA REGIONAL PENINSULAR
CALLE 56-A No. 483B, (PASEO DE MONTEJO)
ESQ. CON CALLE 41, COL. CENTRO
C.P. 97000
MÉRIDA, YUCATÁN
TEL 01 (999) 9 28 04 19

PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORESTE
CERRO DE PICACHOS No. 855 SUR
COL. OBISPADO
C.P. 64060
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL. 01 (818) 1 23 21 53

SALA REGIONAL DEL NOROESTE I
AV. PASEO DE LOS HÉROES 9691,
FRACC. DESARROLLO URBANO
DEL RÍO TIJUANA
C.P. 22320
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
TEL. 01 (664) 684 84 61

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II
CALLE CHIHUAHUA No. 133 NTE.
ENTRE CALLES HIDALGO Y ALLENDE
COL. CENTRO
C.P. 85000
CD. OBREGÓN, SONORA
TEL. 01 (644) 414 70 05

PRIMERA SALA REGIONAL DEL GOLFO
AV. CIRCUITO CRISTOBAL COLÓN No. 5,
OCTAVO Y DÉCIMO PISOS.
COL. JARDINES DE LAS ÁNIMAS,
SECCIÓN "TORRE ÁNIMAS"
C.P. 91190
JALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ
TEL. 01 (228) 812 56 31

PRIMERA Y SEGUNDA SALA
REGIONAL DE OCCIDENTE
AV. AMÉRICAS No. 877-2° Y 3er PISO
ENTRE COLOMOS Y FLORENCIA
COL. PROVIDENCIA, SECTOR HIDALGO
C.P. 44620
GUADALAJARA, JALISCO
TEL. 01 (333) 8 17 15 25

SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I
AV. FRANCISCO ZARCO No. 2656
COL. FRANCISCO ZARCO
C.P. 31020
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL. 01 (614) 418 84 77

SALA REGIONAL DEL CENTRO I
PLAZA KRISTAL, TORRE "A" ÚLTIMO PISO,
AV. LÓPEZ MATEOS, ESQUINA CON HÉROES
DE NACOZARI SUR No. 1001,
COL. SAN LUIS
C.P. 20250
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL. 01 (449) 915 29 12

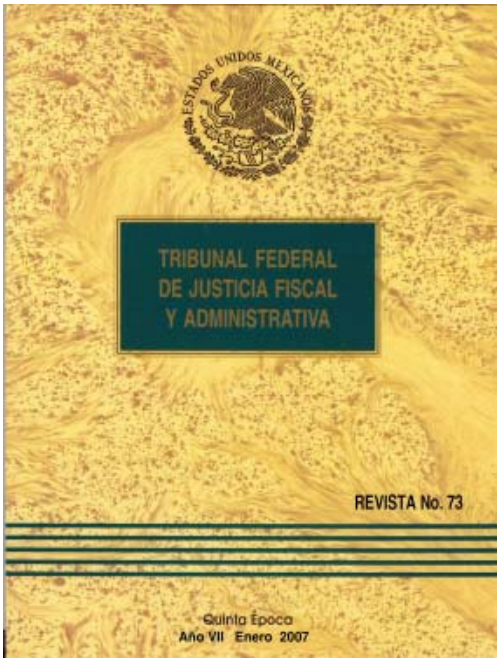
SALA REGIONAL DEL GOLFO-NORTE
CALLE HIDALGO No. 260
ESQ. MIER Y TERÁN
COL. CENTRO
C.P. 87000
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
TEL. 01 (834) 315 59 74

SALA REGIONAL DEL CARIBE
SUPER MANZANA 36, MANZANA 2, LOTE 2
LOCALES B-4, B-8 AL B-21
PLAZA COMERCIAL LAS PALMAS
ENTRE XCARET Y AVENIDA
COBA ESQ. LA COSTA
C.P. 77500
CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL. 01 (998) 898 08 93

SALA REGIONAL CHIAPAS-TABASCO
PRIMERA CALLE PONIENTE NORTE No. 152
ESQUINA PRIMERA NORTE
COL. CENTRO
C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL. 01 (961) 612 07 09

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA



La Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se publica mensualmente para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 75 y 78 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 26, fracción XXV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Su objetivo es el difundir los criterios establecidos en las tesis de jurisprudencia, precedentes o criterios aislados que surgen al resolver los juicios planteados ante el propio Tribunal. Además de las tesis y la parte relativa de la sentencia que la motivó, se publica una selección de jurisprudencia y tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia fiscal y administrativa.

La suscripción anual comprende 12 ejemplares que van de enero a diciembre del mismo año. También la puede adquirir por semestre que comprende de enero a junio o de julio a diciembre o por ejemplar suelto.

SUSCRIPCIÓN ANUAL

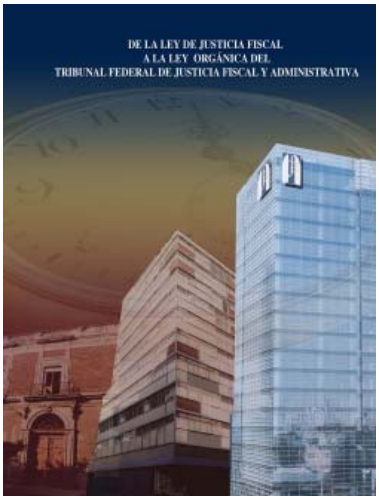
ENERO A DICIEMBRE 2007	$ 3,100.00*
ENERO A DICIEMBRE 2006	$ 3,100.00
ENERO A DICIEMBRE 2005	$ 2,915.00
ENERO A DICIEMBRE 2001	$ 2,000.00
ENERO A DICIEMBRE 2000	$ 1,650.00

SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL

ENERO A JUNIO 2007	$ 1,670.00*
ENERO A JUNIO 2006	$ 1,670.00
ENERO A JUNIO 2005	$ 1,574.00
ENERO A JUNIO 2001	$ 1,100.00
ENERO A JUNIO 2000	$ 900.00

*** vigencia actual (hasta nuevo aviso)**

COMPILACIÓN



ISBN 968-7626-48-8

$290.00

DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Muestra con un sentido histórico la memoria legislativa del Tribunal, las huellas de un largo camino de evolución constante y modernización del Contencioso Administrativo Federal inserto en la realidad nacional.

Temas: Antecedentes Legislativos del modelo Contencioso Administrativo en México, Notas periodísticas relativas al inicio de labores del Tribunal Fiscal de la Federación, Ley de Justicia Fiscal (D.O.F. 31 de agosto de 1936), Código Fiscal de la Federación (D.O.F. 31 de diciembre de 1938), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 19 de enero de 1967), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 2 de febrero de 1978), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 15 de diciembre de 1995), así como las Reformas que se hicieron a estos Ordenamientos.

COMPILACIÓN DE TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y EL PODER JUDICIAL FEDERAL EN MATERIA DE LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, TRATADOS INTERNACIONALES, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR

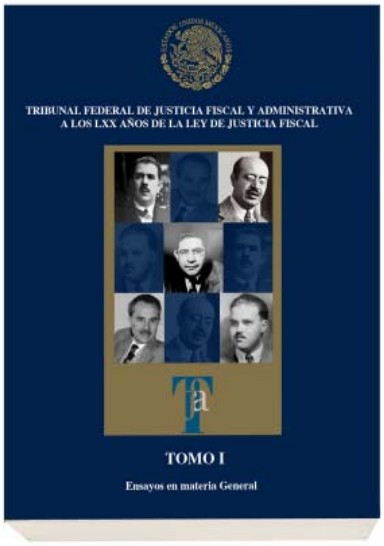
Incluye las tesis publicadas en las Revistas de este Tribunal de enero de 1994 a octubre de 2004 y las publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de enero de 1994 a agosto de 2004.

$350.00



ISBN 968-7626-49-6

NUEVAS PUBLICACIONES



ISBN 968-7626-57-7

$ 1,350.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A LOS LXX AÑOS DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL EN CINCO TOMOS

En el marco de la conmemoración del LXX aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, fue presentada esta magna obra que constituye el testimonio de lo que actualmente es la justicia fiscal y administrativa, vista por sus propios actores. A partir de la valiosa colaboración de destacados juristas nacionales y extranjeros se desarrollan, en cinco tomos, temas de trascendencia para el contencioso administrativo, tales como: Ensayos en materia General (Tomo I); Cuestiones constitucionales, control de legalidad de los actos de la Administración Pública y nuevas perspectivas para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tomo II); Recursos administrativos, juicio contencioso administrativo y responsabilidad patrimonial del Estado y de los servidores públicos (Tomo III); Tratados internacionales en materia económica y tributaria; ensayos en materia fiscal, aduanera y comercio exterior (Tomo IV); y Seguridad social, propiedad intelectual, protección al consumidor, aguas nacionales y bioseguridad de organismos genéticamente modificados (Tomo V).

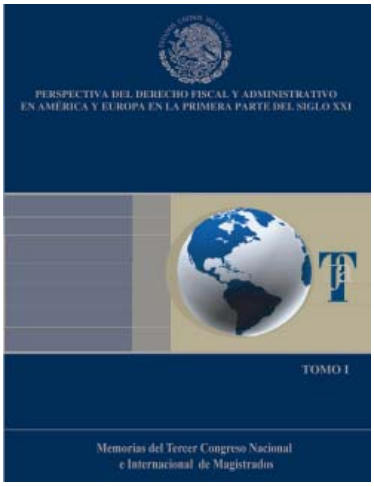


ISBN 968-7626-60-7

$ 150.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN) MAGISTRADOS PRESIDENTES DEL TRIBUNAL 1937-2006 TESTIMONIOS Y SEMBLANZAS

En el LXX aniversario de la creación del hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se hace un homenaje a los hombres y mujeres que han tenido a su cargo dirigir los destinos de este Tribunal, a través de esta obra que incluye el testimonio de los licenciados Antonio Carrillo Flores y Guillermo López Velarde, Magistrados Fundadores, quienes en dos artículos relataron las circunstancias en que fue creado este Órgano Jurisdiccional, y sus primeros años de vida; los discursos pronunciados por los Presidentes de la República y por los Presidentes del Tribunal con motivo de diversos aniversarios de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal; la trayectoria de los Presidentes de este Órgano de impartición de justicia; y un apartado fotográfico.



ISBN. 968-7626-61-5

$450.00

MEMORIAS DEL TERCER CONGRESO DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (PERSPECTIVA DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO EN AMÉRICA Y EUROPA EN LA PRIMERA PARTE DEL SIGLO XXI EN DOS TOMOS

Universalidad, apertura a las más variadas expresiones jurídicas, reencuentro con el pasado y visión de futuro, fueron las constantes durante el Tercer Congreso Nacional e Internacional de Magistrados, llevado a cabo con motivo del LXX Aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal que diera origen al Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; congreso celebrado en la ciudad de México del 24 al 28 de agosto de 2006. Los temas abordados recorrieron todas las materias del ámbito de competencia del Tribunal, manifestados en la visión de los juristas participantes respecto de las “Perspectivas del Derecho Fiscal y Administrativo en América y Europa en la primera parte del Siglo XXI”.

OBRAS CONMEMORATIVAS DE LOS ANIVERSARIOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL



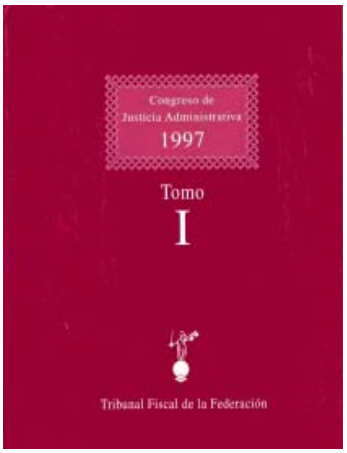
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A LOS LXV AÑOS DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL 2001 EN SEIS TOMOS

Al cumplir 65 años el Tribunal, se edita una obra que reune a grandes tratadistas nacionales y extranjeros, los ensayos relativos se incluyen en los tres primeros tomos de la obra. También en los tomos IV y V se presenta una compilación de las tesis emitidas por el Tribunal, durante los últimos cinco años, que comprenden en su totalidad la cuarta época de la revista, dichas tesis se clasifican según la instancia emisora, el tipo de tesis y dentro de esta clasificación, en orden alfabético. El tomo VI contiene un índice temático en el que aparecen los rubros de las tesis identificando los preceptos jurídicos que fueron señalados en cada una de ellas, así como la materia correspondiente a dicho precepto y los preceptos de otros ordenamientos jurídicos que se correlacionaron en dicha tesis.

ISBN 968-7626-29-1

$1,200.00

OBRAS CONMEMORATIVAS DE LOS ANIVERSARIOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL

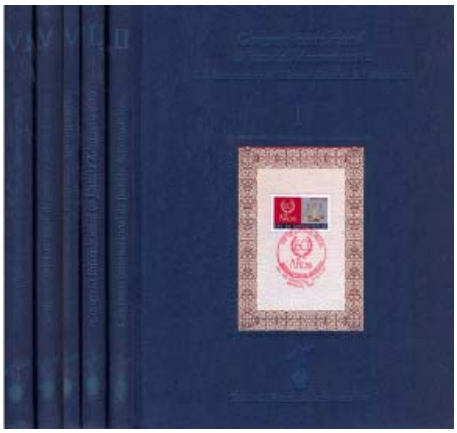


ISBN 968-7626-11-9

$425.00

CONGRESO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1997 LXI ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN DOS TOMOS

En 1997 se conmemora el 61 aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, celebrándose el Congreso de Justicia Administrativa 1997, con la participación nuevamente de algunos de los Presidentes de los Tribunales Fiscales de países de América Latina y España, de los Magistrados del propio Tribunal y de eminentes juristas nacionales y extranjeros. Se tratan temas de gran importancia y trascendencia para nuestro país, tales como: “Cuotas Compensatorias; Alcances de la Declaración de Inconstitucionalidad por el Poder Judicial Federal; y La Suspensión en Materia de Responsabilidades de Servidores Públicos”.



ISBN. 968-7626-10-0

$2,000.00

CONGRESO INTERNACIONAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA V REUNIÓN (1996) LX ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN SEIS TOMOS

Al cumplirse 60 años de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, el 27 de agosto de 1996, se celebró un Congreso Internacional con la participación de los Presidentes de los Tribunales Fiscales de los países de América Latina y España, y de los Magistrados del propio Tribunal. La obra presenta los estudios sobre Justicia Administrativa en los países de los participantes, Códigos Tributarios en Europa y los Modelos de los mismos en América Latina, así como el Pasado, Presente y Futuro del Tribunal Fiscal de la Federación. Esta edición comprende **seis tomos**, encuadernación en pasta e impresión de lujo.

OBRAS DE LAS REUNIONES

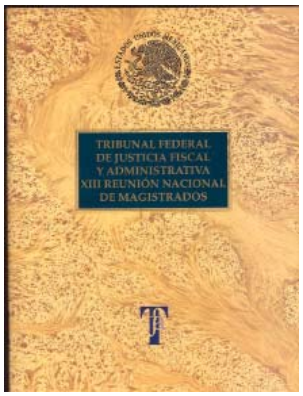
ANTE LOS RETOS DEL FUTURO, VALORES Y CAPACIDADES DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL XIV REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2005)



Temas tratados: Ética y Valores, Nuevas formas de controversia del Contencioso Administrativo Federal, responsabilidad patrimonial del Estado, Evolución de la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su proyección hacia el futuro y la búsqueda de nuevas fórmulas de controversia, al encuentro de un sistema renovado del Contencioso Administrativo Federal, La responsabilidad del Estado, Reflexiones en torno al Acceso de la Justicia Administrativa en materia de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Interpretación constitucional en materia patrimonial del Estado.

$290.00

ISBN 968-7626-54-2



ISBN 968-7626-53-4

$370.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XIII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2004)

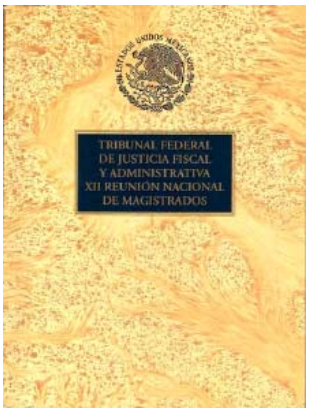
Temas tratados: El Contencioso Administrativo a la luz de un sistema integral y coherente de impartición de justicia en el Estado Mexicano, Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2003)

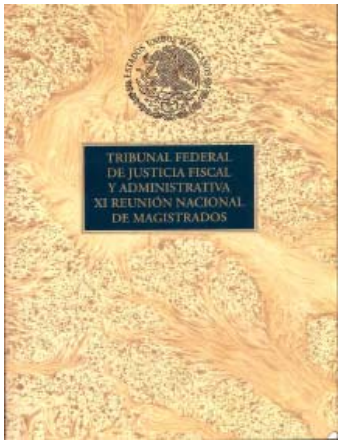
Temas tratados: La Supresión del Contencioso Administrativo en México, Estado actual del Contencioso Administrativo en Europa, en América Latina y el Contencioso Administrativo Federal en México evolución y situación actual, iniciativa de la Ley Federal de Justicia Administrativa en la Función Pública, Nuevo Esquema en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

ISBN 968-7626-47-X

$130.00



OBRAS DE LAS REUNIONES



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XI REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2002)

Temas tratados: Demanda, Suspensión, Pruebas, Alcances de la Sentencia y su Impugnación, Efectividad, Obligatoriedad de la Jurisprudencia, ISR, Aspectos de la Reforma Fiscal, Ley del IMSS, Iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones.

ISBN 968-7626-42-9

$260.00



CONTROL DE LEGALIDAD EN EL MODERNO ESTADO DE DERECHO EN AMÉRICA Y EUROPA X REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2001)

Esta obra contiene los trabajos presentados con motivo del Segundo Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa, celebrado con motivo del 65 aniversario de la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, en el que participaron el Vicepresidente del Consejo de Estado de Francia **Sr. Renaud Denoix de Saint Marc**, el Presidente de la Corte de Impuestos de Canadá **Alban Garon**, el Presidente del Consejo de Tribunales Administrativos de Canadá **Lic. Murray Walter Chitra**, y en representación de la Asociación Iberoamericana de Tribunales Fiscales y Administrativos, participaron el **Dr. Manuel Urueta Ayola**, Presidente del Consejo de Estado de Colombia y el **Dr. Luis Rodríguez Picado,** Presidente del Tribunal Fiscal Administrativo de Costa Rica; representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo **Ministro Juan Díaz Romero**, **Senador Fauzi Handam** y el Procurador Fiscal de la Federación **Lic. Gabriel Reyes Orona**; por los Tribunales Administrativos Estatales **Magistrada Teresita Rendón Huerta** presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo de Guanajuato; así como de la Academia Mexicana del Derecho Fiscal y Magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del propio Tribunal.

ISBN 968-7626-37-2

$210.00

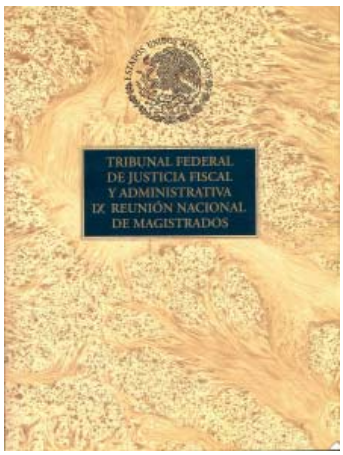
OBRAS DE LAS REUNIONES

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN IX REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2000)

Temas tratados: Validez Actual del Contencioso Administrativo en México, Competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, Eficacia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Local, Principios Fundamentales del Procedimiento Contencioso Administrativo, Cumplimiento y Ejecución de Sentencias, Análisis de Derecho Comparado, Contencioso Objetivo y Subjetivo de Anulación, El Procedimiento Contencioso Administrativo.

ISBN 968-7626-27-5

$210.00





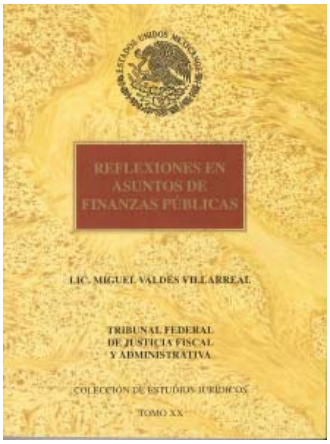
ISBN 968-7626-18-6

$130.00

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (1999)

En 1999 se realiza la VIII Reunión Nacional, con la presentación de trabajos presentados por Magistrados, los cuales se enmarcan en importantes temas de Derecho Procesal Fiscal: Competencia prorrogada o prórroga de competencia y validación de actos de autoridades incompetentes; Problemática de Competencia territorial entre dos Salas con Sede en diferentes Estados; Notificaciones por correo certificado; Improcedencia; Resoluciones que dejan sin efectos los créditos recurridos; Impugnación de actos de ejecución; Idoneidad de la prueba; Problemas en la admisión, desahogo y valoración de la prueba pericial; La prueba de inspección judicial; La prueba confidencial en materia de comercio exterior internacional y precios de transferencia; Los efectos de las sentencias del Tribunal; Las sentencias que se dictan en 24 horas; Formación de jurisprudencia; Regulación de la queja, violación del plazo de cumplimiento de la sentencia; y diversos trabajos sobre el Procedimiento Administrativo y Derecho Sustantivo.

COLECCIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS



ISBN 968-7626-56-9

$280.00

REFLEXIONES EN ASUNTOS DE FINANZAS PÚBLICAS.- TOMO XX.- 2005, LIC. MIGUEL VALDÉS VILLARREAL

Como un homenaje a la trayectoria del Maestro Miguel Valdés Villarreal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa realiza la compilación de sus trabajos, estructurada en dos capítulos: en el primero se incluyen aquellas reflexiones presentadas por el Maestro en diversos foros, principalmente la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que versan sobre política fiscal, Necesidad de Tribunales Contencioso Administrativos locales, Asentamientos humanos, Amparo contra Leyes, Administración de Justicia, Misión del abogado hacendario, entre otros.

El capítulo segundo comprende los mensajes dados en diversos Congresos anuales del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal, así como los trabajos presentados en los mismos, relativos a Coordinación Fiscal, Modernización del Sistema Tributario Mexicano, Reforma Fiscal integral, Estado de Derecho y una visión integral de un Sistema Jurídico de Contribuciones.



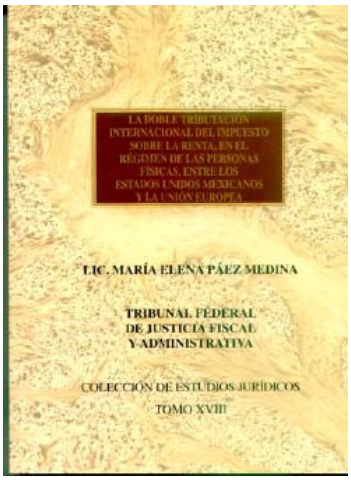
ISBN 968-7626-45-3

$165.00

EFECTOS DEL SILENCIO ANTE UN PAGO DE LO INDEBIDO EN MATERIA TRIBUTARIA FEDERAL, CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUCIONALIDAD VS. LEGALIDAD.- TOMO XIX.- 2003, LIC. ANA RUTH HERRERA GÓMEZ

Temas: El pago de lo indebido en Materia Tributaria, Devolución, Plazos para solicitar la Devolución de un pago indebido.

COLECCIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS



ISBN 968-7626-44-5

$250.00

LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN EL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS, ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA UNIÓN EUROPEA.-TOMO XVIII.- 2003, LIC. MARÍA ELENA PÁEZ MEDINA

Temas: Conceptos, La Unión Europea “Sinopsis acerca de la relación jurídico económica existente entre los estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea en el marco de la globalización internacional", “Tratamiento en el Derecho Mexicano a la doble contribución Internacional del Impuesto sobre la Renta”, “Tratados Internacionales celebrados entre los Estados Unidos Mexicanos y los países integrantes de la comunidad Europea, en material de doble tributación”, “Solución de Controversias”



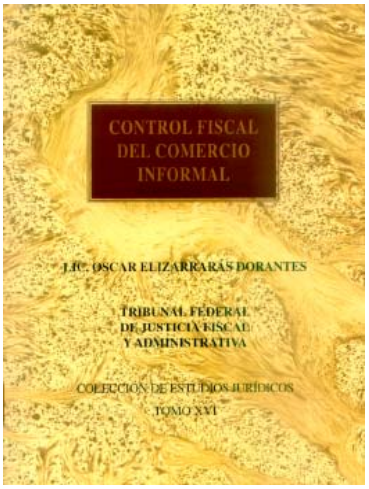
ISBN 968-7626-40-2

$300.00

EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA A LA LUZ DE LAS PRINCIPALES APORTACIONES DOCTRINALES EN ITALIA, ESPAÑA Y MÉXICO. TOMO XVII.- 2001, DR. MARCO CÉSAR GARCÍA BUENO

Temas: Orientaciones Constitucionales en el estudio del Principio de Capacidad Contributiva, El Principio de Capacidad Contributiva: Aportaciones Teóricas, La Capacidad Contributiva Subjetiva y la Intensidad de Gravamen, El Principio de Capacidad Contributiva, su relación con otras figuras tributarias.

COLECCIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS

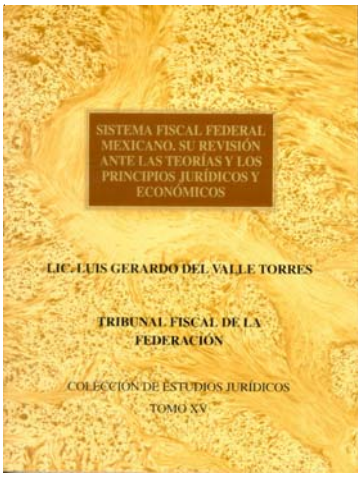


ISBN 968-7626-39-9

$170.00

CONTROL FISCAL DEL COMERCIO INFORMAL.- VOL. XVI LIC. OSCAR ELIZARRARÁS DORANTES

Temas: Generalidades del Comercio Informal, Breves Antecedentes de la regulación fiscal del Comercio Informal, Régimen Fiscal del Comercio Informal, Asistencia fiscal especializada para el Comercio Informal.



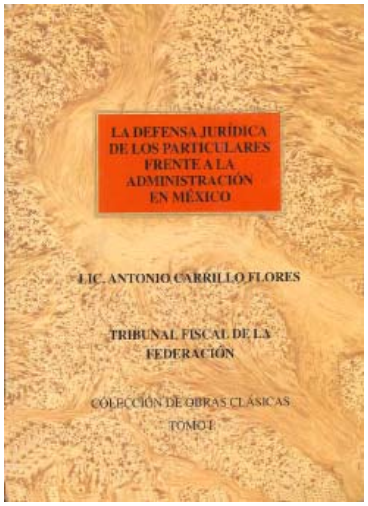
ISBN 968-7626-25-9

$100.00

SISTEMA FISCAL FEDERAL MEXICANO.- SU REVISIÓN ANTE LAS TEORÍAS Y LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS. VOL. XV LIC. LUIS GERARDO DEL VALLE TORRES

SU REVISIÓN ANTE LAS TEORÍAS Y LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS. Esta obra forma parte de la Colección de Estudios Jurídicos, que se encuentra formada en sus últimos tomos por las tesis que resultan premiadas en el Certamen “Revista del Tribunal Fiscal de la Federación”, o Certamen “Premio de Estudios sobre Justicia Administrativa”. Además de ser premiada, el Jurado Calificador determinó que este trabajo reunía la calidad para ser publicado en dicha colección.

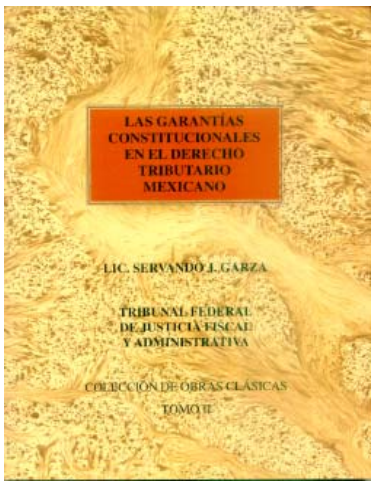
COLECCIÓN DE OBRAS CLÁSICAS



$155.00

LA DEFENSA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN EN MÉXICO. TOMO I. DON ANTONIO CARRILLO FLORES

Obra escrita por eminente jurista, político, diplomático y maestro universitario. Esta edición comprende la obra que con dicho título se publicó en 1939, así como los Apéndices y el Capítulo “Recapitulación y Reflexiones Finales”, que se incluyera en la segunda edición publicada en 1973, intitulada esta última como “La Justicia Federal y Administración Pública”



ISBN 968-7626-38-0

$100.00

LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL DERECHO TRIBUTARIO MEXICANO. TOMO II. LIC. SERVANDO J. GARZA

Obra escrita por el maestro de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia,contribuyó notablemente a la construcción de esa Doctrina de la que hoy nos sentimos orgullosos.

Algunos Temas: Derecho y equidad, El Principio de Igualdad del Artículo 13, Proporcionalidad y Equidad, La autentica violación del Principio de Justicia, El Impuesto sobre dividendos, El principio de Irretroactividad, Sanción y Acción, La Sentencia como Norma concreta y El Principio de su Unicidad.

COEDICIONES



ISBN 968-6080-24-4

$160.00

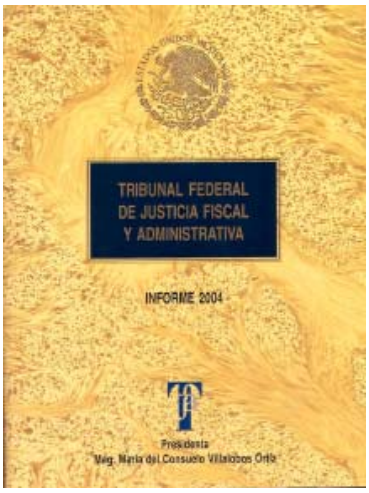
EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MÉXICO-FRANCIA MEMORIA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL 1999

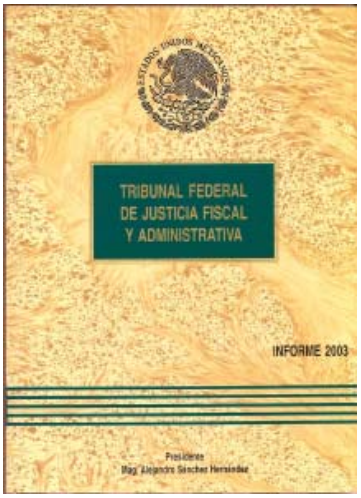
Memorias del Seminario Internacional sobre lo Contencioso Administrativo. Trabajos presentados por Funcionarios del Consejo de Estado Francés y por Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en los que trataron los temas de: La Reforma del Estado y La Jurisdicción en México y Francia; La Organización y Las Competencias de la Jurisdicción Administrativa en México; La eficiencia de las Jurisdicciones Administrativas y La ejecución de las sentencias en Francia y México; La Jurisdicción administrativa. El Derecho Internacional y La Globalización; y La Modernización Tecnológica e Informática en las Jurisdicciones Administrativas en Francia y México.

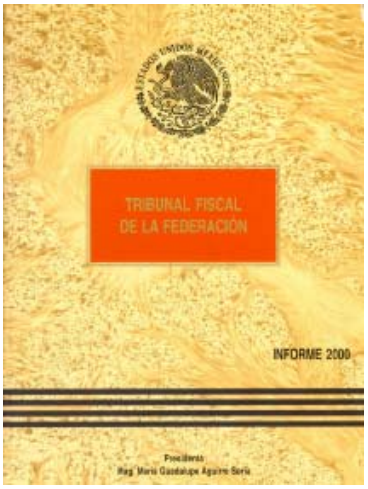
INFORMES ANUALES











INFORME DE LABORES 2006	$300.00	ISBN 968-7626-63-1
INFORME DE LABORES 2005	$292.00	ISBN 968-7626-55-0
INFORME DE LABORES 2004	$275.00	ISBN 968-7626-46-1
INFORME DE LABORES 2003	$250.00	ISBN 968-7626-43-7
INFORME DE LABORES 2002	$200.00	ISBN 968-7626-41-0
INFORME DE LABORES 2001	$190.00	ISBN 968-7626-28-3
INFORME DE LABORES 2000	$155.00	ISBN 968-7626-7

CORREO ELECTRÓNICO: **publicaciones@mail.tfjfa.gob.mx**

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN DE ESTAS PUBLICACIONES COMUNICARSE AL TELÉFONO 53-40-70-00 y 53-40-71-00 EXT. 3219 ó 3227